



Cifras y voces.

Perspectivas de cambio
en la sociedad guatemalteca



Cifras y voces.

Perspectivas de cambio
en la sociedad guatemalteca

Eduardo Núñez Vargas
Director Residente Guatemala
Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales

Julio Donis
Coordinador de Programas

Ricardo Marroquín
Oficial de Programas

Sandra Xoquic
Asistente de Programas

Rubén Estuardo Nájera
Edición

ISBN: 978-9929-688-89-6

El contenido expresado en esta publicación es responsabilidad exclusiva de sus autores y el mismo no necesariamente refleja las opiniones del Instituto Nacional Demócrata ni de los donantes.

Diseño e impresión:



3a. avenida 14-62, zona 1
PBX: (502) 2245-8888
www.serviprensa.com

Diagramación: Evelyn Ralda

Índice

Presentación

Instituto Nacional Democrata para Asuntos Internacionales (NDI)9

Siglarío 11

Perfil técnico de la encuesta y sinopsis general de los hallazgos

Julio Donis - NDI Guatemala 13

Miradas ciudadanas.....33

a. Centros de Análisis e Investigación

Economía-Política de la Crisis del 2015

Fernando Valdez - Unidad de Opinión Pública y Medios Universidad
Rafael Landívar (UNOP-URL)33

Las dimensiones del cambio

Carmen Ortiz - Asociación de Investigación y
Estudios Sociales (ASIES)39

Cinco tesis sobre la “Revolución” de las clases medias en 2015

Edgar Gutiérrez - Instituto de Problemas Nacionales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC)43

La Indignación: Oportunidad para reivindicar el rol del Estado

Jonathan Menkos Zeissig - Instituto Centroamericano de
Estudios Fiscales (ICEFI)49

Ilusión de primavera

María del Carmen Aceña - Centro de Investigaciones Económicas
Nacionales (CIEN)53

Algunas observaciones del movimiento cívico del 2015 en Guatemala

Édgar Ortiz - Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES).....59

El punto de inflexión de una nación

Juan Carlos Zapata - Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA)63

b. Actores ciudadanos y movimientos sociales

El día que la Plaza fue un volcán

Álvaro Montenegro - Justicia Ya67

¿Qué cambió después de la crisis política del 2015?

Marielos Chang - Red Ciudadana73

La huella social de la justicia en la participación política

Mónica Mazariegos Rodas - Grupo Intergeneracional77

El surgimiento de la democracia del rechazo en Guatemala

Jonatán Lemus - Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)83

Internalización de la protesta pacífica en la cultura política de Guatemala

Mario Andrés Yon Secaída - Movimiento Cívico Nacional87

La Plaza: Un punto en el camino de la articulación

Maya Varinia Alvarado Chávez - La Cuerda93

Las denuncias y capturas por los casos de corrupción, no evidencian cambios en la estructura política y económica del país

Nuria Mejía García - Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGCOOP).....97

Guatemala tiene que cambiar

Pedro Cruz - Jóvenes por Guatemala101

c. Analistas sociales

La serpiente y su pobre cola

Tania Palencia Prado105

Lo político: Más allá de la construcción (inter)mediática de la política

Alejandro Flores109

Del conocimiento a la no participación de las regiones guatemaltecas

Irma A. Velásquez Nimatuj 115

La participación ciudadana clave para desencadenar cambios

José Roberto Morales Sic 119

Cultura política en Guatemala: ¿Hasta dónde hemos cambiado después de las jornadas del 2015?

Samuel Perez Attías 125

Tecnopolítica, medios de comunicación y movilizaciones comunitarias en Guatemala durante el 2015

Andrea Ixchíu 133

El clientelismo, como cultura y organización política de la corrupción en Guatemala

Isabel Rodas Núñez 141

2015, la Plaza, y sus tareas pendientes

Manolo E. Vela Castañeda - Universidad Iberoamericana, Ciudad de México 145

¿Qué nos dejó la Plaza?

Marielos Monzón 151

Yo no confío en los periodistas, ¿y vos?

Gustavo Berganza 157

Transformaciones en la cultura política de Guatemala: Una perspectiva después de la crisis política de 2015

Hugo Peña 165

Sí, 2015 democratizó a la sociedad guatemalteca

Martín Rodríguez Pellecer 169

Luces, sombras y claroscuros en la cultura política de la ciudadanía

Catalina Soberanis 173

La crisis de 2015: El papel de la movilización ciudadana

Ricardo Sáenz de Tejada 179

Claves históricas para comprender las movilizaciones del 2015

Ursula Roldán Andrade 183

Movilización ciudadana, crisis institucional y cultura política en Guatemala

Luis Mack189

d. Partidos y actores políticos

¿Quiénes somos después de 2015? De una democracia no cuestionada a la posibilidad de organizarnos

Regina Solís y Gabriela Carrera - SOMOS199

2015: Punto de inflexión

Juan Alberto Fuentes Knight - Movimiento Semilla205

El cambio es insuficiente para superar el fracaso

Ronaldo Robles - Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)211

La nueva primavera

Juan José Porras - Visión con Valores (VIVA)215

Crisis abril 2015: ¿Coyuntural o permanentemente oculta?

Nineth Montenegro - Encuentro por Guatemala219

Presentación

Los datos que el lector está por observar representan una aproximación cuantitativa de la realidad guatemalteca, especialmente en torno a los acontecimientos sucedidos en el año 2015. Ese lapso temporal dio cuenta de hechos significativamente diferenciados en relación al transcurso de la historia política reciente, que algunos se adelantan a considerar ya como una inflexión relevante en el desarrollo de la ciudadanía política. En este sentido la Encuesta, que fue de orden nacional, representa de forma inédita la primera medición seria y sistemática sobre las percepciones ciudadanas con respecto a una crisis que se generalizó en todo el territorio.

La Encuesta fue diseñada como un instrumento primordial que arrojará datos empíricos como fuente de primer orden para el estudio académico *Transformaciones en la cultura política de Guatemala: una perspectiva después de la crisis política del año 2015*, y fue llevada cabo por el NDI en el presente año. El objetivo de tal desafío es caracterizar los procesos de participación ciudadana desarrollados durante la crisis política, identificando sus dinámicas políticas

y verificando en qué medida ese proceso reflejó modificaciones en la cultura política de los y las guatemaltecas.

Es relevante indicar que las bases de datos de este esfuerzo de medición nacional están abiertos completamente al público, como gesto de transparencia, y para compartir a la comunidad en general dicha información. Además, el equipo investigador aprovechó la oportunidad para que las preguntas del instrumento de campo tuvieran comparabilidad con otras encuestas similares, tales como el *Latinobarómetro* y el estudio *Cultura política de la democracia en Guatemala y en las Américas* de la Universidad de Vanderbilt, en sus versiones más recientes.

Finalmente, los datos y las gráficas que se presentan están contrastados y comentados por una serie de personalidades, incluyendo académicos, periodistas, políticos, activistas, jóvenes, mujeres y hombres, todos ellos actores de la Plaza, que se manifiestan desde sus columnas, desde el conocimiento, desde el Congreso o el Gobierno o simplemente desde la calle. Todos ellos opinan a la luz de los hallazgos de la Encuesta, sobre la

extraordinaria movilización popular de la que fue testigo el mundo y que dejó clara la indignación generalizada ante el brutal asalto de los recursos públicos.

Un Estado ha fracasado en su tarea básica, que es la consecución del bien común, cuando el poder público que lo ha

legitimado se ha diluido en la corrupción generalizada.

Instituto Nacional Demócrata
para Asuntos Internacionales (NDI)

Octubre de 2016

Siglarío

ASIES	Asociación de Investigación y Estudios Sociales
CACIF	Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
CEUG	Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala
CIACS	Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad
CICIG	Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
CIEN	Centro de Investigaciones Económicas Nacionales
CUC	Comité de Unidad Campesina
ENCOVI	Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
FCN Nación	Partido Frente de Convergencia Nacional
ICEFI	Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
IGSS	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
INCEP	Instituto Centroamericano de Estudios Políticos
IVA	Impuesto al valor agregado
LAPOP	Latin American Public Opinion Project (Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana)
Latinobarómetro	Corporación Latinobarómetro (en el texto se refiere sobre todo al estudio de opinión pública que la Corporación realiza anualmente en 19 países de América Latina)
LGBT	Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero
LIDER	Partido Libertad Democrática Renovada
MCN	Movimiento Cívico Nacional
MINFIN	Ministerio de Finanzas Públicas
MP	Ministerio Público
NDI	Instituto Nacional Demócrata

NDI 2016	Encuesta Nacional: Transformaciones en la cultura política de Guatemala, 2016
PIB	Producto interno bruto
PNC	Policía Nacional Civil
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PP	Partido Patriota
RPEI	Redes político económicas ilícitas
SAT	Superintendencia de Administración Tributaria
SEGEPLAN	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
TIC	Tecnologías de información y comunicación
TSE	Tribunal Supremo Electoral
UNOP	Unidad de Opinión Pública y Medios, Universidad Rafael Landívar
URL	Universidad Rafael Landívar
USAC	Universidad de San Carlos de Guatemala

Perfil técnico de la encuesta y sinopsis general de los hallazgos

Julio Donis

NDI Guatemala

El Instituto Nacional Demócrata se planteó, el desafío de contar con datos duros que sirvieran de contraste y de base empírica sistematizada para el análisis planteado en el marco de la indagación académica referida. Con ese propósito, se contrataron los servicios de la empresa Borges & Asociados para la realización de una encuesta de orden nacional, a un año de la crisis.

Consecuentemente, se realizó una encuesta representativa de la población de ciudadanos de 18 años o más, para conocer la percepción de los guatemaltecos sobre los siguientes aspectos: la crisis política de 2015, los contenidos de las propuestas de distintos actores sociales, la respuesta y el desempeño de la institucionalidad democrática y el proceso electoral de 2015. Para tal efecto, se hizo un diseño muestral que permitió obtener información de segmentos etarios, por género, por condición étnica y por la ubicación regional.

La ejecución de la recolección de datos se llevó a cabo en el mes de junio y julio del presente año 2016. Se realizó bajo parámetros de evaluación y monitoreo que

garantizaran la consistencia de los datos obtenidos. Las bases de datos crudos de la Encuesta se ponen a disposición pública completamente abierta (ver: www.ndi.org/estudios_guatemala) para el servicio y utilidad de cualquier persona o institución interesada.

A continuación se destacan los principales elementos técnicos de la Encuesta:

- **Instrumento de recolección:** El contenido de la boleta fue definido y proporcionado por el equipo de investigadores del Estudio (ver anexo). Dicho instrumento fue validado por medio de una encuesta piloto realizada por la empresa contratada. Se buscó con esta acción no solo realizar mejoras de forma y contenido a la boleta, sino también lograr que el personal de campo se familiarizara con el instrumento.
- **Población objetivo:** La población objeto de la encuesta abarcó a ciudadanos de 18 años o más que residieran habitualmente en las regiones geográficas durante el período de levantamiento de datos.

- **La muestra:** El diseño de la muestra consideró como unidades de selección a las viviendas. La información requerida para el cálculo de la muestra se basó en los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, INE. Se diseñó una muestra probabilística y estratificada según las características socioeconómicas de las unidades de muestreo.
- **Representatividad geográfica/ dominios de estudio:** Se utilizaron las siguientes dimensiones territoriales: a) nacional, urbano-rural; b) nacional y regional, urbano-rural; y c) nacional y departamental, urbano-rural.
- **Marco muestral:** La encuesta se basa en el Marco Maestro de Muestreo (MMM) del Instituto Nacional de Estadística INE, que consta de 15,497 unidades primarias de muestreo (definidas según el Censo de Población y Vivienda del año 2002).
- **Sobremuestreo:** Para compensar los rechazos en campo se consideró un porcentaje de sobremuestreo del 10 % de las unidades primarias del muestreo.

Resumen

Dominios de estudios (cobertura)	1. Nacional, urbano/rural 2. Nacional, regional, urbano/rural 3. Nacional, regional, departamental, urbano/rural
Población objetivo	Personas de 18 años o más.
Tipo de muestra	Probabilística, estratificada y por conglomerados. Se consideró el estrato socioeconómico de la población.
Tamaño de la muestra	1,600 en total. 200 entrevistas por región (8)
Margen de error	+/- 2.4
Nivel de confianza	95 %
Período de implementación	22 de junio al 3 de julio 2016
Temas de abordaje: ¿Qué se sabe? ¿Cómo lo vive? ¿Qué espera?	Percepción de: • Crisis política • Actores sociales • Las instituciones políticas • El proceso electoral: las encuestas y la influencia de los medios de comunicación.

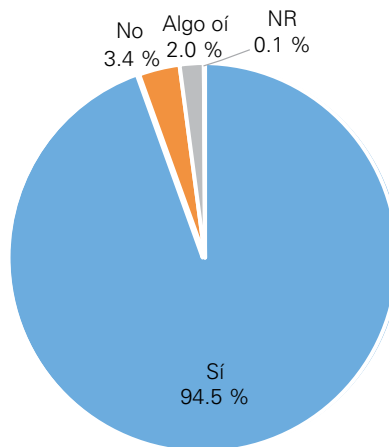
Presentación general de los hallazgos

Sobre las manifestaciones

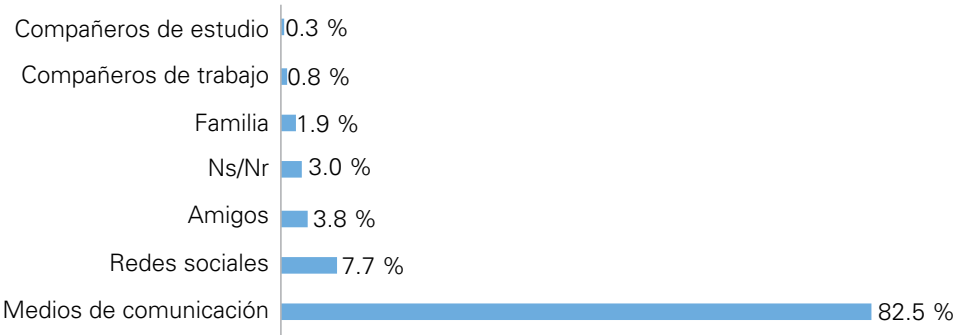
- Los datos obtenidos de la Encuesta, arrojan con contundencia (94.5 %) la aseveración de que la población guatemalteca en su mayoría tuvo conocimiento de las protestas que se llevaron a cabo con mayor incidencia en la Plaza Central de la capital (ver gráfica 1). La gráfica 2 muestra que los ciudadanos entrevistados que en

su mayoría supieron de los hechos de protesta, conocieron de los mismos por los medios de comunicación masiva (82.5 %). El combate a la corrupción fue la demanda con mayor preponderancia (41.2 %) en el imaginario de los entrevistados, seguida de la renuncia del ex Presidente Otto Pérez que reportó 31.7 % (ver gráfica 3). Si se interpretaran los resultados anteriores, como expresión de la inconformidad con un gobierno con prácticas corruptas, la inconformidad total sería del orden aproximado del 72 %.

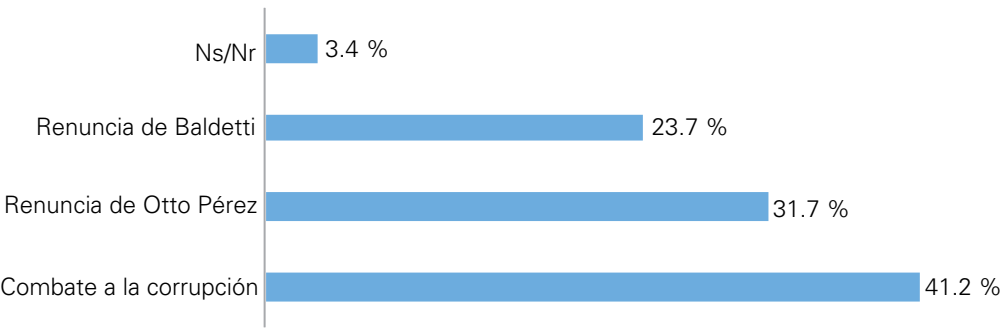
Gráfica 1
¿Supo de las protestas que hubo el año pasado en la Plaza Central de Guatemala y en varios departamentos?



Gráfica 2
¿Cómo se enteró de la convocatoria a protestar?



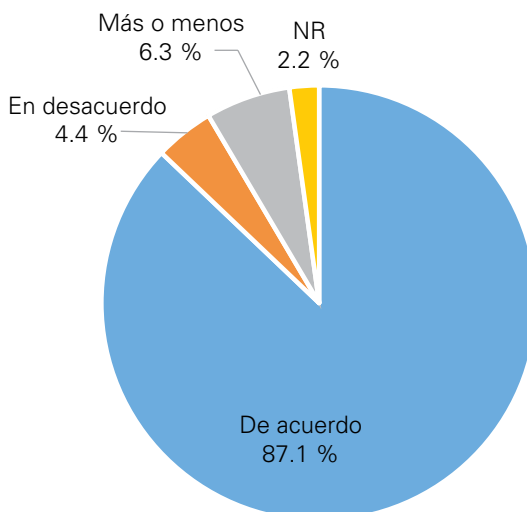
Gráfica 3
¿Qué pedía la gente en esas protestas?



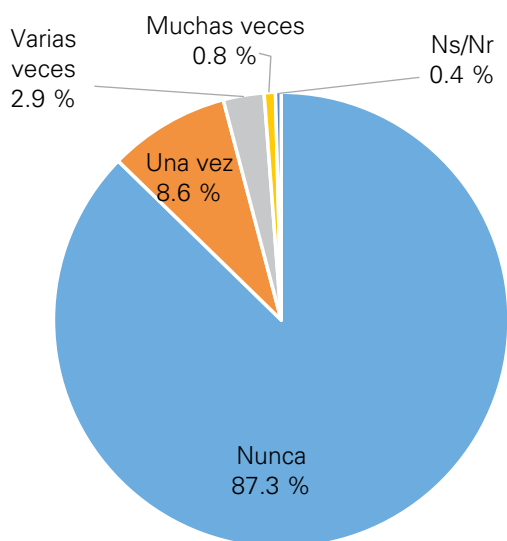
- Participar no es lo mismo que estar de acuerdo. Del grupo participante, una mayoría significativa (87 %) afirmó su anuencia con las protestas (ver gráfica 4). Por otro lado, una cantidad similar afirmó que nunca participó en las demostraciones contra la corrupción¹. No hay una relación inversamente proporcional en estos dos datos; sin embargo, cada uno puede ser explotado por su lado, realizando cruces con otras variables de la Encuesta. Una proporción mayoritaria de encuestados con efectiva participación en las protestas lo hizo por *indignación* (ver gráfica 6).

1 Gráfica 5

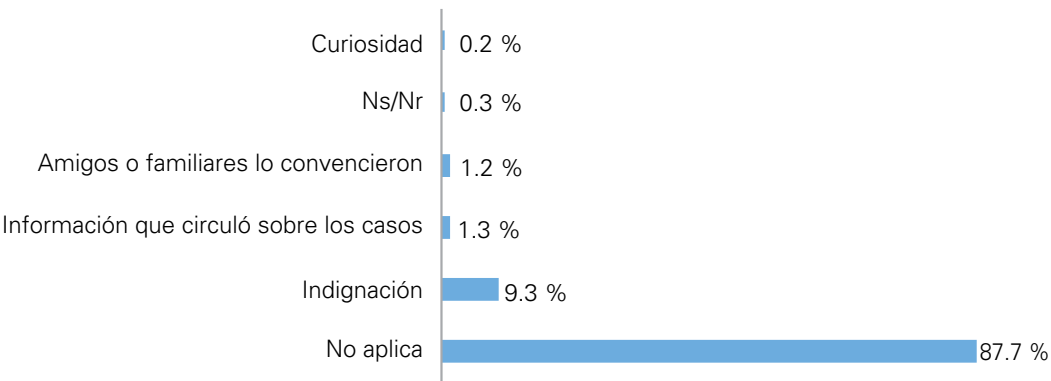
Gráfica 4
¿Estuvo de acuerdo o en desacuerdo con las protestas en las plazas que se dieron entre abril y agosto de 2015?



Gráfica 5
¿Cuántas veces participó en las protestas?

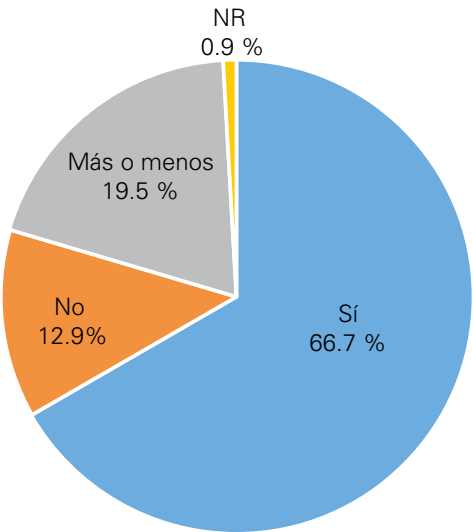


Gráfica 6
Si participó en las protestas, ¿qué lo motivó a hacerlo?

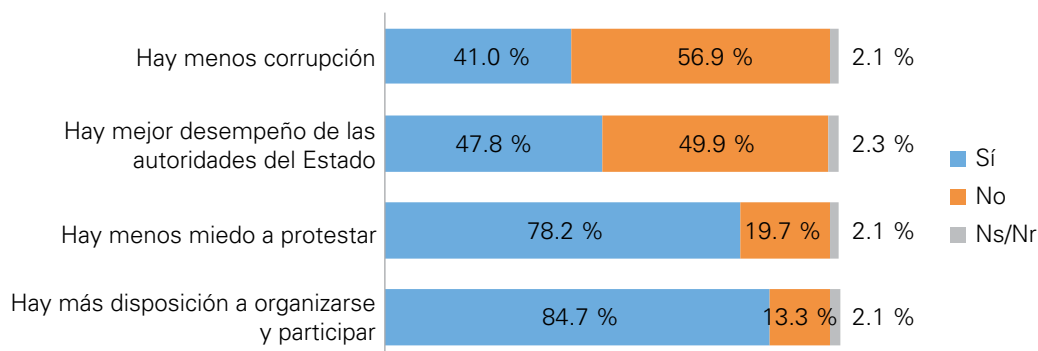


- El Estudio para el cual sirve la presente Encuesta, hace énfasis en cambios previsibles o identificables a partir de las percepciones de la sociedad en torno a la crisis política experimentada. En ese marco, la población entrevistada respondió en una proporción elevada (66.7 %) que las protestas lograron el objetivo de las demandas de la gente (ver gráfica 7). La gráfica 8 muestra que a un año de aquellos hechos, se puede estimar una mayor disposición de la gente a organizarse (84.7 %) sin el temor (78.2 %) que ha implicado esta actividad, quizá por el legado de represión política del que da cuenta la historia de este país.

Gráfica 7
En particular, ¿cree que el año pasado la población logró sus objetivos con las protestas?

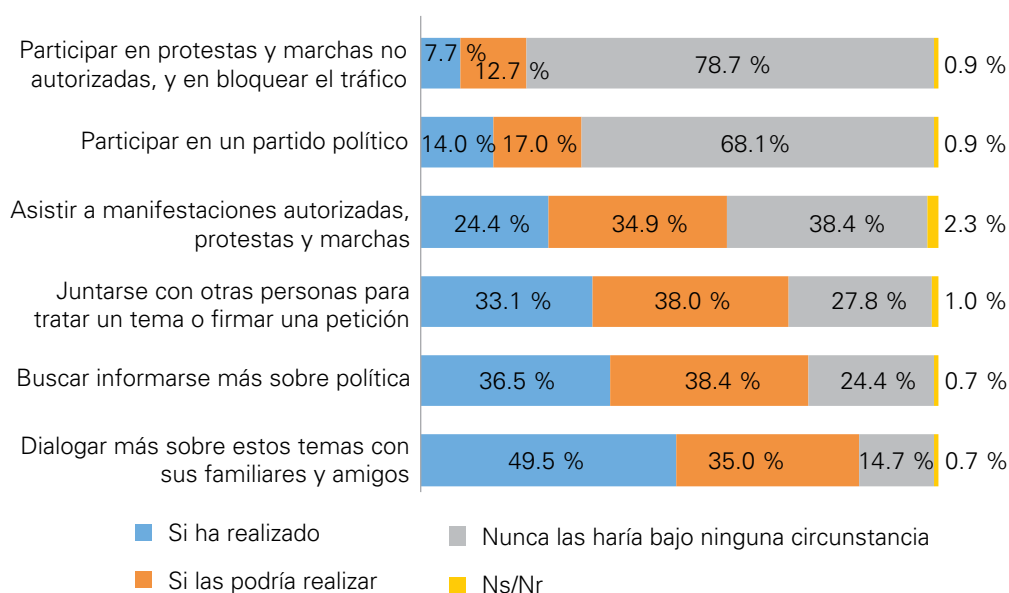


Gráfica 8
¿Con cuál de las siguientes afirmaciones usted está de acuerdo? Después de las protestas



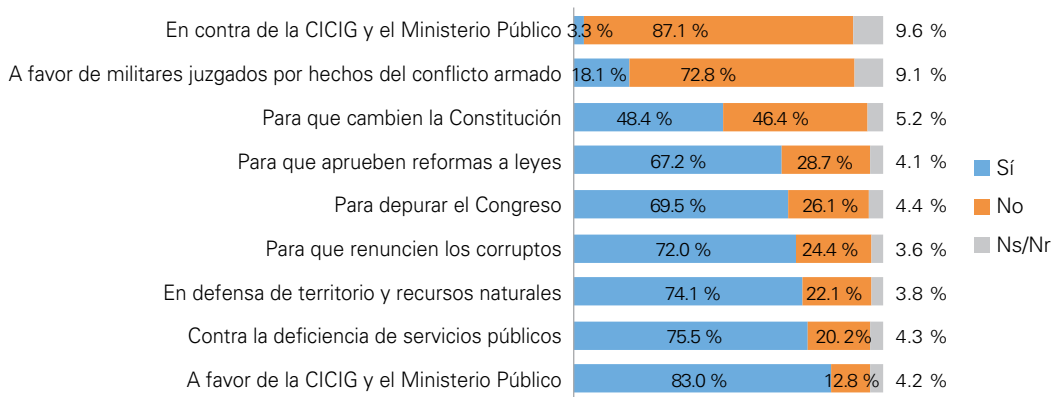
- La relevancia de hallar datos empíricos cuantitativos que abonen a una efectiva ampliación del margen de politización de los ciudadanos pasa por contrastar la acción demostrativa de la protesta con la disposición al diálogo y a la participación del ciudadano. Los entrevistados están dispuestos a dialogar (84.5 %), sea que ya estén habituados a ello o que lo hagan en el futuro. Además, en una gran cantidad (75 %) están anuentes a informarse sobre política (ver gráfica 9).

Gráfica 9
Le voy a leer algunas acciones que la gente puede realizar y quiero que me diga: Si usted ha realizado, si la podría realizar o si nunca las haría bajo ninguna circunstancia



- La Encuesta proporciona ricos datos a partir de los cuales se pueden desarrollar hipótesis sociológicas y política de trabajo, especialmente al tratar de desenmarañar el conjunto de referentes públicos del ciudadano, como sujeto de Estado. Los resultados dan cuenta de una aparente relación que hace el entrevistado entre el rechazo a la corrupción, la actuación de instituciones como CICIG y MP y el rechazo a instituciones políticas formales como el Congreso. En general hay una tendencia mayoritaria de estas “razones” para acudir a manifestar.²

Gráfica 10
Otra vez, hipotéticamente hablando, si lo convocan a ir a la plaza, dígame, ¿por qué razón lo haría?

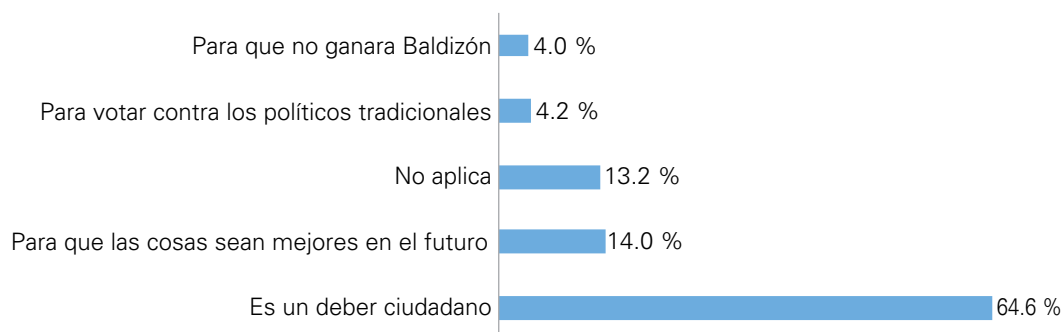


Sobre el voto

- Uno de los slogans más relevantes de la Plaza alardeaba de que “en estas condiciones no queremos elecciones”. La Encuesta solo constata el comportamiento de los ciudadanos, en tanto que electores, al confirmar una participación en las urnas significativamente superior a lo que algunos pudieron estimar en términos de un abstencionismo generalizado que no se dio. Es más, los datos (64.6 %) indican que la opción institucional de los ciudadanos fue escoger el instrumento del voto como forma genérica de ciudadanía (ver gráfica 11).

2 Gráfica 10

Gráfica 11
¿Cuál es la razón por la que usted fue a votar?

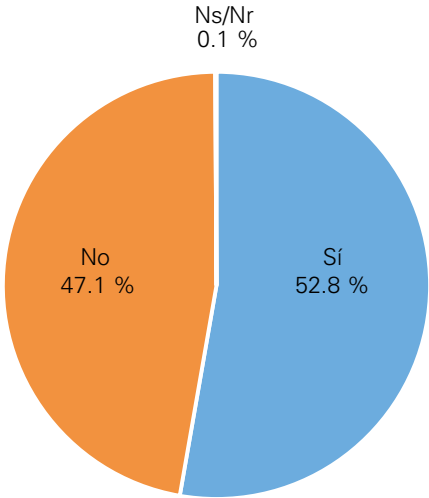


La protesta, las redes sociales y los medios de comunicación

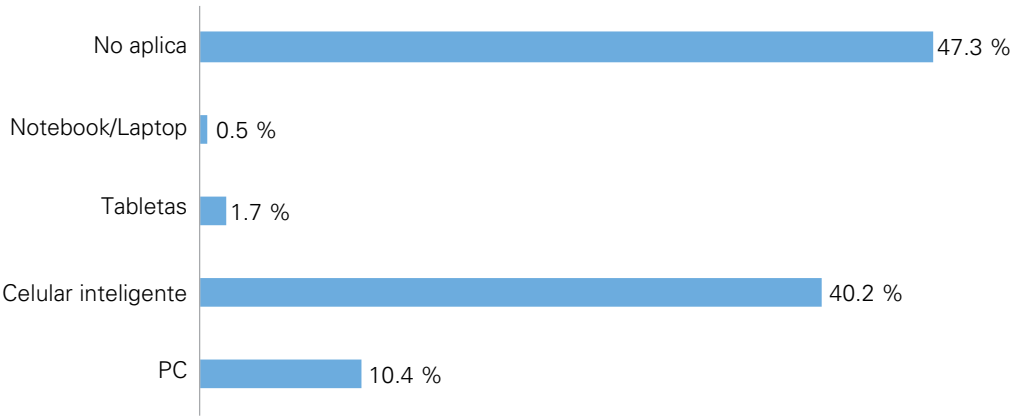
- A pesar utilización relativamente baja de internet por los ciudadanos de Guatemala, es relevante la preponderancia en su uso cotidiano (52.8 %)³, así como en el uso del celular inteligente como medio privilegiado (40 %)⁴ y del de la red social Facebook como la más utilizada (50 %)⁵. Estos datos representan una base sólida para tomar en cuenta el peso de internet en ejercicios o acciones ciudadanas como las que se llevaron a cabo en 2015. Lo relevante del caso para estos efectos es que los datos se mantienen constantes en el segmento de personas entrevistadas que participó activamente en la protesta, especialmente los que pertenecen a centros urbanos.

3 Gráfica 12
4 Gráfica 13
5 Gráfica 14

Gráfica 12
¿Acostumbra usted usar internet?



Gráfica 13
¿Cuál es el aparato o dispositivo que más usa para navegar en internet?

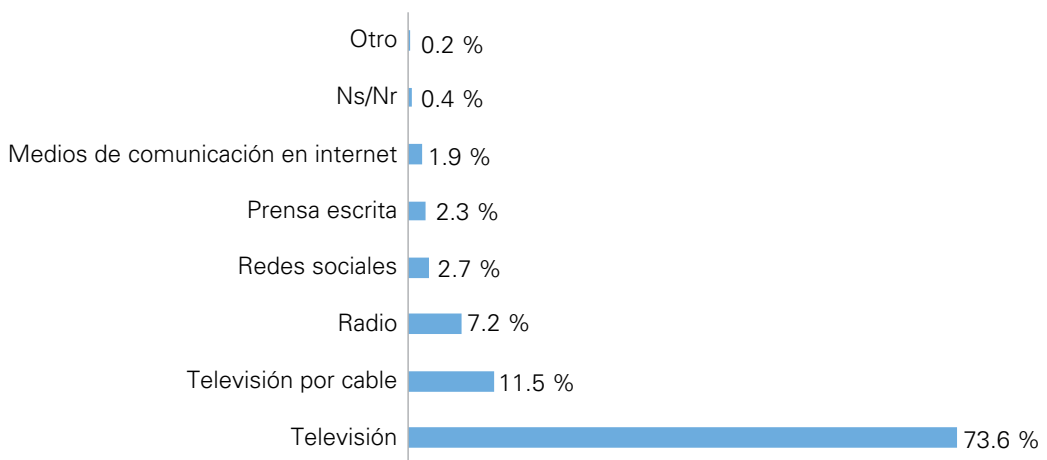


Gráfica 14
¿Cuál es la red social que más utiliza?



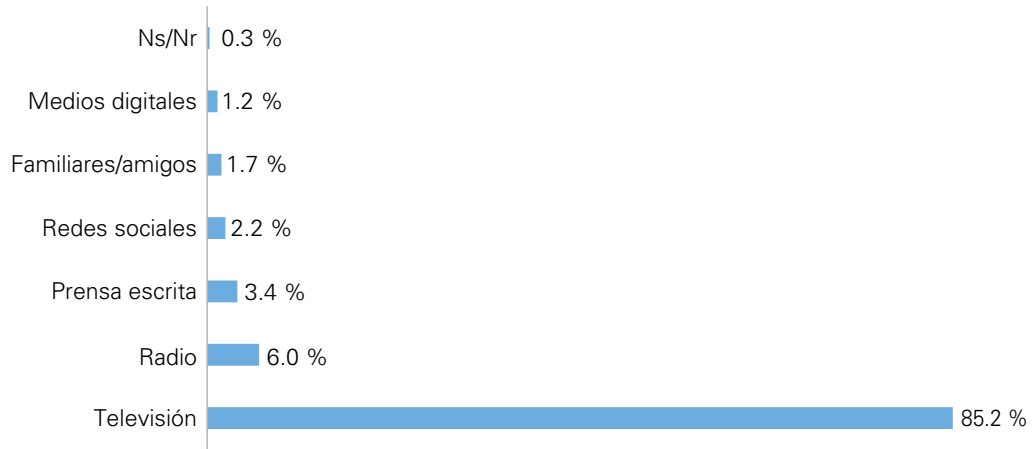
- Los datos anteriores deben contrastarse con el mosaico del desempeño de los medios de comunicación en general. El 73.6 %⁶ de los ciudadanos señala la televisión como el medio preferido a través del cual se informa (y el 85.2 % lo usó para informarse sobre la crisis⁷), lo que confirma lo que otras mediciones ya indicaban; además, esto revela el desplazamiento definitivo de la radio. Entre bueno y excelente es la calificación que los entrevistados dan al desempeño de los medios (87.7 %)⁸.

Gráfica 15
¿A través de qué medio de comunicación se informa sobre lo que ocurre en el país?

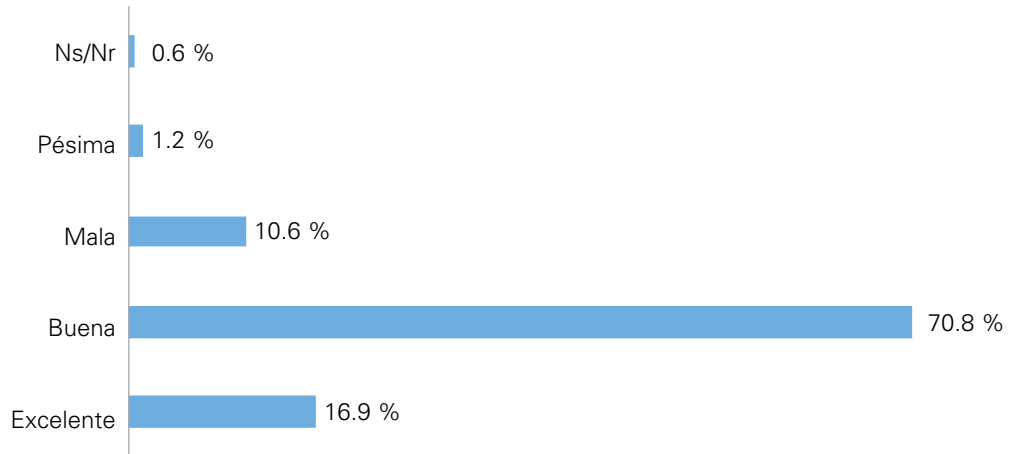


6 Gráfica 15
7 Gráfica 16
8 Gráfica 17

Gráfica 16
¿Cuál fue la principal fuente de noticias que usted utilizó para enterarse sobre el proceso electoral de 2015?



Gráfica 17
¿Cómo califica usted el desempeño de los medios de comunicación?

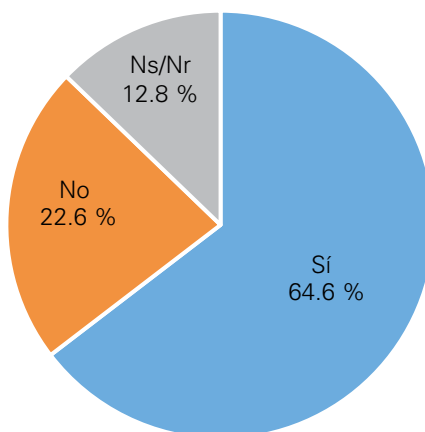


- Esa preferencia de los ciudadanos sobre los medios, sin embargo, no es ingenua pues el 64.6 % estima que los medios influyen sobre la gente al momento de votar (ver gráfica 18). A ese dato se le suma la percepción de engaño que siente el ciudadano de parte del periodista (38.9 %)⁹.

9 Gráfica 19

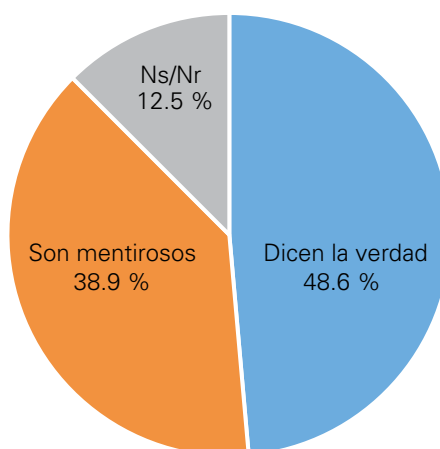
Gráfica 18

¿Considera usted que las noticias que transmiten los medios de comunicación sobre los candidatos y los partidos políticos influyen en la gente al momento de votar?



Gráfica 19

¿Usted diría que los periodistas...?

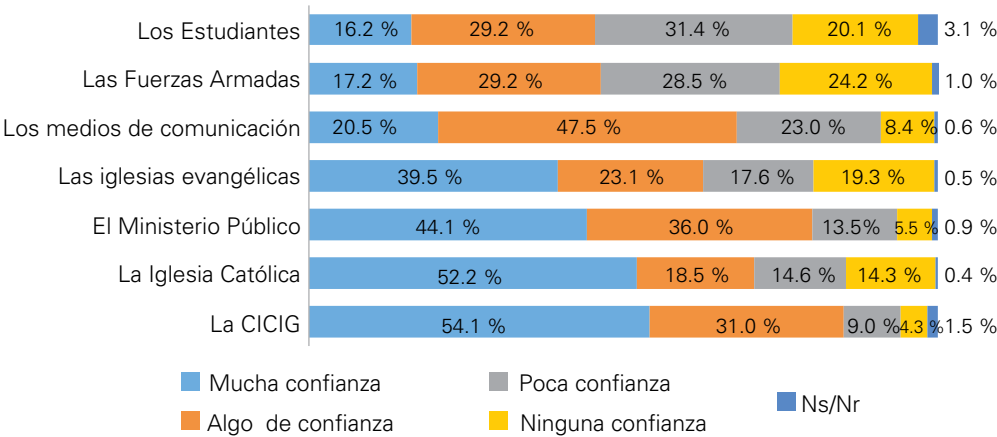


Las Instituciones en el imaginario social de la protesta

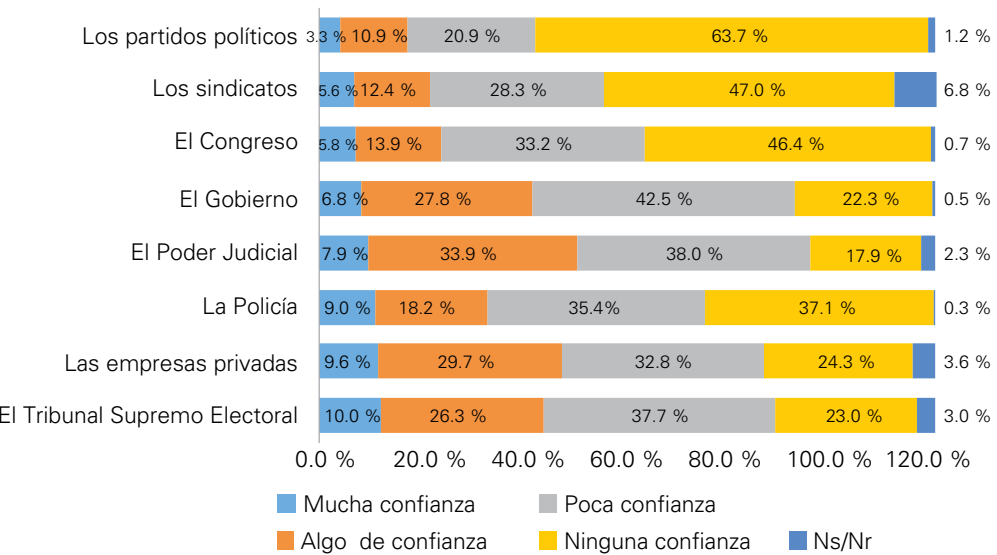
- La Encuesta buscó sistematizar datos específicos sobre el desempeño de las instituciones, especialmente públicas, en el juego democrático, desde la perspectiva y la opinión de ciudadano y su interacción con las mismas. En esta sección, el dato más significativo y revelador fue el grado de confianza sobre diversas instituciones propias del sistema democrático. Con entre *mucha* y *algo* de confianza, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala CICIG lidera los datos con el 85.1 %, en contraste con instituciones con menor valoración como el

Gobierno (34.6 %), el Congreso (19.7 %) y los partidos políticos (14.2 %). Aunque esos números eran previsibles, su comprobación empírica da significado a la observación y el análisis de cultura política de los guatemaltecos.¹⁰

Gráfica 20
De cada uno de los grupos o instituciones de la lista, ¿cuánta confianza tiene usted?



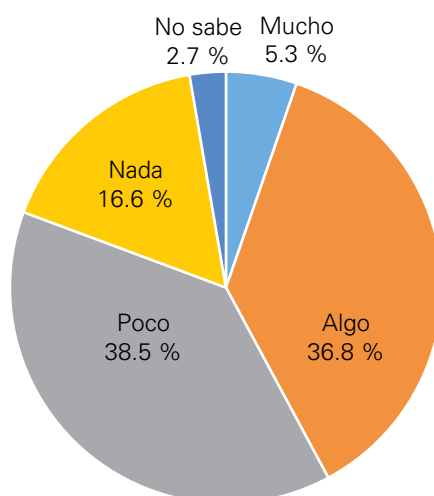
Gráfica 21
De cada uno de los grupos o instituciones de la lista, ¿cuánta confianza tiene usted?



10 Gráficas 20 y 21

- Además de distinguir a las instituciones como referentes de efectiva democracia, los entrevistados también revelaron su opinión sobre el quién, el cómo y el qué de la corrupción. Empezando por distinguir a la corrupción como el problema de mayor importancia, los ciudadanos entrevistados distinguen y relacionan el estado actual del país con ese mal. Alrededor de un 75.3 % de las respuestas coinciden en que el progreso del Estado es muy pobre por la corrupción en los últimos dos años (ver gráfica 22).

Gráfica 22
¿Cuánto cree usted que se ha progresado en reducir la corrupción en las instituciones del Estado en los últimos 2 años?

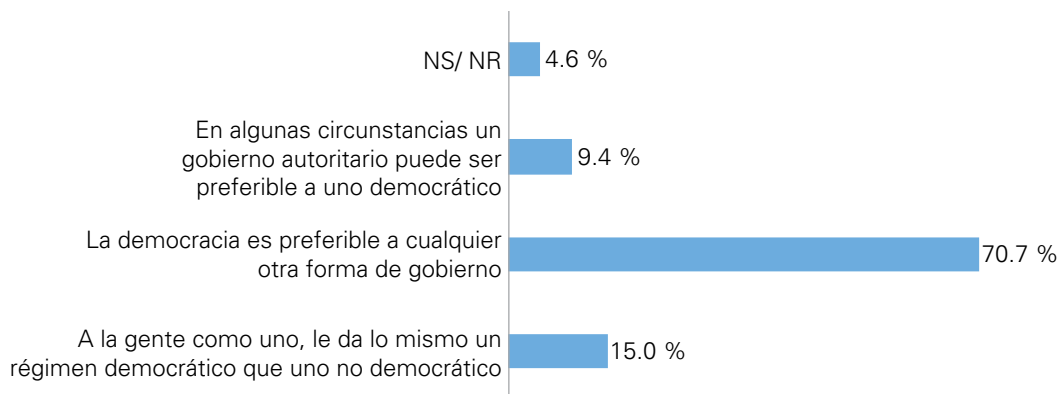


- En ese orden de ideas, los datos arrojan la claridad de los entrevistados sobre las condiciones injustificadas de la acción corrupta. Es positivo el dato de respaldo que ofrecen los entrevistados a la democracia como forma de gobierno, que prefieren a cualquier otra (70.7 %)¹¹. Esta afirmación contrasta con la que han ofrecido otras encuestas relevantes que daban fe de la preferencia del ciudadano sobre una acción autoritaria de los gobiernos. Este primer dato se sustenta en la respuesta del 83.2 % de los participantes que preferirían la participación de todos a un gobierno de mano dura (ver gráfica 24).

11 Gráfica 23

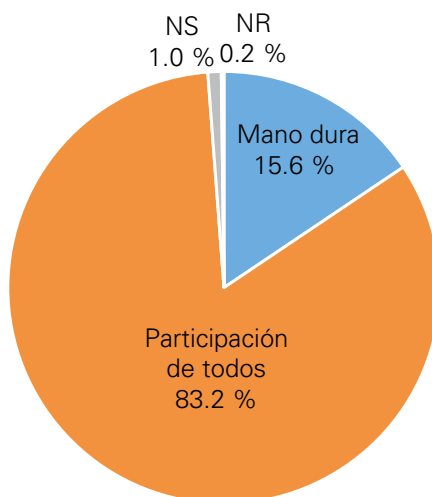
Gráfica 23

¿Con cuál de las siguientes tres frases está usted más de acuerdo?



Gráfica 24

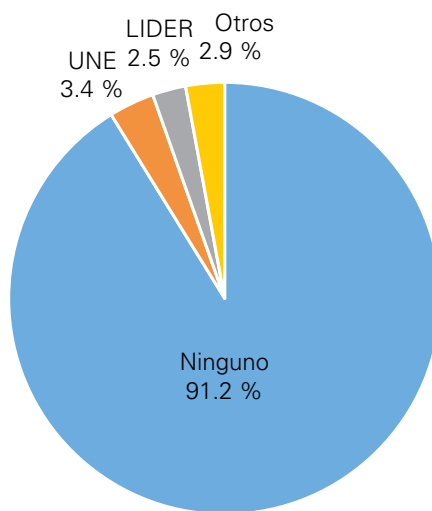
¿Cree usted que en nuestro país hace falta un gobierno de mano dura o cree que los problemas pueden resolverse con la participación de todos?



- Finalmente es significativa la respuesta de los entrevistados al respecto de su simpatía con partidos políticos específicos. La revelación general podría estimar que las organizaciones partidarias no figuran en el imaginario de las personas, pues apenas el 3.4 % se refiere a la UNE y el 2.5 % a LIDER (hoy cancelado). Sin embargo, hay que asumir este dato en el marco más complejo de otras variables o comportamientos, tales como un sistema partidario que tradicionalmente cuenta con muy bajos índices de institucionalidad, o el tradicional desarraigo de los ciudadanos para con los

partidos, especialmente manifiesto en época post electoral. En todo caso, es previsible que los actores formales de la democracia sean parte de los señalados por un ciudadano que busca responsables en el marco de la crisis política.¹²

Gráfica 25
¿Con cuál partido político simpatiza usted actualmente?



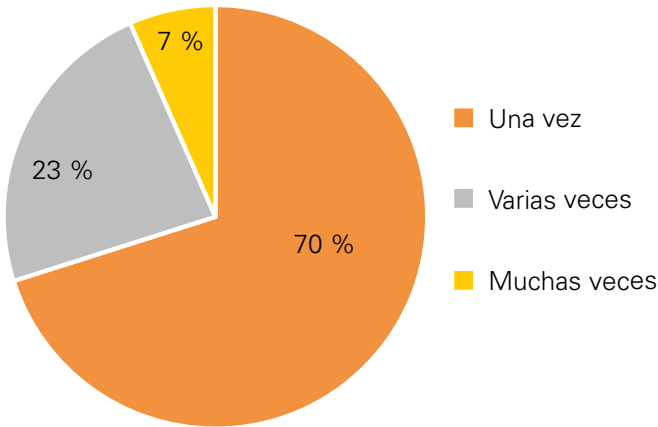
Los que sí fueron a la Plaza

- La proporción de incidencia de casos con participación efectiva en la Plaza es del 12.5 % de los casos, es decir 201 sujetos del total de la muestra. A pesar de este hallazgo, la tendencia de las respuestas resumidas anteriormente es consistente con la de todo el grupo muestral. Esto puede dar pie para analizar con mayor profundidad el impacto en el imaginario social de la percepción generalizada de una crisis de orden nacional. El dato complementario para tal aseveración bien lo puede constituir la proporción de sujetos que, aunque no participaron, manifestaron su anuencia con los motivos de la protesta, motivando un “nos sentimos parte de un sentimiento generalizado de indignación”.
- Es significativo que la mayoría de esos manifestantes (70 %) lo hiciera por una sola vez (ver gráfica 26). Resulta evidente que haya más participantes efectivos en la Plaza pertenecientes a la región metropolitana (44 %)¹³.

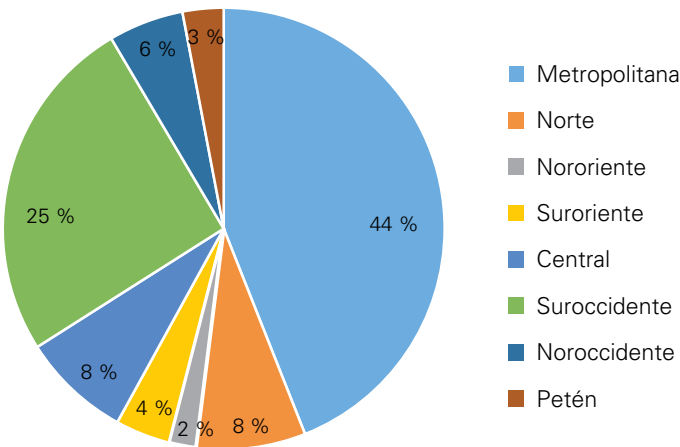
12 Gráfica 25

13 Gráfica 27

Gráfica 26
¿Cuántas veces participó en las protestas?



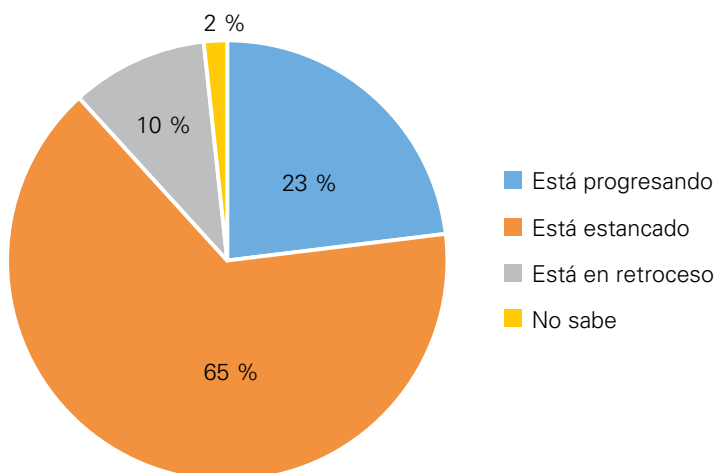
Gráfica 27
Participación en las protestas según regiones



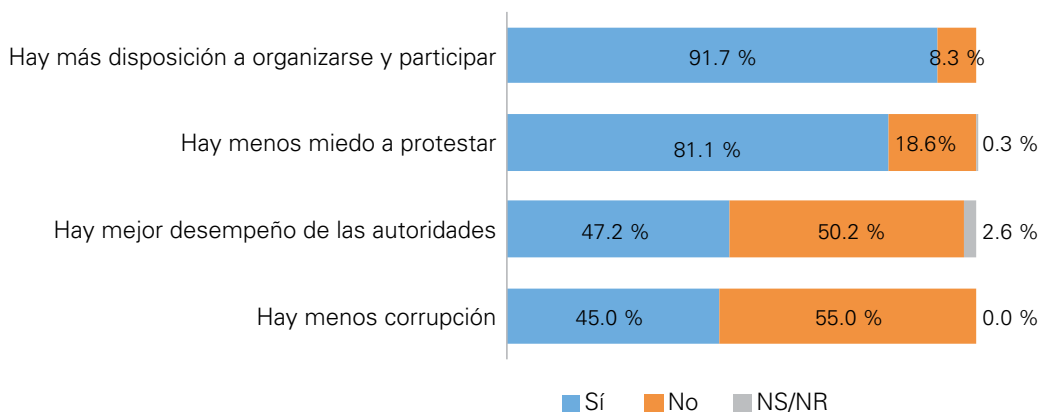
- En este mismo grupo con participación efectiva, 23 % opina que hay progreso en el país, 65 % opina que está estancado y 10 % que se encuentra en retroceso (ver gráfica 28). Además, si bien es cierto que el 91.7 % de este grupo poblacional percibe que hay disposición a organizarse y participar, únicamente el 18.5 % lo haría en algún partido político¹⁴.

14 Gráficas 29 y 30.

Gráfica 28
Diría usted que este país, en relación al año pasado...

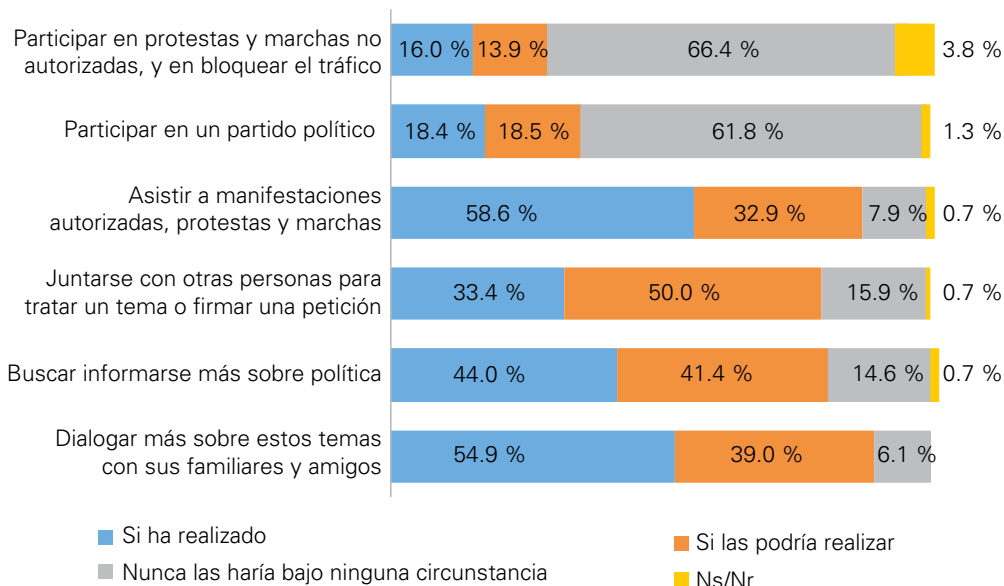


Gráfica 29
¿Con cuál de las siguientes afirmaciones usted está de acuerdo? Después de las protestas



Gráfica 30

Le voy a leer algunas acciones que la gente puede realizar y quiero que me diga: Si usted ha realizado, si la podría realizar o si nunca las haría bajo ninguna circunstancia.



Miradas ciudadanas

a. Centros de Análisis e Investigación

Economía-Política de la Crisis del 2015 (Breves reflexiones sobre la encuesta NDI 2016: Una perspectiva después de la crisis política de 2015)

Fernando Valdez¹⁵

Unidad de Opinión Pública y Medios
Universidad Rafael Landívar (UNOP-URL)

1. Los orígenes de la crisis política

Los acontecimientos sucedidos en los tres últimos años confirmaron las advertencias: el país transitaba de las meras escenas de empresarios-políticos y políticos-rentistas (militares o civiles) influyendo irregularmente en las decisiones al más alto nivel de los gobiernos (la mera captura) hacia la “reconfiguración cooptada” del Estado, alcanzando a los tres poderes del Estado y a la misma presidencia de la República. Influyentes sectores de la clase política mutaban deveniendo en clase política-rentista; grupos de empresarios medianos y grandes haciendo lo propio, devenían en una suerte de clase empresarial-política. Una mezcla destructiva para el desarrollo y la

democracia¹⁶. Son diversas las perspectivas sobre estos fenómenos: estados fallidos (Helman y Ratner, 1993), captura (Hellman y Kaufman, 1991)¹⁷, cooptación de los modelos económicos (Revéiz, 1989 para el caso Colombia), capitalismo de amiguetes (Vaugirard, 2005)¹⁸, y su expresión más elaborada: de la cooptación “a la reconfiguración cooptada del Estado” (Garay y otros)¹⁹. Captura y ca-

15 Agradezco el apoyo de la colega Andrea Tock en la identificación de fuentes, ordenamiento bibliográfico y revisión del borrador.

16 En otros estudios hemos documentado que el país vive una mutación: su clase política, devino en una clase política-rentista (PNUD/Valdez, 2015).

17 En Hellman y Kaufmann (1991) la captura del Estado la intentan las empresas “para influir en la formulación de las leyes, las políticas y la reglamentación del Estado a cambio de pagos ilícitos —con carácter privado— a los funcionarios públicos.”

18 Vaugirard definió el Crony Capitalism (capitalismo de amiguetes), como “un sistema económico en donde la distribución de los recursos y la disputa por la adjudicación comercial es generalmente diseñada a favor de quienes poseen una relación cercana con líderes políticos o el oficialismo, ya sea por vínculos sanguíneos (nepotismo) o por soborno (corrupción).” (2005: 67)

19 En tanto, la “reconfiguración cooptada del Estado” (CyRCdE), supondría el escalón más alto y sofisticado del proceso de cooptación; y ya se re-

pitalismo de amiguetes (su versión liberal), Estado patrimonial, son fenómenos conocidos en América Latina.

Los Estados cooptados están relacionados no solo con el sistema político (y con la cultura política), sino con el modelo económico, aunque esto no siempre resulte evidente. Esto le confiere una importancia de otra escala al fenómeno. Garay y Salcedo (2010: 10) advirtieron, como otros más, que “el Estado mexicano y el Estado guatemalteco se encuentran en grave riesgo de ser capturados y cooptados por organizaciones criminales, las cuales tratarán de controlar a dichos Estados por medio del control de los procesos democráticos.”

Es sabida la influencia *sobre* la clase política ejercida sistemáticamente por los mayores grupos de capital para distorsionar mercados mediante barreras a la competencia; influencias en la política pública, en la institucionalidad pública y en la legislación; y el financiamiento electoral privado *lícito*, pero *también el ilícito*. ¿Cómo explicar que ciertos giros productivos, de carácter monopolístico o no pero beneficiarios del capitalismo patrimonialista, tengan ganancias excepcionales, crecimientos expansivos imposibles en condiciones de mercados libres y de estados que practican predominantemente la distinción entre el interés privado y el público? Cuando los mercados,

a través de largos ciclos económicos, son distorsionados y controlados por grupos concentrados surgidos a través de ventajas extra-económicas, se deriva a una alta concentración de los activos económicos y financieros de todo tipo y su correlato: el ahorro de la iniciativa individual a gran escala, imposibilitada de acceder a aquellos. No hay movilidad social y sí más pobreza. El modelo económico patrimonial y la institucionalidad formal e informal, legal e ilegal que lo contiene, *nutre a, y se nutre de*, las instituciones de la vida política, de la vida democrática, de la ciudadanía y, cómo los hechos lo demostraron de manera brutal, del sistema de partidos políticos, seriamente castigado en la encuesta²⁰.

2. La crisis, el desempeño de la institucionalidad democrática y la cultura política

¿Por qué es tan importante para los sistemas políticos “la institucionalidad” (democrática)? Según Uvalle, porque la institucionalidad “es el puente que comunica a la sociedad, el Estado, el mercado y los ciudadanos.” Porque “la institucionalidad democrática se vierte al campo de lo político, lo económico y lo social” dando cauce a los procesos del poder. La institucionalidad “es puente con el sistema económico”; éste no puede entenderse plenamente sin entender el poder, cómo funciona (Uvalle, 2001: 26)²¹. Es inusual en la literatura

fiere por ello a la capacidad de las organizaciones criminales para controlar la producción de normas del Estado.” (De Garay y otros, 2010: 6).

Y justo para la coyuntura de Guatemala, los autores documentaron que entre los mecanismos usados por las organizaciones criminales para influir sobre la producción de normas está el control sobre los procesos democrático-electorales”. (Garay y otros, 2010: 7-8).

20 Respuestas: 63.7 % “ninguna” confianza; 20.9 % “poca” confianza, para un 84.6 % en total.

21 Finalmente, concluye, el cómo se da la distribución de los beneficios sociales guarda estrecha relación sobre “cómo se definen las reglas que

sobre cultura política un abordaje de cómo conectan los ciudadanos, cuando lo hacen, participación política-activismo cívico con su pertenencia y percepciones sobre la vida económica (como fenómeno social) y el “éxito”, tanto de su entorno inmediato (lugar de trabajo como asalariados, cuentapropistas, desempleados, patrones en empresa familiar o no, migrantes, etcétera), como en un entorno más general (regional, nacional, o global)²². Sin dejar de estar en el terreno de la materia en cuestión (la cultura política), resulta necesario ir más a fondo. La calificación que obtienen las empresas privadas en materia de confianza en la encuesta de NDI es muy baja. Parecen obvias algunas explicaciones *provisionales*: un país de enormes desigualdades, malos salarios, empleo precario, privilegios fiscales, destrucción de bienes naturales, escándalos de todo tipo, etcétera; empero, cuando en un país a los empleadores apenas un 9.6 % les atribuye “muchísima confianza”; el 29.7 % “algo”, y la suma de “poca” y “ninguna” alcanza más del 57 %, el país tiene severos problemas de legitimidad en el funcionamiento de su modelo de economía y por extensión en uno de sus imprescindibles actores: los empresarios. En el estudio Latinobarómetro (2015) sobre América Latina el promedio de confian-

za en las empresas privadas en el periodo 2001-2015 fue de 40 %; para el caso de Guatemala en el mismo periodo, 34 %, uno de los más bajos²³.

Los datos de NDI (esto debe estudiarse más con indicadores como “eficacia” usada en otras mediciones regionales), podrían estar explicando en parte las cifras relativamente altas que obtienen los que aprueban participar en cierres o bloqueo de calles o carreteras como forma de protesta. En una escala de 1 (desaprueba firmemente) a 10 (aprueba firmemente), las respuestas son: con 10: el 8.7 %; con 9, el 2.3 %; con 8, el 3.2 %; y con 7, 3.5 %. Esto representa el 17.7 %.²⁴ En cuanto a votar, hay que hacerlo siempre, 66.7 %, dato que no es motivo de sorpresa, como sí lo es el 29 % que dijo que “también” hay que protestar, prescribiendo la participación a un nivel de ciudadanía activa.

3. Las estadísticas, las elecciones y la cultura política

Una rápida consulta a uno de los autores de un clásico diccionario de política dice que crisis se define como un momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema, cuándo se opera un cambio de orden cualitativo que puede ser positivo o negativo. Cuando la crisis “ha pasado”,

determinan de modo institucional que los grupos sociales reciban la justa recompensa a su esfuerzo y expectativas.” (Uvalle: 26-27).

22 Escribió Martín Hopenhayn en Nuevas relaciones entre cultura, política y desarrollo en América Latina (1998), que “El contraste entre un acceso cada vez más difundido a imágenes, símbolos y mensajes colectivos; y un acceso cada vez más concentrado al dinero y a los beneficios económicos del nuevo patrón de inserción global”, sería uno de los rasgos de esas nuevas relaciones (1998: 65).

23 Latinobarómetro (2015).

24 La contracara de las empresas son los sindicatos, que obtienen una pésima calificación: el 5.6 % con “muchísima” confianza; el 2.4 % con “algo”; en tanto poca y ninguna suman el 75.3 %. Dado el hecho de que en Guatemala el sindicalismo del sector privado es estadísticamente insignificante desde muchos años atrás, es razonable estimar que los encuestados calificaron la percepción que tienen sobre los sindicatos del Estado; sobre todo de los que tienen un alto protagonismo en los medios.

el sistema asume *una cierta forma de funcionamiento que ya no es el anterior a dicha crisis*. (Pasquino: 1998). ¿Pero, qué es lo que ya no es igual, o no tanto? No pocos de los hechos importantes del 2015 fueron interpelados por la encuesta: la “corrupción” se convirtió en el principal problema de la gente (23.6 %), seis décimas más que “desempleo” (23 %) ²⁵ o “seguridad” (11.5 %) ²⁶; la “mano dura” es otro de los grandes cambios respecto de encuestas anteriores: ¿Cree usted que en nuestro país hace falta un gobierno de mano dura, o cree que los problemas pueden resolverse con la participación de todos? Respuesta: mano dura, 15.6 %; todos, 83.3 %; en tanto, el gobierno autoritario obtuvo 9.6 %, “en algunas circunstancias”, frente al 70.7 % que prefiere la democracia y a un 15 % al que parece darle lo mismo. ²⁷ Movilizaciones: los encuestados dijeron haber participado una vez, 8.6 %, varias veces 2.9 %, pero un enorme 87.3 % respondió “nunca”. Hay una brecha muy alta entre simpatía a la causa y activismo por la causa. Resulta significativo encontrar que para el 66.6 % los objetivos de las movilizaciones *sí fueron logrados*, frente a un 12.9 % para el que no lo fueron.

¿Habría en lo anterior parte de la explicación de porqué el voto nulo (4.2 %) y el voto blanco (5 %), pese a las inéditas circunstancias en las que se dieron las elecciones y contrariamente a lo que muchos decían percibir, no tuviera más peso que en las elecciones del 2011? (Las excepciones: Totonicapán y San Marcos). Y, ¿estaría en ese dato también, *parte, solo parte* de la explicación de porqué los ciudadanos votaron mucho más en el 2015 que en el 2011? ²⁸ Un 9.3 % de los asistentes dijo que fueron movidos por la indignación. Una palabra muy fuerte. ¿Podría tenerse este significativo dato como una presunción de que en el país se está erigiendo una nueva moralidad pública, más allá del claroscuro de ciertos números?

La vieja definición administrativista de región de los años ochenta quedó desfasada. Histórica, económica social, culturalmente. Los nuevos estudios con enfoque territorial en proceso o en proyecto, podrían ser potencialmente más agudos para discernir las distinciones en materia de cultura política de eso que llamamos “los guatemaltecos” en este país tan diverso.

25 “Una persona desempleada es cuñada de un político importante, y este usa su poder para conseguirle un empleo público. Cree usted que lo hecho por esa persona es...” Respuestas: corrupción pero justificada: 6.4 %, no es corrupción: 2.9 % lo que suma 9.3 %.

26 Empero, al sumar desempleo, pobreza, costo de la vida, situación económica, y salarios bajos (solamente calificados así por el 3.6 %), la variable economía pasa a ocupar el primer lugar con el 46.6 %.

27 La encuesta de Borges & Asociados realizada poco antes de la segunda vuelta del 2011 registró: 82,3 % de acuerdo con la mano dura contra la violencia ofrecida por el ahora encausado general Otto Pérez Molina (EFE, 2011).

28 Llama poderosamente la atención que: 1) solo el 3.1 % de los encuestados tuvo en las redes sociales su principal fuente de información sobre los sucesos del 2015 (la TV es mayoría abrumadora); 2) el 2.2 % encontró en las redes su fuente de información principal sobre las elecciones; y 3) el 62 % no confía en las encuestas de intención de voto que publican los medios.

Bibliografía

- Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (2015). *Financiamiento de la Política en Guatemala*. Recuperado de: http://www.cicig.org/uploads/documents/2015/informe_financiamiento_politicagt.pdf
- De Garay, L.J. & Salcedo-Albarán, E. (2010). Crimen, captura y reconfiguración cooptada del Estado: cuando la descentralización no contribuye a profundizar la democracia. En Ospina, J.M. (Ed.), *25 años de la descentralización en Colombia* (89-138). Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung.
- Di Filippo, A. y Franco, R. SELA, Ermida, O, Frohmann, A. y Hopenhayn, M. CEPAL. Santiago de Chile. Pags. 65-82.
- EFE (2011). Encuesta vaticina triunfo de Otto Pérez en elección presidencial en Guatemala. En terra. <http://noticias.terra.com/america-latina/guatemala/encuesta-vaticina-triunfo-de-otto-perez-en-eleccion-presidencial-en-guatemala,1682fec478633310VgnVCM-20000099f154d0RCRD.html>
- Hellman, J. & Ratner, D. (1993). La captura del Estado en las economías en transición. Hopenhayn, Martín (1998). Nuevas relaciones entre cultura, política y desarrollo en América Latina, en: Serie Políticas Sociales 14. Aspectos sociales de la integración. Volumen IV.
- Hellman, J. y Kaufmann, D. (2001). La captura del Estado en las economías en transición. Finanzas & Desarrollo. (31-35). Recuperado de: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2001/09/pdf/hellman.pdf>
- Imbert, P. & Morales, P. (2008). Crony capitalism: el empresariado como un actor de cambio hacia el neoliberalismo en Chile. En: *Revista Pléyade*. No. 2. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2788092.pdf> *Latinobarómetro*. (2015). *La confianza en América Latina 1995-2015*. Recuperado de: <http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp?ID=225>
- Pasquino, G., (1998). En Bobbio, N., Matteucci, N., y Pasquino, G., *Diccionario de Política*. (11ª Ed.). México: Siglo XXI Editores.
- PNUD-Valdez, J. Fernando, (2015). Breve caracterización del modelo y de las élites económicas en Guatemala. Guatemala: PNUD. Inédito.
- Revéiz, E. (1989). *Democratizar para sobrevivir*. Bogotá: Nuevas Ediciones
- Uvalle, R. (2001). La institucionalidad democrática: eje articulador de la sociedad, el ciudadano y el Estado. En: *Sociedad, ciudadanización y Estado democrático*. (9-30) Recuperado de: <http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1436/2.pdf>
- Vaugirard, V. (2005). Crony capitalism and sovereign default. En: *Open Economies Review*. No. 16. (77-99)

Las dimensiones del cambio

Carmen Ortiz

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

Los teóricos del cambio social identifican dos tipos de transformaciones: a) las que afectan la *dimensión interna (subjetiva)* de las personas, como su identidad, sentimientos, cultura, así como con su actitud y comportamiento hacia “el otro”, pero que no alteran las estructuras ni las instituciones que regulan la sociedad; y, b) las que se vinculan a la *dimensión externa (objetiva)* que sí lo hacen, es decir, transforman el conjunto de reglas, interacciones y patrones que ordenan el sistema, reorientando su curso histórico hacia nuevas estructuras.

Las primeras pueden conducir a las segundas, sin embargo, el impacto es gradual y toma más tiempo. Lo contrario sucede con los cambios en la dimensión objetiva que, por ser radicales, exigen mayor capacidad de adaptación individual por parte de los seres humanos. ¿Ante qué tipo de cambios se está en Guatemala luego de las jornadas cívicas de 2015?

1. El perfil de los protagonistas de la Plaza

El punto de partida para dar respuesta a la pregunta anterior es conocer el perfil de los protagonistas de la plaza. Del universo entrevistado, solamente el 12.3 % dijo haber participado en las concentraciones de 2015. De ellos, el 8.6 % lo hizo solo una vez y, para la mayor parte, representó su debut en este tipo de actividades. Son personas con educación universitaria (mayormente hombres) de ingresos mayores a los US\$ 800 mensuales, del área metropolitana y sur occidente del país. Su motivación fue la indignación especialmente para los mayores de 56 años. Si bien los medios tradicionales de comunicación fueron fuentes de información común, para el grupo de asistentes a la plaza el uso de internet y redes sociales desde dispositivos móviles, fue especialmente relevante.

Aunque la gran mayoría de personas consultadas no asistió a las protestas (87.3 %),

sí estaba informada sobre el propósito de las mismas y dijo estar de acuerdo con ellas, especialmente las personas con educación universitaria e ingresos familiares arriba del salario mínimo. Para este grupo, el uso de internet es menos acostumbrado.

Quienes participaron tienen una visión más positiva de los logros obtenidos. En términos generales 6 de cada 10 creen que sí los hubo; 2 creen que más o menos; y 1 cree que no. Los menos optimistas son adultos mayores de 56 años, con educación primaria e ingresos menores a US\$ 200.

2. Los cambios

Aunque hay más disposición y menos miedo a protestar, el porcentaje de aprobación firme a este derecho es aún bajo, solo 4 de cada 10 personas lo reconocen con convicción y son quienes acudieron a la plaza, es decir esa clase media que decidió incorporar este derecho a su repertorio de protestas²⁹, un logro positivo aunque modesto considerando que ya transcurrieron veinte años desde la firma de los Acuerdos de Paz. Quienes no asistieron a las manifestaciones son más proclives a rechazar esta forma de participación. El nivel de aprobación decrece cuando el nivel educativo y los ingresos también lo hacen.

Aquellos que participaron en las protestas concedieron un rol importante a las nuevas tecnologías de la comunicación e información como medio de articulación sociológica. El internet y las redes desempeñaron un rol clave en la convocatoria y motivación de ciertos grupos que magnificaron su uso por la sensación gregaria experimentada al confluir de forma inéditamente masiva en la Plaza de la Constitución. Pero además, es evidente que para los más jóvenes, con estudios universitarios y mayores ingresos, las redes sociales permiten la participación política. Esta es la primera manifestación de una nueva reconfiguración de las relaciones entre Estado y sociedad con potencial de desarrollo en Guatemala, si se considera que actualmente hay más celulares que personas y el país ocupa el primer lugar en la región centroamericana en el uso de telefonía móvil. Claro, el reto es grande dado que se estima que solo 10 de cada 100 usan un sistema inteligente³⁰, que de 32,000 centros educativos, 4,000 tienen computadoras y de ellos, solo el 1.6 % tiene acceso a internet, pero el proceso evolutivo avanza.

El apoyo al derecho a manifestar parece estar neutralizado por el desacuerdo con los bloqueos de calles y carreteras, cuya desaprobación firme abarca a 5 de cada 10 personas, el resto, lo matiza con justificaciones. Las opiniones están divididas, y es evidente que para algunos grupos sociales, los bloqueos son, sino no la única, sí una de las formas más efectivas para hacerse escuchar y resolver

29 "El repertorio es, a la vez, un concepto estructural y un concepto cultural, que incluye no solo lo que los contendientes hacen, cuando están inmersos en un conflicto contra otros, sino lo que saben hacer y lo que otros esperan que hagan" (Tarrow. 2004:59).

30 <https://sit.gob.gt/gerencia-de-telefonía/estadísticas-de-telefonía/información-histórica/crecimiento-de-la-telefonía-móvil-y-fija-en-guatemala/>

desacuerdos. Quienes nunca han participado en protestas, afirman que nunca lo harán bajo ninguna circunstancia, además, son quienes menos acudieron a las urnas el día de las elecciones. No obstante, y considerando que son quienes menos acceso tienen a internet, es probable que su incorporación futura a esta red, transforme esta forma de pensar.

A decir de este resultado, hoy existe una clase media más informada y dispuesta a manifestar pero desorganizada, heterogénea, más reducida en términos de ingresos³¹, pero no en términos de sus aspiraciones. También hay una clase pobre menos afecta a la participación política y, especialmente, a la protesta social como instrumento para el cambio, privada de tiempo para el ocio, con bajo nivel de educación y escasas oportunidades de acceder a un trabajo digno. A pesar de que en el país conviven distintas realidades fue posible cristalizar los temas de consenso.

La agenda de peticiones en la plaza se focalizó en rechazar la corrupción, solicitar la renuncia del Presidente y de la Vicepresidente. La desarticulación de la red de defraudación tributaria denominada “La Línea”, por parte de la CICIG y el MP fue un escándalo mayor que sacudió las emociones ciudadanas. Fue alentador que la corrupción finalmente haya hecho su aparición en el radar de la preocupación social³² y se vinculara con la

debilidad estatal para atender las necesidades de todos. Su combate pasa necesariamente por el fortalecimiento del Organismo Judicial, pilar fundamental de todo régimen democrático y aquí radica otro indicador relevante de madurez en la cultura política de los guatemaltecos, dado que la principal motivación para volver a protestar en la plaza sería apoyar a la CICIG y al MP. Ambas instituciones se posicionan en los primeros lugares de confianza ciudadana. La CICIG en el primero y el MP en el tercero, solo superado por la iglesia católica.

Se privilegia como nunca antes, el valor de la justicia legal, donde nadie es superior a la ley y la vigilancia sobre la administración de la cosa pública se intensifica. También emergió una nueva conciencia sobre la necesidad de revisar y mejorar los mecanismos que permitan afianzar la representatividad y legitimidad de las autoridades electas, así como a controlar el financiamiento privado a los partidos políticos. Esta colección de indicios que apuntan a una nueva ética, dio por resultado un debate intenso sobre postergar o no las elecciones condicionándolas a cambios en la normativa electoral. Finalmente, estas se llevaron a cabo con un aumento en la participación electoral, pese a que el crecimiento del padrón fue menor, y a que había insatisfacción con los partidos políticos en contienda. El 91 % de los entrevistados dice no simpatizar con ninguno de los partidos vigentes. Un dato que llama particularmente la atención es que quienes emitieron su

31 <http://lahora.gt/pobreza-incremento-5-5-13-anos-la-clase-media-se-redujo-7/>

32 Cuando Otto Pérez Molina cumplió un año en el poder, la población consideraba que los principales problemas del país eran: 1) la inseguridad; 2) el alto costo de la vida; 3) el desempleo; 3) la pobreza extrema. La corrupción no aparecía con rangos porcentuales significativos. Al año siguiente, el desempleo ocupó el mismo nivel de prioridad

que la seguridad y la corrupción siguió sin aparecer sino hasta 2015, cuando ocupó el primer lugar. (Prensa Libre, lunes 14 de enero 2013)

voto lo hicieron por cumplir con un deber ciudadano y no por tratar de cambiar las cosas o en contra de los políticos tradicionales, como se sugirió en su momento.

La ausencia de los jóvenes entre 18 y 35 años en las urnas (en 20.8 %), obedeció más a dificultades administrativas para empadronarse, que a un desacuerdo con la celebración de los comicios bajo la normativa vigente.

El rechazo a involucrarse en la participación partidista también es elevado, tanto en quienes participaron en las protestas, como en quienes no lo hicieron. El 61.8 % del primer grupo indica que no participarían en partidos bajo ninguna circunstancia y el segundo grupo muestra un rechazo de 69 %. En ambos casos, la mayoría son mujeres. Sólo el 18 % de quienes acudieron al llamado de la plaza dan cuenta de este tipo de adhesión. El porcentaje es menor en el caso de quienes no lo hicieron, 13.4 %.

A modo de síntesis, los cambios en la dimensión interna son relevantes, especialmente para un segmento de clase media que se sintió agraviada por los actos de corrupción gubernamental e incorporó el derecho a manifestar a sus formas de participación política. El uso del internet y su futura expansión a otros estratos sociales, impactará las relaciones Estado-sociedad, al facilitar la información, brindar otras herramientas para la auditoría social y la agregación ciudadana. De igual manera, el brote de una nueva ética ciudadana se aprecia en el posicionamiento de la justicia legal para erradicar el principal problema nacional: la corrupción, que esta vez concierne y atraviesa a todos actores del

sistema y no solo al ámbito gubernamental. Las posibilidades de que los cambios iniciados impacten la dimensión externa (estructural), están condicionados por la falta de organización, así como por la carencia de una agenda de mediano y largo plazo; pero sobre todo, por la débil confianza en la institucionalidad democrática (ninguna institución logra más del 54 % de respaldo, cuando en otras mediciones se alcanzó un 70 %).

El desafío es recuperarla y evitar la instauración de las rutinas previas ante el apaciguamiento de las emociones que requerirán nuevas razones para cruzar el umbral de indignación. ¿De dónde provendrán esta vez? ¿De estímulos endógenos o exógenos al sistema?

Bibliografía

- Azpuru, D. (2015). *Cultura Política de la Democracia en Guatemala y en las Américas*, 2014. Universidad Vanderbilt-USAID.
- Di Tella, T. (2004). *Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas*. Ariel, Buenos Aires.
- Giddens, A. (2007). *Sociología*. Alianza Ed. Madrid.
- Retolaza I., *Teoría del Cambio*, PNUD-Hivos. (2010). Guatemala. Búsqueda en el sitio: www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/serveis-socials/observatori-social-de-la-ciutat-de-tarragona/fitxers/altres/eines-per-laccio/
- Tarrow, S. (2004). *El Poder en Movimiento*. Alianza Ensayo. Madrid.

Cinco tesis sobre la “Revolución” de las clases medias en 2015

Edgar Gutiérrez

Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC)

Tesis 1:

Básicamente, fue una obra de las clases medias metropolitanas

Casi toda la población (94.5 %) se enteró de que hubo protestas en 2015 y que la razón fue la corrupción desenfrenada de las altas autoridades de gobierno (96.6 %), pero “solo” el 12.3 % de los aproximadamente 16 millones de guatemaltecos y guatemaltecas participó, una vez o más, en las manifestaciones. Parece poca gente, pero no la es. Equivale a casi 1 millón de personas mayores de 18 años, o sea, en promedio, unos 50 mil ciudadanos movilizados a las plazas en todo el país cada semana, entre el 16 de abril y el 27 de agosto. Esto no tiene precedentes en tres décadas de democracia.

Un corte regional, sin embargo, permite apreciar que la proporción de manifestantes casi se duplica en el departamento de Guatemala. El 23 % de sus habitantes salió a la plaza central; eso significa casi 700 mil personas (sin contar niños y niñas), o el equivalente a unos 35 mil adultos durante cada uno de los veinte sábados a los que se extendió la protesta.

Esta población se puede caracterizar como clases medias por sus ingresos y también por su educación. Uno de cada tres de los encuestados con ingresos superiores a los Q 6,000 mensuales estuvo protestando al menos una vez en la Plaza, y casi uno de cada cuatro de ellos tenía estudios universitarios.

Tesis 2:

Se trató de una movilización intergeneracional, que heredan los jóvenes

La encuesta confirma la percepción de que las clases medias centro-urbanas constituyeron las columnas principales de las manifestaciones, pero relativiza que se haya tratado de una revolución de jóvenes ciudadanos, como ocurrió en los eventos clave del siglo XX. Significativamente fueron jóvenes quienes derrotaron las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera (1920) y de Jorge Ubico (1944), en este último caso haciéndose cargo, durante la llamada “primavera democrática”, del diseño y gestión de las modernas estrategias de desarrollo nacional, que hicieron ingresar finalmente

a Guatemala en el siglo XX. Fueron jóvenes también quienes se insubordinaron en los cuarteles militares el 13 de noviembre de 1960 y los que condujeron las “jornada de marzo y abril de 1962” iniciando la azarosa aventura de la guerra de guerrillas. A finales de la década de 1970, los movimientos estudiantiles de pos-primaria y la universidad estuvieron en el centro de las masivas movilizaciones y reclamos, y luego se alzaron en armas. Incluso, fueron jóvenes políticos quienes reinaugaron el periodo democrático, tomando la dirección de los partidos tradicionales y de los órganos de representación del Estado entre 1984 y 1986.

La Plaza en 2015 dejó como saldos ciertos movimientos juveniles de signo progresista, como Justicia Ya, la Coordinadora de Estudiantes Universitarios de Guatemala (CEUG), el movimiento Somos, Vos y otros, además de una amplia alianza popular, campesina e indígenas, que seguirán decantándose en los próximos años; igual que de la crisis de Rosenberg en mayo de 2009 derivó el Movimiento Cívico Nacional (MCN), de signo conservador.

No obstante la participación en las marchas en 2015 fue especialmente de personas mayores de 56 años (el 15.3 %), aquellos que tienen memoria de participación y protesta callejera de las décadas de 1970 e inicios de 1980. En persistencia (asistieron “muchas veces” a las plazas) triplicando en proporción a los jóvenes comprendidos entre 18 y 34 años. Por eso, aunque serán los jóvenes quienes tendrán que arreglárselas con la continuidad y conducción de esta revolución ciudadana, la participación en

2015 es, propiamente dicha, intergeneracional, y los “viejos” pusieron de manera significativa, con su presencia, un grano de arena.

Tesis 3:

Se salió del repliegue social, es decir, de la zona de confort

Tres de cada cuatro guatemaltecos salió a protestar a la calle por indignación. Las autoridades, en particular una “comunicadora” profesional, la vicepresidenta Roxana Baldetti, envió el mensaje equivocado a los ciudadanos: les “estaba viendo la cara”. Esa actitud rompió un dique de más de 30 años de repliegue de la sociedad y de aparente pasividad frente a los abusos de poder. A pesar de que se vive el periodo más extenso de democracia en la historia republicana de Guatemala, es claro en la encuesta que el 86.5 % de los manifestantes era la primera vez que tomaba las calles para protestar y, además, contaban con la simpatía de nueve de cada diez guatemaltecos que permanecieron en sus casas los fines de semana.

Los guatemaltecos han comenzado a salir del círculo estrecho donde cada quien se hacía la ilusión de ejercer control, configurando así, imperceptiblemente, una sociedad con anomia. Este es un refugio confortable donde no incomoda la impotencia, pues no se arriesga aparentemente nada en los opacos asuntos públicos, aunque, al final del día, ese desinterés contribuya indirectamente a cerrar el horizonte de sus vidas. Por tanto, la indignación que se manifestó en acción expresa, constituye un cambio de actitud que impacta directamente en la

cultura política, aunque no está claro por ahora su alcance ni profundidad.

Se ha removido el pesado sedimento de miedo e indiferencia que se instaló en la sociedad durante casi medio siglo de violencia política y represión atroz. Ahora el 84.7 % manifiesta su intención de volver a las calles si es necesario, y el 78.2 % indica que no tiene miedo de hacerlo. Al romper la anomia se recupera el sujeto ciudadano. De alguna manera entrar a lo político (hablar de los temas, informarse y formarse) que ha sido sinónimo de frustración, va a alterar en las próximas generaciones ciertos hábitos que cultivaron el inmediatez, premiando el menor esfuerzo para el máximo resultado, y los atajos de la prosperidad personal, que volvieron a los guatemaltecos socialmente irresponsables, es decir, egoístas e insensibles, pero además corruptos. Este es quizá, potencialmente, el cambio cultural más relevante.

Tesis 4:

Las movilizaciones fueron un éxito, pero “...esto apenas empieza”

El 87.1 % de la población considera que las manifestaciones en mayor o menor medida lograron su objetivo. Sacaron limpiamente a los gobernantes señalados de actos corruptos y se dejó claro el mensaje de que la población estará vigilante y pedirá rendición de cuentas a las autoridades nacionales, distritales y locales. El éxito de las movilizaciones restituye la autoestima ciudadana y afirma la conciencia de su poder transformador.

De hecho, la actitud ciudadana modificó en 2015 el curso de los acontecimientos que parecían llevar a Guatemala hacia un “Estado fallido”, al tiempo que expulsaba riesgosamente a su juventud educada, la llamada en el relevo generacional a dirigir las instituciones públicas y privadas. Se abre la oportunidad de contener la diáspora de los jóvenes que buscan “la vida en otra parte”. Así, se presenta el escenario para nuevos actores sociales y políticos que con disciplina y creatividad puedan forjar otras instituciones y sistemas políticos y económicos acordes a las necesidades del país. Ha concluido un periodo luminoso de movilizaciones, que da paso a una etapa intensa de organización variada de nuevos núcleos dirigentes.

Eso no significa que las cosas objetivamente han cambiado. Todo y nada cambió. La ampliación de la conciencia ciudadana modifica muchas cosas, pero el engranaje del sistema requiere un trabajo aparte para transformar su dirección habitual, que muchas veces opera por inercia o se paraliza, despertando nostalgias porque en el pasado, aunque había represión o, en este caso, corrupción abierta, “las cosas funcionaban”. Dos terceras partes de los encuestados tienen claro que la corrupción continúa en el Estado, y se admite incluso que los márgenes de tolerancia a las “necesidades” sociales de corrupción apuntan a que el problema es no solo sistémico sino estructural, y está asociado a un modelo económico con bajo poder de ascensor social y de inclusión. Por tanto, habría que reafirmar la consigna, con ritmo de *La Batucada*, de la Plaza: “Lo decimos con firmeza, esto apenas empieza”.

Tesis 5:

Demócratas sin adhesiones a instituciones democráticas y, además, conservadores

La encuesta NDI 2016 reafirma otras mediciones de la última década sobre la cultura política democrática de los guatemaltecos. Para el 70 % no hay alternativa a la democracia, aunque en momentos de frustración por la inseguridad, el caos y la ineficiencia de las instituciones democráticas la adhesión a las libertades y la alternancia en el poder, ha flaqueado. El riesgo sigue siendo que la adhesión –reiterada ahora– al sistema democrático no tiene referentes democráticos.

Tres de cada cuatro guatemaltecos siguen desconfiando de los partidos políticos (los intermediarios democráticos por excelencia entre la sociedad y el Estado) y casi la mitad no le tiene respeto al Congreso (integrado por los representantes electos de manera directa por el voto popular). Por otro lado, casi la mitad de la población manifiesta su repudio a los sindicatos, la forma de organización social clásica en la construcción democrática, que reivindica la dignidad de los trabajadores y se enfrenta a los poderes económicos y políticos tradicionalmente egoístas y corruptos, no siempre democráticos. La gente no está mal, son esas instituciones íconos de la democracia que se degradaron desnaturalizando su misión. Por tanto, deben ser transformadas.

Hay otros datos aún más duros. El 91.1 % de los ciudadanos no simpatiza con ningún partido político y el 68.1 % descarta que pertenecerá a alguna de

esas organizaciones públicas. Está dicho: los partidos son el nervio de la democracia y sin embargo son repudiados por una población que reivindica la democracia. Entonces, ¿a través de qué medios se construye un régimen de libertades, se participa con opciones y se delega la representación? En fin, bajo esos referentes, ¿cómo se edifica la democracia? Las adhesiones de la población ya no son, como en otros años, al Ejército, sino a la CICIG (la institución más creíble, pero necesariamente cerrada y no forzosamente democrática), a la jerárquica Iglesia católica, al MP y a las explosivas iglesias Evangélicas. Por la CICIG la gente está dispuesta (83 %) a volver a salir a las calles. Prevalece un sentimiento de gratitud hacia la Comisión porque ejerce eficazmente –y sin precedentes– la justicia. No está claro si la gente se pregunta por el “debido proceso” y la “presunción de inocencia”, que los señalados reclaman ahora, si tradicionalmente se respaldó las ejecuciones sumarias (“limpieza social” y linchamientos).

.....

En resumen, las respuestas a la encuesta son congruentes. La población reivindica su derecho a protestar limpiamente, como se hizo entre abril y agosto de 2015, sin molestar a nadie, más que a los gobernantes que traicionaron su juramento a la Constitución. Y lo volverían a hacer (84 %), saldrían a las calles a defender sus conquistas. En cambio, la misma protesta, pero molestando al prójimo al bloquear carreteras (que realizan los movimientos campesinos y comunitarios), pierde sentido para el 76.8 % de la población, que resulta condenando esa forma de reclamo.

La gran disonancia de la cultura política, para quien quiera captar la fotografía de la encuesta es, a mi manera de ver, la razón del voto (es indudable que se refiere a la asistencia a las urnas el 6 de septiembre y el 25 de octubre de 2015), tras cerrar, como actor directo o simpatizante (en suma, nueve de cada diez ciudadanos), las victoriosas jornadas de la Plaza. Se votó, según las respuestas, porque “es un deber ciudadano”, no porque había que rechazar un sistema político corrupto ni, en consecuencia, derrotar en las urnas a sus más conspicuos representantes y sus estructuras ominosamente clientelares. Si uno adopta literalmente esa respuesta, surge la pregunta: el acto supremo de la democracia, que es

el voto, ¿es apenas, en nuestro caso, un ritual guiado por la inercia?

En tal caso, ese 12.3 % de población consciente, que al inicio me pareció suficiente para marcar el cambio en 2015 es, sí, una insignificante minoría a la hora de elegir gobiernos, o sea, el destino institucional del país. La cultura democrática a la hora de someterla a las urnas es una moneda lanzada al aire, incluso en las sociedades consideradas cultas. Parece que es el viaje de la democracia, no el acto del voto, lo que hace la diferencia. Significa entonces que el cambio viene de una minoría activa y vigilante, adherida plenamente a las libertades civiles y a la justicia social.

La indignación: Oportunidad para reivindicar el rol del Estado

Jonathan Menkos Zeissig

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)

«La democracia no puede prescindir de la virtud, entendida como amor a la cosa pública, pues al mismo tiempo debe promoverla, alimentarla y fortalecerla».

Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, p.39

Los resultados de la encuesta nacional NDI 2016 abren la puerta a una serie de análisis sobre la fuerza que motivó a muchos guatemaltecos a salir a la calle y protestar, alejándose de la comodidad de ser simples e indiferentes espectadores, para ser parte activa de un llamado pacífico y democrático, fundado por la indignación ante el abuso de poder y la prostitución de lo público. La riqueza de la encuesta es vasta; sin embargo, en este artículo se analizarán la participación y el conocimiento de los hechos así como la motivación para manifestar y la reivindicación de lo público, para cerrar con algunas consideraciones que pueden ayudar a avanzar en la construcción de un nuevo paradigma social, económico y político.

1. Tomar las calles como ejercicio de poder ciudadano

De acuerdo con la encuesta, el 94.5 % de los entrevistados sabía de las protestas que hubo en 2015 en las que se exigía el combate a la corrupción y la renuncia de Otto Pérez y Roxana Baldetti, por aquel entonces, presidente y vicepresidenta de la República. Aproximadamente, 13 de cada 100 entrevistados participaron por lo menos una vez en aquellas manifestaciones ciudadanas, y el 75 % estuvo motivado por un sentimiento de indignación. Otros, los menos, fueron por acompañar a amigos y familiares o por la simple curiosidad.

Soy parte de los indignados. Estuve muchos sábados en aquellas largas y festivas

jornadas frente al palacio nacional. Asistí con mi familia, con amigos y compañeros de trabajo, y guardo muchas fotos y consignas de aquellas jornadas que nos hicieron crecer como ciudadanos. Fue aleccionador encontramos ahí personas con diferentes posturas ideológicas, provenientes de diversas culturas y religiones, niños, jóvenes y adultos, campesinos, indígenas y ladinos, todos con múltiples reclamos contra un Estado que, en estos casi treinta años de democracia, ha sido violado incesablemente con privatizaciones opacas, concesiones de negocios nocivas para la administración pública, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, sobrevaloraciones en adquisidores públicas, contrabando y defraudación aduanera. Puntualmente, en este tiempo se ha consolidado un Estado excluyente, reducido al mínimo y sin capacidad infraestructural para construir un bienestar general que satisfaga a todos los ciudadanos y garantice la democracia.

No todos han perdido con ese Estado corrupto, exitoso en dejar cabos sueltos y áreas grises, pues los beneficiarios en esta trama han sido y son políticos, gobernantes, funcionarios y empleados públicos, militares, académicos, sindicalistas y empresarios.

Las manifestaciones de los sábados no cesaron y las renunciaciones se concretaron. Fue más fuerte que la lluvia, la reacción social que suscitó el inicio del desmantelamiento de una estructura criminal dedicada a la defraudación aduanera y que operaba dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria. A este caso, conocido como “La línea”, le han seguido otros tantos, que

revelan la metástasis de la corrupción y cooptación del Estado. La CICIG, junto al MP, han revelado cómo opera el crimen organizado, prostituyendo la administración pública, abriendo espacios a la opacidad y la mala gestión, poniendo lo público al servicio de sus manos privadas, en un contexto de impunidad y, hasta ahora, pasividad ciudadana.

Entre las consignas de las manifestaciones, además de la reiterada exigencia de renuncia de Pérez y Baldetti, también hubo aquellas con las que se exigía más salud, más educación, más recursos para la nutrición, la seguridad y la justicia. Por supuesto, fue admirable ver entrar las manifestaciones de los movimientos indígenas y campesinos, los hombres y mujeres más tozudos por su perseverancia en la lucha por un Estado más humano. Y fue histórica la marcha integrada por los jóvenes de las principales universidades del país. En aquellas calles, repletas de personas, se sentía la fuerza que tiene el poder de lo colectivo.

2. ¡Nos han robado lo suficiente!

Ha sido alentador observar que la gran mayoría de los manifestantes estaba convencida de que ya nos han robado lo suficiente, lo bastante como para perder el miedo y salir a las calles para exigir cambios radicales.

De acuerdo con la encuesta, el 87 % de los encuestados estuvo de acuerdo con las protestas. Asimismo, al preguntarle a los encuestados sobre las razones que los convocaría para volver a la plaza, estos han respondido que manifestarían contra la deficiencia de los servicios

públicos (75.5 %); en defensa del territorio y recursos naturales (74.1 %); para exigir la renuncia de corruptos (72 %); para depurar el Congreso (69.5 %); entre otros. Asimismo, los encuestados reconocen entre los problemas más importantes del país, la corrupción (23.6 %), el desempleo (23 %), la seguridad (11.5 %) y la pobreza (9.5 %), entre otros.

De las manifestaciones, recuerdo a un niño de 11 o 12 años que estaba llorando junto a su madre, muy cerca de la entrada principal del palacio nacional. Al preguntarle el porqué, el niño confesó su enojo y tristeza porque Pérez y Baldetti habían robado dinero público mientras en el país los niños se morían de hambre.

Lo cierto es que en Guatemala, la mitad de los niños menores de cinco años padecen desnutrición, con un sistema de salud pública que tiene puestos de salud para atender a la población guatemalteca que existía en 1950 (2.2 millones). Asimismo, hay cerca de cuatro millones de niños y adolescentes fuera del sistema escolar por la pobreza familiar y la baja cobertura de la educación pública. Entre el 2000 y el 2015, la economía del país aumentó un 50 %. Coincidentemente, en ese mismo período de tiempo, la pobreza extrema creció lo mismo.

Los dos instrumentos por excelencia para la construcción de una sociedad más equitativa, el mercado laboral y la política fiscal, no están funcionando bien. El primero ha sido diseñado para la informalidad y los bajos salarios, mientras el segundo ha sido apartado de cualquier idea democrática.

En el mercado laboral abunda la informalidad y los bajos salarios. De acuerdo con la

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014, el 71.5 % de los trabajadores laboran en la informalidad, sin contrato de trabajo ni seguridad social. Las peores cifras se registran en jóvenes (80.6 %), adultos con poca educación (82.3 %) y trabajadores rurales (80 %). El ingreso promedio nacional, en noviembre de 2015 era de Q 2,080, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos. El 60 % de los trabajadores con menos ingresos recibían mensualmente, entre Q 403 y Q 1,774. En el mismo mes, la Canasta Básica Vital para una familia promedio, rondaba los Q 6,460.95. No es extraño, entonces, que el 10 % de la población más rica, se esté quedando anualmente con más del 35 % del ingreso nacional, mientras el 40 % más pobre obtiene tan solo el 13 %.

Por su parte, la política fiscal guatemalteca disminuye la desigualdad, cuando produce bienes y servicios públicos, pero aumenta la pobreza de la población cuando cobra los impuestos. La recaudación de impuestos es de las más bajas del mundo (a penas del 10.8 % del PIB en 2015), y está compuesta en un 70 % por impuestos relacionados con el consumo. A esto se agrega una serie de privilegios fiscales otorgados a sectores económicos pujantes o monopolísticos que se han aprovechado de su poder económico y su influencia política. En este país el que tiene más paga menos impuestos con respecto a sus ingresos que el resto de la población.

Por el lado del gasto, al comparar internacionalmente el presupuesto del gobierno guatemalteco, son notorias las reducidas asignaciones para todo. Por ejemplo, el Estado invierte menos de Q 8 diarios en la provisión de servicios

que protegen a la niñez y adolescencia, cifra siete veces menor a la inversión que hace Costa Rica. Al bajo gasto público se suma una limitada planificación, débiles procesos de control y evaluación del quehacer público, así como niveles altos de corrupción localizados principalmente en el listado geográfico de obras, la compra de medicamentos y servicios privados, la contratación de personal, la promoción clientelar de la asistencia social y los fideicomisos públicos.

La ciudadanía guatemalteca tiene razones para estar indignada y para decir que le han robado lo suficiente. Poner un hasta aquí a la corrupción y la falta de bienestar requerirá continuar la protesta, pero con propuesta y mayor participación política.

3. La acción política debe dirigirse hacia un nuevo contrato social

Si bien en los resultados de la encuesta NDI 2016 se observa cómo los ciudadanos viven en un ambiente de profunda desconfianza, principalmente hacia las instituciones públicas, es importante reconocer que los cambios que urgen en el país deben discutirse en la arena política, en espacios de poder público y con una mirada de futuro que permita señalar los desafíos estratégicos que se deben enfrentar para conseguir una democracia plena y duradera.

Para aprovechar al máximo esta adrenalina ciudadana, se requiere la madurez de toda la sociedad (en particular, los movimientos sociales, los sindicatos, los empresarios y los políticos), para acordar

un nuevo contrato social, basado en tres pilares.

Primero, crecimiento económico sostenible e incluyente. La economía debe crecer, pero respetando el ambiente natural y el derecho al desarrollo; promoviendo la transformación productiva y garantizando más empleo y mejores salarios. Es impostergable la agenda para el desarrollo rural y reforma en la tenencia de la tierra.

Segundo, a partir de las diferencias, construir políticas públicas para la equidad, reconociendo lo particular de cada cultura, territorio y persona. Acordar un piso mínimo de protección social universal que acabe con el hambre, la ignorancia y la enfermedad, hasta programas de apoyo a grupos con vulnerabilidades particulares y añejas: mujeres, niños, niñas, jóvenes, indígenas y habitantes del área rural. En este espacio se juega la legitimidad de la vida colectiva.

Tercero, una agenda para un Estado efectivo frente a los desafíos de la democracia y el desarrollo. Un mejor servicio civil, reforma fiscal integral para aumentar la capacidad de acción del Estado. Reformas para mejorar los ingresos públicos con justicia; vincular el gasto público a metas de desarrollo; una institucionalidad más robusta para la justicia, contraloría y transparencia. Reforma al sistema político, incluyendo el que los partidos se financien con fondos públicos y se les exija más calidad.

Estamos vivos, nos hemos indignado y ya conocemos la fuerza de actuar en conjunto. El reto ahora está en ponernos de acuerdo y comprender que una sociedad con más garantías también conlleva más responsabilidades.

Ilusión de primavera

María del Carmen Aceña

Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)

1. Los primeros tres años del Partido Patriota 2012-2014

A pesar de que el gobierno del Partido Patriota (PP) fue “peor de lo mismo”, tuvo la aceptación de más de la mitad de la población durante sus primeros años (Prensa Libre Prodatos 2015), producto del activismo tanto del presidente Otto Pérez como de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Su plan, la Agenda Nacional del Cambio 2012-2015, se sustentaba en tres Pactos: Seguridad y Justicia, Fiscal y Hambre Cero. Su promesa básica era seguridad y empleo.

El Ministro de Gobernación lideró el combate contra la delincuencia y obtuvo una cantidad significativa de recursos (35 % más de presupuesto) para lograr “un país seguro”. Los organismos de seguridad y justicia suscribieron un pacto. El respetar el periodo de Claudia Paz y Paz como fiscal del Ministerio Público (MP) fue estratégico (a favor de los derechos humanos). El nombramiento de Thelma Aldana en mayo del 2014 fue bien visto por su trayectoria en la carrera judicial, aunque se señalaba su

vinculación con el PP. La tasa de homicidios/100,000 habitantes había bajado de 34 a 32 (PNC 2015). Durante el primer año se había impuesto una frustrada reforma tributaria por lo que, sumado a la renuncia del Ministro de Finanzas, hombre de primera línea del partido, no se concretó el Pacto Fiscal. Aun así, el crecimiento económico promedio había mejorado un punto porcentual en comparación al período anterior, pero el número de empleos no aumentaba. La carga tributaria se estancó en alrededor de un 11 % (MINFIN 2016). El Pacto Hambre Cero fue tan solo un eslogan publicitario con muy pocos resultados. Los distintos ministros de Salud Pública fueron los más erráticos y las mafias internas se fortalecieron. Se crearon redes desde la Presidencia hasta el IGSS, haciendo negocios sin abastecer hospitales, centros y puestos de salud. Se mantuvieron los programas sociales iniciados por el gobierno de la UNE, solo cambiando el apellido de “solidaridad” por “seguridad”. La pobreza aumentó entre el 2006 y 2014 en 6.9 % y la clase media se redujo en 3.3 % (ENCOVI 2014).

La Vicepresidenta se encargaba del tema de corrupción, del Congreso y del partido. Muchos funcionarios referidos por ella, obedecían sus directrices. No le importó comprometer el equilibrio financiero del Estado con tal de tener a los líderes sindicales a su favor firmando desproporcionados pactos colectivos. El presidente siempre se presentaba informado, comprometido y trabajador. "Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo", decía con contundencia.

El Congreso se había convertido en la institución más disfuncional del país. La producción de leyes y decretos había disminuido en una tercera parte en comparación a otras legislaturas. A pesar de que la mayoría de los presidentes pertenecían al PP, se carecía de agenda y en su mayoría las leyes aprobadas eran deplorables. El partido LIDER trataba de paralizar al Ejecutivo a través de interpelaciones eternas que al final carecían realmente de sentido, sirviendo únicamente para fines de extorsión a los ministros o para paralizar la campaña oficialista. El transfuguismo era una práctica entre los diputados, que cada día evidenciaba más sus intereses económicos. A pesar de que seguían siendo 158 diputados, el gasto aumentó de Q.541 millones en el 2012 a Q.770 millones en el 2015 y el número de empleados del 2013 al 2015 en 1,230 (57 %). Sin embargo, luego de la aprobación del presupuesto general para el 2015, que incluía una reforma tributaria, quedó clara una nueva alianza entre PP y LIDER (CIEN 2015).

Hubo muchas dudas acerca de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el 2014. Se denunciaron

irregularidades en los procesos de selección y elección. Se evidenció el acuerdo entre los dos partidos. Se había perdido la credibilidad en los integrantes de las comisiones de postulación y en la transparencia del proceso.

2. La indignación de la plaza-2015

El cambio se inició a raíz de un nuevo liderazgo en la CICIG, con el nombramiento de don Iván Velázquez Gómez a partir de octubre del 2013. Se planteó un plan de trabajo 2013-2015 con dos objetivos de largo plazo: 1) contribuir a la disminución del índice de impunidad en Guatemala, y 2) fomentar la participación de la ciudadanía guatemalteca en el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia. Al respecto ya el gobierno se había pronunciado en marzo del 2015 afirmando que no extendería el mandato de la CICIG. Para una buena cantidad de personas se percibía que la CICIG no había sido exitosa en su misión. Se conversaba y se sabía de la corrupción de dos gobiernos sucesivos, sin embargo éste no era el principal problema identificado por la población, más preocupada por lo económico (38 %) y por la inseguridad. La indignación fue creciendo conforme la Vicepresidenta actuaba cada vez con menos tino e irreverencia hacia la población. Paralelamente Alejandro Sinibaldi se preparaba para ser el candidato oficial a la presidencia (tercero en las encuestas de intención de voto) y Manuel Baldizón con su partido LIDER se encontraba en primer lugar. Muy poco se sabía de Jimmy Morale, y Sandra Torres de la UNE buscaba un compañero de fórmula

afín al sector empresarial para lograr diferenciarse y ganar la presidencia (Prensa Libre Prodatos enero 2015).

Indudablemente el despertar ciudadano vino a raíz de la presentación de la investigación de la CICIG y el MP, al hacer pública la existencia de la estructura criminal denominada La Línea dedicada a la defraudación aduanera y contrabando, momento a partir del cual principió su desmantelamiento. Según se informó en aquel histórico jueves 16 de abril, esta estructura era dirigida por el Secretario Privado de la Vicepresidencia y en ella participaban funcionarios públicos, especialmente de la SAT, incluyendo dos exsuperintendentes, un secretario general de un sindicato y vistas aduaneros, apoyados en el exterior por el director de un medio de comunicación escrito y un antiguo contrabandista (activo en los noventa). Aún no se presentaban señalamientos directos contra el Presidente y la Vicepresidenta, pero los indicios fueron suficientes para ejercer la necesaria presión local e internacional para extender el mandato de la CICIG por dos años adicionales.

Luego se presentaron más detalles de ése y otros casos. Incrementó la indignación e iniciaron las protestas en contra de la corrupción. Pronto iniciaron a suceder situaciones jamás imaginadas. Se solicitaron antejuicios a funcionarios tales como la Vicepresidenta, diputados, miembros de la Corte Suprema de Justicia y alcaldes. No se paró de manifestar hasta que la Vicepresidenta y luego el Presidente renunciaron. El Comisionado motivaba constantemente a la sociedad civil a seguir adelante y el Ministerio

Público empezó a materializar aciertos. Los jóvenes, en especial los universitarios, se animaron y las redes sociales fueron determinantes para citar a los indignados a la Plaza de la Constitución los sábados por la tarde. Fue muy importante la forma como se convocaba, buscando el orden, la convivencia y el respeto. Sin apoyar a líderes en particular, de forma igualitaria se juntaban los ciudadanos de distintas edades y condiciones socioeconómicas y se cantaba el himno nacional. Los carteles que portaban los presentes eran geniales: cada quien iba a compartir su dolor. Conforme iba incrementando la irritación, la gente de otras regiones también protestó. A pesar de que a muchos guatemaltecos no les gusta manifestar muchos apoyaron y un porcentaje muy alto de los manifestantes (87 %) participó por primera vez (NDI 2016). Los *hashtags* (etiquetas) sirvieron para comunicar los casos, organizar marchas y protestas, además de entrelazar a la población con la CICIG, el MP, los medios de comunicación y las redes sociales. #CasoLaLinea, #PlazasFanstasmas, #RenunciaYa, #JusticiaYa, #EstoApenasEmpieza, #NoTeToca, #JuevesDeCICIG y el #Paro27A son algunos ejemplos.

En septiembre del 2015 tomó posesión un nuevo binomio presidencial: Alejandro Maldonado y Alfonso Fuentes. Los dirigentes del MP y la CICIG se convirtieron en los héroes. Una encuesta señalaba que el 87 % de la población aprobaba la gestión de la CICIG. Hubo movimientos para cancelar las elecciones y refundar el Estado, sin embargo los sondeos presentaban claramente que los guatemaltecos preferían las elecciones (70 %) como forma de solucionar la crisis política que

se vivía. El gobierno de transición dio tranquilidad y certeza al proceso electoral. Todos los cambios se hicieron en ley, pacíficamente y respetando la Constitución. El Congreso promovió la discusión de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y la Ley de Servicio Civil (Prensa Libre Prodatos 2015).

En el Organismo Judicial surgió un personaje, el juez Miguel Ángel Gálvez, a quien se le asignaron los casos de alto impacto. Su forma pedagógica de actuar, su serenidad y profesionalismo han contribuido a que los guatemaltecos aprendan de los procesos.

3. El futuro está en juego

A partir del 14 de enero 2016 se inició una nueva era para Guatemala. Sorprendieron las elecciones, no sólo en la afluencia del evento sino en la elección de los votantes. Ganó un binomio que representaba “la nueva política” y también hubo renovación de alcaldes y de la mitad de los diputados. El Congreso tomó un nuevo giro con el liderazgo de Mario Taracena de la UNE, atendiendo el clamor de la transparencia, un mejor desempeño del Congreso y de sus miembros. Perduran los casos que señalan a los diputados por corrupción, abuso de poder y tráfico de influencia. Actualmente hay quince diputados con procesos penales. El tema del pacto colectivo y los salarios de los trabajadores del Parlamento ha servido de mecha para más indignación. La calidad de las leyes aprobadas en lo que va del año aún es baja ya

que dos terceras partes no llena ni los requisitos de procedimiento (CIEN 2016).

Lamentablemente el Ejecutivo presidido por Jimmy Morales y Jafeth Cabrera no llegó con un plan claramente establecido e integró su equipo en los primeros días de enero. Solo una tercera parte confía en el Gobierno. Hay debilidad en la toma de decisiones para realizar procesos de cambio como normar los pactos colectivos, no permitir los bloqueos, modificar el sector salud y otros. Una reciente propuesta de reforma tributaria provocó descontento en la población, posiblemente porque no se perciben acciones concretas de transparencia, mérito y mejora. Por ejemplo, la eficiencia del sistema de la justicia criminal se sitúa en 12.6 %, aún no se conoce el número de trabajadores en los ministerios y los casos relacionados con la corrupción continúan. Se cuenta con alrededor de 140 exfuncionarios en prisión preventiva y ligados a proceso (CIEN 2016).

Cuatro de cada diez guatemaltecos confían en la CICIG, el Ministerio Público y en las iglesias. Se desconfía mucho de los partidos políticos, el Congreso y los sindicatos. Menos del 11 % tiene mucha confianza en la Policía, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La confianza y desconfianza varía según la región. El desafío más grande es contar con una verdadera renovación de la clase política; sin embargo, en su mayoría los guatemaltecos (91 %) no simpatizan con ninguno de los actuales y tampoco están dispuestos a participar en uno (68 %). Definitivamente el país está estancado y no hay muchas propuestas de qué hacer para desatar los nudos y llevar

al país a un puerto seguro, de prosperidad y desarrollo. Sin embargo, del tema se habla en el trabajo, con los familiares y entre amigos. Se han dedicado muchas horas al seguimiento de distintas audiencias. Hay más disposición de organizarse y participar, así como menos miedo a protestar (NDI 2016).

Aún falta crear más conciencia en los problemas críticos del país. Por ejemplo, a pesar de que la desnutrición crónica es una de las más altas del mundo, sólo un 5 % considera la salud como el mayor problema del país. El mayor reto sigue siendo lo económico (42 %), aunque se señala fuertemente la corrupción (24 %). En comunicación es difícil superar el alcance de la televisión (84 %). A pesar de que un 70 % califica de bueno el desempeño de los medios, sí es importante que

sus dueños estén separados del gobierno. Sorprendente que más de la mitad de la población tenga acceso a internet, y quienes que creen que las redes sociales son importantes consideran que “en Guate si no estás en Facebook, no estás en nada”. Algunos creen influir en la política desde las redes, pero es tan solo una ilusión ya que desde “la Plaza” no se puede gobernar (NDI 2016).

Es urgente el diseño de un nuevo proyecto de nación con valores distintos como el servicio, el mérito, la honestidad, el bien común y el respeto. Debe prevalecer la cultura de lo correcto versus la corrupción, lo que tomará tiempo. Pero se ha iniciado el camino. De nosotros depende que Guatemala se convierta en el país de la eterna primavera.

Algunas observaciones del movimiento cívico del 2015 en Guatemala

Édgar Ortiz

Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES)

A continuación analizamos los sucesos del año 2015 en Guatemala a la luz de los datos de la encuesta de cultura política. Intentaremos mostrar que buena parte del fenómeno responde al creciente proceso de urbanización que vive el país. A su vez, analizamos la preocupante debilidad institucional que se hace patente en la encuesta. Se conjetura que los avances, aunque en proceso, muestran una tendencia en el cambio de las preferencias de los consumidores de bienes públicos.

1. Antecedentes

El 2015 estuvo marcado por una serie de eventos que comenzaron con la investigación de una red de defraudación en las aduanas que hiciera el Ministerio Público. Lo que desencadenó los eventos importantes que se sucederían fue la acusación a la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, de formar parte de dicha estructura de defraudación.

Este evento dio lugar a una serie de protestas orgánicas que, primordialmente, se llevaron a cabo los sábados en la plaza

central. La consigna principal era la la renuncia de la entonces vicepresidenta. Después de su renuncia, las protestas continuaron aunque se pudo ver que la intensidad bajó notablemente.

En el mes de agosto las protestas dieron un giro cuando el Ministerio Público, MP, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, anunciaron la eventual participación del presidente Otto Pérez Molina en la misma estructura criminal que defraudaba en las aduanas.

Sin duda este evento reforzó el movimiento cívico que hasta entonces se había organizado. El zenit del movimiento ocurrió el día 27 de agosto con la protesta que se conoció como el “paro nacional”. En esta ocasión la protesta fue encabezada por prácticamente todos los sectores de la sociedad civil.

Es de notar que las protestas fueron un fenómeno primordialmente urbano. El gran epicentro del movimiento se concentró en Ciudad de Guatemala y en otros centros urbanos como Quetzaltenango y Cobán donde se vieron movimientos similares durante el periodo que analizamos.

Es una humilde hipótesis del autor de estas líneas que lo acontecido en 2015 se trató de una reacción eminentemente urbana y que los sucesos fueron posibles gracias al cambio en la estructura demográfica del país, que ha pasado a ser por primera vez en la historia, un país con una población mayormente urbana.

A continuación entraremos a considerar los eventos antes aludidos a la luz de los datos que arroja la encuesta NDI 2016 respecto de los eventos de 2015.

2. Los eventos en perspectiva

Es un hecho de que las protestas aglutinaron dos tipos de demandas. Por una parte, estaba como consigna principal la solicitud de la renuncia de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, y del presidente, Otto Pérez Molina. Por otra parte, otros tenían reclamos de reforma institucional para luchar contra la corrupción. En este grupo de peticiones había consignas tan variopintas como solicitar cambios a la propuesta de reforma de la ley electoral y de partidos políticos, cambios a la ley de contrataciones del Estado e incluso la consigna de posponer las elecciones generales.

La encuesta arroja evidencia interesante al respecto. Más de la mitad de los encuestados piensa que las protestas tenían como objetivo ya fuera pedir la renuncia de Roxana Baldetti o de Otto Pérez Molina. Un 42 % de la población entendía que había en las protestas una demanda real de luchar contra la corrupción.

Es un hecho que buena parte del sector que formó parte de las protestas vio

satisfechas sus peticiones con la renuncia de Roxana Baldetti. Las protestas tuvieron una gran afluencia, el 25 abril y el 1 y 2 de mayo especialmente, hasta la renuncia de la ex vicepresidenta el 8 de mayo. Durante el mes de junio las mismas comenzaron a bajar notablemente de intensidad.

En ese periodo persistieron las manifestaciones pacíficas, aunque con menor afluencia, y las consignas comenzaron a girar alrededor de las reformas institucionales.

Esto es indicativo de que en buena medida existe una cultura de caudillismo: muchos guatemaltecos veían en la persona el problema de la corrupción que se había hecho patente con el caso “la Línea”. Otros, ese 42 % que respondió que las protestas eran contra la corrupción y no por la renuncia de los funcionarios en cuestión, veían que el problema era el sistema.

Este último punto no es menor. Para un país con una cultura política profundamente personalista, contar con un porcentaje como el señalado que identificó a la corrupción como el problema a resolver, es un signo de avance. Hasta entonces no se conocía un movimiento cívico, en la historia reciente, que se organizara para impulsar peticiones de reforma institucional.

Quizá el tinte “personalista” se confirma con el fuerte apoyo que la población muestra tanto a la CICIG como al MP, a quienes considera las instituciones más confiables. Un 83 % de los encuestados aseguró que saldría, hipotéticamente, a protestar para defender a ambas instituciones. Y es que en estos momentos la confianza, conjeturo, está focalizada en la figura de la fiscal y del comisionado, principalmente.

Tampoco hay que caer en la tentación de imputar a razones exclusivamente culturales la tendencia al caudillismo o “personalismo” en nuestro país. La debilidad institucional alimenta esta tendencia cultural. Salvo la CICIG y el MP que cuentan con una confianza alta por parte del 54 % y 44 % de los encuestados, los que le siguen son la iglesia católica con 52 % y la iglesia evangélica con un 39.5 %. Dos instituciones importantes pero ajenas al Estado. Después de estas instituciones, prácticamente no hay institución estatal que cuente con el respaldo y la confianza de la población.

Las instituciones peor calificadas en esta encuesta son los partidos políticos y los sindicatos. Esto muestra que existe un vacío muy grande en cuanto a los vehículos tradicionales que puedan promover el cambio: los partidos políticos.

Con una percepción tan negativa de los partidos políticos es complicado que las demandas ciudadanas se traduzcan en un proyecto político. Esto, a su vez, hace difícil que los paulatinos avances de transformación cívica encuentren eco y se retroalimenten. Toda propuesta y movimiento se queda fuera del ámbito de influencia política. Solo acceden al poder los actores que previamente estaban cerca de los partidos políticos establecidos. La barrera de entrada al mercado político es alta para los innovadores políticos.

Esto último explica que el 63.8 % de los encuestados considere que el país está estancado en comparación con el año pasado. La respuesta electoral de los guatemaltecos fue clara: el presidente elegido, Jimmy Morales, ganó por amplio

margen las elecciones en tanto que su partido obtuvo muchos menos votos para diputados al congreso. El guatemalteco volvió a elegir a una persona y no a un proyecto político dada la escasa institucionalidad que existe en el país. El partido político no pareció importar tanto como la figura del señor Morales.

3. Sacando conclusiones

Pasando revista a los resultados de la encuesta se pueden percibir algunos cambios, aunque paulatinos, en la cultura política de Guatemala. Al inicio sostenía que el cambio visto en 2015 obedece en buena medida a la tendencia creciente a la urbanización del país.

Ciertamente en el año 2000 el 55 % de los guatemaltecos vivían en zonas rurales y en el 2014 esa cifra se redujo al 49 %. La urbanización hace que los hábitos de consumo de las personas cambien. Esto, a su vez, se refleja en su demanda electoral.

A ello habría que sumar algunos sectores de la población que viven en zonas periurbanas pero cuyo lugar de trabajo está en un centro urbano. A su vez, la encuesta refleja que un 52.7 % de la gente hace uso del internet y ello apareja un cambio en las expectativas de la oferta política de los guatemaltecos. La urbanización y el acceso al internet moldearon las preferencias de buena parte de la población otrora rural.

Quizá los resultados electorales sean reflejo de lo dicho anteriormente. Jimmy Morales era un candidato primordialmente urbano y consiguió superar a

Sandra Torres quien tenía mayor popularidad en zonas rurales.

Por ello las transformaciones de cultura política pueden verse en perspectiva después del año 2000, donde comienza a acelerarse la tasa de urbanización.

A partir de ese periodo podemos identificar dos movimientos cívicos orgánicos: las protestas contra el aumento del IVA del 10 al 12 % en el año 2001, y las protestas que pedían la renuncia del presidente Álvaro Colom tras el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg en 2009.

En el primer caso la consigna era concreta contra la subida de impuestos. En esta etapa se habían organizado los *jueves de luto*, donde se reunían un grupo de personas que se oponían al aumento de impuestos. La consigna estaba acotada prácticamente en su totalidad al tema tributario.

En el caso de las protestas de 2009 contra el ex presidente Colom, hubo un primer avance. Si bien la consigna era solicitar la renuncia del entonces presidente Colom, fue la primera vez en la historia reciente

en la cual se organizaron movimientos cívicos con distintas visiones ideológicas, primordialmente de jóvenes, que buscaban lograr cambios institucionales.

Quizás fueron las protestas de 2009 las que sembraron la semilla de la respuesta que se viera en las protestas de 2015. Esta vez hubo una mayor consciencia respecto a la necesidad de hacer reformas institucionales. Lamentablemente, no se escogieron reformas claras. La necesidad de reformar la ley electoral era una petición muy ambigua dada la multiplicidad de visiones respecto del problema del sistema electoral. Por otra parte, era imposible que dichas reformas tuvieran un impacto en la elección de 2015 que estaba a pocos meses de los eventos en cuestión.

En cualquier caso, los avances en materia de cultura cívica y política no son desdenables. Hay ciertos avances en los estándares de la calidad institucional que demandan los guatemaltecos. Eso permite que haya una sana cultura de exigir cada vez más respeto a los derechos fundamentales por parte del Estado.

El punto de inflexión de una nación

Juan Carlos Zapata

Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA)

Guatemala es un país que, debido a su contexto histórico, diversidad cultural, desigualdad de oportunidades y proceso de desarrollo, tiene pocos valores compartidos que permitan generar una misma identidad plena como guatemaltecos. Sin embargo, por nuestra misma historia, una de las características que nos define es la desconfianza.

Los resultados de la encuesta NDI 2016 son un primer paso para tratar de comprender el fenómeno que ocurrió pero que deja de lado muchas acciones que sucedieron en paralelo y que de alguna forma tuvieron un impacto directo en la forma en que las manifestaciones fueron ocurriendo.

Lo primero que hay que tomar en cuenta es que Guatemala no es una isla. Somos un país interconectado al hemisferio occidental y como tal, hay muchas acciones que ocurren en nuestro país que afectan la seguridad regional de una de las economías más importantes, como lo es la de Estados Unidos de América.

La encuesta deja de lado situaciones importantes como la crisis de los niños migrantes (especialmente del triángulo

norte de Centroamérica), que cambió el eje de discusión la política en los Estados Unidos en julio de 2014, luego de que entre mayo y junio de ese año, el número de niños migrantes no acompañados subió de 3,706 casos en enero 2014 a 10,580 casos en mayo y 10,622 casos en junio 2014 (un aumento exponencial de 185.48 % en cuatro meses). El número de adultos con niños que migró hacia Estados Unidos subió de 2,286 adultos en enero 2014 a 12,772 adultos en mayo y 16,329 adultos en junio 2014 (un aumento de 458.70 % en cuatro meses) (Homeland Security, 2014).

Esta situación, sin duda, cambió también la forma de interacción de Estados Unidos con los países del triángulo norte de Centroamérica. No solo puso mayor atención por parte de las autoridades estadounidenses hacia la política migratoria, sino que además, ayudó a que Estados Unidos tuviera una mayor presencia en los países del triángulo norte y en especial en Guatemala, debido a su posición geoestratégica como país fronterizo con México y como filtro de cualquier persona que quiera migrar hacia los Estados Unidos desde Honduras o El Salvador.

Además es necesario tomar en cuenta la presencia de China en la región por la construcción del canal en Nicaragua y las exploraciones mineras por parte de empresas rusas en la región. Todo esto pareciera ser que fue obviado por quienes desarrollaron las encuestas y parece que ponen nada más una fotografía en abstracto de lo que ocurrió en las manifestaciones y alrededor de los temas políticos nacionales.

De hecho, el propio Vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, viajó a Guatemala a finales de junio 2014 por primera vez para hablar de la problemática que habían encontrado y del tema de los niños migrantes no acompañados.

En septiembre 2014, mientras en Estados Unidos las altas autoridades estaban preocupadas por su seguridad nacional debido a la crisis que se había desatado; en Ciudad de Guatemala, las autoridades guatemaltecas no parecían entender la gravedad del asunto. Acá el Partido Patriota, liderado por la propia Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, presentaba en modo desafiante a su candidato a la Presidencia en un despilfarro de fondos públicos producto de la corrupción, y que luego se convertiría en el principio del fin de un partido que terminaría manchando con varios casos en los tribunales y con la gran mayoría de sus líderes bajo procesos de investigación.

Por supuesto, durante el primer trimestre del 2015 el esfuerzo de Estados Unidos se centró en la importancia estratégica que tenía para ellos la extensión del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

(CICIG). Tanto así que el propio Vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, viajó al país por segunda vez en marzo 2015 y en esta ocasión ya no quiso reunirse con su homóloga guatemalteca.

Hay muchas preguntas sobre lo que ocurrió en varias de las reuniones entre las autoridades estadounidenses y guatemaltecas en el 2015 y lo más probable es que pasen muchos años para que sepamos con certeza preguntas como, por ejemplo, porqué se decidió publicar el caso de “la línea” hasta abril del 2015. Parecía como que Estados Unidos le estaba dando una oportunidad al expresidente Otto Pérez Molina y que él no supo entender el mensaje. Lo cierto es que a partir de ese momento la situación comenzó a cambiar y la red de corrupción, conocida por mayoría de las élites, comenzó a desmoronarse. Parecía que a partir de ese entonces el país tomaría un nuevo rumbo.

Desde mi parecer, el detonante que comenzó la indignación colectiva que hizo que cada vez más personas asistieran a las plazas explotó en marzo del 2015, cuando la Vicepresidenta quiso burlarse de los guatemaltecos con su famosa visita al Lago de Amatitlán, y luego el 19 de abril cuando la Vicepresidenta dio su conferencia de prensa sobre el regreso del viaje de Taiwán y no decía claro cuándo había regresado al país. A partir de allí, empezaron una serie de situaciones y comentarios en las redes sociales y artículos en los medios de comunicación que llevarían a la población a manifestarse en contra del Gobierno de Otto Pérez Molina el 25 de abril 2015. A pesar de que fue la primera manifestación masiva de muchas, estos sucesos iniciales que

desencadenaron las marchas ayudan a comprender mejor por qué los guatemaltecos reaccionaron y la situación en la que se encontraba el país.

Es necesario entender, como bien lo demuestran las encuestas, que las manifestaciones masivas tenían un objetivo más allá de la lucha contra la corrupción. Se trataba de pedir la renuncia de funcionarios que habían logrado elevar la indignación a un punto tal que personas que nunca habían participado en una protesta se expresaban por primera vez en una plaza, lo que es fundamental en todo este proceso de análisis.

El dato más revelador es la apatía de la mayoría de guatemaltecos que, aunque estaban de acuerdo con las manifestaciones (87.2 %), tampoco participaron en las mismas (87.3 %).

Lo más preocupante es que, si bien se demuestra que ahora las personas están más dispuestas a dialogar con familiares y amigos sobre temas del país y a estar más informados sobre política, aún queda el gran desafío de cómo incentivar más la participación de personas en partidos políticos, ya que únicamente el 14 % dice haberlo hecho y el 17 % acepta que podría hacerlo.

Esta falta de liderazgo y visión en el ámbito político es un reflejo de lo que vemos ahora que está ocurriendo, en donde ningún ente público tiene la capacidad de articular acciones en beneficio de las demandas de la población.

Además, hay poca credibilidad en los partidos políticos, 91.1 % de las personas encuestadas reconoce no creer en

ningún partido político, lo cual contrasta con el sentido democrático imperante que existe en los guatemaltecos de ir a votar y de creer que la democracia es el mejor sistema de gobierno.

Otro aspecto que llama la atención es que hay un importante esfuerzo para luchar contra la corrupción, pero ante la segunda demanda más importante para la ciudadanía, la economía y específicamente el empleo (23 %), no hay propuestas claras en el panorama de aprobación dentro del legislativo de leyes que incentiven el crecimiento económico.

Los partidos políticos lastimosamente no se han dado cuenta de esas demandas de la población y los medios de comunicación han sido poco hábiles para reconocer cómo el país está poco a poco quedándose estancado (63.8 % de los encuestados así lo considera). Esto refleja una falta de coherencia por parte de los actores políticos de no continuar con la agenda económica de aprobación de iniciativas importantes en el Congreso de la República en temas como la flexibilidad laboral, la reducción de trámites para abrir una empresa y el acceso al crédito, entre otros temas fundamentales que ayudarían al país a generar más oportunidades.

Es importante resaltar que Guatemala ha sido un país que, históricamente desde la era democrática, ha tenido bastante participación en los procesos electorales. El estudio arroja que quienes respondieron la encuesta consideran que la democracia es el mejor sistema para gobernar (70.7 % de los encuestados) y el 83.3 % de ellos cree que los problemas pueden solventarse con la participación de todos.

El punto de inflexión sobre el cual el futuro del país puede lograr un mayor desarrollo con crecimiento económico sostenido que permita mayor bienestar para todos, ahora que ya tenemos un nuevo Gobierno, dependerá de que surjan nuevos liderazgos dentro de los propios partidos políticos que sean capaces de responder a las necesidades más sentidas de la población.

El panorama para Guatemala presenta varios retos en muchos frentes. En los temas económicos: mayor apertura hacia la atracción de inversión para que esta genere más y mejores empleos. Mejorar la gestión de la salud y la educación, continuar fortaleciendo a las instituciones de seguridad y justicia y fomentar mejores procesos de transparencia que ayuden a mejorar la capacidad del Estado de poder llegar a más población, especialmente en el interior del país, con mejores servicios.

Es fundamental entonces que el contenido de este estudio pueda ser difundido para comprender de mejor manera que las manifestaciones pacíficas si bien fueron importantes en el cambio de Gobierno ocurrido en el 2015, a través de

la renuncia del Presidente y la Vicepresidenta, no fueron los únicos factores, ni tampoco el tema más importante para que estas cosas ocurrieran. No hay que olvidar que Guatemala es parte de un mundo globalizado en donde las acciones o las omisiones de nuestros gobernantes tienen repercusiones en la propia agenda de seguridad nacional de potencias económicas como los Estados Unidos.

Los guatemaltecos tenemos que aprovechar la coyuntura en beneficio de la población, para que los servicios del Estado lleguen cada vez con mayor calidad al interior del país. El desafío está en que sepamos entender que este momento es un punto de inflexión para mejorar Guatemala.

Bibliografía

Homeland Security (2014). Statement by Secretary Johnson About the Situation Along the Southwest Border. <https://www.dhs.gov/news/2014/09/08/statement-secretary-johnson-about-situation-along-southwest-border>

b. Actores ciudadanos y movimientos sociales

El día que la Plaza fue un volcán

Álvaro Montenegro

Justicia Ya

El 27 de agosto de 2015 fue un día histórico porque se realizó una de las movilizaciones más grandes de la historia del país que significó que Otto Pérez Molina, como presidente, se quedara sin apoyo político. Todos los sectores se unieron a esta convocatoria realizada desde la Asamblea Social y Popular y la Universidad de San Carlos, USAC. Los grupos urbanos nos unimos y resultó un contagio de indignación con algarabía, de creer que sí se podía sacar a un presidente tan cuestionado como Pérez Molina. Los empresarios organizados, que se habían negado en un principio, se sumaron al llamado de la gente y se logró una convergencia transversal, que provocó una explosión que nos dio la capacidad de soñar con un Estado distinto.

Un buen grupo de individuos y colectivos luego del 25 de abril de 2015 (aquella primera protesta) y del 16 de mayo (donde los chaparrones celebraron junto a la gran masa en el Parque Central la renuncia de Roxana Baldetti de ocho días antes) estábamos seguros de que no había un solo motivo por el que Otto Pérez Molina no debía (igual que su

compañera de binomio) largarse del Palacio Nacional.

Pero un conglomerado de actores más proclives al conservadurismo imperante en una sociedad temerosa pensaba que la situación podría fácilmente calmarse, que no se ganaba nada con que Pérez Molina renunciara porque los cambios que había que hacer eran legislativos y que más valía enfocarse en presionar al Congreso para una aprobación de la Ley Electoral, la carrera judicial, la SAT y todos los temas que este año (2016) han cobrado primacía política.

Con la expulsión de Baldetti se daban por satisfechos. El sector privado no sacó a sus piezas (Cynthia del Águila en Educación, Sergio De La Torre en Economía y Juan Carlos Paiz en Competitividad) del Gobierno y más bien el discurso parecía tranquilizador, se hablaba de la macroeconomía y que la crisis podría afectar las inversiones.

En este escenario de crisis, una parte importante de empresarios se resistía a dejar caer al presidente. Argumentaban que no había una imputación directa contra Pérez Molina para pedir su separación.

Las campanas de Honduras, con el golpe de Zelaya y la ingobernabilidad en que devino, también encendían el temor de la comunidad internacional, quienes a pesar de saber de la enclenque institucional en que el país se encontraba, llamaban a una estabilidad que no se habían percatado que era insostenible.

Lo que no entendíamos quienes insistíamos en la renuncia de Pérez Molina es por qué a Roxana sí se le había pedido separarse del cargo sin estar acusada de ningún delito, aduciendo como principal motivo que su asesor más cercano, Juan Carlos Monzón, lideraba una banda criminal, mientras que al entonces presidente, se le indultaba con demasiada permisividad, cuando igualmente sus más cercanos (secretarios privados) Juan de Dios Rodríguez y su mismo yerno, Gustavo Martínez, eran parte de las mafias que operaban desde el Estado.

Entre las varias reuniones que se realizaban todas las noches en diferentes puntos de la ciudad, recuerdo que uno de los argumentos convincentes era que el Presidente tenía responsabilidad política y administrativa respecto a los actos de corrupción que estaban sucediendo generalizadamente en su gobierno. Se mencionó un ejemplo de cómo un jefe del ejército de Estados Unidos había dimitido tras un escándalo en donde se filtraron fotos de soldados estadounidenses con prostitutas y narcos en Colombia. El jefe castrense no sabía, no estaba enterado de lo que estaban haciendo pero por ser responsable de sus subalternos, renunció.

Estos puntos lograban poner contra las cuerdas a quienes aún defendían los

vestigios de una imagen no corrompida que pretendía emanar un Pérez Molina aún erguido, quien decía ante los medios que él había ordenado la investigación de las aduanas para ver cómo se salvaba de la tremenda avalancha que se le venía encima.

En un programa de radio, Javier Zepeda, director de la Cámara de Industria, había rechazado la primera protesta, convocada para el 25 de abril diciendo que esa no era una manera de solucionar los problemas, e incluso, una amiga del primer grupo denominado #RenunciaYa, habló con directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, así como habló con muchos otros grupos sociales, para que apoyaran la manifestación, a lo que contestaron tajantemente que no.

Esto conjugaba con que las agrupaciones de jóvenes cercanas al sector empresarial publicaran un comunicado días antes del 25 de abril, en la misma línea de Zepeda, argumentando que una manifestación de este tipo se podría prestar a intereses difusos.

En los meses siguientes se agregaron muchos grupos, incluso proclives al sector empresarial, en distintas demandas. Voces aisladas se iban expresando en favor de la renuncia. Pero había aún quienes se resistían sobre todo porque esto se daba en un año electoral, lo que agudizaba la crisis y vendía miedos porque sonaban las exigencias de que se suspendieran las votaciones, que era lo que les preocupaba.

Pero al interior, según las reuniones que se daban, se entendía que el sector

privado estaba partido. Si bien una buena parte quería al presidente fuera, otra (quizá la más poderosamente sólida) no tenía pensado arriesgarse ante la incertidumbre de lo que podría llegar a pasar.

Dentro de este contexto se dio aquel recordado discurso de Phillip Chicola ante las cámaras de Canal Antigua, en donde, rabioso, le exige la renuncia a Pérez Molina, lo trata de corrupto y con efervescencia dijo lo que muchos pensábamos, que el cinismo era lo único que lo mantenía en la Casa Presidencial.

Las reuniones continuaban en medio de las protestas sabatinas donde, a pesar de la lluvia por ser los meses de más agua, la gente se conocía, se hermanaba y se compartía esa necesidad de insistir a pesar de ver que la renuncia no iba a ser algo sencillo. Las demandas se ampliaron, porque se entendía que vivíamos una crisis de los tres poderes del Estado.

Se le pedía al Congreso la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos porque se sabía que desde ahí venía el problema, desde que los grupos económicos y criminales financiaban a los partidos para luego, estando ya en el poder, respondieran a sus intereses.

Esta exigencia ciudadana logró que en mayo, un mes antes de haberse iniciado las manifestaciones, el Congreso, estableciera cuatro mesas de trabajo para las leyes que desde hacía mucho habían sido las más urgentes: la electoral, las reformas al sector justicia, servicio civil y la de contrataciones del Estado.

Las protestas hicieron que la agenda legislativa empezara a caminar, luego de

que permaneciese durante tres años. Eso se dio a pesar de que el Congreso estaba presidido Luis Rabbé, excuñado de Ángel González, dueño del monopolio de televisión abierta, quien no tuvo de otra que agilizar la discusión de reformas porque la voz de la gente en las calles demandaba cambios de fondo.

Que Rabbé, sin ser miembro de un partido, llegara a la presidencia del Legislativo mientras los diputados negociaban quién asumiría demostraba el poder de Ángel González ya que ante la incertidumbre surgió el nombre de Rabbé y nadie se atrevió a oponerse a los designios del emperador de la televisión (cuya esposa, Alba Lorenzana, representante legal de los canales, es prófuga internacional por financiar ilegalmente a Pérez Molina) que manejaba la pauta política a su antojo, por lo que medio mundo le debía y le debe buenos favores.

También hubo necesidad (la tercera demanda) de presionar a la Corte Suprema de Justicia, ya que al ser manejada por la alianza PP y LÍDER desde el Congreso, demoraba los antejuicios contra los funcionarios acusados, no agilizaba los procesos y servía como protectores de la impunidad, tal como en los casos de Gudy Rivera y Edgar Ovalle.

En una de las tantas noches en que discutíamos cómo lograr la dimisión del presidente, se empezó a hablar de un paro nacional como única alternativa viable. Ya se había intentado un sinnúmero de variantes, como hacer protestas por las noches, en los departamentos, la venida de “el Caminante” desde Quetzaltenango, incluso se puso en práctica una

estrategia inspirada en las Plagas Bíblicas, estas consistían en colocar listones negros en las calles, llenar de luces el Tribunal Supremo Electoral, inundar la plaza de nuevo... estas tres al final resultaron suficientes.

Pero algunos pensábamos que para que el paro tuviera sentido debía contarse con la anuencia del sector empresarial porque (legalistas que éramos) de lo contrario no sería un paro propiamente dicho y podría, si no tenía efectos, dar muestras de debilidad.

Pero para agosto la Asamblea Social y Popular planeó tres días de movilizaciones, dos fuera de la ciudad y el tercero en el Parque Central. Así fue. La USAC se unió desde la rectoría y los grupos estudiantiles aglutinados en la Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala (CEUG). Otros grupos urbanos nos sumamos así como los mercados cantonales. Al hablar con la Asamblea creamos una estrategia de repartir mosquitos para invitar a la movilización. La idea era que la gente de la ciudad recibiera a los grupos campesinos que venían.

Las instituciones educativas poco a poco fueron publicando comunicados diciendo que suspendían clases. Todas las universidades. Se empezó a levantar la ola desde las redes sociales para que las empresas se incorporaran al paro. L'Apero, Saúl, Megapaca, Anabelly iniciaron, seguidos de otro montón de peluquerías, comercios pequeños y restaurantes de barrio, que iban posteando sus carteles diciendo que se unían a la población. Inconteniblemente, un álbum de fotografías de pequeñas y medianas empresas

que no trabajarían llegó a más de 300 la tarde antes del paro.

Alguien envió un comunicado falso diciendo que McDonald's cerraba. Pero la dueña aclaró que no. Entonces sus redes se saturaron de críticas a lo que se vieron obligados a decir que iban al paro. Todo indicaba que sería un éxito, pero no nos imaginábamos cuánto. Unos días antes se desarrolló la campaña en redes #SúmateCacif para que las empresas organizadas más grandes del país cerraran pero habían dicho que no, repetidas veces. Uno de los directivos me dijo que trataría de convencer a las industrias. Pero hasta un día antes, no habían dicho nada. El paro, sin el sector empresarial organizado, iba con todo.

Llegó el día. Ese 27 de agosto me llamó una amiga temprano para decirme que Pollo Campero cerraba. Al rato se supo que el Banco Industrial también y luego, después de ciento no sé cuántos años de no detener las máquinas por un segundo, se supo que la Cervecería Centroamericana detenía sus operaciones. Al fin, se unían al pedido de la gente que llevaba cuatro meses en las calles.

Llegaron los directivos de las cámaras, a compartir plaza con la *Asamblea Social y Popular*. Una sola voz. Un solo canto. En medio, toda la diversidad de personas que se puedan ustedes imaginar. Ya nadie quería al presidente. Fue un rechazo al gobierno y a todos los políticos, a la forma en que se ha mantenido este país en la miseria, la violencia y la injusticia. Tantos puntos en común que atraviesan transversalmente, pensábamos nosotros viendo a todos juntos mojarse por la lluvia, cantando, llorando, soñando.

Otto Pérez Molina, aunque ese día en la noche dijo que no renunciaba, era una calavera. No tenía ningún sector social apoyándolo. No podía durar demasiado. Nadie le tiraría ningún salvavidas

después de ese infinito 27 de agosto. Ese día, cuando la gente demostró que la plaza central tiene más poder que los edificios que la rodean.

¿Qué cambió después de la crisis política del 2015?

Marielos Chang
Red Ciudadana

1. Introducción

Según Micah White, activista político y co-creador del Movimiento Occupy Wall Street, existen tres tipos de revolución. Está la revolución que dura unos cuantos minutos y que tiene lugar en la mente de la persona cómo una epifanía que rompe con una vieja forma de pensar. Está aquella que puede durar semanas, cuya epifanía se propaga de mente en mente tomando la forma de un movimiento social. Y finalmente está la última revolución, la que sucede muy pocas veces, pero es la que logra consolidarse cómo un nuevo orden social permanente.

A un año de las protestas que llenaron la Plaza de la Constitución, la definición de White nos ayuda cuestionar y comprender qué fue lo que se logró y qué no. ¿En verdad logramos romper con una vieja forma de pensar? ¿Se consolidó un movimiento social después de las protestas?

2. Revolución de conciencias: lo que sí se logró

Las protestas ciudadanas suelen ser un ritual colectivo de catarsis. En su mayoría son movimientos inconscientes, síntomas de la injusticia social, política o económica, que suelen disiparse cuando el momento de enojo ha pasado. La diferencia entre una protesta visceral y una protesta revolucionaria es que la última cambia o afecta la forma de pensar de las personas.

Si lo aplicamos a lo acontecido el año pasado, las protestas de la Plaza fueron más revolucionarias de lo que muchos han querido reconocer.

Cuando consultamos los resultados del *Latinobarómetro* de 2015, nos damos cuenta de que solo el 33.1 % de los guatemaltecos creía que la democracia era preferible a cualquier otra forma de gobierno. Un año después de la crisis política en el país, observamos en la encuesta NDI 2016, que el 70.7 % de los entrevistados considera la democracia como la mejor

forma de gobierno. Además, el 84.7 % considera que hay más disposición a organizarse y participar, lo que también se refleja en que 1 de cada 3 personas esté dispuesta a asistir a manifestaciones, reunirse para firmar una petición y conversar de temas políticos con amigos y familia.

No obstante, lo más trascendental que refleja la encuesta es el cambio de percepción con respecto a la CICIG y el MP posterior a las protestas. La CICIG, es la institución que más confianza le genera la ciudadanía hoy en día, con un 54.1 %, situándose por encima de las Fuerzas Armadas y la Iglesia, que tradicionalmente han ocupado los primeros lugares entre los guatemaltecos. De igual forma, el Ministerio Público se ubica en la tercera posición de las instituciones en las cuales la ciudadana tiene mayor confianza, solo por debajo de la Iglesia Católica.

Paralelamente, resulta sumamente interesante que más del 80 % participaría de una manifestación en la plaza, si esta fuese convocada para apoyar a la CICIG y al Ministerio Público.

3. La primavera guatemalteca: lo que no paso

A pesar de la revolución de conciencias, las protestas quedaron muy lejos de romper con el *statu quo*.

Las manifestaciones lograron evolucionar en el sentido de lo que demandaban. Pasaron de ser una frustración concentrada en la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti a la demanda de un nuevo orden político. Ya no se trataba de una catarsis, se trataba de cuestionar,

de reformar, y de exigir nuevas condiciones de participación. El problema es que cuando las protestas buscan romper con el sistema, las probabilidades de éxito suelen ser mínimas y el caso de Guatemala no fue la excepción.

¿Las razones del fracaso? Bueno, existen muchas. Entre ellas, la falta de consenso sobre las reformas al gobierno, la división ideológica de la Plaza y la desconexión con los grupos campesinos e indígenas. En conjunto no permitieron consolidar una demanda compartida sobre lo que se quería cambiar y cómo se haría.

Pero además de dichas razones, de los resultados de la encuesta podríamos inferir que existen un par de aspectos más que imposibilitaron la ruptura de las estructuras políticas.

El primero es la desconexión entre lo que decimos y lo que hacemos. Un 87.2 % de los entrevistados dijo haber estado de acuerdo con las manifestaciones pero, cuando se le preguntó si había ido a manifestar, solo el 8.6 % lo había hecho y menos del 3 % había ido más de una vez. Lo mismo se evidencia cuando se les pregunta si han participado o participarían en algún partido político. Menos del 20 % respondió positivamente, a pesar que 83.3 % dijo que los problemas podían resolverse con la participación de todos.

El segundo aspecto que afectó el alcance de las protestas es la desconexión que existe entre la democracia y el voto, es decir con los partidos políticos.

Cuando se le pregunta cómo es mejor actuar para que el encuestado y el país

avancen más, el 66.7 % respondió que había que votar siempre. El problema es por quien votar cuando más del 91.1 % no simpatiza con ningún partido político.

La desconexión y la desconfianza no es un problema único de Guatemala. En Latinoamérica menos del 20 % de los ciudadanos confía en sus partidos políticos, según la encuesta del *Latinobarómetro* 2015. Además, en ninguno de los países que han experimentado crisis políticas similares a las del año pasado, como Egipto, Brasil e inclusive Estados Unidos, se ha logrado trasladar y transformar ese aumento de la participación ciudadana en instrumentos efectivos para el cambio de sistemas.

En Egipto, después de que las manifestaciones acabaran con el régimen de Hosni Mubarak, nunca se logró transformar el movimiento social de la plaza Tahrir en una oferta electoral que pudiera, a través de mecanismos democráticos, cumplir con las reformas a la constitución que tanto exigieron. Hasta la fecha, después de repetidas demostraciones de la capacidad que tienen los egipcios para protestar y manifestar, el sistema sigue igual y las protestas continúan sin convertirse en un vehículo que pueda incidir en las estructuras políticas, sociales y económicas del país.

Y acá es donde llegamos a la mayor interrogante con respecto a la crisis ocurrida en el 2015. ¿Deberían las protestas convertirse en partidos políticos? ¿No deberían las diferentes expresiones que convergieron en la plaza competir libre y transparentemente en elecciones?

Si la mayoría considera que la democracia es la mejor forma de gobierno y que votar es lo que mejor podemos hacer como ciudadanos para cambiar el país, ¿no deberíamos enfocarnos en fortalecer la oferta electoral, no son los partidos políticos el mejor vehículo para transformar un sistema?

Las respuestas aún no están claras y siempre han más de un camino posible. Puede ser a través de partidos políticos o a través de movimientos sociales que innoven la organización colectiva. La clave es comprender que las protestas y las manifestaciones son solo el primer chispazo de una revolución. Seguir llenando las calles y las plazas no será suficiente para ayudar a cambiar las actuales formas de participación política y ciudadana.

Bibliografía

White, Micah. (2016). *The end of protest, a new playbook for revolution*. Canada. Alfred A. Knopf.

La huella social de la justicia en la participación política

Mónica Mazariegos Rodas
Grupo Intergeneracional

Los resultados de una encuesta que propone medir transformaciones en la cultura política de Guatemala a partir de las movilizaciones de 2015 pueden leerse, en primer lugar, a través de la lente procedimental de la democracia. El sistema representativo (las normas, instituciones y autoridades, y no solo los partidos políticos) está en crisis en el mundo desde antes de 2015 y los resultados de la encuesta confirman su inmenso déficit de legitimidad³³. Lo que confirma la *opinión* (no la participación misma, puesto que la mayoría de personas encuestadas está a favor de las manifestaciones pero el 87.3 % no acudió a ellas) que plantea la necesidad de contar con cauces más directos de expresión e incidencia ciudadana. Este déficit de legitimidad se confirma, además, con la inconsistencia y ambigüedad respecto de la idea tradicional de participación como acto de voto cada cuatro años: por un lado, el 66.7 % de

las personas entrevistadas sostiene que “hay que votar siempre” y un 64.4 % sostiene que “votar es un deber”, mientras que, por otro lado, un 91.1 % manifiesta que no simpatiza con partido alguno y un 68.1 % que no participaría en un partido político bajo ninguna circunstancia. Estas inconsistencias se condicen con el 44 % de abstencionismo en la segunda vuelta electoral. Cabe preguntarse qué es lo que refleja y, sobre todo, qué es lo que produce una cultura política que defiende, como deber, un voto que carece de plataformas de representación legítima para tener alguna utilidad.

En sintonía con lo anterior, el Grupo Intergeneracional de Guatemala, la Unidad de Colectivos de Resistencia Ciudadana, Otra Guatemala Ya y un grupo de personas individuales y organizaciones sociales, presentamos en 2015 un *amicus curiae* a la Corte de Constitucionalidad, solicitando que suspendiera las elecciones en dos casos pendientes de resolver. Argumentamos que se carecía de las condiciones democráticas mínimas y propusimos ponderar la democracia sustancial por encima de los procedimientos. Las elecciones resultarían contraproducentes

33 Los máximos índices de desconfianza revelan con el mayor déficit, a los partidos políticos, el Congreso y los sindicatos. En un siguiente nivel están las fuerzas armadas, la policía, el gobierno y las empresas privadas. Habría sido interesante un resultado que incorporara como variables a actores locales como las autoridades tradicionales o los gobiernos municipales.

al instrumentalizar el derecho al voto y carecer de legitimidad, por contener vicios de origen derivados del financiamiento electoral ilegal y porque la estructuración del sistema de partidos impide la participación de las formas históricas y tradicionales de organización política en el país. La legitimidad del sistema no se mide solo por el nivel de transparencia o corrupción de los funcionarios, sino también por su grado de representatividad.

En segundo lugar, los resultados de la encuesta pueden leerse desde la lente sustancial de la democracia, en relación con las motivaciones y propósitos de la participación: qué anhelos y causas nos movilizan, *nos conmueven*; por qué razón las acusaciones de corrupción por miles de billetes conmocionan y movilizan más que las acusaciones de asesinato de miles de seres humanos³⁴; por qué asociamos “la (cultura) política” con el nivel de integridad de unas instituciones ausentes para la mayoría, más que con la pulsión de la resistencia física, con esa lucha por *mantener cuerpos vivos* en contextos donde las reivindicaciones de la participación no son ya motivadas por el bienestar, sino apenas por el instinto primario de sobrevivir día a día; qué condiciones nos faltan como ciudadanía para saltar de la movilización a una crítica que identifique las raíces causales de nuestros problemas históricos.

La lucha contra la corrupción es una clave deontológica (y desmemoriada) de la

cultura política global del siglo XXI, que está dotando de nuevos contenidos a la idea de ciudadanía. Una lucha indispensable pero que implica el riesgo de sustituir las luchas sociales históricas cuando su exposición no denuncia claramente ante la población los vínculos estructurales entre la impunidad del pasado y la impunidad del presente. Uno de sus efectos es el de asociar el ideal de justicia al de judicialización, esto es, a la versión represiva del castigo y el encierro en el derecho penal, sustituyendo a la justicia social que constituye el corazón de las luchas históricas. En Guatemala asistimos a la articulación de una moral pública (particularmente en los centros urbanos) que refleja esta suplantación de la idea de justicia social por la justicia penal y afianza la desvinculación de las luchas entre el campo y la ciudad. Esto ha derivado en un análisis reduccionista que identifica la corrupción como el origen de los problemas del país (o al menos como el principal problema, como refleja la encuesta) y el “castigo” (la cárcel), como la solución. Cuantos más presos, mayor la tranquilidad. En esta coyuntura de sobrelegalización de la vida y el lenguaje cotidianos (en las aulas universitarias, en las sobremesas familiares, en los medios de comunicación, se habla de primeras declaraciones, antejuicios, impugnaciones...) valdría volver a la fundamental reflexión sobre el sentido (articulador) de la justicia en las luchas sociales, más allá de la legalidad. Un caso reciente de esta disociación es el de la marcha por el agua que, aunque abanderaba una consigna universal (el agua es vida para todos), que no solo cuestionaba los fundamentos del sistema sino

34 Los casos de Augusto Pinochet en Chile, de Alberto Fujimori en el Perú o de Otto Pérez Molina en Guatemala, procesados por corrupción antes que por crímenes graves, son emblemáticos de este rasgo.

también sus síntomas (como la corrupción), se quedó en la plaza como una demanda principalmente rural y sin cobertura mediática. Al día siguiente habría una convocatoria urbana, en la misma plaza, para otra manifestación, por otro motivo ciertamente relacionado con el del día anterior.

Un análisis que me interesa es, además del resultado de la encuesta, el de su formulación en el enfoque de las confianzas y desconfianzas, legitimaciones y deslegitimaciones: las motivaciones ciudadanas por las que la gente podría manifestar incluyen, entre otras, la variable “a favor de la CIGIC y el MP” y no la reivindicación o causa social que moviliza, como la lucha contra la impunidad, por ejemplo. Presentar y publicar resultados desde este ángulo tiene el riesgo de reforzar esa valoración simbólica, que ya es parte de la cultura política guatemalteca, que supe-dita las causas a las instituciones y las instituciones a los *funcionarios de turno*.

Por otro lado, contraponer en una pregunta la idea de manifestaciones “autorizadas” o “permitidas por la ley”, a la de manifestaciones “no autorizadas” o “bloquear el tráfico”, desde el punto de vista de la legalidad que opera con la justicia penal, es riesgoso porque deja de lado el análisis de las motivaciones de la justicia social. Además, ¿quién sabe cuáles son las manifestaciones permitidas por la ley, en un contexto donde el ejercicio de la fuerza para reprimir la protesta ha sido históricamente abusivo y arbitrario? En la valoración de los casos sobre corrupción, por ejemplo, se proponen situaciones concretas, se contextualiza. En estos casos, no. Un análisis complejo

de los bloqueos callejeros, como variable clave de la cultura política actual, es importante para problematizar las estigmatizaciones de los grandes medios de comunicación a protestas referidas (no solo a la corrupción sino también) a problemas estructurales vinculados a la distribución de la tierra o a la economía de enclave que representa el lucro exclusivo de mineras, cementeras, hidroeléctricas, palma africana y caña de azúcar. Junto a esto debemos considerar también otras variables del autoritarismo político derivadas de formulaciones hemisféricas de la seguridad, que se aplican a las protestas “no autorizadas”, y no solo determinan o distorsionan la cultura política, sino que también garantizan la posibilidad del modelo económico de “desarrollo”. Por ejemplo, el encuadramiento de cierto ejercicio de ciudadanía y defensa de derechos en tipos penales de terrorismo y crimen organizado (derecho penal del enemigo), o la remilitarización de la sociedad como respuesta a las manifestaciones “ilegales”. No se debe subestimar en el análisis el rol de los medios de comunicación, que cubren este tipo de “manifestaciones permitidas”, mientras estigmatizan los “bloqueos ilegales”. Hay un posicionamiento particular detrás de ese relato de los medios, que no es neutral ni inofensivo, aunque los resultados de la encuesta no reflejen una mirada más crítica al respecto.

La discusión de la relación entre el modelo económico y la cultura política nos reconduce al análisis del contexto actual del capitalismo, a explicarnos Guatemala dentro de una geopolítica global (además de local) que está mucho más allá de la plaza. Las interpretaciones de la cultura

política pasan por detenernos en una discusión de lo que significan hoy, en este contexto, estatutos clásicos como la soberanía nacional o la injerencia internacional, invocadas por gobiernos pro-militares y sectores privados conservadores, para limitar el acompañamiento o la intervención diplomática en asuntos considerados de orden interno, vinculados a corrupción o a graves violaciones a los derechos humanos. Ello contrasta con el discurso antiimperialista sostenido hasta antes de los tiempos de globalización neoliberal que hoy, ante la fragilidad institucional que enfrentamos a treinta años de transición a la democracia y veinte años de transición a la paz, admite (e incluso solicita) ciertas formas de acompañamiento o intervención internacional en luchas que habrían requerido instituciones sólidas y una mínima apuesta por lo público en los años pasados. La imaginación política de la sociedad está interpelada, así, para pensar en mecanismos contemporáneos de negociación y diálogo con potencias mundiales que, aunque coincidan coyuntural y puntualmente con ciertas apuestas locales sobre el bien común, tienen agendas de política exterior que no necesariamente coinciden, e incluso pueden ser discrepantes, con nuestro interés nacional.

Siguiendo lo anterior, y volviendo al tipo de cultura política que estamos articulando en el siglo XXI, es importante tener claridad de objetivos en cuanto a las alianzas estratégicas y coyunturales. La reciente marcha por el agua es un ejemplo del desafío enorme de articulación entre movilizaciones, anhelos y reivindicaciones diversas. Tanto en lo local como en lo internacional es

importante preguntarse por los límites para las alianzas: con quiénes, hasta qué punto, en qué asuntos. Definir esto requiere una profundización de nuestros principios, de nuestros objetivos estratégicos y de lo que estamos dispuestos a negociar o a ceder.

En todo caso, la encuesta nos permite preguntarnos hacia dónde nos llevan esas transformaciones recientes en la cultura política, si estamos buscando reproducir más de lo mismo o hay posibilidades de apuestas más participativas, hasta dónde estos cambios tienen en cuenta a los actores sociales de largo aliento, qué entendemos por “conciencia ciudadana” de “la” sociedad guatemalteca, si existe una sola conciencia o una sola sociedad guatemalteca.

Asumir que la sociedad guatemalteca no es una, ni es solo la que estaba en las plazas, es asumir que ese interés es incompleto y no puede generalizarse, sino más bien debe ponerse en diálogo con otras luchas igual de relevantes, pensando en un rumbo distinto para nuestra “cultura política”. Es indiscutible y plausible que después de las protestas haya más disposición a organizarse y participar en los contextos urbanos, pero no puede olvidarse que la protesta ha sido desde siempre el rasgo definitorio de las conquistas sociales. Los derechos que hoy tenemos no se reivindicaron murmurando silenciosamente en la banqueta para no estorbar el tráfico. Tanto entonces como hoy, medidas de hecho como los bloqueos callejeros han respondido a un agotamiento previo de las garantías institucionales, en un Estado históricamente cooptado, excluyente de las mayorías

y sumamente frágil en lo institucional. Articular las movilizaciones hoy, a la luz de una memoria histórica viva de la que somos legatarios, que habla del campo y la ciudad, del pasado y del presente, es un reto aún pendiente. En este contexto,

entender el conflicto como tensión y disputa *permanente e inevitable* en contextos de desigualdad, racismo y violencia estructural como el nuestro, y lidiar con él, es central para pensar en fórmulas de transformación de la realidad.

El surgimiento de la democracia del rechazo en Guatemala

Jonatán Lemus

Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)

1. Introducción

La encuesta presentada por el NDI muestra un dato sumamente interesante: un 70.7 % de los entrevistados asegura que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno” y un 83.3 % cree que “la solución a los problemas del país se encuentra en la participación de todos”.

Si a eso se le suma una participación del 71 % en las últimas elecciones generales, el resultado de la encuesta podría interpretarse como un triunfo de la democracia en Guatemala. Sin embargo, hace solo dos años, el *Latinobarómetro* presentaba un leve descenso en el apoyo de la ciudadanía a la democracia en comparación con el año 2012 (Azpuru y Zeichmeister, 2014).

¿Cómo explicar este aparente cambio de percepción? Desde mi perspectiva, los resultados no necesariamente muestran un mayor apoyo a la democracia en Guatemala. Al contrario, la encuesta muestra el desencanto de los ciudadanos con la democracia liberal y sus instituciones, en especial los partidos políticos y los poderes del Estado. En este sentido, el apoyo a la

democracia expresado por un 70.7 % de los entrevistados podría estar más relacionado con el surgimiento de una “democracia de rechazo”, la cual se caracteriza por la oposición al sistema a través de manifestaciones y redes sociales.

Para profundizar en esta hipótesis, el presente ensayo se divide en tres partes. En primer lugar, se desarrolla el concepto de la “democracia de rechazo” a partir del trabajo realizado por algunos politólogos en la materia. En la segunda sección, basado en los resultados de la encuesta, se describen algunas características de ese tipo de democracia en Guatemala. Por último, en la tercera parte, se reflexiona sobre las implicaciones de este hallazgo para el futuro del sistema político guatemalteco y el papel de los diferentes sectores para dar una salida a la crisis.

2. El concepto: “la democracia del rechazo”

El politólogo Iván Krastev (2014) hace un análisis sobre los movimientos ciudadanos que han surgido alrededor del mundo durante la última década. Estos

movimientos se han dado en al menos setenta países y un común denominador ha sido su espontaneidad, la falta de liderazgos, así como de ideología o proyecto político.

Krastev asegura que en las democracias establecidas las protestas han sido una muestra del rompimiento, en especial de las clases medias, con los partidos políticos y el Estado. En efecto, más que involucramiento en lo público, las protestas reflejan la desconfianza en las instituciones democráticas.

Krastev construye sobre las ideas de Pierre Rosanvallon (2008) y señala que en el mundo está surgiendo una “democracia de rechazo” (un sistema en el que los ciudadanos no tienen claro qué esperan del Estado, pero sí están de acuerdo con respecto a lo que no quieren del mismo). El único objetivo común entre los individuos es su deseo de supervisar la actuación de los gobernantes y salir a las calles siempre que sea necesario. Esto genera una dinámica de constante oposición a políticas públicas y actores políticos, pero de pocos acuerdos.

Desde mi perspectiva, esa democracia de rechazo se ha consolidado en Guatemala y los resultados de la encuesta presentada por el NDI aportan evidencia al respecto.

3. La democracia del rechazo en Guatemala

La encuesta realizada por NDI muestra algunas características interesantes de la cultura política guatemalteca luego de las manifestaciones del año 2015. Si bien, pareciera existir un apoyo

decidido a la democracia, este apoyo no necesariamente es a la democracia liberal, basada en las instituciones y división de poderes, sino a una “de rechazo” en la que el ciudadano expresa su opinión a través de manifestaciones y otros medios.

Por ejemplo, una primera característica identificada en la encuesta es la legitimidad universal de las manifestaciones como un mecanismo de expresión. Un 87.2 % de los entrevistados se mostró de acuerdo con las manifestaciones ciudadanas, a pesar de que un 87.3 % nunca participó en ninguna de ellas. En este sentido, es importante señalar la importancia de la forma de protesta aprobada por el ciudadano. Mientras que las manifestaciones de la Plaza fueron aprobadas “firmemente” por un 40.8 % de los ciudadanos, solamente un 8.7 % aprueba “firmemente” los bloqueos u otras formas no autorizadas de manifestación. Este rechazo a los bloqueos es más pronunciado en la región central del país.

Una segunda característica identificada a raíz de la encuesta es la tendencia del guatemalteco hacia buscar una “participación de bajo costo”. Al hacerse la pregunta sobre qué actividades políticas podría realizar el consultado, la mayoría optó por acciones como “dialogar más sobre temas políticos con amigos y familiares”, “informarse más acerca de política” y “juntarse con personas para firmar una petición”. Los entrevistados se mostraron poco proclives a participar en manifestaciones como las del 2015, y aún menos a participar en un partido político.

En este sentido, es importante anotar una tendencia relacionada con el acceso de los guatemaltecos a la información.

Contrario a la percepción, las redes sociales parecieran no haber sido definitivas en el surgimiento de los movimientos ciudadanos. De hecho, solamente un 7.7 % dijo haberse enterado de las convocatorias a través de estas redes. Ciertamente en las regiones centrales, suroccidental y metropolitana, el porcentaje de personas que se enteró a través de estos medios fue relativamente mayor. Asimismo, los jóvenes entre 18 y 35 años se enteraron más por las redes sociales. Sin embargo, el medio principal de información para un 82.5 % de los entrevistados fue los medios de comunicación, lo cual demuestra su relevancia en la cultura política guatemalteca.

Asimismo, la “participación de bajo costo” podría estar relacionada con el tema de la tecnología. Las personas con acceso a internet, 52.7 %, se conectan en su mayoría a través de teléfonos inteligentes (40.2 %). Esto hace que la manifestación de opiniones y el rechazo al sistema político sea relativamente fácil, puesto que los ciudadanos pueden a través de su celular expresar su opinión sin necesidad de formar parte de una organización política.

Relacionado a esto, uno de los hallazgos más importantes de la encuesta es el alto grado de desconfianza de los entrevistados hacia las instituciones que, según la teoría, son la base de un sistema democrático liberal. En efecto, el poder judicial tiene un 56 % de desconfianza, el gobierno un 64 %, el Congreso un 80 % y los partidos políticos un 84 %. A eso hay que agregar que un 91 % dice no tener simpatía por ningún partido político. Estas instituciones clave para la sostenibilidad de una democracia liberal son

las peor calificadas por los guatemaltecos, lo cual confirma la teoría que el apoyo del 70.7 % de los guatemaltecos no es a una democracia de instituciones, sino a una democracia de rechazo.

De hecho, si se observa la respuesta de los guatemaltecos con respecto a la situación del país, un 63.8 % de los guatemaltecos considera que el país está estancado y solamente un 20.9 % considera que el país está progresando. Asimismo, un 47.8 % considera que hay un mejor desempeño de las instituciones después de las protestas, y un menor porcentaje, 41 %, cree que existe menos corrupción luego de lo sucedido en el 2015. Estos datos reflejan cierto pesimismo del guatemalteco sobre el futuro, y peor aún, su falta de fe en las instituciones como la vía para poder resolver los problemas colectivos.

En la misma línea, es interesante anotar que aunque un 66.6 % considera que las protestas lograron su propósito, el objetivo de estas según la mayoría era la renuncia de Otto Pérez (31.7 %) y de Roxana Baldetti (23.7 %). Es decir, las manifestaciones del 2015 no tenían como objetivo el impulsar una agenda o proyecto político, sino más bien solo expresar el rechazo y la indignación de los ciudadanos luego de conocer los casos de corrupción que involucraban a los mandatarios del país. De hecho, solo un 14 % fue a votar en las elecciones porque creía que eso podría mejorar la situación en el futuro.

4. Conclusiones

En resumen, si bien un 71.7 % de los entrevistados considera que la democracia es el “menos peor” de los sistemas y un

83.3 % cree que la solución de problemas requiere de la participación de todos, en este ensayo se ha argumentado que estos datos no reflejan un triunfo de la democracia liberal en Guatemala. Al contrario, el alto grado de desconfianza hacia instituciones clave como los partidos políticos, y los poderes del Estado, es un reflejo del surgimiento de una “democracia de rechazo”, en la que el ciudadano manifiesta su oposición al sistema político, ya sea a través de protestas o de medios tecnológicos como las redes sociales.

El pesimismo del guatemalteco sobre el estancamiento del país, así como su poca fe en las instituciones como mecanismos de participación para resolver problemas colectivos, constituye más evidencia sobre la consolidación de esa democracia de rechazo en Guatemala.

En este sentido, los diversos sectores del país jugamos un papel muy importante para encontrar salidas a esta crisis de legitimidad de la democracia. La

capacidad de dialogar y alcanzar acuerdos puede permitir que el guatemalteco evalúe de mejor manera el desempeño de las instituciones democráticas. Además de la propuesta, es necesario invertir recursos en fortalecer los poderes del Estado y defender la institucionalidad, de lo contrario, se mantendrá una dinámica de rechazo constante, que solo aumentará el desencanto con el sistema.

Bibliografía

- Azpuru, D y Zechmeister, E. (2014). *Cultura Política de la Democracia en Guatemala y las Américas 2014*. Nashville, TN: Vanderbilt University.
- Krastev, I. (2014). *Democracy Disrupted: the Politics of Global Protest*. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
- Rosanvallon, P. (2008). *Counter-democracy, Politics in the Age of Distrust*. Cambridge: Cambridge University Press.

Internalización de la protesta pacífica en la cultura política de Guatemala

Mario Andrés Yon Secaída
Movimiento Cívico Nacional

1. Introducción

Las grandes movilizaciones sociales del 2015 en Guatemala representan un parateguas en la historia democrática del país. Contribuyeron a la caída del gobierno del Partido Patriota, cuyos líderes (el Presidente y Vicepresidenta de la República en ese momento) fueron acusados de operar una estructura de contrabando: La Línea.

Las movilizaciones del año pasado son procesos que crearon nuevas formas de interpretar y actuar en la vida pública. Con los resultados de la encuesta realizada por el NDI se puede observar que las *protestas de carácter pacífico* se han posicionado como una herramienta legítima de presión social.

El siguiente artículo busca contextualizar los resultados de la encuesta y hace énfasis en el proceso de internalización de la protesta pacífica por parte de la sociedad como medio de presión legítimo. Se inicia introduciendo los diferentes enfoques de las escuelas de los movimientos sociales, luego por medio de la teoría de identidades de Alberto

Melucci se interpretan los resultados de la encuesta.

2. Los movimientos sociales y la Teoría de Identidades

El estudio de los movimientos sociales es amplio en las ciencias sociales y se realiza desde enfoques muy variados. Básicamente, el análisis que sigue se centra en explicar cómo a lo largo del tiempo diferentes ideas, individuos, eventos y organizaciones están conectadas en procesos amplios de acción colectiva (Della Porta & Diani, 2006, pág. 5).

Para Montalvo y Villafuerte (2015, pág. 90) las escuelas que estudian las interacciones de estas ideas, individuos, eventos y organizaciones puede encajarse en cuatro categorías, según sus paradigmas: 1) como resultado de procesos de modernización, 2) como respuesta a respuestas psicológicas, 3) enmarcados en la estructura organizativa (como Lebon en el caso de las multitudes o Blumer cuando se refiere a la norma emergente) y 4) como el proceso de creación de identidades (como Tilly en la perspectiva histórica,

MacAdam y Tarrow en relación con las oportunidades políticas, Touraine en el marco del historicismo, Melucci en torno a las identidades, y Offe e Inglehart para el caso de los postmaterialistas).

La escuela historicista, que se ubica en la última categoría, define los movimientos sociales como las *interacciones* sostenidas entre el Estado y los grupos contendientes (Jenkins & Klandermans, 1995, pág. 5).

Por otro lado, siempre en la misma categoría, existen escuelas que se enfocan en procesos cognitivos en la creación de identidades. Estas centran sus esfuerzos en explicar el proceso de creación de símbolos y discursos dentro de los movimientos sociales. Dentro de este paradigma, un movimiento social es una red de ciudadanos que crea un *principio diferenciador* del resto de actores y es capaz de aprender por el uso de su capacidad cognitiva (Montalvo Romero & Villafuerte Valdés, 2015, pág. 92). No necesariamente buscan el poder político, más bien “identidad, autonomía y reconocimiento” en las sociedades complejas (Chihu Amparán & Lopez Gallegos, 2007, pág. 142). Una de las teorías más destacadas en esta línea es la conocida como la Teoría de las Identidades de Alberto Melucci.

La Teoría de las Identidades del sociólogo italiano busca explicar cómo unas relaciones ciudadanas interdependientes, que operan en sociedades complejas, crean significados que guían su acción colectiva antes, durante y después de movilizarse. Los *identitarios* ven los movimientos como redes ciudadanas

que reclaman autonomía y reconocimiento, estos reclamos giran en torno a símbolos y valores que surgen por la interacción entre los actores involucrados y con el ambiente social; a este proceso de construcción de identidad se le llama *identización*³⁵ (Melucci, 1996, pág. 77). El proceso de construcción de identidad sucede por medio de una *relación circular*: durante el debate, interacción y actuar colectivo los símbolos se construyen y maduran hacia adentro y estos, a su vez, sostienen al movimiento nutriendo y justificando su acción a lo largo del tiempo. (Melucci, 1996, pág. 73).

En este enfoque, el éxito de un movimiento se consigue cuando la sociedad internaliza los valores y símbolos creados por la acción colectiva. Este es un proceso que ha sucedido con movimientos religiosos, intelectuales y de derechos humanos (Melucci, 1996, pág. 76).

3. Proceso de *identización* en las movilizaciones de 2015

Un 41.2 % de los ciudadanos concuerda en que durante las protestas de 2015 las redes ciudadanas se movilizaron por la consigna del combate a la corrupción; otro 31.7 % por la renuncia del Presidente y un 23 % por la Vicepresidenta de la República. Además, por lo menos un 87.2 % de los ciudadanos está de acuerdo con estas movilizaciones, una clara muestra del rechazo al sistema político de ese momento (National Democratic Institute, 2016, pág. 1).

35 *Identization*

Pero las muestras de rechazo no explican por sí solas las movilizaciones; para Melucci el simple hecho de la existencia de un objetivo en común no implica movilización (Melucci, 1996, pág. 62 y 63), más bien evidencia el *potencial de participación* de una población en un momento determinado alrededor de una causa (Melucci, 1996, pág. 65).

Antes de actuar colectivamente se deben crear identidades y símbolos por medio de la interacción de los participantes, se debe iniciar un proceso de *identización*. Es aquí donde las redes sociales y los medios de comunicación propiciaron esta construcción acelerada sobre la causa (corrupción y renuncia). Un 7.7 % de la población se enteró de las protestas por redes sociales; un 3.8 % por medio de amigos y un gran 82.5 % por los medios de comunicación (National Democratic Institute, 2016, pág. 1). Estos juegan el rol de *redes de reclutamiento* “[which] constitute an intermediate level which is crucial for understanding mobilization processes. Within these networks, individuals interact, influence one another, and engage in negotiations as they produce the cognitive and motivational schemata necessary for action.”³⁶ (Melucci, 1996, pág. 65). Una vez destapado el caso *la Línea* el 16 de abril, el debate y la indignación se esparció por las redes sociales de manera acelerada y los medios de comunicación llevaron el mensaje a aquellos ciudadanos (la mayoría) que no estaban involucrados en la discusión que se daba en la web. Sin estos medios masivos la discu-

sión y elaboración de símbolos pudo haber tardado mucho más tiempo o no haber sucedido, situación en la que no se hubiera podido aprovechar la coyuntura.

Una vez creados los primeros símbolos (por ejemplo, la indignación), ya existe un marco de referencia que identifica al movimiento, sus miembros, sus objetivos y sus limitantes. Asimismo, permite determinar los posibles cursos de acción por parte de los involucrados (Melucci, 1996, pág. 66). En este contexto, de las tantas propuestas que pudieron existir de acción colectiva, fue la convocatoria en redes sociales de protestar en la Plaza de la Constitución el 25 de abril la que ganó más apoyo popular para continuar el proceso de *identización*. Montenegro y Gutiérrez explican con más profundidad cómo los actores iniciaron y continuaron este proceso a lo largo del año, para lo cual utilizaron la Teoría del Proceso Político con entrevistas a profundidad y datos cuantitativos brindados por los participantes (2016, pág. 66).

4. Un nuevo elemento en la cultura ciudadana: la protesta pacífica

Después de los eventos del 2015 la protesta pacífica es considerada como un medio efectivo de presión. 78.2 % de la población considera que hay menos miedo a protestar y 84.7 % cree que hay más disposición a organizarse y participar. Además, un 66.6 % considera que las protestas del año pasado sí lograron sus objetivos (National Democratic Institute, 2016, pág. 2).

36 “[que] consituyen un nivel intermedio que es crucial para entender los procesos de movilización.”

Esto se puede identificar como un claro impacto del proceso de *identización* de los movimientos del 2015. La sociedad internalizó la protesta como método legítimo de presión. Hay que señalar que el tipo de protesta que se legitimó es el que se enmarca dentro de la ley. Un 40.8 % apoya firmemente que las personas participen en manifestaciones permitidas por la ley; por lo menos 59.3 % sí estaría dispuesto a asistir a una manifestación autorizada; y un 53.8 % desaprueba que las personas participen en un cierre o bloqueo de calles o carreteras como forma de protesta (National Democratic Institute, 2016, pág. 3).

Más allá de la indignación por la corrupción y la protesta pacífica, es difícil afirmar que otros símbolos se hayan consolidado. En las plazas, ciudadanos de diferentes formas de pensar convergieron, pero estas interacciones no llevaron la identidad del movimiento hacia nuevos conceptos de manera unificada. Por el contrario, los mensajes y propuestas de acción colectiva eran dispersos y muy generales (Montenegro Mejía & Gutiérrez, 2016, pág. 76).

5. Conclusiones

Utilizando la Teoría de Identidades se logró contextualizar parte de las opiniones de la población sobre los movimientos de 2015. Estas señalan que los ciudadanos han perdido el miedo de salir a protestar de manera pacífica, siempre y cuando esté permitido por la ley. Las protestas han logrado ser exitosas en el sentido de que la sociedad ha internalizado un símbolo que nació durante las

movilizaciones: la protesta pacífica. Esto es causa de un proceso de *identización* que se desarrolló por medio de la discusión en redes sociales, la difusión de los medios y el contacto en las protestas de diferentes actores. Esta acción colectiva convirtió la lucha contra la corrupción y la protesta pacífica en símbolos de identidad de las movilizaciones, que a su vez justificaron el actuar colectivo y la creación de nuevas redes.

Es de suma importancia seguir interpretando lo sucedido en Guatemala durante 2015. El análisis minucioso ayudará a aprovechar los espacios en donde la “vieja política” se está retirando. Las redes ciudadanas se encuentran latentes, reforzando su identidad y esperando la siguiente oportunidad para actuar (Della Porta & Diani, 2006, pág. 24); estas lograrán mayor incidencia si logramos comprender los alcances de las movilizaciones sociales del 2015.

Bibliografía

- Chihu Amparán, A., & Lopez Gallegos, A. (2007). La construcción de la identidad colectiva en Alberto Melucci. *POLIS*, 3(1), 125-159.
- Chihu Amparán, A., & Lopez Gallegos, A. (2007). La construcción de la identidad colectiva en Alberto Melucci. *POLIS*, 3(1), 125-159. Recuperado el 18 de septiembre de 2016 de <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/polis/cont/20071/art/art6.pdf>
- Della Porta, D., & Diani, M. (2006). *Social Movements An Introduction*

- (Segunda ed.). Malden, Estados Unidos: Blackwell Publishing.
- Halvorsen, R. (1997). Book Reviews. *Acta Sociologica*, 40(4), 413-416.
- Jenkins, J. C., & Klandermans, B. (1995). The politics of social protests. En J. Jenkins, & B. Klandermans (Edits.), *The Politics of Social Protests 3 Comparative Perspectives on States and Social Movements* (págs. 3-13). Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Montalvo Romero, M. T., & Villafuerte Valdés, L. F. (2015). Las redes sociales virtuales como detonadoras de los movimiento sociales contemporáneos y su certidumbre jurídica en México. *CIMEXUS*, X(2), 87-104.
- Melucci, A. (1996). *Challenging Codes: collective action in the information age*. Nueva York, Estados Unidos: Cambridge University Press.
- Montenegro Mejia, S. S., & Gutiérrez, E. (Julio de 2016). The Awakening of Guatemalan Society: explaining the appearance of the social movement of 2015. *Journal of Political Science an International Relations - Encuentro Latinoamericano (ELA)*, 3(1), 63-81.
- National Democratic Institute. (2016). *Resumen Ejecutivo Encuesta Nacional Guatemala – NDI CAMBIO EN CULTURA POLITICA Julio 2016*. Guatemala: Borge y Asociados.

La Plaza: Un punto en el camino de la articulación

Maya Varinia Alvarado Chávez
La Cuerda

Las movilizaciones sociales de 2015 se han convertido en un referente en varias esferas sociales. Independientemente de lo que significaron, cómo se realizaron y las valoraciones de lo que lograron o no, casi nadie puede dejar de admitir que por donde se vea, algo se movió. Ahora bien, si lo que se movió fue para que todo quedara intacto, es materia de reflexión y discusión social amplia, que las feministas dimos y seguimos dando en la plaza central y en otros espacios. Esa y otras acciones del movimiento de mujeres y el movimiento social han quedado silenciadas bajo una vorágine de iniciativas, que en el marco de lo “legal”, pretenden parchar la malograda realidad que vivimos luego de la concreción del proceso electoral, con su consabido resultado.

En la cotidianidad o en fechas señaladas por la historia, la plaza ha sido un escenario en el que se concretan injusticias y desigualdades, en las propias narices de los “representantes del poder” que no dudan en llenarse la boca con discursos sobre la “democracia” y la “paz”. Allí la niñez empobrecida y obligada a oler pegamento para soportar el hambre; allí las mujeres luchando día a día con sus ventas

para sostener a sus familias. Llena de personajes que hablan de lo que somos y generamos como sociedad, la plaza se tornó en 2015 en punto de encuentro y clamor; escenario de reivindicaciones variadas y con honda mirada en la historia. Los carteles plenos de creatividad, memoria y chispa en un inicio, estuvieron en permanente disputa con las bubucelas y los símbolos de la “nación” que pretendemos ser. “Es que eso unifica”, decían algunas personas, y nosotras nos preguntábamos: ¿unifica en torno a qué?

1. ¿Por qué nos movilizamos?

La encuesta que se nos ha pedido analizar en este artículo parece sugerir respuestas a algunas interrogantes. Por ejemplo, a la pregunta “¿Estuvo de acuerdo o en desacuerdo con las protestas en las plazas que se dieron entre abril y agosto 2015?”. Un rotundo 87.2 % responde que sí. Esta respuesta inmediatamente se compara con un 87.3 % que responde nunca haber acudido a la protagonista plaza. Solo un 9.3 % de la población, que sí se movilizó, señala haber ido por “indignación”. Pero a la encuesta le faltó preguntar indignación

por qué. ¿Indignación por la corrupción, porque esta ha sido la responsable de arrebatar el acceso a sus derechos a la mayoría de la población? ¿Indignación por constatar el robo a “sus” impuestos, los que salen de “sus” bolsillos? ¿Indignación por la burla a la población o por la burla al voto personal traicionado?

No cabe duda de que las causas que movieron los ánimos fueron diversas, tanto como los actores sociales que hicimos presencia. No faltó la corrección política de algunos líderes de partidos. Y qué decir de la posición de las élites del poder económico e, incluso, de los rostros “civiles” de grupos de militares.

2. ¿Quién logró qué y a quién le perturba?

La encuesta señala que existe la percepción mayoritaria de que la población “logró” sus objetivos con las movilizaciones, lo que se contradice con analistas que señalan que los logros los debemos “exclusivamente” a la embajada norteamericana que actuó a través de la CICIG y el MP. Efectivamente, es inobjetable que Washington siempre está como mínimo “pendiente” y que en la actual coyuntura tiene interés en que el Estado guatemalteco logre algo de “solidez” que garantice la inversión del “plan para la prosperidad”, que, hasta hoy, solo es titular de reuniones de funcionarios y funcionarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, eventualmente con representantes del gobierno norteamericano.

Lo curioso es que ese interés de Washington por Guatemala y su “destino” es añejo, pero solo ha sido señalado

con encono en la actualidad y por actores que se sienten traicionados, después de, según ellos mismos lo señalan, haber recibido entrenamiento y financiamiento para luchar contra la insurgencia en los años del conflicto armado, durante los cuales estos mismos sectores parecían estar muy a gusto con la “atención” prestada por Estados Unidos a nuestro país.

3. ¡Ni en aquellas ni en estas condiciones, las elecciones fueron la solución!

Efectivamente, hay poderes y sectores cuya función es “vigilar” que nada se salga de control. Hubo solicitudes expresas de la “diplomacia” al movimiento social, para que no se solicitara la renuncia de Otto Pérez Molina. No obstante, tal como sucedió, el ex binomio presidencial tuvo que renunciar en medio del clamor social, y esto no puede ni debe demeritarse, porque por más presiones de Washington y negociaciones del poder económico o los militares, sin la plaza no hubiera podido suceder. Tanto así que hubo prisa en quitar oxígeno a esa ebullición, función que cumplió la imposición del proceso electoral, al cual la mayoría de la población se sumó en una especie de inercia electorera, para depositar su voto en las urnas, donde “no caben los sueños” pero sí los símbolos de la *colonialidad* internalizada en nuestra indignación “patriótica”.

La encuesta y el padrón electoral arrojaron datos coincidentes: el 86.8 % de los empadronados acudió a votar en la fecha y hora indicada. De esta población el 64.6 % acudió porque “es un deber ciudadano”. No sabemos si reír o llorar con

esta respuesta. Quizá debemos admitir cómo la alienación ha logrado apoderarse de la capacidad de pensamiento crítico de la mayoría. Las elecciones resultaron ser la garantía de que “nada” de fondo cambiara, pero provocaron la percepción de que sí. Reacomodo del poder le llaman las y los analistas. Refuncionalización de los objetivos del sistema político, en beneficio del sistema económico de acumulación, le llamamos nosotras. Quizá nos ayudaría a entender volver a las páginas de *El Señor Presidente*, obra en la que Miguel Ángel Asturias ilustra el funcionamiento del arquetipo opresor en nuestro subconsciente colectivo.

En el escenario de las elecciones de 2015, las feministas y otros colectivos sociales aportamos la consigna de que “en estas condiciones no queremos elecciones”. Pero no lo dejamos en consignas: hicimos asambleas públicas, escribimos en medios y redes argumentando nuestra postura abstencionista por medio de la cual rechazamos la lógica funcionalista del sistema político que se negó a la posibilidad de atrasar el evento electoral en aras de ir creando, en los márgenes que la ley estipula, otras condiciones que abrieran las puertas a la discusión de un nuevo pacto político, alejado de la lógica patriarcal colonialista que todavía prevalece en nuestra manipulada constitución, el Estado-Nación y sus instituciones. La certeza construida de que las elecciones eran la “única” forma de remontar la coyuntura prevaleció en la mentalidad colectiva y hoy tenemos a la vista los resultados.

Por último, es imposible dejar de referirnos al apartado de la encuesta que

interroga sobre la posibilidad de participar en movilizaciones o concentraciones “permitidas por la ley”, pregunta que hace par con otra que indaga sobre la disposición a la participación en bloqueos de calles y carreteras como forma de protesta, pero de manera perversa no menciona que también es permitida por la ley, y tanto, que es anunciada previamente por los actores sociales que han recurrido a ellas para hacer evidente la indolencia del Estado y sus instituciones para garantizar el acceso a todos los derechos para todas y todos.

Los medios hacen lo propio para evidenciar la afectación indudable a la locomoción, pero casi nunca señalan las razones de las protestas. De manera autocrítica, también es necesario señalar que muchos de los actores sociales que hemos impulsado estas acciones, cansados de la indiferencia y la prolongación de la injusticia, no siempre hemos sabido transmitir a la población los contenidos de esas protestas, lo que puede ser el fundamento de ese 53.8 % que rechaza firmemente la “forma” porque desconoce el contenido. Consideramos que la encuesta hubiera podido indagar sobre el conocimiento que tenían las personas que participaron en la muestra del propósito de las acciones.

Claro, esto también puede explicarse con la respuesta de un 24.4 % de personas encuestadas que indica no tener interés en informarse sobre política. Sin duda, la clase política ha contribuido abundantemente a construir la percepción de que la política es sucia y solo tiene que ver con los partidos políticos. Desde nuestra perspectiva, la política sucede en todos lados, en lo público, lo privado y lo

íntimo. De ahí que toda actitud, incluidas la indiferencia, la anomia, la apatía, el “yo no me meto”, sea de por sí posición política en favor de la injusticia.

4. ¿Qué hacemos y qué proponemos?

No hubo que esperar mucho para que se viera el evidente retroceso que supuso legitimar el sistema mediante las elecciones.

Por ello, las feministas seguimos accionando para la construcción de un proyecto político de transformación profunda, que sea la base para articularnos con otras y otros desde nuestra condición de sujetas. La juventud de todos los sectores parece ser la tierra fértil para desarrollar una forma de pensar cuestionadora y liberadora.

Nuestro proyecto político no se llama partido político. Buscamos fortalecer nuestras capacidades, y las de otras y otros, para producir pensamiento propio desde las experiencias y las emociones que, como se señala en nuestro documento “Sueños feministas para la transformación de la sociedad”³⁷, hemos politizado y sistematizado. Con este posicionamiento hemos dialogado en

torno a cómo es esa sociedad a la que aspiramos, con quienes es posible construirla, cómo está integrado el sujeto social de esta transformación. Todo esto no pasa por las urnas. La reflexión, el estudio y el diálogo horizontal entre nosotras y con otras expresiones del movimiento social son nuestra práctica cotidiana, que nos ha permitido identificar algunos caminos a seguir que tienen relación con la construcción de memoria histórica, la visibilización, la desnaturalización e historización de los mecanismos de opresión. Consideramos imperativo el cuidado de la vida, no solo la humana sino toda, y repensar pluralmente un nuevo pacto social que cuestione la lógica de acumulación y jerarquización sobre la que se asienta la construcción del Estado-nación.

Vemos urgente articularnos y dialogar en torno a esta y otras propuestas que, más allá de las movilizaciones, estamos socializando y que, como la nuestra, vienen construyéndose desde muchos años atrás. En ello estamos, haciéndonos preguntas y haciéndonoselas a la realidad. Por cierto, nuestras dudas, que no se pueden resolver en encuestas, nos hacen avanzar más que las certezas que el sistema pretende imponer.

37 www.lacuerdaguatemala.org

Las denuncias y capturas por los casos de corrupción, no evidencian cambios en la estructura política y económica del país

Nuria Mejía García

Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGCOOP)

A lo largo de los años transcurridos desde la firma de los Acuerdos de Paz, en Guatemala se observa que poco a poco se restablece el tejido social roto durante los años de guerra en el país. En el marco de la incipiente democracia los pueblos indígenas, las mujeres, los hombres y las juventudes se reorganizan, se forman políticamente y se articulan alrededor de temas como sus derechos, culturas, cosmovisiones, economías, desarrollos, sistemas jurídicos y política, entre otros.

Todo ese proceso formativo y organizativo ha facilitado que la población se reencontre y tenga la posibilidad de discutir, analizar y hacer propuestas ante las problemáticas que le afectan, tanto en el ámbito local y comunitario, como en el municipal, departamental y nacional.

En Guatemala es frecuente que las organizaciones históricas campesinas e indígenas denuncien constantemente actos de corrupción, despojo de tierras, intimidación, contaminación ambiental, desvío y contaminación de fuentes de agua, a través de marchas, conferencias de prensa, comunicados, resistencias y consultas comunitarias, rechazando los impactos negativos

del modelo económico extractivista y haciendo propuestas como la economía campesina, la soberanía alimentaria, el desarrollo rural integral, el fortalecimiento de la participación y la representación de mujeres y pueblos indígenas en el sistema político y electoral, entre otras.

Sin embargo, fueron las protestas realizadas entre abril y agosto del año 2015 las que captaron la atención de medios de comunicación, nacionales e internacionales, considerado un hecho histórico el que la población, principalmente de las clases medias urbanas, se movilizara y protestara masivamente en contra de la corrupción y exigiera la investigación de los hechos y la renuncia del binomio presidencial. Esta situación fue motivada y fortalecida con las pruebas aportadas por el MP y CICIG, colocando al país como un ejemplo en la región, y fue calificada por algunos como el “despertar de la ciudadanía”.

Para analizar lo que ha sucedido después de la crisis del 2015, el NDI realizó una encuesta nacional y regional, entrevistando un total de 1,600 personas entre mujeres y hombres mayores de 18 años residentes en todo el territorio nacional.

La encuesta representa un esfuerzo importante por identificar las percepciones actuales de la población entrevistada con respecto a cambios en el ejercicio de la ciudadanía guatemalteca y en el funcionamiento de la institucionalidad democrática a partir de la crisis.

Al analizar los resultados de la encuesta, se observa que un 94.5 % de las personas entrevistadas *SÍ* se enteró de las protestas del año 2015. Sin embargo, al preguntarles cuántas veces participaron, el 87.3 % respondió que Nunca; el 8.6 % una vez; el 2.9 % varias veces; el 0.8 % muchas veces y un 0.4 % no respondió. Llama la atención el alto porcentaje de personas que se enteraron pero que no participaron físicamente en las protestas, a pesar de que el 87.2 % dijo estar de acuerdo con las mismas. Según la encuesta, el 86.5 % de personas entrevistadas respondió no haber participado en anteriores protestas en la calle, lo que evidencia aún más el poco o nulo involucramiento en este tipo de actividades.

Puede asumirse varias razones para la NO participación física en las protestas provocadas por el destape de los hechos de corrupción. Las personas encuestadas optaron por ser observadores, prefirieron opinar únicamente a través de las redes sociales o simplemente eran indiferentes a lo que sucede en el país. Hubo limitaciones laborales, territoriales y educativas para participar, así como la costumbre de que otras y otros sean quienes protesten y propongan. También están aquellas personas que consideran que manifestar únicamente contra la corrupción, no cuestiona de fondo el sistema económico y político del país,

mucho menos realiza cambios profundos estructurales. Hay personas que opinan que las protestas fueron manipuladas, por lo que en su momento consideraron no participar para no ser parte del juego político que se estaba impulsando.

Los resultados de la encuesta también reflejan las posiciones encontradas que se tienen frente a las protestas. Por ejemplo, el 84.1 % de las personas entrevistadas aprueba que las personas participen en manifestaciones permitidas por la ley, mientras que el 76.8 % desaprueba que las personas participen en un cierre o bloqueo de calles o carreteras como forma de protesta.

Las respuestas reflejan que las posiciones con respecto a las protestas no han cambiado. Durante la crisis de 2015 hubo mensajes claros y permanentes en redes sociales y medios de comunicación, deslegitimando protestas como las de las organizaciones históricas campesinas e indígenas, insistiendo en la diferencia entre las protestas del área rural con las del área urbana e inyectando comentarios racistas y clasistas, a pesar de que en la marcha del llamado al “paro nacional”, realizada el 27 de agosto, hubo confluencia de todo tipo de expresiones organizativas, que visibilizó la importancia de la unidad en la diversidad para encontrarle un rumbo incluyente a la situación que vive el país.

En la actualidad es evidente la poca participación de la población en las recientes convocatorias a manifestar en la plaza central de la Ciudad de Guatemala. Pareciera ser que con el actual proceso en contra de ex funcionarios y

funcionarios públicos que están siendo juzgados por hechos de corrupción, así como empresas que han sido señaladas de evasión de impuestos y están siendo obligadas a pagar lo que corresponde a la SAT y las propuestas de reformas de algunas leyes, la población se ha quedado conforme y a la expectativa de la actuación del MP y la CICIG.

Esto coincide con el 66.6 % de personas entrevistadas que opinan que los objetivos se lograron con las protestas de 2015; lo que contribuye a que consideren que hay más disposición a organizarse y participar (un 84.7 %) y que hay menos miedo a protestar (un 78.2 %). Pero como se señaló, hay una mayor tendencia a participar en protestas permitidas por la ley, que en aquellas que son consideradas fuera de ésta. Si el gobierno de turno y los diferentes ministerios no demuestran mejoras en la calidad de los servicios públicos, la población no percibirá que las acciones implementadas en contra de la corrupción y la evasión de impuestos mejoren la situación del país. Así lo ha referido el 63.8 % de las y los entrevistados que consideran que el país está estancado, el 11.4 % que está en retroceso y solo para el 20.9 % el país está progresando.

También es evidente el poco apoyo que se ha dado a otras protestas, por ejemplo a la marcha por el agua y defensa del territorio. Pareciera ser que el mensaje es “proteste pero sin hacer cambios profundos al sistema actual”, ante lo cual debe preguntarse qué más tiene que suceder para que se reavive la necesidad de articularse, de organizarse en un movimiento más amplio y de hacer cambios

profundos al sistema político y económico del país.

La encuesta recoge algunas de las razones por las que las personas entrevistadas asistirían a la plaza a manifestar si fueran convocadas, lo que podría servir de puntos de agenda común que articulen los diferentes movimientos sociales: el 83 % lo haría a favor de la CICIG y el MP, el 75.5 % contra la deficiencia de servicios públicos, el 74.1 % en defensa del territorio y los recursos naturales, el 72 % para que renuncien los corruptos, el 69.5 % para depurar el Congreso, el 67.2 % para que se aprueben reformas a las leyes y el 48.4 % para que se cambie la Constitución.

Aunque estos porcentajes reflejen el interés de las personas entrevistadas por participar en protestas, en la práctica, y como se ha evidenciado en la encuesta, hay una diferencia entre tener la intención y participar. Por ejemplo, el apoyo a la defensa del territorio y los recursos naturales no ha sido evidente, puesto que ante hechos como desalojos en territorios en donde hay minería, petróleo, hidroeléctricas, expansión de monocultivos y otras actividades extractivas, la mayoría de la población no se ha manifestado masivamente en contra de los megaproyectos.

En cuanto a confianza en instituciones y participación político partidaria, el 91.1 % de las y los entrevistados respondió que actualmente no simpatiza con ningún partido político. Aunado a ello, el 63.7 % dijo no confiar en los partidos políticos, al igual que no confía en los sindicatos (47 %), el Congreso (46.4 %) y la Policía (37.1 %).

Lo anterior demuestra la poca confianza que se tiene en los partidos políticos, dejando en entredicho los únicos canales a través de los cuales se puede llegar a ocupar espacios importantes como el Congreso de la República, de donde emana la legislación guatemalteca, situación que no ha cambiado ni durante ni después de las protestas del 2015.

Es evidente que las redes sociales continúan siendo una plataforma de

comunicación y denuncia ante hechos de la realidad guatemalteca, principalmente de la población joven y con acceso a internet. Sin embargo, no se evidencia un involucramiento directo en esfuerzos que trasciendan el encarcelamiento de las personas encontradas culpables de hechos de corrupción y que puedan llevar a cambios en la estructura política y económica del país.

Guate tiene que cambiar

Pedro Cruz

Jóvenes por Guatemala

La participación ciudadana masiva, comprometida y propositiva es aún una asignatura pendiente. Y es una tarea a la que nos debemos los ciudadanos guatemaltecos que de una u otra forma hemos incidido en la vida nacional de Guatemala.

Por supuesto que hay motivos para ser optimista. De abril de 2015 a la fecha, Guatemala simplemente no es la misma. Los funcionarios públicos saben que están siendo observados, las redes sociales difunden hechos y logran que muchos se sientan interpelados e invitados a expresarse y a participar en iniciativas que poco a poco dan un nuevo rostro al escenario político de nuestro país. Muchos de los guatemaltecos han salido del anonimato y se han involucrado en proyectos de interés nacional, otros muchos se han convertido en creadores de opinión y han aportado al debate de ideas que indiscutiblemente contribuye para definir qué Guatemala queremos para nosotros y para las próximas generaciones.

Sin embargo, es claro que debemos apuntalar las acciones, plataformas y medios que se ofrecen a los guatemaltecos para participar activamente. La encuesta

nacional realizada en el marco del estudio *Transformaciones de la cultura política en Guatemala a partir de la crisis de 2015* del NDI, muestra que si bien un 94.5 % de los entrevistados tuvo noticia de las manifestaciones y un 87.2 % estuvo de acuerdo con las protestas, solo un 0.8 % participó en ellas con constancia, un 2.3 % lo hizo algunas veces y un 8.6 % asistió solo una vez. En contraposición, un 87.3 %, nunca participó. Creo que este dato debe ser materia de atención.

Es decir, si sumamos los porcentajes de las personas que asistieron desde una hasta muchas veces, vemos que un 11.7 % se sumó a las manifestaciones. Es un porcentaje pequeño respecto del universo, sin embargo; no hace falta mencionar que ese grupo de guatemaltecos que manifestó su voluntad soberana fue uno de los factores que presionó al presidente y vicepresidenta a renunciar y enfrentar la justicia. Pero, debemos preguntarnos, ¿por qué ese 87.3 % que sabía y estaba de acuerdo con las exigencias de la Plaza, nunca asistió? Y una interrogante aún más obligada es, por qué un 68.1 % de los entrevistados, manifestó en esa misma encuesta que no participarían **nunca** en un partido político.

Además, al fijarnos en los resultados segmentados por región, nos encontramos que en el área metropolitana un 81.9 % de los encuestados dijo que nunca participaría en política. La misma respuesta la brinda un 79.4 % de los consultados en la región central. Diríamos que es una respuesta inesperada, dado que del total de personas que admitieron haber participado en las manifestaciones durante el 2015, el mayor porcentaje correspondía a estas dos regiones. Entonces, ¿la participación política queda en entredicho frente a la participación ciudadana? Siempre he pensado que deberían ser dos caudales que en algún momento se alimenten entre sí. Pero en la actualidad, parecieran dos corrientes paralelas que prefieren recorrer su cauce de forma independiente.

Es también llamativo que las instituciones que a los guatemaltecos les inspiran menos confianza sean básicamente las relacionadas al ámbito político: partidos, Congreso de la República y el Gobierno.

Y es en este tema en el que deseo hacer hincapié porque si bien la participación en política partidaria no es el único escenario desde donde se puede influir, sí es cierto que es desde este ámbito en el que se pueden ejecutar políticas públicas que dirijan el rumbo que debe tomar el país para lograr los resultados que esperamos.

Ya se afirmaba en el *Informe Nacional de Desarrollo Humano (2005)* que: “El desarrollo humano implica también la posibilidad de que las personas puedan tomar parte activa en los procesos y en las decisiones que afectan sus vidas y la de los colectivos de los cuales forman

parte. La participación política permite esa injerencia en el gobierno de la vida pública y colectiva de una sociedad. Es tanto una libertad instrumental, pues su ejercicio permite el logro de otras libertades inherentes al desarrollo humano (...), como un elemento constitutivo del mismo; es decir, que tiene un valor por sí mismo, pues confiere a las personas la posibilidad de ejercer su capacidad de agencia más allá del ámbito de su vida privada. Es una modalidad, entre otras, de realizar la condición humana”.

Está claro entonces que la participación política cobra cada vez más relevancia en una sociedad que clama por resolver con urgencia necesidades y problemas de fondo. Si siempre se hace necesario ese vínculo del ser social y el ser político, en una época como la que los guatemaltecos recién transitamos, la participación política se vuelve un elemento del que no puede prescindirse.

Pero ya otros documentos, estudios y experiencias han confirmado ese espíritu reactivo por participar activamente en la política. En la *Encuesta nacional de la juventud*, realizada por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2011, se refleja que solo el 9.2 % de varones jóvenes y el 7.59 % de mujeres jóvenes participan en los partidos políticos. El documento de análisis de dicha encuesta afirma que “Se refleja el poco interés de los jóvenes por pertenecer a los partidos políticos y por lo tanto se manifiesta con los bajos índices de participación juvenil. Solamente los jóvenes con una especialización (post grado) tienen una participación parcialmente activa”.

El escaso interés de participación en la política partidaria es entonces una característica de nuestra sociedad. Y considero que si bien la participación cívica es vital, ese paso obligado de lo cívico a lo partidario resulta esencial para transformar Guatemala en la sociedad que queremos. Habrá muchos aspectos de la política con los que ahora mismo, disintimos; sin embargo o nos decidimos a involucrarnos activamente y trabajar por el bien común o tendremos que resignarnos a ver a algunos dirigir al país a un destino con el que no necesariamente compartiremos.

Debo acotar que, aunque no es lo mismo pasar a formar parte de un Gobierno como funcionario público que formar parte de un partido político, ambas opciones deben verse como un deber y una necesidad urgentes en los que todos los ciudadanos estamos llamados a participar.

Jóvenes por Guatemala es desde hace ocho años una asociación que trabaja con el objetivo de promover la participación a través de la creación de soluciones concretas a los problemas actuales en los que vive nuestro país. Desde un inicio, Jóvenes por Guatemala ha propuesto a la juventud guatemalteca crear espacios de expresión y de participación propositiva. Nos hemos enfocado mucho en los jóvenes universitarios ya que creemos que desde la academia deberían surgir muchas propuestas que construyan el país que nos merecemos y que también desde ahí pueden formarse iniciativas políticas que luego pueden establecerse y aportar al desarrollo integral del país.

Concretamente, durante la crisis política que se vivió en el año 2015, Jóvenes por

Guatemala tuvo un papel protagónico en la convocatoria a nivel social. Esta asociación no se limitó únicamente a participar en las manifestaciones de la plaza, de las que sí formó parte, sino que al mismo tiempo incidió con acciones puntuales para coordinar otros grupos, promover la democracia y respetar el proceso electoral.

Por ejemplo, el 13 de junio en el marco de una manifestación en la plaza, Jóvenes por Guatemala, Primero Guatemala y Guatemala Visible recolectamos firmas para solicitar al Tribunal Supremo Electoral y a la Contraloría General de Cuentas que se diera cumplimiento al artículo 113 de la Constitución de la República, relativo al “Derecho a optar a empleos o cargos públicos” y que afirma que “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”. Con esta base, el 13 de julio las tres organizaciones presentamos un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se cancelen las candidaturas que no cumplen con esos requisitos. Como respuesta, el 15 de julio el TSE revocó 34 candidaturas por carecer de idoneidad y honrabilidad. Algunas semanas después de las elecciones, nuevamente las tres organizaciones mencionadas anteriormente solicitamos al TSE no adjudicar curules a 11 diputados contratistas del Estado.

Las anteriores acciones se desarrollaron en el marco de una participación ciudadana independiente que busca el bien común de los guatemaltecos, y aunque tuvo resultados positivos, no dudó

en afirmar que en la medida en que las personas que en la actualidad participan activamente se involucren en la política partidaria, los resultados serán aún más positivos que los citados con anterioridad. Así que este es un llamado para que sigamos juntos esforzándonos por construir la Guatemala justa y transparente que nos merecemos; sigamos colaborando desde nuestro entorno para que el país continúe en el camino de una transformación real y objetiva, en donde podamos salir a la calle con la esperanza de vivir en un país seguro, que

provea las condiciones necesarias para vivir bien y mejor. Sigamos esforzándonos para lograr el despegue de nuestro país en todas las áreas necesarias, no olvidando que somos guatemaltecos y que, por ende, provenimos de una misma tierra, tierra trabajadora, esforzada y capaz de hacer historia. Comprometámonos sin miedo a formar parte de la vida política de este país. No tengo duda de que la Guatemala que hoy soñamos podrá ser una realidad si damos ese paso al frente que exige una nueva nación.

c. Analistas sociales

La serpiente y su pobre cola

Tania Palencia Prado

En los datos fríos de esta encuesta subyace una Guatemala confundida, inestable y desequilibrada. De las 1,600 personas entrevistadas, la mitad son hombres y la otra mitad mujeres; el 38 % se definió indígena; el 44 % con estudios hasta primaria; otro 44 % con estudios de secundaria; la mayoría (51 %) entre 18 a 35 años y católica (57 %); un 45 % trabajando por cuenta propia y el 83 % dijo sumar ingresos familiares menores a Q 3,120.00 al mes³⁸. Al parecer, esta encuesta recogió las opiniones especialmente de población ladina empobrecida y de los cascos urbanos de la nación.

Con esta muestra es imposible determinar un cambio en la cultura política guatemalteca porque no existe ninguna línea de base. No obstante, es notorio que

la mayoría de personas entrevistadas (71 %), en particular la juventud universitaria, posee mayor autoestima ciudadana y está a favor de un gobierno democrático comparado con uno autoritario, opinión que no era tan marcada hace apenas un quinquenio, si recordamos los resultados de antiguas encuestas nacionales. También es notorio que las personas entrevistadas (en menor medida quienes tienen más de 55 años) aceptan un parteaguas (definido por la encuesta) a raíz de la crisis política de 2015, opinando que hay menos miedo a protestar y mayor disposición a organizarse y a participar.

¿Por qué se percibe confusión, inestabilidad y desequilibrio? Porque hay recurrencia de percepciones ambiguas o contradictorias revelando más un sentido común de sobrevivencia que una mediana educación, visión y práctica política. La gente valoró la indignación como fuente primaria de movilización social, en su total acuerdo con las protestas del año pasado, pero no mostró igual valoración de la política. La política está destrozada en su imaginario.

38 El perfil de las personas entrevistadas también reporta, entre otras, las siguientes características: ladina (38 %), mestiza (13.7 %), blanca (8.9 %); de 36 a 55 años (32.6 %); mayores de 56 años (16.7 %); un 12 % con estudios universitarios; un 14.4 % con ingresos familiares entre Q 3,120.00 y Q 6,240.00; un 2.4 % con ingresos familiares mayores a Q 6,240.00; el 35.5 % evangélica; un 22.3 % trabajando en empresas privadas; un 22.5 % sin trabajo. La mayoría de entrevistados tiene una familia de 5 miembros. B&A Borges y Asociados. Julio 2016. *Tabulados de Encuesta Nacional Guatemala-NDI. Cambio en Cultura Política.*

No sabemos con exactitud cuál es el concepto que las y los entrevistados tienen de la política. Lo más probable es que tiendan a reducirla a los partidos políticos. Así se explicaría por qué fue tan alto (63 %) el desinterés por estar políticamente informados y, a su vez, tan rotunda la negativa (68 %) a participar en un partido político. El 24 % de las personas entrevistadas bajo ninguna circunstancia buscaría información política y un 38 % nunca ha buscado informarse, aunque indicó que lo podría hacer. El 59 % de las personas mayores de 35 años jamás buscaría informarse en política y es en el departamento de Guatemala donde la resistencia es mayor. Se trata de un desinterés común entre quienes poseen menos ingresos y menos escolaridad. Y pese a que la apreciación de la política es baja en general, todas las regiones están más abiertas que la Metrópoli a dialogar al respecto.

La falta de convicción del propio poder ciudadano es otro rasgo de la confusión social que se deduce de la encuesta. El 87 % estuvo en total acuerdo con las protestas en las plazas entre abril y agosto de 2015, pero sólo un 41 % dijo que aprueba que las personas participen en manifestaciones permitidas por la ley. Incluso la juventud se mostró indecisa en dar su aprobación definitiva al derecho legal de manifestación y a protestar por su propia cuenta. El rechazo fue mayor hacia el bloqueo de las calles como forma de protesta. La tercera parte del total entrevistado afirmó que bajo ninguna circunstancia participaría en una manifestación legal, ni se juntaría con otras personas para firmar una petición.

El voto, en general, se muestra como una formalidad, un deber en sí mismo. El 79 % de la juventud y el 95 % de las personas mayores de 35 años fueron a votar en 2015, pero sólo un 14 % vinculó el voto con la posibilidad de que las cosas sean mejores en el futuro. Votaron porque hay que ir a votar, fundamentalmente en la metrópoli. Donde se distribuye ese 14 % que espera mejoría con el voto es en el resto de las regiones y son las personas que allí viven las que más aprecian por igual el acto de votar como el acto de protestar. Ese ánimo electoral no tiene ningún correlato con la valoración hacia las instituciones públicas. Cada región difiere entre sí a la hora de valorar la confianza mutua, mostrando un alto grado de fragmentación de intereses y percepciones hacia las instituciones. No hay respeto hacia el Estado.

La desconfianza es generalizada. La mayor confianza ha sido depositada en la CICIG y el MP, que dada la coyuntura proyectan la misma imagen mediática. La confianza se pierde en franca caída incluso hacia estudiantes y empresas privadas, para negarla al gobierno y los partidos políticos. Con un leve optimismo entre la juventud, la mayoría opina que, con respecto a 2015, este país está estancado (63.8 %) o en franco retroceso (11.4 %). Afirman que no hay menos corrupción (57 %) y que las autoridades públicas no tienen un mejor desempeño (50 %). Sólo un 21 % siente que el país está progresando, en particular la juventud universitaria. Y, por otra parte, son las 201 personas que dijeron participar en las protestas de 2015 (13 % del total), quienes muestran más apertura a los derechos de voto, opinión, petición y manifestación.

Entonces, ¿qué piensan de sus problemas? Que no son estrictamente políticos, sino que su dimensión es de economía política. Allí radica el sentido común crítico de todas las personas encuestadas: intuyen que la economía asfixia. Aunque la mayoría se muestre indecisa para manifestar y protestar o evidencie su incomodidad con la política y no la vea como derecho, resulta que sí aceptarían movilizarse por problemas del orden de economía política: la deficiencia de los servicios públicos (pensaremos en la salud) y por la defensa de su territorio y los recursos naturales. El desempleo ocupa el segundo lugar en la gravedad de los problemas sociales, la pobreza el cuarto lugar y el costo de la vida el sexto, entre 15 variables. Si se congregan todos los problemas enlistados por la encuesta se infiere que la gente sabe que los socioeconómicos son los más preocupantes.

De esta encuesta se puede deducir una terrible disociación entre las capacidades políticas ciudadanas, el rol de las instituciones y las prioridades socioeconómicas de la gente. Nos hace pensar en que la capacidad política tolerada a la ciudadanía es tan escasa que no se traduce en confianza y oportunidad real para cambiar su vida a una de bienestar. La capacidad política media de la ciudadanía se nutre de la manipulación de los *media*. La encuesta reporta que la principal fuente de información sobre la realidad es la televisión (74 %), un medio monopólico, trivial, neoliberal e impune. La gente rural, no representada en la encuesta, tiene a la par una radio fundamentalista, sensacionalista y musicalmente pertinaz, quizás para aliviar las tristezas.

El rol de las instituciones y grupos beligerantes no es motivo de debates abiertos y profundos. Incluso la encuesta no inquiere sobre la relación entre el Estado y el gran poder empresarial, aspecto clave para escudriñar la cultura política. Así, nos remite a los debates oficiales, que buscan reformas institucionales sin analizar el rol de las instituciones y grupos en función de los derechos de la ciudadanía.

La encuesta sí confirma que las instituciones públicas son incapaces de crear consentimientos. Pero si ubicamos esta verdad en el debate permitido, debemos advertir que el deseo de cambio institucional está siendo socorrido más por intereses geopolíticos internacionales que para escuchar las voces valientes entre la población que se movilizan desde hace años para exigir reformas estructurales profundas. Ejemplos de estas demandas invisibilizadas serían: la democratización del espacio radioeléctrico y televisivo, la progresividad sostenida de la estructura tributaria; la reasignación del gasto público para enfocarlo en la exclusión social; la reforma al régimen económico para fortalecer la economía campesina desde los intereses campesinos; la reestructuración del Estado para dar espacio político-administrativo a la autodeterminación de los pueblos indígenas. De esas demandas para cambiar la institucionalidad y que muestran una cultura política radicalmente afín al bien común, no se habla, se les niega, se desdibujan, incluso en la misma encuesta.

Así, las prioridades socioeconómicas de la gente siguen con la gente, sentidas pero desarticuladas y enclaustradas, sin convertirse en fuente de educación y acción

política, saliendo en las noticias o en las encuestas como llagas mal cuidadas que se lamen con nostalgia pero que nunca se curan. Ninguna renovación de la cultura política podrá expandirse y sostenerse mientras la política en Guatemala no se convierta en economía política.

El viejo símbolo del uróboros, la serpiente que engulle su propia cola, símbolo de ciclos renovadores de la vida, en este país aparece sólo como una alegoría del eterno aguantamiento. Acostumbrados a tolerar los abusos del sistema de partidos políticos y la injerencia extraordinaria de las elites empresariales en el Estado, alimentamos una cultura política mediática, coyunturalista y torpe que, con métodos más sofisticados, vuelve, vuelve y vuelve al disciplinamiento, a la enajenación y al olvido de la historia nacional.

En la crisis política del 2015 aparecieron voces, la mayoría de juventudes (incluso indígenas), que han puesto el punto sobre la i: el modelo de gobierno y de economía implantado desde la contrarrevolución de 1954 (basado en el despojo oligárquico y el autoritarismo militante), sólo reproduce desequilibrios. Incluso las nuevas alianzas público-privadas, que hoy se asumen líderes de la transparencia, no ofrecen más que un municipalismo “emprendedor”, sometido a políticas que reproducen ciudadanías de quinta categoría y población desechable.

Cierto es que ahora hay más voces ciudadanas críticas, pero el gran problema es su aislamiento y divisionismo en medio de una ciudadanía vulnerable. A esas voces discrepantes de los poderes

abusivos se le sigue matando y criminalizando. Por eso la indignación mueve, pero no sabe moverse o corre el riesgo de moverse, una vez más, al grado de sucumbir a la represión extrema. Por eso las protestas sociales parecen llamarada de tusas. No existe una masa crítica opositora, discrepante, activa y unida en su diversidad alrededor de un llamado potente de paz, libertad y dignidad.

Los imaginarios sociales guatemaltecos merecen y necesitan reconciliarse con la política y reflejar el poder ciudadano en la economía política. Este reencuentro no debe ser lineal y menos en el sentido unívoco que decide el sistema, reduciendo la política a los partidos o a chapuces institucionales. El reencuentro debe ser como el derecho a poder hacer lo que la mayoría necesita hacer: comer, trabajar, educarse, tener salud, paz, libertad y dignidad. Ese poder hacer hoy no tiene fuerza, no tiene visión ni dirección; no tiene ni siquiera presión sólida para frenar la podredumbre de los partidos políticos y los abusos empresariales.

El derecho a hacer política requiere no sólo sacudirse del mandato que lo niega; también requiere asumir una posición abierta contra el modelo oligárquico autoritario. Requiere sencillez y solidaridad, fuerza, convicción para la disputa y estructuras de oportunidad para crear otra economía y otras relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Sin esas condiciones la cultura política ciudadana seguirá cocinándose en su misma salsa: un grito que se desvanece en la plaza y lo captura la prensa en una linda foto.

Lo político: Más allá de la construcción (inter)mediática de la política

Alejandro Flores

Una de las preguntas más interesantes en política gira en torno a los detonadores de la movilización. El campo de investigación de la cultura política debería de poder dar cuenta no solo de las características y tendencias de las protestas y levantamientos sociales, sino también ser capaz de proveer los elementos explicativos de sus detonantes. Entramos con ello en un campo de discusión que va mucho más lejos de la ingenuidad subyacente a ciertas corrientes analíticas que se montan sobre un concepto teórico de *libre voluntad* que ha quedado seriamente cuestionado por varias vertientes de la filosofía continental y por las ciencias cognitivas y neuronales. La crítica al positivismo ha logrado generar un consenso en una variada gama de disciplinas de investigación que abordan estudios sociopolíticos sobre los determinantes que condicionan, en mayor o menor medida, las acciones que eventualmente puedan volverse tendencia. Con ello, ha quedado establecido que la *agencia* es antecedita por otros factores que la han colonizado previamente.

Mucho se ha especulado sobre el papel central que juegan las nuevas redes

sociales en el disparo de procesos de participación en jornadas de protesta masivas como las llevadas a cabo el año pasado. Esto se ha convertido en un lugar común al leer análisis que van desde la *primavera árabe* hasta los indignados en España. Estas especulaciones han insistido de forma muy poco crítica que las nuevas tecnologías (básicamente Facebook y Twitter) fueron el factor más importante en el desencadenamiento del descontento social que movilizó a miles de ciudadanos. Sin embargo, uno de los datos que salta a la vista de forma dramática en este estudio es que los individuos encuestados, en el caso guatemalteco, en su mayoría (82.5 %) se enteraron de las convocatorias a manifestar a través de los medios masivos de comunicación. Lo que hemos propuesto algunos investigadores es que, más que como espacios de generación, las redes sociales operan como infraestructuras de circulación de factores político-culturales. De ahí que se haya planteado ya varias veces la necesidad de establecer un punto de referencia que permita elaborar juicios críticos en ese sentido.

Resulta entonces primordial llevar a cabo una problematización de estos espacios de *democratización*, expresados en lo que comúnmente se percibe como un nuevo tipo de protesta social, y sus articulaciones con espacios en los cuales se generan puntos de vista políticos específicos que, eventualmente, se convierten en tendencias estadísticas. Como se mencionaba antes, es importante plantear algunas hipótesis analíticas que permitan estudiar el sentido subyacente a este tipo de tendencias. Una de esas hipótesis consiste en considerar que la realidad política de la mayoría de los ciudadanos es, entre otras, construida mediáticamente. Esto significa que es la industria cultural en general y los medios de comunicación en particular quienes afectan de forma más intensa los puntos de vista de los *ciudadanos* en relación a este tipo de protesta. De ahí que no sea tan difícil explicar por qué la mayoría de los encuestados hacen referencia directa a los medios de comunicación al momento de ser interrogados sobre convocatorias de este tipo.

Es necesario detenerse en algunos de los datos del estudio. Más de tres cuartas partes de todos los encuestados afirman estar dispuestos a organizarse y participar en acciones como las realizadas el año pasado. Porcentajes muy similares de encuestados estuvieron de acuerdo con las protestas de entonces. Sin embargo, un 87 % de ellos no participó ni una sola vez de ellas. Finalmente, un 79 % de los entrevistados respondió que nunca participaría, bajo ninguna circunstancia, en protestas y marchas no autorizadas, en las que se bloqueara el tráfico.

Se plantea ahora una extensión de la hipótesis propuesta arriba. El filósofo cultural y político Jacques Rancière, en sus diez tesis sobre política, caracteriza a la policía como la primordial encargada de distribuir lo sensible. Esto, en términos muy sencillos, significa que la función básica de la policía consiste en repetir permanentemente un enunciado de este tipo: “siga adelante, ahí no hay nada que ver”. Dicha expresión produce un régimen de normalidad en el que grupos sociales específicos se articulan en modos determinados de hacer y de ser, por medio de los cuales les es posible circular e interactuar. Estos grupos sociales se articulan porque, en mayor o menor medida, coinciden con la enunciación del “ahí no hay nada que ver”. Y esta articulación es lo que define los espacios de circulación de la normalidad, en los cuales no existe lugar para modos de hacer y de ser suplementarios o diferentes.

Esta noción de policía es contrapuesta por Rancière ante la noción de lo político. Lo político es básicamente aquello que configura su propio espacio, *ahí*, en el lugar donde la policía ha dicho que “no hay nada que ver”. Más específicamente, para Rancière lo político es la manifestación del disenso que se encarna en los modos de ser y de hacer y que antagonizan ante los grupos sociales que han quedado vinculados por los modos de circulación de la normalidad determinados por la policía.

Lo que estoy buscando exponer con esta referencia es que la realidad política mediáticamente construida funciona de un modo muy similar a lo identificado por Rancière con el término de policía.

En ese sentido, la pregunta es qué tipo de protesta y qué tipo de democracia están creando los medios de comunicación y cómo esto se relaciona con el apareamiento de las nuevas redes sociales. En última instancia, qué tipo de vínculos se están produciendo entre grupos sociales determinados que han quedado articulados por la realidad política que ellos producen y que consideran normal.

Me parece interesante de la encuesta la respuesta mencionada arriba, en la cual la mayoría de entrevistados dice que nunca participaría en una protesta o marcha no autorizada, especialmente si esta llega a bloquear un camino. Es un secreto a voces que las líneas editoriales de los medios de comunicación han sostenido por años una agenda en la cual las protestas de indígenas y campesinos son estigmatizadas al punto que se las ha llegado a calificar como acciones terroristas. Ese punto de vista, por otro lado, contrasta ante la imagen de la *buena protesta*, que se ha encarnado en las manifestaciones del 2015. Esa *buena protesta* es ordenada, ocurre solamente los sábados, no obstruye el tráfico y no bloquea la circulación.

Pero hay un aspecto aún más interesante de cómo los medios masivos han caracterizado a esa *buena protesta*. Le han atribuido un rostro eminentemente urbano, de tez muy clara o blanca, con un manejo idiomático que refleja un capital cultural y social próximo a las clases medias altas y altas. Hace pocos meses, Prensa Comunitaria realizó una exhibición del trabajo que ha realizado en los últimos años. Entre otras cosas excelentes, había un cuarto específico dedicado

a las protestas del año pasado que llevaba el nombre de *Más allá del Kilómetro Cero*. En ese cuarto de exhibición lo que podía observarse era que los rostros de la protesta, a diferencia de lo que habían construido los medios masivos, eran de muchos orígenes diferentes, de muchos colores, de muchas clases y razas, que reflejaban la diversidad del país.

Lo que los medios masivos hicieron fue homogenizar la mirada y la representación de los rostros de la protesta, incrementando la relevancia y los espacios de visibilidad sólo de algunos actores, al tiempo que excluían a otros de los mismos espacios. Y eso es la puesta en práctica del “ahí no hay nada que ver”. Entonces, por el momento, la idea de que la cultura política es por un lado mediáticamente construida y de que esta construcción mediática funciona bajo los mismos parámetros de la policía sigue siendo interesante. Pero, ¿qué pasa entonces con los procesos de democratización que se han abierto y cómo se relacionan estos procesos con nuevas tecnologías, tales como las redes sociales?

Como mencionaba con anterioridad, las redes sociales operan como infraestructuras de circulación de factores político-culturales, más que como productoras de los mismos. Si bien la comunicación se ha vuelto mucho más ágil y, en algunos casos ha permitido la emergencia de nuevos actores, lo que parece estar sucediendo con las redes sociales es un proceso de acoplamiento y subordinación a los patrones políticos más generales establecidos por la industria cultural. Y en este sentido, considero que el problema consiste en que la noción de

democracia y la noción de mercado se van convirtiendo en algo cada vez más indistinguible. Hablamos ahora del mercado de votos (poco a poco va a dejar de ser necesario usar la noción de *ciudadano*, a menos que sea un acto meramente retórico), para el cual existen especialistas dedicados a analizarlo. Poco a poco asistimos a una época en la cual el apareamiento de lo político, el disenso, como diría Rancière, va siendo sustituido por una idea de la política en la cual lo importante es adquirir la mayor cantidad de “me gusta” (*likes*). Este proceso se traduce concretamente en el incremento cada vez mayor de una forma resignada de pragmatismo, que opta por mantener el mayor número de simpatías, sacrificando posicionamientos políticos de fondo. El pragmatismo político generado en redes sociales redonda cada vez más en el desaparecimiento del disenso ante las formas de poder que la industria cultural y mediática han instaurado e instituido como *espacios de circulación de la normalidad*.

Hay un ejemplo de esto directamente relacionado con las protestas del año pasado. Una de las nuevas organizaciones que los medios masivos sobre-expusieron en el espacio visión de la *normalidad política* se sumó a la convocatoria de la marcha por el orgullo lésbico gay. A los pocos minutos, empezaron a darse por parte de sus simpatizantes fuertes ataques y críticas, en los que circulaba como *normalidad* formas muy claras de conservadurismo, homofobia y transfobia (y con esto no insinúo que los medios masivos hayan iniciado este tipo de reacciones de odio hacia lo diferente, pero sí han ayudado enormemente a su

intensificación. El ejemplo de los números de comedia del Presidente de Guatemala lo ilustra perfectamente). A partir de ese momento, ya no se avanzó en el apoyo a la causa LGTB ni se reprodujo más la convocatoria. Entonces inició un debate en el cual una persona que apoyaba la decisión de esa organización de no insistir en apoyar la causa LGTB argumentaba que ese no es un punto políticamente estratégico, ya que lo que produce es una reacción de rechazo como la que podía observarse en ese caso en particular. Lo importante, para él (y los *normales*), son otros asuntos.

Nuevamente volvíamos al caso de la ausencia de espacio por el cual circularan sujetos *suplementarios*; nuevamente volvíamos a la idea de la policía que enunciaba algo similar al “ahí mejor ni ver, que eso nos resta *likes* que eventualmente llegarán a convertirse en votos”. Y esta forma policíaca de entender la política es la que hay que combatir y contrarrestar. Pero para eso, es necesario encontrar la emergencia de lo político no como una búsqueda ansiosa y desesperada por ser incluidos dentro de las jerarquías y sistemas circulatorios de miradas instauradas por la *policía*, sino que se han de ir generando poco a poco espacios propios de visibilización que cumplan un efecto de desestructuración de los elementos de articulación que han definido los espacios de *normalidad* (como lo hicieron los miembros de Prensa Comunitaria en el ejemplo mencionado). Hay que detenerse a reflexionar por qué la mayoría de entrevistados nunca participaría en una protesta no autorizada.

Hay que tomar en serio la interrogante por el significado de bloquear los espacios de circulación que tanto rechazo provoca entre los entrevistados. Al final de cuentas, lo importante para que lo político prevalezca no es encontrar la

aceptación de la mirada policiaca. La policía nunca se preguntará qué es lo que circula ahí, donde no hay que ver, qué es lo que deja de circular aquí, donde los *normales* nos articulamos, cuando lo otro circula.

Del conocimiento a la no participación de las regiones guatemaltecas

A propósito de las protestas urbanas del 2015

Irma A. Velásquez Nimatuj

La encuesta nacional y regional sobre las transformaciones de la cultura política de Guatemala a partir de la crisis de 2015, como lo indica el documento de base, es un esfuerzo del NDI por obtener datos empíricos respecto a los cambios que pudieron darse en segmentos de la población guatemalteca a partir de la denuncia pública de la CICIG y el MP frente al involucramiento del Presidente de la República Otto Perez Molina y de la Vicepresidenta Roxana Baldetti en una compleja y bien entramada red de defraudación tributaria que logró cooptar las aduanas del país y para operar eficientemente necesitó de actores que estuvieran dentro, como fuera del Estado. La magnitud del monto defraudado al Estado de Guatemala aún no se conoce y quizá nunca se sepa. Paralelamente a esta denuncia empezaron a develarse otras redes de corrupción y saqueo del erario nacional que operaban desde el Congreso de la República y en otras instancias como el IGSS.

La encuesta fue realizada a nivel nacional, en la que fueron entrevistados en un 50 % mujeres y 50 % hombres, entre indígenas y ladinos, todos empadronados de 8 regiones del país, tomando una muestra de 200

en cada región para un total de 1600 de los cuales el 94.5 % afirmó haber tenido conocimiento de las protestas iniciadas en abril de 2015, sin embargo, al preguntarles cuántas veces participó él o la entrevistada en las protestas resulta que el 87.3 % dijo no haber participado ni una sola vez y solo un 8.6 % reconoció haber participado en una sola protesta. A lo anterior hay que agregar que al preguntárseles su acuerdo o desacuerdo con las protestas realizadas de abril a agosto de 2015 el 87 %, dijo, estar en acuerdo con las mismas contra un débil 4.4 % que dijo estar en desacuerdo. Ante esto, ¿cómo se puede interpretar que se logró un alto conocimiento de las protestas: que se estaba de acuerdo con esas expresiones espontáneas pero que no se decidió no participar?

Además, cuando, al reducido 8.6 % que participó se le pidió que dijera ¿qué fue lo que lo motivó a participar en las protestas? se obtuvo que el 87.7 % respondió con un “no aplica” y solo un 9.3 %, dijo, que lo hizo por indignación. Como la encuesta no lo dice, el lector no tiene claro cómo hay que interpretar el “no aplica”. ¿Acaso como sinónimo de que no sabe, que no pudo explicar o que

no quiso compartir sus razones sobre su participación? Así, los datos podrían leerse que la mayoría consultada se convirtió en una o un observador lejano de la realidad que envolvía a Guatemala pero que no llegó a sentirse motivada por la información que iba generándose semana a semana sobre cómo se fue construyendo y cómo llegó a operar el saqueo planificado del Estado por las principales autoridades del Ejecutivo, sus familiares, subalternos y colaboradores externos, como para llevarla a integrarse a las marchas. Ante esto, la pregunta que se desprende de los datos es ¿qué condiciones impidieron que las y los entrevistados no se sintieran contagiados por esta ola de reportajes e información, tanto de protestas como de marchas?

¿Acaso faltó información a las y los ciudadanos de los acontecimientos? ¿Se careció de buscar interpretar o presentar los acontecimientos a través de procesos menos formales pero ilustrativos y críticos? Esto pareciera ser así. Cuando se les preguntó si la población logró sus objetivos con las protestas, el 66.7 % respondió que sí, un 19.5 % dijo más o menos y solo un 12.9 % asentó que no. En efecto el sí, más el “más o menos”, suman un 86.2 %. Este porcentaje significativo, de manera general indica que las protestas por sí mismas lograron su objetivo; sin embargo, esta es una postura de las y los entrevistados que podría ubicarse como simplista, reduccionista, de la lectura sobre la construcción del Estado guatemalteco y de su operatividad. Además, es un planteamiento que no es capaz de ubicar a las protestas de 2015 como un medio y no con un fin para enfrentar y buscar la manera de socavar los cimientos del actual Estado que ya es

incapaz de cumplir con sus funciones ante las demandas de la realidad nacional e internacional.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que algunos medios de comunicación contribuyeran en la cotidianidad a la constante distorsión de la información que fue provocada por la mayoría, especialmente de la televisión nacional y de algunas cadenas radiales que están en manos de un mismo empresario mexicano y que siempre fueron afines al binomio presidencial por motivos de conveniencia económica, como más tarde llegó a confirmarse, según investigación de la CICIG y del MP.

Aunque también podría argumentarse que en el interior del país, que estaría integrado, para esta encuesta, por 7 regiones (norte, nor-oriente, sur-oriental, central, nor-occidente, sur-occidente y Petén) y que suman la mayoría (1,400 encuestados) no se identificaron con la crisis del Estado porque para ellas y ellos el Estado ha estado lejos y el Estado gira alrededor del imaginario capitalino que permanentemente, no ha hecho sino excluir al interior del país de las decisiones creando así un Estado a su semejanza que ignora al área geográfica que traspasa los límites de la capital, al cual solo asisten en momentos esporádicos y oportunistas como las elecciones generales, para “negociar” el voto presidencial y de congresistas o cuando busca imponer megaproyectos en sus territorios y entonces, acuden para fragmentar a las comunidades a través de diferentes estrategias provocando confusión y enfrentamientos.

Aunque algunos de los puntos valiosos y esperanzadores de la encuesta pueden encontrarse en la afirmación de las y los entrevistados, de que después de las protestas “hay más disposición a organizarse y participar”, lo cual es apoyado por el 84.6 % de las y los consultados, lo que podría interpretarse como procesos que empiezan a asumirse como derechos inalienables: el organizarse y el participar para mantener los equilibrios sociales, que precisamente, el conflicto armado interno (1960-1996) arrebató y criminalizó en sectores que pensaban y proponían proyectos diferentes a los sostenidos por el estatus quo. Aunque, también, esta afirmación debe de asumirse con cierta suspicacia, porque en el presente se evidencian acciones contradictorias y sumamente complicadas, por ejemplo, cuando se sobreestima la participación de las marchas como ejercicios ciudadanos garantizados en la Constitución Política como derechos ejercidos por colectivos que en su mayoría fueron urbanos, ladinos y mestizos, de clase media, terminan siendo socialmente aceptados y promocionados. Pero cuando los derechos a organizarse y participar se ven materializados en las protestas a través de colectivos indígenas que sostienen y buscan la defensa de sus territorios ante el avance sin su consentimiento libre e informado de múltiples megaproyectos, son las mismas instituciones y medios de comunicación los que asumen una postura contraria y los etiquetan de bloqueos, protestas y manifestaciones, que informan lo que está pasando y dónde está ocurriendo, quiénes son los actores, pero no explican por qué están ocurriendo. Olvidan deliberadamente mencionar cuáles son las causas

que llevan a los colectivos indígenas a tomar acciones de protesta social que, a pesar de todo, son también actos legítimos de resistencia comunitaria ante la subestimación y la marginación de sus voces.

Otro punto significativamente alentador, está en otra de las afirmaciones conectada con el punto anterior y que se refiere a que el 78.2 % de las y los entrevistados asintió que después de las protestas “Hay menos miedo a protestar”, lo que implicaría que antes de las protestas del 2015 para la población urbana de Guatemala, sí existía temor a protestar y que fueron estas protestas las que rompieron ese viejo círculo de miedo, que podría deducirse fue producto de los 36 años del terror impulsado desde las diferentes estructuras y aparatos represivos del Estado para silenciar a toda persona o colectivo que buscaba ejercer su derecho a expresarse de manera diferente a lo impulsado por esos regímenes. Si las protestas dejaron este legado, es sin duda, positivo, saber que hoy en Guatemala por protestar, nadie va a ser perseguido, asesinado, torturado, desaparecido o llevado a los tribunales y a la cárcel, como si lo fue antes de la firma de la paz y que al parecer ese temor se reprodujo durante la etapa de posguerra. Sin embargo, nuevamente, esta afirmación termina siendo una postura de ciudad, que no hace sino negar la historia reciente al ignorar las protestas de diferentes colectivos indígenas, campesinos y rurales que a pesar del temor, han sido casi los únicos que no han dejado de protestar ante medidas que, inmediatamente al firmarse la paz, no hicieron sino afectarles y que han quedado registradas en los medios de comunicación. Los pueblos

indígenas en la etapa de posguerra se han estrellado contra instituciones y políticas de Estado que les limitan el ejercicio de sus derechos elementales.

Los dos puntos anteriores aunque valiosos terminan en la encuesta siendo oscurecidos cuando se le pregunta a las y los entrevistados hasta qué punto aprueba o desaprueba la participación en manifestaciones permitidas por la ley versus la participación de las personas en cierres o bloqueos de calles o carreteras como forma de protesta. Aquí el problema radica en que el texto no indica en ningún momento cuál es la definición de “protestas permitidas por la ley” en la que se basa y sin una discusión conceptual decide asumir que las protestas ilegales son aquellas que obstruyen. Estos cuestionamientos a la luz de la compleja realidad del país terminan siendo tendenciosas y nuevamente buscan implicar que las manifestaciones de la capital del 2015 son el modelo a seguir y son las “protestas permitidas por la ley”, sin detenerse a plantear que también fueron protestas que pararon el tráfico y obstruyeron las arterias de la capital como bien lo evidencian las fotografías y los documentales. Esta reducción a binarios entre lo que hace la capital como bueno y lo que hacen los del interior, los indígenas, como malo, no hace sino reducir la complejidad y riqueza que dejaron las manifestaciones.

Lo anterior vuelve a reiterarse cuando preguntan qué “acciones la gente puede realizar” y piden que el entrevistado diga que ha realizado, que podría realizar y que nunca realizaría. Allí nuevamente vuelven a caer en la trampa de definir lo “bueno” versus lo “malo”. De manera

perspicaz insisten en preguntar si las personas pueden participar en “manifestaciones autorizadas, protestas y marchas”, a lo cual un 24.4 % dice que sí ha lo ha hecho, un 34.9 % dice que sí las podría hacer y un 38.4 % dice que nunca lo haría, y lo contraponen con participar en “marchas no autorizadas, y en bloquear el tráfico”, a lo cual un 7.7 % respondió que sí lo ha hecho, un 12.7 % dice que sí podría hacerlo y un contundente 78.7 % aseveró que nunca lo haría. Aquí, dos puntos son claves, dado que es obvio que ningún entrevistado en el contexto del país aceptaría decir que sí participaría en procesos que son definidos como “marchas no autorizadas” y segundo es claro que la encuesta, aunque no presenta una discusión sobre cómo definir e identifica las protestas válidas de las que no los son, si está definiendo una postura referente a que es válido y que es inválido, esto termina siendo peligroso en un país como Guatemala en donde los pueblos y comunidades indígenas no han tenido el mismo derecho para expresarse y negociar los asuntos que les competen y que podrían alterar sus vidas.

En resumen, si bien compartí el compromiso que emergió en las protestas de la capital y participé de ellas con profunda emoción y compromiso por una Guatemala distinta, mis acciones fueron basadas en la información a la que tuve acceso, pero este privilegio no fue el mismo para el resto de la población, lo cual confirmo con los datos de esta encuesta que sí bien arrojan elementos novedosos sobre los acontecimientos ciudadanos durante 2015 tienen vacíos que no han sido llenados y cuya información es clave para llegar a tener las diferentes piezas del complejo rompecabezas nacional.

La participación ciudadana clave para desencadenar cambios

José Roberto Morales Sic

Toda sociedad está en constante proceso de cambio marcado, según Durkheim, por “hechos históricos”, trascendentales a nivel político y otros constantes en el fluir del devenir histórico. Estos cambios y hechos son provocados por una ciudadanía que demanda frente al Estado sus derechos políticos, sociales, culturales e integrales (Borges, 2000)³⁹, y que para el caso guatemalteco demostró su participación activa y propositiva en las diferentes manifestaciones del año 2015 frente al Palacio Nacional y en parques centrales departamentales y municipales del interior del país. Se trata de demandas sociales y políticas, tanto coyunturales como de cambios a mediano y largo plazo, de cambios estructurales de larga data que necesitamos y que arrastramos todas y todos los guatemaltecos, desde el período colonial hasta nuestros días.

La participación ciudadana que expresó sus demandas a nivel político en el 2015 marcó un hito histórico, demostrando su soberanía popular y su voluntad general,

para transformar la búsqueda de justicia y participación democrática a través de diferentes expresiones sociales e identidades múltiples, desde la expresión plural guatemalteca.

Y es que, después de la participación ciudadana en las protestas sociales, según las encuestas realizadas en 2016 por el NDI, a un año de los acontecimientos por demandas de lucha contra la corrupción y la impunidad, se hace notorio que el 41.2 % de los encuestados manifiesta que una de las demandas prioritarias es el combate a la corrupción; seguido de un 31.7 % que demandó la renuncia del ex presidente Otto Pérez; y el 23.7 % pidió la renuncia de la ex vicepresidenta Baldetti (NDI 2016). Estos dos últimos son acontecimientos consumados, mientras que sigue el combate contra la corrupción que en la actualidad, gracias al proceso de investigación del MP y la CICIG, ha llegado al desmantelamiento de organizaciones corruptas dentro del propio sistema del Estado.

La nutrida participación en las protestas del año pasado, marca el inicio de una nueva forma de expresión popular.

39 Borges, Velia Cecilia. (2000). Ciudadanía. En: Léxico de la Política. México: FLACSO, CONACYT, Fundación Heinrich Böll, Fondo de Cultura Económica. Pág. 50-53.

Después del proceso de represión brutal promovido por el Estado y el Ejército de Guatemala durante los 36 años de guerra interna en Guatemala, la población guatemalteca, resurge para demostrar y romper el silencio, el miedo ante los aparatos represivos del Estado y las estructuras criminales. Es por ello que las expresiones públicas demuestran que, luego de las protestas del año pasado, existe mayor disposición a organizarse y a participar. Un 84.7 % de las personas encuestadas afirma que es clave la disposición a organizarse. También el 78.2 % de los encuestados señala que hay menos miedo a participar en las protestas sociales.

Sin duda alguna estos elementos marcan un salto fundamental para los procesos de participación ciudadana: el avance en el posicionamiento de las demandas y exigencias de los derechos integrales de todas y todos los guatemaltecos.

De todas las demandas planteadas por la ciudadanía en el momento de las protestas, ¿hoy qué sigue? Hoy las demandas de la ciudadanía continúan siendo múltiples, sin embargo, coyunturalmente, se expresa un respaldo incondicional a la CIGIG y hacia el Ministerio Público. Un 83.0 % de los encuestados está de acuerdo en salir a las calles para respaldar las acciones de estas dos instituciones, que siguen aportando en la actualidad para que el Estado de Derecho cumpla con sus obligaciones contractuales y que la justicia camine a favor de las demandas de la población guatemalteca.

También un 75.5 % de los entrevistados está de acuerdo con salir a las calles para manifestarse contra **la deficiencia de los servicios públicos brindados por**

el Estado guatemalteco. Esto no es casual debido a la crisis que vive el sistema de salud a nivel nacional producto de la corrupción. Por ello la ciudadanía se encuentra en constante fiscalización, promoviendo denuncias de violaciones y la corrupción imperante en las diferentes instituciones del Estado. En los poderes ejecutivo y legislativo, por ejemplo, se ha hecho más que evidente el problema estructural de la corrupción; por tal motivo es necesario seguir posicionando la denuncia y las demandas de las diferentes expresiones de la sociedad organizada.

Otra demanda concreta por la que la ciudadanía saldría a protestar a las calles es **la defensa del territorio y de los recursos naturales.** Un 74.1 % de las personas encuestadas está a favor de protestar por dicho tema. Esta temática es una demanda esencial, porque el deterioro del medio ambiente no es un tema de coyuntura, es un tema ético ecológico contextual. Es apostar por la concepción biocéntrica⁴⁰ como modelo de vida alternativa al modelo antropocéntrico, y que todos los guatemaltecos y guatemaltecas estamos llamados a cultivar para beneficio de las nuevas generaciones en nuestro país, promoviendo la defensa de los derechos colectivos e instando a que la ciudadanía provoque cambios profundos.

La defensa del territorio y de los recursos naturales, en la mayoría de los casos es una demanda y un posicionamiento

40 El biocentrismo plantea que el universo está vivo, todo que vemos es un torbellino de información. Afirma que todo ser vivo merece ser respetado. Pretende reivindicar el valor primordial de la vida, es un modo de pensar que se contrapone al teocentrismo y al antropocentrismo. En: http://www.absolum.org/eco_biocentrismo.htm

político, también, de parte de las comunidades y pueblos originarios indígenas en el país y de las organizaciones sociales comprometidas a favor de la conservación, preservación y promoción de los recursos naturales para el beneficio de las comunidades y de los pueblos. Por ejemplo, para los pueblos originarios mayas, la noción de territorio está estrechamente ligada a la identidad, la naturaleza y la tierra, consideradas como la MADRE de donde los seres humanos venimos y regresamos⁴¹.

“Solamente una relación personal con la Tierra nos lleva a amarla y lo que amamos no lo explotamos sino que lo respetamos y veneramos”⁴². La búsqueda del respeto y preservación a la biodiversidad natural es un imperativo categórico. La ciudadanía empieza a tener **conciencia** de la necesidad de promover elementos éticos ecológicos a favor del medio ambiente y a valorar la búsqueda de equilibrio y armonía entre el ser humano y la naturaleza, postulado antiguo de los pueblos originarios ancestrales, especialmente de la cultura maya, que ha promovido desde sus códigos éticos, ecológicos y del “buen vivir”, principios y valores para ver el mundo, la vida y la forma de relacionarse con el medio ambiente.

Es importante rever este elemento porque ayuda a la ciudadanía a tener conciencia de la necesidad de valorar los

territorios y los recursos naturales a favor de las comunidades y en beneficio de todas las personas y de la misma naturaleza que tiene derechos propios.

Territorios que son lugares sagrados para los pueblos originarios indígenas, recursos naturales que expresan importancia vital para la vida de las comunidades y de los pueblos, lugares donde se encuentra el acceso a la medicina natural para la prevención y cura de diferentes enfermedades del ser humano.

La conciencia de salir a las calles para protestar a favor del territorio y los recursos naturales es una agenda pendiente y fundamental para cohesionar a la ciudadanía en la promoción de los derechos de la Madre Tierra, los territorios y los recursos naturales.

No es casual que un alto porcentaje de las personas entrevistadas señale la importancia de la defensa del territorio y de los bienes naturales, hoy se sigue viendo la conflictividad en las comunidades por la implementación de minería a cielo abierto y la siembra de monocultivos a gran escala, provocando desplazamientos de comunidades enteras, contaminación de la sagrada agua, el desvío de los ríos, el deterioro de los territorios y los recursos naturales, sin importar la vivencia de los conglomerados comunitarios originarios.

Existen otras razones del porqué las personas saldrían a las calles a protestar, y es que dentro del sistema político actual hay personas que están incrustadas en puestos claves para seguir promoviendo la corrupción y beneficiarse de ella. Es por ello que el 72 % de

41 Morales Sic, José Roberto. *Autonomía: su relación con el Estado-nación y territorio*. Guatemala: Seminario Internacional; autonomía de los pueblos indígenas. Comisión de Pueblos Indígenas del Foro de ONGS Internacionales. 2008.

42 Boff, Leonardo. (2012). La dimensión de lo profundo: el espíritu y la espiritualidad. En <http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=503>

las personas encuestadas señala que es necesario estar vigilantes para que todos los corruptos renuncien; eso es posible si y solo si existiese un proceso de **fiscalización**, denuncia, y el inicio de procesos de investigación del Ministerio Público para avanzar en el tema de la búsqueda de justicia, por todos los saqueos de los recursos de las arcas del Estado guatemalteco.

Otro alto porcentaje de las personas encuestadas señaló la importancia de la depuración del Congreso de la República. Este tema ha avanzado en estos últimos tiempos, el descubrimiento de las plazas fantasmas y el inicio de procesos judiciales contra varios diputados y diputadas acusados de participar en procesos de corrupción es aplaudido por la población. Porque se ven rayos de sol dentro de la justicia guatemalteca.

Otro tema no menos importante y que es la clave para poder transformar el sistema político es la promoción de los cambios a la Constitución de la República de Guatemala, el 48.4 % de los encuestados respondió positivamente a la necesidad de realizar cambios, sin embargo, este tema es profundo. En varias expresiones del movimiento social se apuesta a la refundación del Estado a través de una nueva Asamblea Constituyente y a cambios profundos a partir de una nueva Constitución de la República.

Es curioso que los encuestados/as no ubiquen como prioridad uno de los elementos fundamentales para transformar todo el sistema político guatemalteco como lo es el cambio de la Constitución de la República.

Las expresiones del movimiento social, especialmente el movimiento indígena, campesino y popular, plantean que es necesario la **Refundación del Estado**, lo que requiere una NUEVA Constitución de la República en la que participen asertivamente todos los sectores y actores organizados de la sociedad guatemalteca. Es por ello que se necesita al momento de considerar una nueva Constitución, la importancia de promover e instalar un Estado inclusivo y plural, tema que necesita promoción para buscar nuevos mecanismos para la erradicación del racismo, la discriminación, el patriarcado y la exclusión de la que son objeto los pueblos y las comunidades originarias.

El salto cualitativo es buscar nuevas formas de repensar desde el nivel de la interdisciplinariedad, la reflexión política desde diferentes ámbitos de acción y sobre todo el impulso de seguir promoviendo la participación constante de la ciudadanía. Todo cambio es posible cuando la ciudadanía de diferentes estratos sociales, culturales y de género, demanden por los derechos integrales, a favor los más desposeídos, excluidos del sistema perverso del Estado.

Bibliografía

- Boff, Leonardo. (2012). *La dimensión de lo profundo: el espíritu y la espiritualidad*. En: <http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=503>
- Borges, Velia Cecilia. (2000). Ciudadanía. En: *Léxico de la Política*. México: FLACSO, CONACYT, Fundación Heinrich Böll, Fondo de Cultura Económica.

Morales Sic, José Roberto. (2008) *Autonomía: su relación con el Estado-nación y territorio*. Guatemala: Seminario Internacional; autonomía de los pueblos indígenas. Comisión de Pueblos Indígenas del Foro de ONGS Internacionales.

National Democratic Institute–NDI. (2016) *Encuesta Nacional*

Guatemala NDI. Cambio en cultura política. Transformación en la cultura política de Guatemala: una perspectiva después de la crisis política de 2015. Guatemala.

Rozzi, R. (n.d.). *absolum.org*. Hacia una superación de la dicotomía biocentrismo – antropocentrismo. http://www.absolum.org/eco_biocentrismo.htm

Cultura política en Guatemala: ¿Hasta dónde hemos cambiado después de las jornadas del 2015?

Samuel Pérez Attías

1. Introducción

Referirse a un **cambio en la cultura política** de la población guatemalteca implica considerar varios elementos en general pero dos en particular. El primero tiene que ver con el concepto de *cambio*. Para poder inferir sobre un cambio es preciso establecer una línea base que permita comparar cambios. El segundo es sobre la definición de *cultura política*. El Diccionario de la Lengua Española (2016), define cultura como “el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. / Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social”⁴³.

El concepto de cultura política es más amplio y ambiguo según diferentes escuelas de pensamiento y por lo tanto no consensuado. En el contexto del presente análisis se traslapa con conceptos de cultura cívica y/o cultura democrática, por lo que el autor asume como *cultura* a la definición descrita arriba y como

cultura política a la cultura en un contexto político democrático.

Queda a criterio del lector hasta dónde participar o no en una manifestación política o identificarse con ciertas instituciones define a la cultura política de una población e influye en su cambio.

El presente artículo es un análisis de la Encuesta Nacional Guatemala-NDI, *Cambio en Cultura Política*, realizada entre junio y julio de 2016, resolviendo las dos variables apuntadas arriba de la siguiente forma:

A falta de una línea base homogénea y con el riesgo de perder grados de rigurosidad en beneficio de no caer en la intuición y especulación, las inferencias presentadas por el autor se basarán en información objetiva sobre el tema en general y comparando algunas variables específicas, usando como referente al estudio *Cultura política de la democracia en Guatemala y en las Américas, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades*, realizado por Azpuru, et.al.

El análisis se compone de una primera parte de interpretación de resultados de

43 Tomado de <http://dle.rae.es/?id=BetrEjX>

lo que el autor considera variables pertinentes para reflejar el conjunto de conocimientos, modos de vida, actitudes, conducta y costumbres respecto a instituciones políticas y su percepción por parte de la población entrevistada así como elementos que aportan a la construcción de una *cultura política*.

Los elementos principales que contribuyen a conformar una línea de comparación, basados en la evidencia empírica, son: la participación en protestas, en elecciones y la confianza en instituciones⁴⁴.

Por la naturaleza de las profundas asimetrías en la población guatemalteca, se analizan algunos resultados infiriendo de forma desagregada con el objetivo de “hilar más fino” en cuanto a patrones y tendencias conforme a respuestas de ciertos grupos sociales según las características identificadas en la muestra, siendo estas: edad, ingresos, nivel de escolaridad y región geográfica

Se interpreta entonces el impacto de ciertos temas en ciertos grupos. Esto

permite inferir y comparar en algunas conclusiones que se han sugerido en los medios desde la percepción superficial.

El trabajo presenta en su tercera parte algunas conclusiones sobre el análisis y sugerencias para la profundización de algunos temas que el estudio detona como elementos para su seguimiento.

El artículo finaliza con llamadas “lecciones aprendidas” como un sumario del trabajo realizado desde la perspectiva del autor.

2. Interpretación de resultados

2.1 Línea base (Ex-Ante)

Para comparar evolución, cambio o transformación en la cultura política de la población guatemalteca, a raíz de las manifestaciones y la crisis política del 2015, se establece como marco base el estudio de Dinora Azpurú, Pira & Seligson ⁴⁵ (2012, Diciembre) en algunos aspectos relevantes que permitan a quien lee posicionar un escenario ex-ante de la situación de la cultura política previo a la crisis del 2015⁴⁶.

De acuerdo a Azpuru, *et al.*, 2012, **sobre la participación electoral** en 2011 en

44 Algunos otros elementos sobre cultura política que se tomaron en cuenta para el análisis son:

- Percepción del mensaje de las manifestaciones del 2015
- El rol de los medios de comunicación en la cultura política y en las manifestaciones del 2015
- Nivel de participación de protestas (manifestaciones)
- Identificación con la consigna de las protestas
- Representatividad de las manifestaciones del 2015 con respecto a previas
- Percepción de las protestas como variable de cambio en la realidad política del país
- Propensión a participar en el futuro
- Participación en elecciones generales
- Comprensión sobre el rol de los partidos políticos e instituciones democráticas representativas.
- Confianza en instituciones

45 Azpuru, D., Phd, Pira, J., & Seligson, M. A., Phd. (2012). Cultura política de la democracia en Guatemala y en las Américas, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades X ESTUDIO DE CULTURA DEMOCRÁTICA DE LOS GUATEMALTECOS. Guatemala, Guatemala: Asies

46 Entendiendo a la “crisis política” como a los acontecimientos sucedidos de Abril a Julio de 2015, que incluyen manifestaciones y protestas ciudadanas que desembocaron en la renuncia del Presidente y la Vicepresidente del país y su vinculación con casos de corrupción.

términos globales, el 78.8 % de los guatemaltecos indicó haber votado en la primera vuelta electoral realizada el 11 de septiembre, mientras que un 72.2 % dijo haber votado en la segunda vuelta electoral realizada el 6 de noviembre.

Con respecto a **participación en protestas**, un 7.3 % de los guatemaltecos indicó haber participado en protestas en 2011 (Azpuru, et al., 2012). Para poner en perspectiva, el promedio en las Américas en cuanto a participación en una protesta es de 7.4 %, lo que coloca a Guatemala dentro de la media. Al desagregar por factores sociodemográficos, se observa que en 2011 las personas indígenas, con nivel de educación secundaria, y dentro del quintil inferior de riqueza manifestaron en mayor proporción haber participado en una protesta. La desagregación urbana-rural no muestra diferencia significativa. Sin embargo, **esto sugiere que la participación en protestas tiene motivaciones mayores en personas indígenas, de educación secundaria y menor y en el extremo inferior en cuanto a ingresos económicos.**

Sobre la **confianza en instituciones políticas**, las iglesias Católica y Evangélica muestran una mayor proporción de confianza en 2011, seguidas por el Ejército, los medios de comunicación y la municipalidad de la persona encuestada, como las 5 instituciones más confiables. En el otro extremo, se observa que la PNC, los partidos políticos, el Congreso, la Corte Suprema y los Tribunales de Justicia son los menos confiables (en orden de menos a más confiables respectivamente).

2.2 Análisis Ex-post: ¿Qué dice la población guatemalteca después de la crisis del 2015?

2.2.1 El rol de los medios

El 94 % de la población supo de las protestas del 2015. Cuando se les pregunta cómo se enteraron de la convocatoria a protestar, los medios de comunicación masiva se observan como una fuente fundamental. (82.5 %). Significativamente debajo de los medios, figuran las redes sociales con un 7.7 %.

Lo anterior sugiere el poder de convocatoria de los medios masivos de comunicación, en especial la televisión abierta como fuente de información sobre lo que ocurre en el país (73.6 %) seguida por la televisión por cable (11.5 %) y la radio (7.2 %). Esta información evidencia también que la percepción de éxito, representatividad y agenda o consigna de las manifestaciones democráticas en el país está fuertemente influida por los medios de comunicación masiva.

La importancia de esta variable radica, para el autor, en la forma en que la población percibe a las manifestaciones políticas y la vulnerabilidad de estas a ser manipuladas por la información pública, sobre todo, cuando se evidencia un monopolio de la televisión abierta, que facilita arbitrariedad en cuanto a la objetividad de la diseminación de información, comprometiéndola.

Cabe considerar que casi un tercio (28.6 %) de las personas con ingresos mayores a US\$ 800 al mes dice haberse enterado sobre las protestas a través de

las redes sociales, siendo esta una proporción atípicamente alta en relación con el resto de grupos socioeconómicos definidos en la encuesta que responden en esa categoría.

Aunando esta variable con la percepción del mensaje en las protestas, el 41 % manifestó que estas tenían como objetivo *el combate a la corrupción*, un 31 % la renuncia de Otto Pérez y el 23.7 % la renuncia de Roxana Baldetti. Aunque esas fueron las consecuencias de la manifestaciones reportadas por los medios, es importante mencionar que la convocatoria y el mensaje #RenunciaYa eran específicos para exigir la renuncia de la Vicepresidente en las primeras convocatorias y del Presidente en las posteriores. Existen, sin embargo, personas y grupos que acudieron a la plaza a manifestar por otros motivos durante las jornadas de 2015. La evidencia⁴⁷ la muestran fotografías de personas con carteles protestando por diversos temas, incluidos, mas no exclusivos: la justicia, el desconocimiento del Presidente (#NoTengoPresidente), el antejuicio al Presidente, reformas a la ley de Partidos Políticos, el despojo de territorios y la inseguridad (Asturias, A. Rodríguez-Pellecer, M. 2015).

2.2.2 La participación

Con respecto a **participación en protestas** del 2015, la mayoría de las personas (un 87 %) indica que no participó y sólo un 8.6 % indica que participó una vez. El cambio en la participación

en protestas respecto al 2011 es positivo, aunque aún modesto (un poco más de un punto porcentual más en 2015 que en 2011).

Al desagregar, existe una correlación positiva entre mayor nivel de ingresos, más años de escolaridad y menos edad y las veces en que participaron en las protestas. Comparando con la línea base establecida en este trabajo, esto sugiere que una parte de la población que anteriormente no participaba en manifestaciones salió a las calles en la coyuntura del 2015.

La **participación en las elecciones**, como otra variable a considerar en cuanto a la “Cultura Política” mostró que entre las personas encuestadas, un 86 % fue a votar. Sin embargo, el porcentaje de la población empadronada que votó en las elecciones de 2015 fue de 71.3 % en la primera vuelta y 56.3 % en la segunda (TSE, 2016).

Esto muestra una disminución en la participación electoral comparada con la línea base tomada, respecto a las elecciones de 2011. (78.8 % y 72.2 % en la 1ª y 2ª vuelta respectivamente) (Azpurú, D. et.al., 2012)

Surgen las preguntas: ¿Se incrementó entonces la “Cultura Política” en la población a raíz de la crisis del 2015? ¿Fue la disminución en la participación electoral producto de una mayor conciencia en la población, a raíz de las protestas y la crisis y ante las propuestas del momento o una mayor apatía al sistema como “cultura política”?

47 Asturias, A. Rodríguez-Pellecer, M. (2015). 140 Días de primavera. Guatemala, Guatemala: Nómada

2.2.3 Confianza en las instituciones

Las 5 instituciones en las que se manifiesta algo o mucha confianza son, en su orden: La CICIG, la Iglesia Católica, El MP, las iglesias evangélicas y los medios de comunicación. Las 5 menos confiables, en orden, son los partidos políticos (la institución menos confiable), los sindicatos, el Congreso, el Gobierno y el poder judicial. Por un lado, el cambio con respecto al 2011, es mínimo, pero estructural. Las iglesias siguen siendo las más confiables, sin embargo, la CICIG y el MP cuentan con la confianza de la población. Esto sugiere que las manifestaciones y la crisis de 2015 reforzaron confianza en una institución exógena y temporal (la CICIG) y en el MP (ambas relacionadas con el combate a la impunidad, la lucha contra la Corrupción del Estado y el trabajo a favor de la transparencia y del Estado de Derecho). La poca confianza en los partidos políticos, sindicatos, el Congreso y el Gobierno brinda señales de una cultura política que no confía en organizaciones fundamentales de concertación y de representación de la ciudadanía en las decisiones políticas y de Nación. Con respecto al 2011, los partidos políticos, el Congreso y el poder judicial siguen estando entre los 5 menos confiables. Aquí no hubo transformación ni cambio en la percepción, como elemento de la cultura política.

3. Conclusiones

- Existe percepción de que hay menos corrupción después de las protestas. Un 41 % así lo afirma. Sin embargo, vale reflexionar. ¿Fueron las protestas en sí o la convergencia de variables como el enfoque de lucha contra la corrupción en los medios masivos de comunicación sobre el trabajo de la CICIG y el MP en el proceso lo que ayudó a esa percepción?
- De igual forma, un 47.8 % percibe un *mejor desempeño de las autoridades del Estado* como resultado de las protestas. ¿Fueron las protestas el motivo?
- Sobre percepción, un abrumador 78 % indica que las manifestaciones diluyeron el miedo a protestar y un 84.7 % indica que después de las protestas hay más disposición a organizarse y participar. El 34.9 % manifiesta que sí podría asistir a manifestaciones autorizadas, protestas y marchas en el futuro.
- Lo anterior contrasta con la intención de participar en un partido político, porque el 68 % de la muestra indica que nunca y bajo ninguna circunstancia participaría en un partido político. ¿Existe un cambio de cultura política como resultado de una “moda” de participación en protestas o es un cambio real de comprensión del sistema democrático representativo y sus instituciones?
- Por otro lado, un 38.4 % indica que no podría asistir a manifestaciones autorizadas, protestas y marchas en el futuro bajo ninguna circunstancia. Esta tendencia se refuerza en el grupo de ingresos menores a US\$ 200 (41 %), con educación primaria únicamente (43.3 %), mujeres (42.2 %) y mayores de 56 años (43.8 %). Se

sugiere investigar más a fondo sobre los motivantes de dicha tendencia en futuros estudios.

- En cuanto a manifestarse en la plaza para apoyar una transformación en la estructura del Estado, a través de un cambio en la Constitución, son las nuevas generaciones quienes apoyarían más (53 %) por sobre adultos mayores de 56 años (52.7 %). Lo que sugiere que hay en los jóvenes un pensamiento progresista y voluntad de ser agentes de cambio en la estructura del país por sobre el pensamiento conservador generalmente relacionado con edades más avanzadas.
- En una lectura sobre la comprensión de la importancia de la participación ciudadana en un régimen democrático, los datos muestran que aún no se cuenta con una cultura que confíe en las instituciones de representación y concertación ciudadana para la toma de decisiones políticas.
- La evidencia no indica necesariamente que la población ahora tenga una cultura política orientada hacia un mejor desempeño de la institucionalidad democrática o que sea significativamente más participativa que en 2011: aún existe alta desconfianza en los partidos políticos, sindicatos, Congreso y el mismo Gobierno. El porcentaje de participación en las elecciones disminuyó con respecto al año 2011 y la participación en protestas se incrementó mínimamente durante las jornadas del 2015, las cuales pueden haber sido una catarsis colectiva por la indignación acumulada en

cuanto a abusos por parte de gobernantes y otras demandas sociales insatisfechas. De hecho, pero sin datos que lo confirmen, la observación empírica de manifestaciones más recientes (2016), no refleja una convocatoria que muestre una participación masiva similar a la de las jornadas del 2015, especialmente la que se exigió la renuncia de Otto Perez Molina aunada a un paro nacional del sector empresarial y laboral.

Lecciones aprendidas:

- La población ha manifestado anteriormente. Un 7.3 % de la población manifestaba en 2011. La encuesta revela que esta participación se ha incrementado a un 8.6 %. Esto sugiere que aunque ha habido manifestaciones en el pasado, las jornadas del 2015 hicieron más visible esta tendencia. A pesar de que se intuye del poder de las redes sociales en cuanto a la convocatoria, la influencia de éstas es mínimo comparado con el de los medios masivos de comunicación, especialmente la TV.
- El momento político durante el 2015, incluyendo la actuación de la CICIG y la naturaleza de la crisis, puede haber contribuido a una mayor participación del sector urbano de la población y consecuentemente de la clase media y media alta.
- La intención de una manifestación no es igual a su impacto. Aunque el número de personas manifestantes fue grande, éstas por sí mismas no son suficientes para realizar cambios estructurales en la participación de

la población en las elecciones y en la percepción de la confianza de los partidos políticos y otras instituciones democráticas.

- La percepción de las manifestaciones está altamente determinada por cómo lo reportan los medios de comunicación masiva.
- La forma en que se transmiten las noticias en los medios de comunicación masiva es fundamental en cuanto a la percepción de las manifestaciones políticas, su convocatoria y su agenda. Vale la pena remarcar en este aspecto, la forma en que algunas protestas se reportan como “bloqueos” y otras como “manifestaciones”, y el impacto que esto ocasiona en la ciudadanía. Más de la mitad de encuestados tiende a desaprobare firmemente la participación de cierre o bloqueo de calles como forma de protesta, mientras que por el contrario, la mayoría tiende a aprobar firmemente una manifestación “permitida por la ley”.
- La cultura política está fuertemente influenciada por los diferentes

estamentos en una sociedad, y los medios de comunicación moldean la percepción de la ciudadanía con respecto a las instituciones, la participación, las relaciones de poder y el Estado de la Nación en general. La población joven muestra una tendencia a la participación activa y a la voluntad de conocer más e involucrarse en los cambios que impacten el futuro del país.

Bibliografía

- Asturias, A. Rodríguez-Pellecer, M. (2015). 140 Días de primavera. Guatemala, Guatemala: Nómada
- Azpurú, D., Pira, J., & Seligson, M. A., Phd. (2012). Cultura política de la democracia en Guatemala y en las Américas, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades X ESTUDIO DE CULTURA DEMOCRÁTICA DE LOS GUATEMALTECOS. Guatemala, Guatemala: Asies, LAPOP, Universidad de Vanderbilt.
- Diccionario de la Lengua Española (2016). <http://dle.rae.es/?id=BetrEjX>

Tecnopolítica, medios de comunicación y movilizaciones comunitarias en Guatemala durante el 2015

Andrea Ixchiú

... La televisión puede, paradójicamente, ocultar mostrando. Lo hace cuando muestra algo distinto de lo que tendría que mostrar o cuando muestra lo que debe, pero de tal forma que hace que pase inadvertido o que parezca insignificante, o lo elabora de tal modo que toma un sentido que no corresponde en absoluto con la realidad.

Pierre Bourdieu (1997: 24-25)

Basta con hacer una sencilla búsqueda en cualquier navegador en internet usando las palabras *Guatemala + movilizaciones + 2015*, para ser dirigido a centenares de páginas web y blogs, en donde se leen palabras como: movimiento, corrupción, renuncia ya, pacífica, sectores, paros. Y si se consultan portadas de periódicos, revistas y archivos de programas radiales y televisivos publicados entre abril y agosto de 2015, abundan el uso de los términos: bloqueos, inconformes, conflictivos, bochincheros, acarreados. En varios medios de comunicación estos términos se emplearon por algunos periodistas para referirse a las movilizaciones organizadas por comunidades indígenas, organizaciones campesinas y populares durante la crisis de 2015.

Este artículo recoge varias preocupaciones de la autora, surgidas luego de la

lectura del resumen ejecutivo de los resultados de la encuesta NDI 2016, conformada por 72 preguntas y realizada a 1,635 personas de distintas regiones del país, durante los meses de junio y julio de 2016, justo un año después de estos hechos.

La encuesta presenta cifras interesantes. El 94 % de la población encuestada indicó estar enterada de las movilizaciones ocurridas en el año 2015. El 82.5 % de la misma población indicó haberse enterado gracias a los medios de comunicación y el 64.8 % aseguró haber participado en las movilizaciones. Estas cifras muestran el importante rol que tuvieron los medios de comunicación guatemaltecos e internacionales en la convocatoria a la movilización, en la visibilidad de la crisis política y en la creación de información al respecto. La autora considera que los medios masivos de comunicación

aportaron en la construcción de un relato homogéneo y específico durante las movilizaciones que se centró en el discurso anti-corrupción que hizo invisible la pluralidad de demandas de la población durante las protestas del 2015.

Y es que, gracias al monopolio mediático, hay un alto control de lo que se publica en la prensa, la radio y la televisión. Hoy en día desde los medios se promueven agendas y se oculta información. Muchos medios responden a propietarios que juegan roles establecidos en el mantenimiento del status quo. Múltiples estudios han denunciado que históricamente en Guatemala los medios de comunicación han contribuido a la formación de una sociedad excluyente y estigmatizadora de los pueblos indígenas y de los sectores pobres y populares del país.

1. ¿Cómo se representaron las movilizaciones comunitarias en el discurso de los medios antes y durante la coyuntura de 2015?

El discurso utilizado en los medios implícitamente fortalece la ideología dominante traducida en estereotipos, discriminación y racismo; ideologías que se van naturalizando en la sociedad que lee los medios. Asimismo, lleva implícita la idea de la formación de un ser “otro” que se construye en oposición a las formas “normales,” “civilizadas” y “desarrolladas”, como debe ser la sociedad y la nación guatemalteca de acuerdo al imaginario de la elite y la sociedad dominante. Las ideologías no son explícitas en los textos o en

el lenguaje que se utiliza sino que se encuentran subyacentes en el texto y hay que desenmascararlas. A pesar de eso, siguen teniendo una función en los procesos de construcción del imaginario social guatemalteco y la reproducción de las relaciones jerárquicas de poder –política, económica, social y hasta de acceso a los medios.

Ajb’ee Jiménez (2010:77-95)

Aseveraciones como las que dieron la prensa nacional e internacional asegurando que “Desde los años 80 no ha habido una movilización de tal magnitud”, obviaban de tajo a las cientos de movilizaciones que los pueblos indígenas, organizaciones campesinas, de mujeres, de estudiantes normalistas y populares han realizado permanentemente en los últimos años. *La Marcha indígena, campesina y popular*, por nombrar una de ellas, tuvo cobertura en los medios masivos de comunicación mayoritariamente para hablar de las condiciones del tráfico en la ciudad de Guatemala. Poco hablaron del plantón que más de 450 familias que habían sido desalojadas en el Valle del Polochic realizaron fuera del Palacio Nacional del 18 al 23 de abril del 2015, días antes de la primera manifestación del 25 de abril convocada como #RenunciaYa.

Las movilizaciones, plantones y protestas que realizaron los 48 cantones de Totonicapán en la última década han recibido poca o ninguna cobertura y cuando la recibieron fue con fines estigmatizadores. La cobertura que los medios de comunicación dieron a lo ocurrido en la cumbre de Alaska el 4 de octubre del 2012 ejemplifica lo dicho. A pesar de que

las autoridades comunitarias estaban informando desde radios comunitarias y redes sociales, la entonces presidenta de la organización comunitaria denunció el tiroteo contra los pobladores de Totonicapán. Sin embargo, los medios de comunicación difundieron únicamente la versión del entonces Presidente y ahora reo, Otto Pérez Molina quien, en intervalos de quince minutos, cambió la versión de los hechos más de cuatro veces, evadiendo la responsabilidad de su gobierno en el asesinato de 8 personas y las lesiones de 45 personas más a manos de miembros del Ejército de Guatemala, enviados para dispersar la movilización.

En Guatemala se movilizó mucha gente; en las plazas centrales de varios departamentos se reunieron cada sábado miles de personas; algunas reclamaban cambios en la actitud y el ejercicio del poder político de parte de los gobernantes; otras pedían transformaciones radicales en la distribución de la riqueza, el poder y la construcción de un nuevo modelo político incluyente de las mujeres, los pueblos indígenas y las diversidades sexuales en la toma de decisiones. Un fenómeno interesante ocurrió en el lenguaje usado por los medios de comunicación masivos durante los meses de mayo a julio de 2015 para abordar las protestas comunitarias: con el paso de los meses el discurso inicialmente amarillista respecto de las movilizaciones populares se fue tornando más amable, hasta el punto de entrevistar en los plantones a líderes comunitarios.

Cuando se analiza el tratamiento de las notas del diario de mayor circulación en el país, en relación con su discurso sobre las movilizaciones convocadas por

sectores populares, como el paro nacional, ocurrido el 27 de agosto del 2015, se hace evidente que todos los medios de comunicación y organizaciones sociales del país, a excepción del CACIF, estuvieron de acuerdo.

La indignación de un amplio sector de la población que había estado en silencio por décadas, la clase media urbana de la ciudad capital, se movilizó motivada por el enojo debido a la corrupción de altos funcionarios de gobierno. Pero algo sabemos y es que la práctica de la corrupción es tan vieja como la vida misma de la democracia.

Por eso, organizaciones indígenas y campesinas también convocaron a salir a las calles. También llevaron a las plazas, carreteras y caminos sus reivindicaciones durante las protestas. En Guatemala la corrupción está relacionada con el modelo económico, político, cultural y social que ha mantenido en permanente exclusión a la gran mayoría de la población y es ocasionada en gran medida por el racismo, “la débil institucionalidad del Estado, la falta de actualización legislativa, el deficiente acceso a la información pública, la poca participación ciudadana en la toma de decisiones y la impunidad. Todos estos factores que por ser producto de un contexto histórico y de condiciones estructurales no garantizan el cumplimiento de los más elementales derechos humanos” (ICEFI 2015: 13-39). El erario público es un botín al que muchos quieren llegar, pues es garantía de “ascenso social”, de enriquecimiento fácil.

“Las manifestaciones sabatinas, sostenidas por varios meses exigiendo la

renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, fueron la más clara expresión de un modelo de democracia en crisis” (Harald Waxenecker 2015: 2-23), lo que develó el rol que los medios de comunicación han jugado en ella. Gracias al conocido trabajo de la CICIG y el MP, a los reclamos ciudadanos y a las presiones internas y externas, muchos medios masivos de comunicación se vieron obligados a abordar temas que ponían al descubierto los vínculos de empresarios (algunos dueño o accionistas de medios), funcionarios públicos y miembros del Ejército de Guatemala como partícipes de diversas estructuras criminales que encontraron en el PP, que ejercía gobierno en Guatemala, el vehículo que les garantizaba todas las condiciones para conducirse con total impunidad en la evasión fiscal, el desvío de fondos públicos y el descarado desfalco a las arcas del país.

Como se aseguró en párrafos anteriores, antes del 16 de abril de 2015 poco eco hacían los grandes medios de comunicación de las denuncias hechas por vecinos de varios pueblos, autoridades comunitarias y organizaciones de la sociedad civil relativas a la corrupción en el otorgamiento anómalo de licencias de operación a empresas nacionales y transnacionales mineras e hidroeléctricas; del uso inadecuado de los fondos públicos por parte de alcaldes, diputados y gobernadores; o del nepotismo en el otorgamiento de plazas en puestos públicos en los departamentos. Los grandes medios solamente cubrían las movilizaciones comunitarias y paros en carreteras que denunciaban estos hechos para criminalizarlos, usando palabras como “bloqueo”, “turba”, etc.

Uno de los datos que arroja la encuesta NDI 2016 es que el 53.8 % de los encuestados desaprueba rotundamente el cierre de calles, caminos o carreteras como forma de manifestación de descontento. Sin embargo llama la atención que durante las movilizaciones entre abril y agosto de 2015 en ciudad de Guatemala los medios invitaron a participar y justificaban la toma de espacios públicos. La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo en favor de los indignados del #RenunciaYa para manifestarse el 25 de abril, pero amparó al CACIF el 26 de agosto, contra el paro nacional convocado por organizaciones indígenas y campesinas. El tratamiento en los medios de estas noticias era claramente diferenciado. Para el caso del evento convocado al 25 de abril, justificaban la protesta anti-corrupción; el paro nacional lo criminalizaban por provocar pérdidas millonarias en la actividad productiva.

Además es curioso cómo en Guatemala, cuando grupos religiosos realizan sus ritos o se celebran actividades cívicas, también se cierran calles, caminos y carreteras y esto no genera malestar en la población, ya que se justifican como parte del derecho a la manifestación de la fe o del patriotismo. La influencia de los medios en esta forma de pensar es innegable, sobre todo cuando se puede leer, ver o escuchar a generadores de opinión en los medios, referirse a comunidades que se movilizan como compuestas por “bochincheros, salvajes e incivilizados” y no se analizan a profundidad las demandas de los sectores populares que representan ni se considera que estas atañen a toda la población.

Durante la crisis de 2015, a pesar de las acusaciones de serias violaciones a los derechos humanos cometidas por varios funcionarios del gobierno del PP y de las acusaciones vertidas contra Otto Pérez Molina que lo vincularon a masacres cometidas durante la guerra, ninguno de los grandes medios de comunicación dio cobertura ni seguimiento a las denuncias de estos casos y centraron toda la atención en los escándalos vinculados al robo del erario público.

Los grandes medios construyeron un relato que obviaba el costo humano y social de la corrupción y centraron la mirada en la vida ostentosa de los funcionarios y las extravagancias en sus compras con el dinero público, con lo que este se convirtió en el protagonista, en un bien jurídico tutelado cuyo destino importa más que la vida y la dignidad humana. Un caso ejemplificador de esto fue la escasa atención, cobertura y seguimiento dados al ecocidio perpetrado contra el río La Pasión en Sayaxché, Petén, por parte de la empresa de palma aceitera REPSA. Aun cuando este hecho se denunció públicamente durante las movilizaciones sabatinas en la Plaza de la Constitución por el hoy asesinado profesor Rigoberto Lima Choc, los medios masivos insistieron en criminalizar la movilización comunitaria que ocurría en Sayaxché que exigía el cese de las operaciones de la empresa.

Frente a esa avasalladora dinámica, los medios de comunicación caracterizados por el poder de imponer relatos, no lo ejercieron. Gracias a los avances tecnológicos se cuenta con nuevas formas de organización y comunicación, mediante las cuales los antiguos “objetos de

manipulación mediática” quedan sujetos a la apropiación colectiva utilizando herramientas tecnológicas y digitales para la acción y el cambio social. Se trata de lo que los científicos sociales llaman *tecnopolítica*, lo que da a las ciudadanas y ciudadanos medios alternativos de comunicación, tales como radios comunitarias y artistas que movilizan mensajes diferenciados, apartándose así del relato dominante y cuestionando con profundidad las causas de la crisis política de 2015.

Como comenta Quimy de León (2015: 1-2), “La gente hizo lo suyo, además de indignada está dispuesta a que no la vuelvan a engañar y a dejar su papel pasivo. Las movilizaciones también han sido catalizadoras para las decisiones de las cúpulas de poder, ya no las pueden obviar. En las comunidades este escenario está más claro, la defensa del territorio por ejemplo sigue articulando a la población frente a estos otros poderes que buscan despojarles de los bienes naturales, para los analistas antes de abril 2015 los focos de ‘conflictividad’ se pintaban de rojo en la mayor parte del territorio, no así en las ciudad, ahora el escenario tienen a todo el país en ese color. Pues hay grupos organizándose y después de haber abierto los ojos y la boca la gente no será nunca más la misma, no verá la realidad del mismo modo que antes.”

Radios comunitarias, medios digitales en internet, blogueros, tuiteros, artistas y músicos gestionaron sus propios espacios para la expresión y la denuncia. Los medios libres estuvieron presentes desde la ciudad de Guatemala, comunidades y cabeceras departamentales transmitiendo, usando el texto, la palabra, la

imagen, el vídeo y el sonido para documentar, informar y comunicar la jornada de movilización del pueblo guatemalteco durante los meses de abril a agosto de 2015 desde sus vivencias, sin más intermediarios y filtros que las herramientas de la tecnología.

Hoy internet es considerada el medio de comunicación más importante de los últimos tiempos. Según varios estudios, el internet dentro de muy poco tiempo podría superar a los diarios y a la televisión, debido a su naturaleza democrática e interactiva. Sin embargo, el uso de las tecnologías digitales para la comunicación y el internet se han convertido en una moneda de dos caras, y reflejan tanto la realidad socioeconómica como política del país. Por un lado registran la exclusión generalizada del acceso al internet por parte de la mayoría de la población y por el otro lado presentan múltiples oportunidades para los pueblos, comunidades e individuos para mejorar acceso a información y comunicación personales, colectivas o comunitarias.

La encuesta antes referida muestra esa contradicción. El 52.7 % de la población entrevistada asegura usar internet, pero únicamente el 7.7 % de esa población aseguró haberse enterado de las movilizaciones durante 2015 gracias al internet. A pesar del carácter diverso de la sociedad guatemalteca, la información que circula en los medios de comunicación y en el ciberespacio está en español, inglés u otros idiomas que son extraños para los pueblos indígenas.

Los datos obtenidos mediante esta encuesta permiten analizar que si bien con la aparición de los medios de comunicación como la prensa, la radio, el cine o el internet se ha facilitado la comunicación, al mismo tiempo conllevan dificultades para los pueblos y comunidades, por el acceso a equipos y por la educación necesaria para su uso, cosas que han restado a la participación de las comunidades en los procesos de comunicación tecnificada.

Los medios de comunicación alternativos expresan las demandas de estas comunidades y ha sido a través de la lucha de los movimientos organizados populares, de mujeres, campesinos e indígenas, que se han desarrollado diferentes medios de prensa, radio, televisión y video alternativos y comunitarios que construyen comunicación desde y para los pueblos. El uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación ha favorecido la lucha por los derechos y la identificación de los pueblos y comunidades a través de la construcción de narrativas desde sus propios territorios que buscan autodeterminación, apoyo mutuo y compromiso con el respeto de su dignidad.

La coyuntura de 2015 y el análisis del rol que jugaron los medios de comunicación en ella nos permiten comprender la importancia de crear una comunicación para el cambio social. Uno de los desafíos que hoy se plantea para construir comunicación y periodismo es que no se criminalicen las demandas de las comunidades históricamente excluidas y discriminadas en Guatemala.

Bibliografía

- Alcazan, A., Axebra y Quodlibetat (2012). *Tecnopolítica: la potencia de las multitudes conectadas*. Icaria.
- Bourdieu, P. (1997). *Sobre la televisión*. Anagrama.
- Brett, R. y Casaús, M. (eds.) (2010). *El racismo y la discriminación étnica en Guatemala: una aproximación hacia sus tendencias históricas y el debate actual*. Stockholm Review of Latin American Studies.
- ICEFI (2015). *La Corrupción. Sus caminos, su impacto en la sociedad y una agenda para su eliminación*. OXFAM.
- Sartori, G. (2003). *Videopolítica*. Fondo de Cultura Económica.
- Waxenecker, H. (2015). *Las Paradojas*. Prensa Comunitaria.

El clientelismo, como cultura y organización política de la corrupción en Guatemala

Isabel Rodas Núñez

En Guatemala la cultura política se conduce bajo un patrón clientelar. Un conocimiento que como ciudadanos operamos, en cada elección presidencial, a través del sentimiento de votar por el menos perjudicial de los candidatos. No obstante, ese sentimiento del menos inadecuado no ha llegado a vislumbrarse a través del conocimiento del sistema político que los promueve (el clientelar) cuyos arreglos particulares benefician a los grupos de interés que los financian para administrar arbitrariamente los recursos del Estado. Incapaces de pasar del sentimiento al conocimiento, bajo esa sensación, los ciudadanos guatemaltecos acudimos a las urnas con la expectativa de elegir a los candidatos que representen intereses más amplios, que tengan como horizonte de acción una visión de nación. Pareciera, incluso, que para muchos el deber ciudadano de votar se mueve con el sentimiento por apostar en políticos que, cuando menos, se conmisieren de la sociedad guatemalteca y bajo la esperanza de que gobiernen con formas de trabajo que mejoren los escalofrantes indicadores de pobreza, inequidad y violencia.

Frente a nuestra expectativa para ver emerger un ejercicio de gobierno democrático, ¿qué tan comprendido tenemos el régimen clientelar en el que nos reproducimos cuando votamos; qué tan generalizado y qué tan partícipes somos de ello? De la comprensión de estas formas clientelares, ¿podríamos orientar conductas sociales para dirigir nuestras formas políticas hacia otras más participativas; cómo las respuestas a la encuesta levantada en el 2016 para la investigación sobre *Las transformaciones en la cultura política de Guatemala después de la crisis política de 2015* nos dan una idea sobre el conocimiento que tenemos de este sistema político clientelar?

Veamos algunos índices del conocimiento que poseemos sobre las prácticas clientelares frente al deseo por un gobierno democrático. Por un lado, la encuesta NDI 2016, nos da cuenta de dos niveles de prácticas ciudadanas que manifiestan la expectativa por el funcionamiento de un régimen democrático: la tradicional asistencia a los actos electorales y la más reciente aceptación de la manifestación pública como acto legítimo de ciudadanía.

Bajo a esta evidencia de prácticas ciudadanas (el voto y la manifestación), aunque poco desarrollado en las preguntas, la encuesta nos acerca a un tercer elemento que inquiere sobre la percepción de las conductas que riñen con los principios de equidad y de cumplimiento con las normas en un régimen participativo. La encuesta mide la intolerancia que los encuestados tienen sobre los comportamientos fundados en los privilegios originados por las relaciones de parentesco (nepotismo) y clientelares, dirigidos por poderes autoritarios y caudillistas. Esto a través de dos baterías de preguntas: las relacionadas a la confianza en las instituciones políticas y las que implican comportamientos individuales que aprovechan las situaciones particulares para obtener ventajas frente a lo socialmente regulado.

En lo que se refiere al ejercicio del voto, en Guatemala, la participación electoral ha sido una conducta ciudadana constante. Las manifestaciones del 2015 la reforzaron. En una primera vuelta, asistió un 71 % de la población empadronada que se mantuvo en un 56 % para la segunda. Entre los encuestados por NDI 2016, esta práctica registró un porcentaje mayor que el contabilizado por el TSE. Un 86.8 % dijo haber votado, de ellos un 64.6 % lo hizo como un deber ciudadano y un 66 % lo reafirmó contestando que “hay que votar siempre”. Otros, el 14 %, votaron bajo la expectativa de un mejor gobierno y pocos para impedir la llegada de los políticos tradicionales (4.2 %). Algunos, el 4 %, reveló especial animadversión por el candidato Manuel Baldizón cuya campaña mostró los gestos más retorcidos de una operación publicitaria

donde cualquier medio justificaba su “Le toca” en la presidencia.

Por otra parte, siguiendo una secuencia de temas que otras encuestas levantaron desde el 2006, se preguntó si se prefería un régimen democrático a uno autoritario. Para el 2016, las personas encuestadas, a diferencia del porcentaje medido en el período electoral del 2012 cuando se eligió a Pérez Molina, dijeron preferir un régimen democrático (del 65.6 al 70.7 %) por encima de uno autoritario (del 10.7 al 9.6 %). En el intermedio quedó un porcentaje de personas que dijeron ser indiferentes a una u otra forma de gobierno. El gobierno de Pérez Molina puso en evidencia que el modelo de la Mano Dura no alcanzó la anhelada seguridad que fue promovida en su campaña. Recrudesció el hecho que la figura caudillista fue el parapeto de operaciones clientelares.

La segunda práctica política por la que se inquirió en la encuesta de NDI fue la participación en las manifestaciones ciudadanas. El régimen de violencia y terror de los años de la guerra y las prácticas de “acarreados” de gobernantes, grupos de interés y partidos políticos las subsumieron a ser, por un lado, percibidas como acciones instrumentales y, por el otro, a ser vistas como gestos no compartidos por la población *despolitizada*⁴⁸.

48 Con despolitizada me refiero, a parte de ese acto manifiesto por participar en las elecciones, a las conductas de desinterés y de apatía por los asuntos públicos, o como la expresión de la resignación por el estado de las cosas o por su poca capacidad para comprender y empatizar con las demandas de grupos percibidos como ajenos a la propia e individualizada vida cotidiana.

Esta herramienta ciudadana, la de la manifestación pública, recobró sentido tras las conductas absurdas de los gobernantes de turno conducidas en su estrecho marco de legitimidad clientelar. Las declaraciones de la ex-vicepresidenta Baldetti llegaron al paroxismo del ridículo, negando la sórdida evidencia de sus prácticas corruptas, incapaz de desligar los pactos clientelares de sus funciones públicas. Esta inadecuación empujó la movilización ciudadana. Tanto así que el 29 % de los encuestados consideró de igual importancia el acto de votar y el de protestar públicamente. Pero aunque para el 52.4 % de los encuestados el acto de protestar fue conocido y se colocó como un gesto necesario y un 87.2 % dijo estar de acuerdo en su realización, en la práctica no se movilizó: el 87.3 % de los encuestados dijo que nunca participó en las protestas del 2015 y el 8.6 % lo hizo tan solo una vez.

En cuanto a las percepciones sobre el sistema político, la encuesta pregunta sobre la confianza en las instituciones y la tolerancia a los actos arbitrarios. En el caso de las instituciones, previsiblemente, los encuestados manifestaron ninguna confianza en las instituciones fundamentales. Entre ellas, los partidos políticos fueron los más alejados de los ciudadanos (63.7 % de desconfianza), seguidos por los sindicatos (47 % de desconfianza) y la policía (37.1 %).

Finalmente, la encuesta solicita una reacción ante conductas cotidianas que implican sacar ventajas personales. En cada situación se manifiesta algún grado de infracción a las reglas desde el rol del ciudadano en su relación con la

autoridad que le facilita la solución de su necesidad. Las tres situaciones figuradas, preguntadas en el NDI 2016, se plantearon en la encuesta de LAPOP del 2006 y del 2008. La comparación de las respuestas registran los cambios en la tolerancia del ciudadano guatemalteco en las siguientes situaciones: a) un político que recibe un porcentaje (una mordida) por un contrato; b) una madre que para no perder tiempo paga al empleado para agilizar un trámite; y c) una persona que consigue empleo a través de un pariente. A una década de diferencia, la primera y la tercera situación ya eran intolerables, pero para el 2016, se mostraron aún más. A diferencia, la segunda situación (la madre que paga un trámite), hace 10 años fue percibida como aceptable para la mitad de los encuestados, pero para el 2016 fue igual de insoportable que las otras dos conductas.

En conclusión, los datos de la encuesta nos acercan a la idea de la expectativa ciudadana por un modelo de gobierno participativo, que haga funcionar las instituciones. Pero estas no son posibles si las personas que las hacen funcionar juegan las reglas del clientelismo, aceptando la pertenencia a un sistema de favores y contrafavores que desvirtúan la aplicación de la ley que regula el uso particular de los espacios, bienes y servicios comunes.

Nos falta comprender el sistema clientelar bajo el que parece reproducirse nuestra sociedad y su aparato político. En él, su operación arbitraria reposa sobre un intercambio recíproco de favores entre dos personas, el patrón y el cliente, que controlan recursos desiguales. La conducta política clientelar está definida

por cuatro aspectos que explican su versatilidad. El primero es su variación en función del grado de dependencia entre el patrón y el cliente y del grado de voluntad de participación de ambos en ella, es decir que no medie la violencia como medio de coerción, con lo cual estaríamos hablando más de una relación de explotación que de una de carácter clientelar. Un segundo aspecto es su carácter afectivo, es decir, la naturaleza personal (entre dos personas) de la relación y que puede fundarse en la fraternidad, la solidaridad, el amor, el interés, la rentabilidad, etc. Una tercera dimensión es su carácter instrumental en términos del intercambio de favores y el tipo de favores. Aquí tiene que ver cuál es la naturaleza de los bienes intercambiados. Por ejemplo, el patrón podrá controlar directamente la propiedad, el conocimiento o la autoridad sobre los otros y el cliente tendrá como su haber el trabajo, la posibilidad de realizar servicios económicos, militares, políticos, domésticos o sexuales.

Con los datos de la encuesta se inquiere sobre la percepción que las personas tienen de esta modalidad operativa de lo político. Pero los análisis sobre el clientelismo deberían profundizar no solo en calificar sus prácticas como corruptas o identificando a los grupos sociales y a sus estructuras sino estudiando las estrategias puestas en marcha por los actores, en sus modelos institucionalizados y en el funcionamiento de la sociedad que resulta. Frente al modelo de participación democrática resta conocer

qué tan institucionalizada y generalizada se encuentra la cultura política clientelar que da acceso al Estado como principal de acumulación de capital en la sociedad guatemalteca. Su uso y administración privilegiada del espacio, los contratos de bienes y servicios, como todos sabemos, es por la que se establece la fiera competencia. A estas prácticas políticas, las hemos llamado corrupción, pero este término no nos permite comprender las características de la organización y su enraizamiento en la sociedad guatemalteca. El ejercicio reflexivo que nos toca es pasar del sentimiento y del juicio al conocimiento de ellas.

Bibliografía

- Azpurú, D. (2008). Cultura política de la democracia en Guatemala y en las Américas: El impacto de la gobernabilidad, VIII Estudio de cultura democrática de los guatemaltecos, Barómetro de las Américas-Asíes-Vanderbilt University
- Azpurú, D. (2006). Cultura política de la democracia en Guatemala y en las Américas, VII Estudio de cultura democrática de los guatemaltecos, Barómetro de las Américas-FLAC-SO-Guatemala-Vanderbilt University
- Médard, J.F. (1976). Le rapport de clientèle: du phénomène social à l'analyse politique en *Revue Française de science politique*, année 1976, volume 26, numéro 1, p. 103-131.

2015, la Plaza, y sus tareas pendientes

Manolo E. Vela Castañeda

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

2015 pasará a la historia como el año en que los guatemaltecos creímos en nosotros mismos, cuando los resortes de la indignación se tensaron y lanzaron a la calle a miles de ciudadanos que, indignados, fueron aglutinados alrededor de una sola consigna: no más corrupción.

El núcleo de las protestas estuvo animado por una interacción entre el MP y la CICIG, que presentaron varios casos judiciales en contra de actores políticos de primer orden, y “la Plaza”, que es como en Guatemala se le ha dado en llamar a las protestas de aquel año, con sus manifestaciones, concentraciones y un repertorio que integró múltiples formas de acción colectiva. Este núcleo, esa institucionalidad y “la Plaza”, dio forma a un tiempo histórico único del que aquí, ahora, analizaremos algunos puntos, siendo éstos: a.) La Plaza, un asunto de minorías; b.) La Plaza y sus resultados ¿Qué quedó de aquel tiempo? c.) La comunidad de medios, las trincheras de las contiendas por venir.

Para ello haré uso de los datos compilados en la encuesta nacional Guatemala NDI 2016 realizada del 22 de junio al 3 de julio de 2016.

1. La Plaza, un asunto de minorías

Como siempre ocurre, a las protestas concurren minorías. Pero esas minorías cuentan, y mucho, por su significado, y las percepciones que producen, crean. Más que contar cuánta gente asistió, lo que es más importante en una protesta es el impacto que deja en el resto de la población. Porque lo que está en juego en las protestas no es cuánta gente participa, que el número es apenas un medio, sino la legitimidad de las demandas y eso no es algo que se resuelva en la protesta misma, sino en el impacto que la protesta tiene en el resto de la gente, quienes no asisten, sólo ven, se enteran.

La encuesta nos confirma esto: a pesar que la casi totalidad de guatemaltecos (94.5 %) se enteraron de las protestas, solo uno de cada diez (12.3 %) decidió participar. De éstos, a la mayoría (8.6 %) le bastó ir una vez y no más. Apenas el 2.9 % participó varias veces en las protestas. Y un 0.8 % de los entrevistados respondió que en aquella coyuntura participó en las protestas muchas veces. El 87.2 % decidió

no hacerlo. Pero la proporción de la gente que estaba de acuerdo en las demandas era altísimo: 9 de cada 10.

¿Y cuál fue el perfil de esa minoría? El perfil de los participantes, esa minoría, se nutrió de gente que nunca había participado en una protesta. 86.5 % afirmó que nunca había participado, contra un 13.1 % que, indicando lo contrario, provenía de los de siempre, los que han empleado esta forma de acción como parte de su repertorio.

Se trató, además, de ciudadanos de ingresos altos (más de US\$ 800; y entre US\$ 400 y 800). En el primer estrato la relación no es de 9 a 1 sino de 7 a 3. Un 30 % de los entrevistados con este nivel de ingreso participó en las protestas: un 24.7 % lo hizo una vez; y un 4.7 % lo hizo muchas veces. Del siguiente estrato de ingresos, el que se haya entre los 400 y los 800 USD participó un 23.5 %. Los restantes estratos participaron en una proporción de 9 a 1.

Y universitarios. En este estrato la proporción es de 8 a 2; y no de 9 a 1. 13.3 % participaron una vez, 7.9 % participaron varias veces; y, un 1.6 % participaron muchas veces.

Y concentrados mayoritariamente en el departamento de Guatemala. Un 23.5 % de los entrevistados en dicho departamento afirmó haber participado. De éstos: 13.7 % afirmó haberlo hecho en una ocasión, 7.8 % en varias, y 2 % en muchas. En otras regiones la relación 9 a 1 se mantiene más o menos estable.

Ciudadanos que nunca antes habían hecho uso de ese repertorio para plantear

una demanda, de ingresos altos, con educación universitaria y concentrados en el departamento de Guatemala: esas son las características de los manifestantes que llenaron la plaza.

2. La Plaza y sus resultados: ¿qué quedó de aquel tiempo?

¿Qué quedó de aquel tiempo? Entre noticias y percepciones, la gente va procesando lo que ocurrió después de la captura de uno y otro capo de las redes político económicas ilícitas, como la CICIG ha conceptualizado a estos grupos⁴⁹.

Los ciudadanos, de acuerdo con la encuesta, distinguen entre aquellas capturas y el camino que queda por recorrer, los cambios institucionales, pero también en el liderazgo. Y estos cambios ocurren o deben ocurrir en la gestión de gobierno del presidente Jimmy Morales.

Así, cuando la pregunta va dirigida indagar sobre si los entrevistados consideran que se alcanzaron los objetivos de las protestas de 2015, 7 de cada 10 afirman que sí, que los objetivos se alcanzaron. Dos de cada diez afirman que los objetivos se lograron de forma parcial. Uno de cada diez dice que los objetivos no se alcanzaron.

Pero cuando el cuestionario empieza a indagar en el qué sigue después de esta serie de capturas, los valores tienden a venirse para abajo. Por ejemplo, cuando se pregunta sobre si ahora hay menos corrupción, solo cuatro de cada 10 ciudadanos dice que sí, que ahora hay menos; 6 afirman lo contrario: que la corrupción

49 Acerca de esto, ver Saenz (2015).

hoy es igual o peor. Otra interrogante en esta misma dirección apunta a calificar como mejor el desempeño de los funcionarios: allí las opiniones están casi divididas, un 47.8 % piensa que sí, que los funcionarios ahora tienen un mejor desempeño; y 49.9 piensa que no. Para cerrar las percepciones acerca del presente: el 63.8 % considera que el país está estancado, y el 11.4 % estima que lo que se está viviendo es un retroceso. Esto deja las respuestas positivas en apenas un 20.9 %. Lo que tenemos, entonces, es una población que apreció las capturas como un resultado, pero que mantiene escepticismo sobre el proceso cambios que, con la coyuntura de 2015, debieron instrumentarse en los años que siguen.

No obstante este horizonte de escepticismo, de acuerdo con los datos de la encuesta Guatemala debería ser una sociedad movilizada. Casi 9 de cada diez entrevistados (84.7 %) respondieron que ahora hay más interés en organizarse y participar; y 8 de cada diez respondieron que ahora hay menos miedo a protestar.

Y esta organización, participación y protesta se hará sin la concurrencia de los partidos. 9 de cada 10 ciudadanos dice no tener simpatía por ningún partido. La UNE alcanza 3.4 % y el partido LIDER, cancelado por el Tribunal Supremo Electoral en julio de 2016, llega al 2.5 %. En adelante, haciendo un balance por regiones, UNE alcanza valores de 13.7 % de simpatías en la región sur-oriente, un 10.7 % en Petén, un 6.9 % en la región norte y un 4.4 % en la región nor-oriente. FCN Nación, el partido en el gobierno, no alcanzó valores en ninguna región.

Lo que hay aquí, claramente, es un electorado volátil, al que los candidatos se acercan –en época de elecciones– para conquistar sus lealtades, pero nada más. Y una ciudadanía sin liderazgos y sin organizaciones.

¿Y cuál es la agenda? A pesar de la preponderancia que la corrupción, como el problema más importante para el país, pareciera tener (el 23.6 % de los entrevistados estima que este es el problema más importante), el tema principal de la contienda sigue siendo –estimo– de carácter económico social. Si sumamos las respuestas de índole económico social que la gente da a la pregunta por el problema más importante alcanzamos un claro 58.8 %. Ese dato se desgrena entre lo que opinan que es el desempleo el problema más importante (23 %), la pobreza (9.5 %), educación (6.7 %), el costo de vida (5.9 %), la salud (5.5 %), la situación económica (4.6 %), los bajos salarios (3.6 %). La seguridad es una prioridad para el 11.5 % de la población. Hay pues, a pesar de la preponderancia que ha alcanzado la corrupción como problema, una clara identificación por parte de la población de los graves problemas socioeconómicos que el país afronta. Por estratos (de edad, económicos o de ingreso), la calificación de estos problemas es más o menos homogéneo. No obstante, la educación, como problema principal, tiende a ser muy valorado por las personas de ingresos altos, donde alcanza un 15.4 % (en el estrato de ingresos de entre US\$ 400 y 800) y de 17.8 % (en el estrato con ingresos mayores a US\$ 800); y entre los universitarios, donde alcanza un de 19.5 %.

En el horizonte parece muy positivo que 7 de cada 10 ciudadanos estime que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Solo uno de cada 10 es de la opinión de que –en algunas circunstancias– puede ser preferible un gobierno autoritario a uno democrático. A dos más les da lo mismo. “La participación de todos” en contra de un gobierno de mano dura es apoyada por 8 de cada 10; los otros 2 están a favor de la mano dura. A menor edad y a mayor educación los valores de rechazo a un gobierno de mano dura tienden a ampliarse. 9 a 1 en los más jóvenes, de 18 a 35 años; y en los universitarios y en secundaria; y en los de ingresos de más de US\$ 800 y en los de ingresos de entre US\$ 400 y 800. Este dato de los ciudadanos que prefieren la democracia es muy superior a los resultados que, en torno a esta variable, se obtienen en las mediciones que se hacen en América Latina, donde los valores, en más de 20 años, de 1995 a 2016, nunca han ido más allá del 63 % obtenido en 1997. En 2016 el porcentaje es de 54 %⁵⁰.

3. La comunidad de medios, las trincheras de las contiendas por venir

De un lado tenemos a la parte de la población que usa internet (el 52.7 %) y del otro a quienes no lo utilizan (un 47.1 %). Pero este dato –ese 5 a 5– no nos dice mucho. Estratificado por grupos de edad, tenemos que entre los jóvenes de 18 a 35 años la relación de los que usan internet

frente a los que no, es e 7 a 3. Y cuando el resultado se estratifica por niveles de escolaridad, los niveles de secundaria y universidad se hallan por arriba de la media, alcanzando valores de 7 a 3, y de 9 a 1, respectivamente. Por ingresos ocurre otro tanto, a más ingresos, más uso de internet. Obteniéndose, en los ingresos más altos, proporciones de 9 a 1 (más de US\$ 800), y de 8 a 2 (de US\$ 400 a 800), e incluso de 6 a 4 (de US\$ 200 a 400). En el ingreso más bajo, de menos de US\$ 200 la relación es de 3 a 7.

Del mundo del Internet la encuesta nos lleva a otro: las redes sociales. Aquí, el 49.7 % de los entrevistados contestó que es Facebook la red social que más utiliza. Otras redes sociales (twitter, Instagram, WhatsApp) alcanzaron en la medición valores marginales. El uso de Facebook está relacionado con la escolaridad. Son los estratos de ciudadanos con escolaridad secundaria y universitaria donde se usa esta red social: 65.2 % y 86.9 %. Los ciudadanos con primaria emplean esta red en un 24.5 %. Cuando se profundiza en la relación entre redes sociales e ingresos la tendencia es que a mayores ingresos se cuenta con un mayor uso de dicha red social. Los de más de US\$ 800: en un 70.8 % utilizan Facebook; los de ingresos que oscilan entre US\$ 400 y 800: en un 76.9 usan Facebook; y los de US\$ 200 a 400: en un 58.9 % utilizan Facebook. Es el estrato de menores ingresos (menos de US\$ 200), donde no hay uso de esta red (apenas el 30.9 %), el que desequilibra el dato. Es en el sector de más altos ingresos (de más de US\$ 800) donde el 9.7 % afirma emplear Twitter, pero nada más. El uso de esta red, en otros entrevistados, de otros niveles de ingreso, es marginal.

50 Los datos de la encuesta de NDI 2016 difieren de los datos que, sobre Guatemala, reporta Latino-barómetro. (Corporación Latinobarómetro 2016, oct.).

Continuando con el análisis de la comunidad informativa de Guatemala: por un lado tenemos a la Guatemala de los medios tradicionales: televisión (73.6 %), televisión por cable (11.5 %), radio (7.2 %) y prensa escrita (2.3 %). En esos medios (los tradicionales) es donde el 94.6 de los ciudadanos se informan sobre lo que ocurre en el país. De otro, tenemos al 4.6 por ciento de los guatemaltecos que se informa de lo que sucede a través de redes sociales (2.7 %) y de los medios de comunicación en internet (1.9 %). No llegamos ni siquiera a uno de 10. Claro, cuando quienes ofrecen sus respuestas tienen escolaridad universitaria, el dato de los usuarios de redes sociales y medios de comunicación por internet se triplica, pasando a un 15 %. Igual ocurre con los estratos de mayores ingresos. En el más alto (con ingresos mayores de US\$ 800) este grupo llega al 23.2 % (13.5 % de redes sociales más 9.7 % de medios de comunicación en internet).

De igual manera, cuando se indaga por la principal fuente de noticias para enterarse sobre el proceso electoral, los resultados nos indican que en un 94.6 % los ciudadanos usan medios tradicionales: televisión (85.2), radio (6 %) y prensa escrita (3.4 %). Un 3.6 % emplea

medios alternativos, digitales (redes sociales: 2.2 %; y 1.2 % medios digitales). En los universitarios este universo casi se triplica, llegando a un 10.4 % que se informó del proceso electoral a través de redes sociales (6.9 %) y medios digitales (3.5 %). Las redes sociales, como canal de información en torno al proceso electoral, fueron importantes también para el estrato de ingresos más altos (arriba de US\$ 800) alcanzando un 16 %; en el siguiente estrato (de entre US\$ 400 y 800) los valores alcanzan un 6.6 %.

Lo que el análisis del consumo de información nos revela es el peso, todavía inmenso, que en las batallas de ideas tienen –aún– en Guatemala los medios tradicionales (televisión, televisión por cable, radio y prensa escrita).

Bibliografía

- Corporación Latinobarómetro (2016). Latinobarómetro. Informe 2016, Buenos Aires, 2016.
- Sáenz de Tejada, R. (2015, oct.). Las redes político económicas ilícitas, *Revista Análisis de la Realidad Nacional* (4-82): 14-32.

¿Qué nos dejó la Plaza?

Marielos Monzón

La primera noticia que tuve sobre la convocatoria a manifestar en la Plaza fue a través de un compañero de trabajo. Como no tengo *Facebook* no estaba al tanto del llamado que un grupo de ciudadanos realizaba por las redes sociales. Lo primero que se me vino a la cabeza fueron dudas sobre si se trataba de una iniciativa legítima o si habría alguien detrás que estuviera “moviendo los hilos” de la protesta con algún propósito oculto. Externé mi escepticismo respecto de la convocatoria. Este oficio de periodista me ha vuelto muy desconfiada, pensé. Pero visto lo visto, es mejor hacerle caso al instinto y al viejo adagio de “piensa mal y acertarás”.

Unos días después mi colega me hizo llegar la invitación que circulaba en las redes, en la que se pedía acudir a la Plaza para rechazar la corrupción y hacerlo de forma pacífica y vistiendo cada quien como quisiera, de manera multicolor y diversa, como somos en Guatemala. Eso me dejó otra sensación. ¿Vas a ir?, me preguntaron. Inmediatamente pensé, en base a la experiencia de los últimos 15 años, que a lo sumo habría un grupo de cien personas manifestando, pero que igual

que otras veces habría que ir y apoyar. La indiferencia había sido el factor común de los últimos años. Ni la violencia homicida que alcanzaba cifras récord era capaz de hacernos reaccionar y movilizarnos. Mientras los pueblos indígenas y los sectores campesinos nos daban lecciones en el ejercicio de los derechos a la manifestación y a la movilización, los ciudadanos parecíamos tener horchata en las venas.

Finalmente llegó el día. El tráfico lento hacia la zona 1 fue lo primero que llamó mi atención. Los letreros en los estacionamientos indicando que no había espacio, empezaron a ¿entusiasmarme? Al llegar, la Plaza rebosaba de gente. Banderas, tambores, pitos, mantas y consignas improvisadas. ¿Qué es lo que dicen? preguntaba una señora que seguía el ritmo de los gritos con las manos. ¡Ve pues!, pensé, parece que nos volvió la sangre a las venas.

Durante las siguientes semanas el entusiasmo fue creciendo. Quizá el momento más conmovedor para mí fue ver bajar una enorme columna de jóvenes bajo una lluvia torrencial, con banderas, mantas y pañuelos. El encuentro de los estudiantes

de la USAC con sus compañeros de las universidades privadas antes de enfilarse hacia la Plaza me erizó la piel. Algo había empezado a cambiar en Guatemala.

Pensé en mi papá, un catedrático universitario asesinado en el año 1981, y en lo mucho que le hubiera gustado ver a aquellos cientos de muchachas y muchachos (entre los que estaba su nieto) tomando las calles. Capaz y empezamos a enterrar el miedo del “no te metás que algo te puede pasar”, me dije, y eso ya es ganancia.

Las revelaciones del MP y la CICIG, que con lujo de detalles mostraban la enorme maquinaria de corrupción del Partido Patriota, sumadas a la desfachatez, al evidente y notorio enriquecimiento y al cinismo en las declaraciones de los gobernantes, además del cansancio acumulado pesaron, por fin, más que la desidia y los espacios de confort en los que había permanecido el grueso de las capas medias.

Aunque la gente disminuyó por algunas semanas, la Plaza nunca estuvo vacía. La renuncia de la ex Vicepresidenta reafirmó la importancia de la movilización social. La gente se multiplicó y exigió con más fuerza la salida del Presidente. “Otto, ladrón, te vas a ir a Pavón”, coreaba la multitud mientras una piñata con la figura del entonces mandatario recorría la Plaza.

Los sectores más conservadores temían que con la salida de Pérez Molina de la presidencia se truncara el proceso electoral y se pusiera en peligro la “estabilidad democrática”. Pero la gente seguía pidiendo la renuncia. El paro del 27 de agosto de 2015, ese al que el sector privado aglutinado en el CA-CIF se había opuesto desde un inicio,

fue lo suficientemente grande que quienes habían protegido hasta entonces al presidente (en aras de una disyuntiva de estabilidad) se convencieron que ya nada podían hacer. La gente estaba hablando: No lo querían a él y tampoco al candidato que iba punteando en las encuestas. El “no te toca” cobraba fuerza y la pésima “tradición” de que quien queda de segundo en la elección anterior es el próximo presidente del país se interrumpía, cambiando así el panorama electoral.

A esas alturas se hizo evidente que lo que unía a la gente de la Plaza estaba en lo que NO querían, más que en lo que deseaban. Era una movilización de repudio por encima de otras cosas. Primero Roxana Baldetti, después Otto Pérez Molina y por último Manuel Badizón y Sandra Torres personificaron el rechazo de la Plaza. Aunque el repudio a los actos de corrupción fue el común denominador respecto de estos personajes, no puede dejar de mencionarse ciertas expresiones de machismo y clasismo que afloraron durante las protestas y que por razones de espacio no analizo.

La necesidad de una reforma al sistema político y electoral también se hizo sentir en la Plaza. Nadie negaba la importancia de cambiar las reglas del juego. Las discrepancias fueron siempre los tiempos y la profundidad de la reforma. Hubo un grupo de personas y sectores que acuñaron la consigna “en estas condiciones no queremos elecciones”; lo que pedían era la suspensión del proceso electoral hasta que se aprobara una reforma de vigencia inmediata que diera un marco legal distinto al proceso electoral que se avecinaba. Otros grupos y sectores abogaban por

la continuidad del proceso sin alteraciones, con el compromiso de que la reforma se aprobara una vez estuviera electo el nuevo Congreso. Eso fue exactamente lo que pasó, las elecciones transcurrieron con normalidad y la asistencia a las urnas superó las expectativas.

Y es que en la cultura política guatemalteca está muy arraigado el tema del voto. La encuesta nacional sobre cambio en la cultura política del NDI así lo refleja: del total de personas entrevistadas el 64.6 % contestó que vota porque es un deber ciudadano y apenas un 14 % lo hace para que las cosas sean mejores en el futuro. Y a las preguntas “¿Qué está más cerca de su manera de pensar?” y “¿Cómo cree que es mejor actuar para que usted y el país avancen más?” Siete de cada diez personas piensan que siempre hay que votar y apenas tres de cada diez que hay que votar pero también protestar.

El MP y la CICIG le dieron a la gente los elementos suficientes para hacerla reaccionar y salir del letargo, y la Plaza le dio la fuerza necesaria al MP y la CICIG para continuar con sus investigaciones hasta las últimas consecuencias. Sin la gente en la calle era muy difícil llegar hasta el núcleo duro del poder.

Los resultados de la encuesta reflejan que un 84.7 % de la gente piensa que hay más disposición de organizarse y participar y un 78.2 % que hay menos miedo de protestar. Por la vía de los hechos se dio un cambio, no de la magnitud y la profundidad que este país requiere, pero las cosas no son las de antes.

El ex Presidente y la ex Vicepresidenta, otrora todopoderosos, enfrentan varios

procesos penales y están hoy en la cárcel a la espera de juicio. Junto a ellos decenas de funcionarios del más alto nivel enfrentan cargos por corrupción, tráfico de influencias y asociación ilícita. Se rompió el círculo perverso del “le toca” y los dos partidos políticos que se disputaban la Presidencia quedaron fuera de la contienda a pesar del clientelismo y del millonario derroche de recursos. El sistema de justicia empezó, de sopetón, a funcionar y una cuestionada Corte Suprema (que ha perdido ya a dos de sus miembros) no ha tenido más remedio que empezar a cumplir con su deber y dar trámite a los antejuicios. Los diputados, más por miedo que por vergüenza, aprobaron una reforma electoral que aunque incompleta modifica en parte los vicios gigantescos del sistema. Además, se rompió la burbuja de impunidad que protegió por años al intocable sector económico. Falta mucho, es verdad, pero todo esto en un país como el nuestro no es una cosa menor.

La Plaza no dio para más, eso también es cierto. La elección del actual Presidente y de los diputados al Congreso así lo confirma. Haber creído que con las mismas reglas del juego los resultados serían diferentes y haber pensado que la “nueva política” la personificaba un cómico conservador, fundamentalista, ignorante de las cuestiones de Estado y sin plan de gobierno, que montó su campaña a partir del eslogan “ni corrupto, ni ladrón” nos retrata como sociedad. Jimmy Morales es el reflejo de su electorado y de la debilidad de nuestra cultura política. Y eso, como quedó demostrado, no se transforma con la investigación ni con la persecución penal y tampoco con el entusiasmo de una Plaza llena de gente.

Por eso, apenas 7 meses después de la elección, un 49.9 % de las personas encuestadas señalan que no hay un mejor desempeño de las autoridades del Estado y un 56.9 % piensa que no hay menos corrupción. El 63.8 % de los encuestados cree que en relación al año pasado el país está estancado y el 11.4 % que está en retroceso. Pero lo más preocupante es que un 68.1 % manifiesta que NUNCA participaría en un partido político bajo ninguna circunstancia, aun cuando no le simpatiza ninguna de las agrupaciones existentes, y así las cosas difícilmente van a cambiar⁵¹.

Dos elementos adicionales que aparecen en la encuesta permiten entender mejor algunas de las razones que contribuyen a la debilidad de la cultura política en Guatemala. En la sección referida a los medios de comunicación, la encuesta señala que el 73.6 % de los guatemaltecos se informa sobre lo que ocurre en el país a través de la televisión abierta⁵². Así las cosas. Sigue siendo evidente la enorme influencia que el monopolio televisivo ejerce sobre la ciudadanía, sobre el sistema político-electoral y sobre la construcción de la agenda pública a través de la visión de la realidad que se transmite en los informativos y la programación regular⁵³.

Siendo un tema central para la calidad de la democracia, la discusión respecto de

una profunda reforma al sistema de propiedad de los medios y al mecanismo de entrega de los usufructos de las frecuencias radioeléctricas es impostergable. Un cambio en la cultura política guatemalteca pasa necesariamente por la democratización en la propiedad de los medios de comunicación, que de manera inmediata se reflejaría en la pluralidad de enfoques, coberturas y en la visibilidad de temas y sectores que hasta ahora se ven ignorados, invisibilizados y ridiculizados.

El tema no se agota aquí, es necesario continuar con el análisis y la reflexión profunda sobre lo acontecido en Guatemala durante el 2015 y lo que seguimos viviendo a partir de aquel momento. Las condiciones objetivas de nuestra realidad hacían imposible pensar que ésta sería “otra primavera democrática” como la de 1944, pero dejar pasar la oportunidad, que nadie estaba esperando que ocurriera, y dejar de construir una alternativa que sobre la base de la unidad y la organización transforme profundamente nuestra sociedad, aprovechando este momento, sería tremendamente irresponsable y denotaría que no hemos entendido nada.

Ni el triunfalismo absurdo de quienes creen que Guatemala ya cambió, ni el derrotismo de quienes piensan que todo fue producto de una maquiavélica estrategia para manipularnos nos llevará a nada. Este país merece un auténtico esfuerzo de transformación que le devuelva la dignidad a quienes históricamente les ha sido negada.

Las reformas estructurales pendientes pasan entre otros ámbitos por la

51 El 91.1 % de los encuestados señaló que no simpatiza con ningún partido político.

52 Según la encuesta, el 11.5 % de la población se informa a través de la televisión por cable, el 7.2 % por la radio, el 2.7 % por redes sociales y el 2.3 % por la prensa escrita.

53 Recordemos que Jimmy Morales produjo y condujo junto a su hermano un programa cómico en la televisión abierta.

erradicación de la pobreza y la desnutrición crónica, por la disminución de la brecha de desigualdad, el acceso a la tierra, el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, el cumplimiento de la legislación laboral y las condiciones dignas en el trabajo, el acceso a la educación y a la salud universales y la transformación del sistema económico que hasta ahora ha privilegiado a muy pocos.

Esa agenda merecería una y cien plazas llenas a reventar y la construcción de una alternativa política con protagonismo real de campesinos, estudiantes, indígenas y mujeres, fuerzas sociales de mucho potencial democratizador y transformador, para darle a lo que hace un año se insinuó en la Plaza: pluralidad social y profundidad de perspectiva que realmente cambien el país.

Yo no confío en los periodistas, ¿y vos?

Gustavo Berganza

1. Antecedentes

Estamos en un contexto en el que dos casos, “la Línea”, que inició la debacle del gobierno presidido por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y el llamado “cooptación del Estado”, nos ponen en guardia respecto a los medios de comunicación.

En el primer caso, el presidente de la empresa Corporación de Noticias, propietaria de los matutinos Siglo 21 y Al Día, se ha convertido en colaborador eficaz luego de haber sido encausado por formar parte de una red de defraudación fiscal y contrabando.

En el segundo caso, más complejo porque implica complicidad para hacerse de un grupo de medios (nuevamente Siglo 21 y Al Día) por parte de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti para tratar de neutralizar los ataques y la información negativa que se divulgaba en otros medios (primordialmente en el matutino elPeriódico) y, además, lograr exoneraciones de impuestos, multas e intereses atrasados y, como guinda, transformar en legítimo el dinero recibido como sobornos por Baldetti, ha llevado también

a que el gestor del negocio y primer presidente de Corporación de Noticias haya sido ligado al proceso bajo el cargo de asociación ilícita, y se encuentre bajo arresto domiciliario.

Al momento de escribir este artículo, se encuentra prófugo el propietario de otro grupo de medios, Grupo A, que integra a los canales de cable Canal Antigua, Antigua Sports, al informativo de internet Diario Digital y al semanario de información general Contrapoder. Al propietario de Grupo A se le imputa haber participado de una colecta ilegal para regalarle a Otto Pérez una lancha lujosa, una casa en la playa y un helicóptero. La lancha costó Q 2 millones; la casa de playa, ubicada en las playas de Monterrico, en el Pacífico guatemalteco, requirió US\$ 1 millón; y el helicóptero (Bell 470GX, modelo 213) costó US\$ 3.5 millones. De acuerdo con la CICIG el valor total los regalos para el exmandatario asciende a Q 33 millones.

Pero el premio, tanto por volumen como por relevancia en términos del tamaño de la empresa, se da en la denuncia contra las empresas Radio Televisión Guatemala S.A. (propietaria de canal 3)

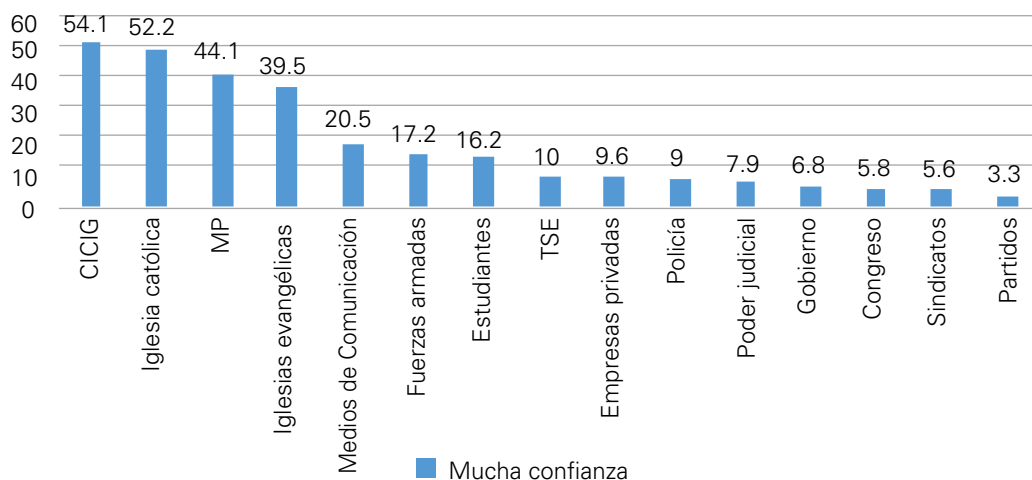
y Televisiete, S.A., cuyos representantes legales son procesados por haber canalizado contribuciones ilegales a la campaña presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti y luego haber sido compensadas ambas empresas con contratos millonarios en publicidad del gobierno. Esto tiene relevancia porque por primera vez se ataca a un monopolio que ha usufructuado todas las frecuencias hábiles de la banda VHF de televisión, con gran ascendencia sobre políticos locales, a los que concedía créditos en publicidad electoral e *informerciales* para promoverse ellos y ellas, y por el hecho de que su propietario real, que no aparece como propietario legal en los registros guatemaltecos, es Ángel González. González, no hay que olvidarlo, tiene estaciones de televisión en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras, Ecuador, México

(en Chiapas), Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y, por supuesto, Guatemala⁵⁴.

2. Los medios en descenso, pero no tanto

En ese contexto, los medios de comunicación guatemaltecos, que solían situarse en términos de aprecio inmediatamente después de las iglesias católica y evangélicas, aparecen en la encuesta NDI 2016 en un quinto lugar (gráfica 1). Y aunque la gráfica solamente recoge las respuestas que hablan de una confianza grande (mucho confianza, en la opción presentada en el cuestionario), vemos que las instituciones que preceden a los medios los duplican el nivel de aprecio que la ciudadanía guatemalteca expresa por ellos.

Gráfica 1
Confianza en instituciones

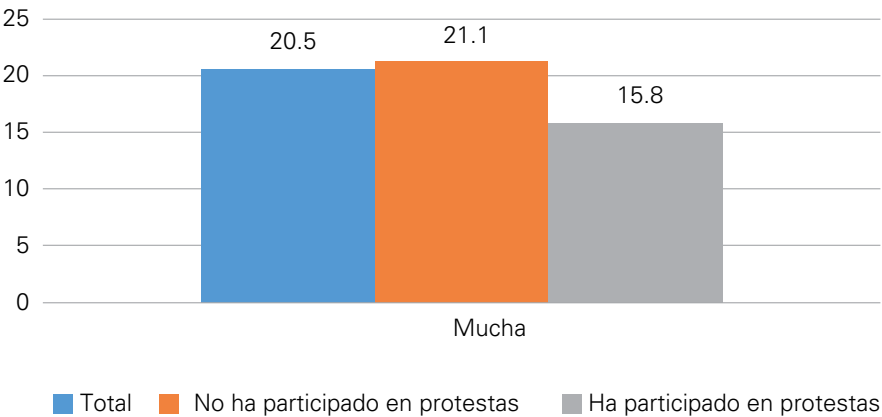


54 Datos tomados de la página de Albavisión. Recuperada el 12/09/2016 de <http://www.albavision.tv/mexico>

Si bien en promedio uno de cada cinco guatemaltecos expresa mucha confianza en los medios de comunicación, entre el grupo de ciudadanos que ha participado en manifestaciones, en cuenta las de 2015 para exigir la renuncia de Roxana Baldetti y Otto Pérez, este indicador de

aprecio es más bajo: desciende a 15.8 %. La probable variable que incide en esta baja de aprecio probablemente tenga que ver con un mayor nivel de información sobre el panorama que presentamos en la primera sección de este artículo.

Gráfica 2
Confianza en medios de comunicación



No obstante, si esa institución divulgadora de noticias y comentarios y difusora de publicidad a la que llamamos *medios de comunicación* experimenta un descenso, esto no sucede con quienes laboran en ella, los periodistas, quienes reciben un trato más benigno. En este sentido, casi

la mitad de los encuestados se adhiere a la idea de que los periodistas dicen la verdad, frente a un 38.9 % de personas que piensa que son mentirosos.

Veamos los datos que he entresacado para formar el cuadro 1:

Cuadro 1
Valoración de los periodistas

Percepción	Total	Participación en manifestaciones		Región			Escolaridad		Edad		Ingresos
		No	Sí	Me-tro	Sur-occ.	Nor-occ.	Prima-ria	Univer-sitaria	18-35	56 y más	\$800 y más
Dicen la verdad	48.6	49.8	40.6	43.6	65.2	44.1	45.8	51.4	54.1	44.4	58.1
Son mentirosos	38.9	38.1	44.7	41.7	26.5	51	43	33.3	33.9	45.6	41.9

La percepción de credibilidad es mayor entre quienes no han participado en manifestaciones, en tanto que entre quienes sí se han sumado a movilizaciones de protesta la idea de que los periodistas mienten es mayor que la media nacional.

Utilizando estos datos para hacer un descriptor del público para el cual los periodistas tienen más credibilidad, podemos decir que se trata de la población que se ha mantenido alejada de movilizaciones, lo que es un indicativo de un desarrollo débil de su ciudadanía. En términos de edad, llama la atención en el nivel de escolaridad, ya que son los que tienen educación primaria y quienes están en la universidad o han concluido sus estudios universitarios quienes ven con mejores ojos a los comunicadores periodísticos. En términos de nivel de ingresos y geografía, son quienes están en el escalón más alto de ingresos ofrecidos por la encuesta y, además, residen en la zona sur occidental (Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez) los que los aprecian más. Recordemos que la “Teoría del Establecimiento de la Agenda” (*Agenda Setting Theory*) habla de un mayor efecto de los medios en cuanto a sustento de percepciones en la población menos educada y en la que tiene más escolaridad. Los resultados de esta encuesta pueden servir para postular un complemento a esa teoría, en términos de la credibilidad de los comunicadores periodísticos, ya que este factor es, precisamente, uno de los que incrementa el efecto de lo que difunden los medios⁵⁵.

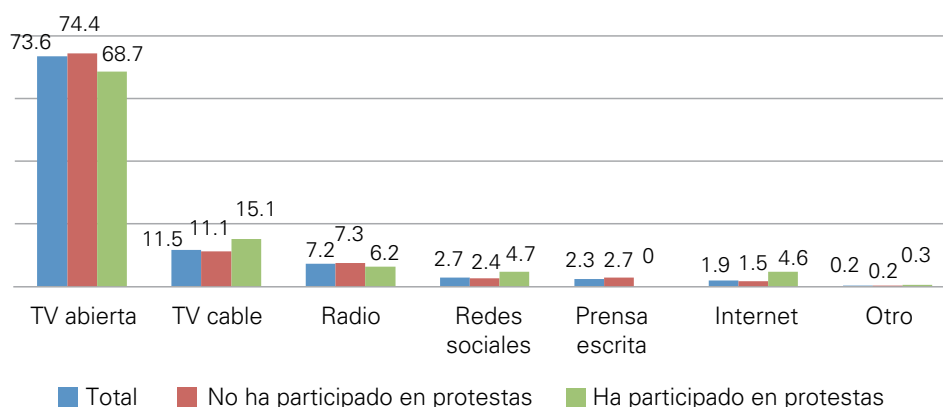
En el caso del grupo en el que se piensa que los periodistas mienten vemos también un hecho notable. Está constituido por quienes participaron en las manifestaciones, o sea, quienes de acuerdo con la teoría democrática tienen un mayor desarrollo ciudadano porque se implican en demandas al sistema. Sin embargo, no son los más educados ni los más jóvenes: tienen educación primaria, tienen 56 años y más y residen en la zona nor-occidental del país (Huehuetenango y Quiché). Esta concentración de rechazo a los periodistas en estos departamentos también agrega otro dato excepcional: son departamentos con altas concentraciones de poblaciones indígenas (53.9 % en Huehuetenango y 83.9 % en Quiché), en donde 7 de cada 10 personas viven en situación de pobreza (71.3 % en Huehuetenango y 81.3 % en Quiché)⁵⁶. En este caso, una mayor conciencia crítica, traducida en la desconfianza a los periodistas, y un mayor desarrollo ciudadano no necesariamente parecen estar vinculados a más educación, juventud (que es el grupo en donde se generaron las protestas) ni nivel de ingreso.

Aun así, los medios tradicionales, tal como puede verse en la gráfica 3, continúan siendo la fuente principal de la cual la ciudadanía toma su información:

55 McCombs, M. (2006) *Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión pública y en el conocimiento*. Barcelona: Paidós.

56 Instituto Nacional de Estadística. (2015). *Encuesta de Condiciones de Vida 2014 –ENCOVI 2014*. Recuperado el 12/09/2016 de <https://www.inec.gov.gt/sistema/uploads/2015/12/11/vjNVdb4I-ZswOj0ZtuivPlcaAXet8LZqZ.pdf>

Gráfica 3
Fuente de información



La descripción del nuevo panorama mediático post crisis no puede hacerse sin mencionar la presencia de nuevos medios, las llamadas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). En Guatemala, de acuerdo a la encuesta, el 52.7 % de la población tiene acceso a internet y de esta población, las tres cuartas partes navega al menos una vez al día. Y esto, se da principalmente por medio de teléfonos inteligentes (*smartphones*).

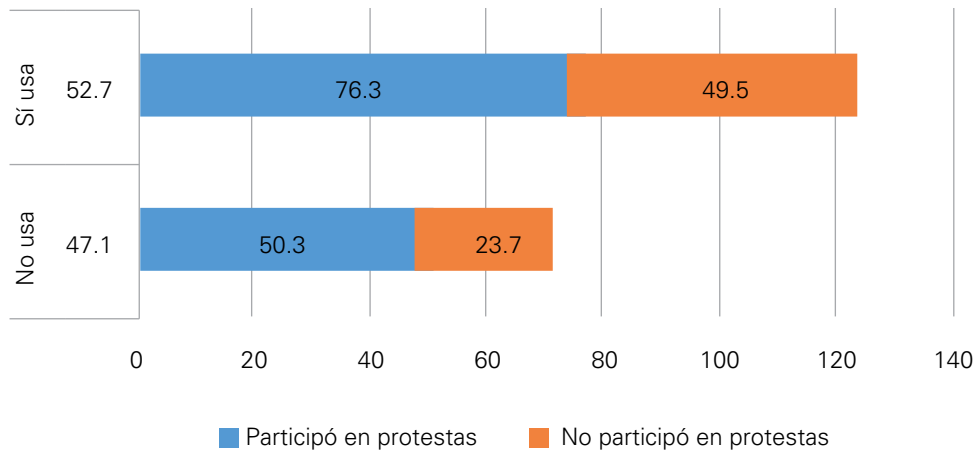
Aquí vale la pena desagregar el total de la población entre quienes han participado en manifestaciones y quienes no lo han hecho. Recordemos que el primer aviso para asistir a manifestar contra el gobierno se dio vía Facebook, luego se expandió a Twitter y por último el aviso fue replicado en medios tradicionales, como la radio. Tal como nos dice el periodista Bill Barreto en su crónica sobre la primera de las protestas, que se realizó el 25 de abril 2015: “La convocatoria parte de ocho personas que hasta ahora no figuran públicamente. Una invitación masiva en Facebook, pronto aparecen

etiquetas en Twitter y otras redes sociales, consignas que luego se repetirán en carteles y mantas.”⁵⁷

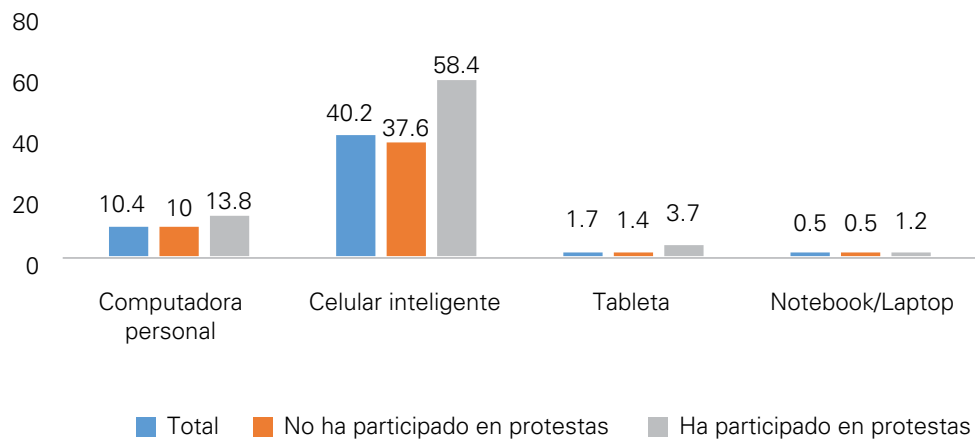
En este sentido, es en el grupo de las personas que han participado en manifestaciones entre quienes se manifiestan los valores más altos en cuanto a uso de internet (76.3, más de 23 puntos porcentuales sobre la media nacional), uso de celular inteligente para acceder a internet (58.4 frente a 40.2 % del promedio nacional); uso de Facebook (67.9 frente a 49.7 % nacional) y uso intensivo de internet. El grupo que participa en protestas es el mayor entre quienes navegan varias veces al días en internet: 45.8 % (gráficas 3, 4, 5 y 6).

57 Barreto, B. (2006). “El clamor de una manifestación: #RenunciaYa”. Plaza Pública. Recuperado el 13/09/16 de: <https://www.plazapublica.com.gt/content/el-clamor-de-una-manifestacion-renunciaya>

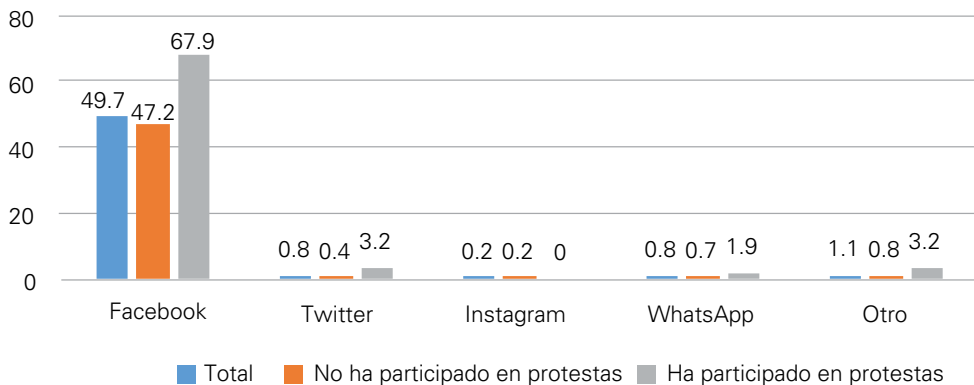
Gráfica 4
Uso de internet



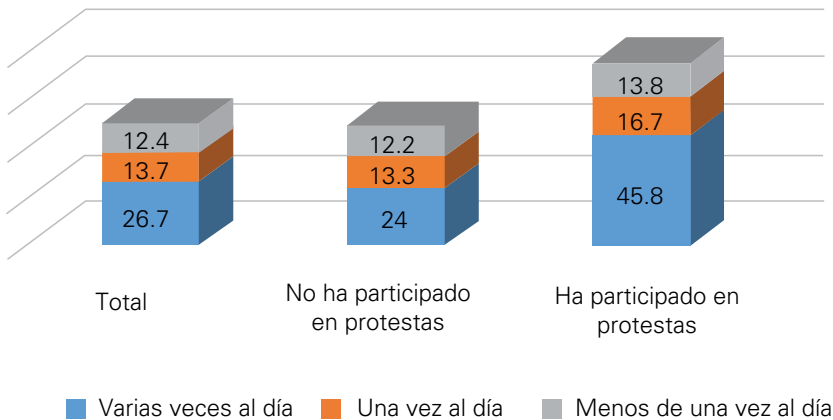
Gráfica 5
Dispositivo más utilizado para acceder a internet



Gráfica 6
Red social que más utiliza



Gráfica 7
Frecuencia de uso de internet



Esto nos lleva a pensar que la facilidad de acceso a internet ha generado entre quienes asistieron a las manifestaciones una mayor disposición a comunicarse por esta vía y, en consecuencia, a intercambiar información de primera mano y a confrontar con la experiencia propia lo que los medios difunden. De nuevo, recordemos la “Teoría del Establecimiento de la Agenda”, que nos dice que se tiende a creer más en los medios porque las audiencias no suelen tener acceso a información de

primera mano, lo cual limita sus posibilidades de contrastar lo que los medios tradicionales les ofrecen. Si la información que se intercambia vía internet y fundamentalmente por Facebook no es mediada y entra en contradicción o disputa la veracidad de lo difundido en medios tradicionales, es comprensible entonces el descenso en credibilidad de los medios a un quinto lugar, y el elevado porcentaje de quienes cuestionan la credibilidad de los periodistas.

Facebook se ha convertido en un medio en el que se debate con mucha energía sobre temas propuestos por los medios tradicionales y por los propios usuarios de esta red social. Y aunque la información no necesariamente se ajuste con frecuencia a los hechos, representa un contrapunto y una alternativa a lo que ofrecen los medios tradicionales.

En este sentido, podemos aventurarnos a postular que a mayor uso de internet y, sobre todo, Facebook, menor confianza en medios tradicionales y menor credibilidad de quienes trabajan en estos.

3. Conclusión

La crisis política afectó a los medios de comunicación tradicionales en Guatemala, haciendo ver las conexiones perversas entre éstos y la corrupción. Los casos presentados por el MP y la CIGIG mostraron la utilización de estrategias ilegales ya sea para intentar neutralizar a medios críticos (como en el caso de Corporación de Noticias en relación a elPeriódico) o para obtener lucrativos contratos de publicidad –(como ha sucedido con los canales 3 y 7 del consorcio continental Albavisión). Esto muy probablemente ha incidido en el descenso del aprecio ciudadano a los medios frente a otras instituciones guatemaltecas.

Por otra parte, esta crisis que perjudicó la credibilidad de medios tradicionales, se dio en un contexto en el que estos se encontraban en repliegue, en cuanto a audiencia, debido al incremento de uso de internet y de redes sociales como vehículos comunicativos. El descenso en el

costo de teléfonos inteligentes y de los planes de uso, que incluyen acceso a internet, fue un factor que incidió en el incremento de la web y de Facebook como vehículo comunicativo.

La encuesta nos muestra que todavía la mayoría de guatemaltecos utiliza como fuente primaria de información medios tradicionales como la televisión abierta, la televisión por cable y la radio. Sin embargo, el crecimiento en la población con teléfonos inteligentes ha ampliado el uso de internet y de Facebook, primordialmente como un vehículo alternativo de comunicación que compite en algunos casos, y cuestiona en otros, lo que se difunde por medio de la televisión, la radio y los medios impresos. Por otra parte, la posibilidad de interactuar entre usuarios genera debates que con frecuencia critican y ponen en duda lo que los medios tradicionales difunden.

La convocatoria a las protestas se originó en Facebook y de ahí se propagó a otros medios. En ese sentido, no es de extrañar que haya una gran coincidencia entre quienes han asistido a las protestas y son, también, quienes más utilizan internet y Facebook y, a la vez, cuestionan la credibilidad de los periodistas.

En dos platos, la coincidencia en la accesibilidad de terminales móviles tipo *smartphones* y la crisis política ha generado un segmento social que participa más en la discusión pública y cuestiona a los medios tradicionales y sus agentes, los periodistas. Estamos en una época en que la vieja política y los viejos medios han empezado a perder su hegemonía.

Transformaciones en la cultura política de Guatemala: Una perspectiva después de la crisis política de 2015

Hugo Peña

Aunque parece en percepción que Guatemala ya cambió, en la realidad y en la acción social y política quizá sea el inicio de una transformación que tomará forma con el correr de los años. Es imposible que el fondo estructural de una operación sea distinto cuando el sistema y las formas de elección siguen siendo los mismos.

Guatemala no cambió, Guatemala cambió de manos, no de rumbo.

Hablar de transformación de cultura en un país en donde lo conservador es el primer rostro, es un reto público y social. Guatemala es un país conservador de primer rostro, lo que significa en términos populares, "tiro la piedra y escondo la mano", pero así somos, porque aún prevalece la cultura histórica del miedo, con el atenuante de que hoy el amor a la sangre y a la muerte pública son la suma del destierro al respeto por nosotros mismos. En otras palabras, el robo a nuestra identidad, dignidad y recursos, ha hecho que abandonemos valores como la soberanía y abracemos sin vergüenza a la sobrevivencia como

aliada, sobrevivencia cotidiana que nos envuelve en el conformismo.

Con esta pequeña introducción trataré de construir un documento de ejes de opinión y análisis para que el reto público sea construido por todos y el reto social de equidad ciudadana nos permita participar con libertad y sin miedo.

La crisis política de 2015 provoca, sin duda, un despertar social y público hacia la dispersión. Dispersar significa separar o diseminar algo que estaba unido. Guatemala tiene de manera natural un territorio con privilegios, con variados micro climas, con tierras cultivables y nobles, con historia y recursos naturales que nos permite tener como sociedad estabilidad emocional. Si hablamos de recursos, en Guatemala, no nos falta nada. Sin embargo, cuando hacemos el recorrido tratando de dar forma a nuestra crisis, nos encontramos con actores inhóspitos, como sacados de cuentos de hadas, que se han ocupado de manera constante de mantener a la gente que habita nuestra tierra en condiciones de pobreza latente y miseria profunda.

En el trazo del tiempo ninguna generación de políticos de los últimos sesenta años ha logrado sembrar la esperanza del desarrollo; por el contrario, se han ocupado de diseminar nuestros valores, nuestra historia y nuestro origen sin siquiera entender que destruyen un territorio único. Hablar de transformar cultura política en Guatemala es iluso, irrisorio y estúpido. La transformación de la que podríamos hablar no es más que la transculturización a la que como sociedad estamos sometidos.

Y es muy simple: acá en los últimos sesenta años nos han impuesto de todo. Para entenderlo a manera de vivencia propongo el siguiente ejemplo: nos fue impuesta la lucha ideológica entre la izquierda y la derecha y como consecuencia de ese hecho 250 mil personas murieron de manera aberrante en una guerra interna que ha cambiado de nombre en los últimos treinta años como cambiar de pañal a un niño.

¿Cuál era el afán de la guerra, si hoy cuarenta años después el país está más pobre y menos preparado para la paz? La guerra fue montada al igual que las ideologías; y la gente guatemalteca, la originaria, la que nace aquí y está destinada a morir aquí, no entiende por qué ha sido diseminado su sentimiento, su raza, su cultura, sus valores, sus tierras y sus aguas. Los guatemaltecos que vivimos aquí solo leemos que el cambio está cerca, que la transformación cultural de la política puede darse, que el conflicto debe parar y que los últimos acontecimientos en el país pueden significar una nueva ruta, un nuevo sentimiento y un nuevo corazón.

La transformación cultural política está en el reconocimiento de lo que somos, en la aceptación de lo que podemos dar y en asumir con entendimiento y responsabilidad lo que ninguna generación de políticos ha conseguido en la historia de la democracia anárquica que vivimos todos los días. Por esta razón es natural que la respuesta del guatemalteco común y corriente siempre vuele a los extremos y esté creando una sociedad victimizada, que pasa a victimaria dependiente del momento.

Por estar urgida de un cambio de condiciones y oportunidades, la sociedad guatemalteca que ha sufrido por las inconsistencias de sus gobernantes, tiende a emitir opinión y sufragio de manera inconsciente. Aunque parezca una historia de niños, así actúa la masa guatemalteca, y esta característica ha provocado que la mayoría del tiempo, es más, durante los cuatro años de cada gobierno, la población asuma un papel de víctima porque los servicios no llegan, porque la salud es desastrosa, porque la educación no es capaz de generar las oportunidades y porque para hablarlo en buen chapín, es más cómodo poner la mano para recibir y la lengua para pedir.

Esta victimización constante se ha vuelto costumbre, ha polarizado sentimientos y ha hecho que surja un resentimiento que impone toda la responsabilidad sobre una clase política que no reacciona a favor de la masa, sino que acciona a favor de ella misma. Este hecho provoca que de manera irracional y extremista la masa castigue con su voto a quien esté y a quien le toque, sin pensar siquiera si el futuro es bueno o solo de retoque. La victimaria acción se dio, y nuevamente

el país y nuestra sociedad ignorante perdió creando una sociedad egoísta y anárquica: del año 1985 a la fecha, los guatemaltecos pensamos que los tiempos mejores darían inicio y que la llegada del poder civil a la gobernanza nacional provocaría cambios de fondo. Lo cierto es que fue una oportunidad perdida.

Los nueve presidentes que hemos tenido (incluyendo al actual) en este periodo de treinta y un años no han entendido la legitimidad que el pueblo les traslada y les confiere en una sola palabra: poder. La palabra poder tiene connotaciones y fondos con características especiales: la clase política entiende que para tenerlo hay que competir y pelear y este paso lo han llevado a la perfección todos los presidentes, diputados y alcaldes que deciden jugar en política. Son buenísimos para ganar elecciones. Lo que sigue es el ejercicio del poder, resulta que todos lo han hecho más mal que bien y esto determina el comportamiento de la sociedad, que ante la falta de resultados, inicia a perder año con año la confianza en el líder que miente y no cumple utilizando la palabra como instrumento de cambio. El proceso del poder contempla tres actos más: el mantenimiento, la ampliación y el legado hacia la conformación de cuadros nuevos.

Con este sencillo análisis concluyo que nadie ha podido ni podrá cambiar nuestra realidad mientras se sigan construyendo vehículos que solo transportan y que no transforman.

La clase política es responsable del egoísmo de su sociedad y los sectores del poder económico son corresponsables de esta realidad porque han comprado

hombres para mantener privilegios. La sociedad civil ilegítima es comparsa porque monta procesos paralelos de común acuerdo con entes internacionales para tener acceso a dinero al igual que el resto de los actores. Los líderes de cualquier movimiento venden a su gente por lo mismo y entonces la gran masa decide ser egoísta y anárquica.

El rescate institucional del país es determinante para iniciar un proceso que nos permita recuperar la moral perdida y la actitud derrotista.

Los acontecimientos de 2015 no han marcado cambios de fondo, han enraizado los resentimientos, el dolor y los extremos, por eso vemos a la implacable red buscando culpables y no soluciones, con un afán inmenso de participar sin saber por dónde y diseminando liderazgos que solo benefician al sistema, porque la única ruta por la que pueden operar dentro del ejercicio del poder es la misma y esta no ha cambiado.

La sociedad de hoy tiene una doble moral constante y por esta razón hoy todos son buenos, todos son apolíticos, todos mantienen una relación con Dios. Dios nos guarde de la política, Dios nos libre de los políticos. Hoy nadie firma, nadie hace negocios por teléfono, hoy no importa el tiempo que tenga que meterse al tránsito con tal de verse cara a cara.

La doble moral nos mata como sociedad.

El miedo a la exposición pública, el miedo al qué dirán y el miedo al escrutinio de las redes nos hace una sociedad cobarde e intervenida.

Hoy los tres poderes del estado de Guatemala son marionetas de los tres poderes fácticos que manejan el país y los fácticos son más fuertes que el temor que por años ha generado la iglesia para mantener a la bestia dormida.

Guatemala no es un país de gente violenta, los violentos que existen operan por necesidad y eso también es responsabilidad del sistema.

Guatemala no es un país de gente conformista, de esa cuenta miles de migrantes salen del país o se acercan al centro.

Guatemala no es un país corrupto, ha tenido líderes corruptos.

Guatemala es un país próspero, único, no entendido, no escuchado.

Guatemala requiere orden, autoridad y ejemplo.

Las transformaciones de la cultura política están distantes de una realidad de cambio, los guatemaltecos seguimos viendo espejos en donde no hay espejos, seguimos reflejando en la opinión global sentimientos por instinto, estamos apoyando procesos porque están de moda, estamos más alienados que nunca y menos identificados con la realidad.

Guatemala tiene hoy la crisis más profunda e histórica de identidad y entendimiento, la transculturización que se da al migrar al centro de poder económico

y político (ciudad de Guatemala) no permite ver, a quienes se creen dueños del poder, que están muy cerca de perderlo, porque los pueblos originarios cada día que pasa entienden más de Estado y poco a poco estarán tomando el lugar que les corresponde.

Las dos pobreza del país están absorbiendo territorio. Me explico: la pobreza digna que vive el campesino en el interior del país que no le permite aspirar a más de lo que tiene y de lo que ve, y la pobreza indigna de los cinturones de pobreza de la ciudad de Guatemala que encuentra, a cien metros de la casa o la champa, la aspiración legítima e imposible de la moda y las extravagancias.

Siempre Guatemala ha sido contraste puro, en el arte, en la colorimetría tropical, en la política, en las comidas, contraste puro en todo, pero después de los acontecimientos del año 2015 se suma la dispersión oral y pública, la del irrespeto, la anomia, la de los inconformes de siempre, la de lo que sueño yo, de lo que sueñas tú y de la que soñamos e inventamos todos, es más, queremos que la autoridad haga lo que yo creo y esto provoca que se pierda el rumbo de unidad nacional, unidad que no encuentra eco en sus líderes porque tampoco perciben la importancia de un conflicto que crece paso a paso y que sin duda llevará en los próximos años al encuentro al fin de una revolución ciudadana.

Sí, 2015 democratizó a la sociedad guatemalteca

Martín Rodríguez Pellecer

El debate sobre si 2015 y sus manifestaciones contra la corrupción fueron un mero estado de ánimo o un momento de cambio político en Guatemala tiene ahora un instrumento fáctico para afirmar que parecen haber sido lo segundo: un cambio político. La sociedad guatemalteca encuestada por la valiosa herramienta del NDI 2016 es una en la que apenas 15 % cree que las cosas se resolverán por medio de “la mano dura”, 83 % considera que los problemas se resuelven “si participamos todos”, y 70 % cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

Que una sociedad que viene desde el autoritarismo (desde su organización como república en 1871, acentuado por la guerra entre 1960 y 1996) se decante por la democracia y no por más maneras autoritarias es un cambio de paradigma. Y no es que el país haya sido sólo autoritario durante las dictaduras o en la democracia; en medio de eso también escogió a alcaldes capitalinos demócratas, como Manuel Colom Argueta en 1978; o a opciones más progresistas frente a oferta

de mano dura, como el presidente Álvaro Colom durante el período 2008-2012.

Pero después del repunte de violencia en 2009 y de la propaganda de los medios conservadores para ocultar que esta había empezado a reducirse desde 2010, en 2011 pasaron a segunda vuelta dos opciones que rozaban el fascismo y la mano dura: Manuel Baldizón y el presidente Otto Pérez Molina (2012-2015). Las dos propuestas de mano dura, que en primera vuelta sumaron más del 50 %, ahora tienen un 15 % de aceptación.

En un dato que sitúa a Guatemala en lo más alto de América Latina (y probablemente del mundo en desarrollo), 70 % de los encuestados respondieron que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

Para tener una comparación, el *Latino-barómetro* de 2004 colocaba a Guatemala a la cola de América Latina, pues sólo un 35 % de los encuestados creía que la democracia era preferible a cualquier otra forma de gobierno. ¡Creció al doble! Esto no puede ser un estado de ánimo.

1. Protestas legítimas

Si bien sólo el 12 % de encuestados respondió que había participado en al menos una de las manifestaciones de 2015 (que es mucho: alrededor de un millón de ciudadanos), el 87 % respondió haber estado de acuerdo con lo que se exigía.

La encuesta intenta resolver una interrogante particular: ¿se lograron los objetivos de las protestas? Tengo un problema con esta pregunta porque es evidente que los principales objetivos (a saber, la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y la renuncia del presidente Otto Pérez Molina) se lograron. El 66 % respondió que sí. Pero había una parte de la Plaza que no quería que hubiera elecciones en esas condiciones, y ese objetivo no se logró. Esa parte quería un país más justo, con una salud más digna, y eso todavía no se ha logrado. Pero una pregunta tan amplia lleva a una respuesta sobre los objetivos inmediatos.

De igual manera sería una alegría si un millón de ciudadanos hubiese participado en todo el país. No sé si es un efecto de que ahora es más popular decir que se participó en botar a un gobierno. Como ocurre con la pregunta sobre la participación electoral, la respuesta fue de un 86 % cuando en realidad participó un 71 %.

En otra serie de preguntas sobre por quién iría a manifestar, el 83 % respondió que por el MP y la CICIG. Esto sería maravilloso, pero en realidad probablemente llegaría a un 12 %, pues el año pasado, a pesar de que 87 % estaba de acuerdo con los motivos de las manifestaciones, sólo el 12 % participó.

Lo que me parece más interesante es que el Ejército, “la otrora institución más respetada por los guatemaltecos”, tiene un 18 % de popularidad. Sólo esa cantidad de guatemaltecos manifestaría para protestar por juicios contra militares acusados de cometer crímenes contra la humanidad (y contra civiles) durante la guerra. Y pensando en que esta pregunta no implica que en realidad vaya a manifestar, sino que esté de acuerdo, se trata sólo una minoría muy pequeña. ¿Cómo puede interpretarse esto? Que hay un 82 % de los ciudadanos que está de acuerdo o que no le molesta la persecución penal por crímenes del pasado. La legitimidad que pueden tener los promotores de amnistías es, a la luz de este instrumento, precaria. La causa de la justicia por las violaciones a los derechos humanos, iniciada por Claudia Paz y su equipo, parece ser una causa nacional.

2. ¿En dónde está la confianza?

En la Guatemala post-2015, la Guatemala del tsunami político, hay dos instituciones que marcan la agenda política: la CICIG y el MP. De las instituciones estrictamente políticas, estas son las más legítimas, y pueden llegar a ser incluso más legítimas que las religiosas. Un 54 % de los ciudadanos confía en la CICIG, 52 % en la iglesia católica, 44 % en el MP y 35 % en las iglesias evangélicas. En otros asuntos, esto confirma otra encuesta que situaba en casi un 90 % el nivel de religiosidad de la sociedad guatemalteca.

Pero de vuelta a la legitimidad y la confianza de la ciudadanía, es sorpresivo que sólo al 9 % le dé confianza el sector

privado. ¡Menos del 10 %! Esto debería ser una alarma para el modelo de desarrollo basado en la evasión fiscal, bajísimos salarios y el descuido ambiental. Un modelo de desarrollo que entre 2000 y 2015 no redujo la pobreza en más de 1 %, según estadísticas oficiales.

Acá viene otra contradicción. Si bien sólo el 20 % de los ciudadanos dice confiar en los medios, 70 % cree que son buenos y los usan como fuente de información, 48 % cree que dicen la verdad y 39 % que son mentirosos (49 % cree que informan según los intereses de sus medios y 30 % que informan según los intereses ciudadanos). Esto también debería ser una alarma para los periodistas.

3. El futuro y el presente

Los rezagos tecnológicos de Guatemala parecen estar empezando a superarse: 52 % de los ciudadanos usa el internet y 40 % ya tiene un *smartphone*, 26 % navega por el internet varias veces al día, 13 % una vez al día y 11 % una vez a la semana. Si bien 28 % cree que las redes sociales permiten que uno participe en política, 23 % cree que no sirven para esto y 28 % cree que sólo crean la ilusión de que uno está participando.

Aunque todavía nos falta mucho crecer en cultura política, hay más escepticismo, un saludable escepticismo.

Es muy interesante también cuando se habla de los problemas sociales. El primero, por muy poco, es la corrupción, con un 23 %, y el segundo, con 23 % también, es el desempleo, y los problemas económicos. ¿Se refieren a la informalidad, a empleos bien pagados para que la gente deje de migrar hacia Estados Unidos a través de la temible ruta mexicana?

La inseguridad, que se redujo en términos de homicidios de 48 a 28 por cada 100 mil habitantes, todavía es el principal problema para el 11 % (recordemos que la violencia sexual contra las mujeres no tiene evidencia de estarse reduciendo), y 9 % considera que el mayor problema es la pobreza.

Todavía hace falta más conciencia política. La desigualdad, el racismo, la misoginia o la impunidad, problemas capitales de esta sociedad, todavía no aparecen al frente. Eso sí, la sociedad parece seguir con ganas de más primavera. Si bien 20 % concede que estamos progresando, 63 % considera que está estancado. Y esas son buenas noticias. Esta sensación de inconformidad es la única gasolina para continuar con todos los elementos que este cambio político de Guatemala necesita.

Luces, sombras y claroscuros en la cultura política de la ciudadanía

Catalina Soberanis

1. El contexto

En 2016, se cumplen treinta años de vigencia del régimen democrático en Guatemala, después de haber padecido varias décadas de gobiernos autoritarios, y también se arriba al 20° Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Pero ninguno de estos sucesos ha logrado generar avances duraderos y sostenibles para el desarrollo del país.

Lo que sí se puede afirmar es que, a partir de los años ochenta, Guatemala al igual que el resto de países latinoamericanos ha experimentado transformaciones económicas, políticas y sociales de gran envergadura que, a la postre, han provocado la frustración de la ciudadanía, porque no han satisfecho las expectativas que crearon ni han generado el bienestar ofrecido.

El país es actualmente uno de los más desiguales del continente y, de acuerdo con el informe de SEGEPLAN sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en quince años la pobreza lejos de disminuir ha aumentado y ninguna

de las metas establecidas se cumplió en las áreas rurales, en donde solo se experimentó un leve avance en la reducción de la mortalidad materna, mientras que las oportunidades de empleo para las personas jóvenes siguen siendo muy limitadas. La situación de los pueblos indígenas es la peor, pues ninguno de los indicadores ha mejorado en las áreas predominantemente habitadas por ellos.

En el ámbito político el país ha enfrentado numerosas vicisitudes, incluyendo varias tentativas de rompimiento institucional y un frustrado golpe de Estado, dos reformas constitucionales con resultados opuestos y numerosos cuestionamientos a la legitimidad de las autoridades que, si bien han sido electas respetando las normas establecidas, han propiciado o tolerado la penetración de capitales ilícitos en sus organizaciones y la subsiguiente cooptación del Estado.

Ningún partido ha conseguido ser reelecto en el gobierno ni ha contado con mayoría parlamentaria más de una vez. El pluripartidismo que caracteriza al sistema político-electoral adolece de altas tasas de transfuguismo parlamentario y

de deserción de militantes y dirigentes de los partidos; la mayoría de los partidos muere prematuramente.

Después de sucesivos gobiernos de todas las posiciones políticas, que no son necesariamente ideológicas, las expectativas de solución de los problemas del país no se han cumplido y la población está cada vez más impaciente por ver resultados y más dispuesta a cuestionar a sus gobernantes.

Es por eso que la democracia en Guatemala se desarrolla en medio de luces, sombras y claroscuros y la realización de elecciones libres, cuyos resultados reflejan la voluntad de la ciudadanía, ya no es suficiente para dar respuesta a su impaciencia por alcanzar la prosperidad, la libertad y la seguridad que fueron prometidas al finalizar las dictaduras.

2. Valoración de la democracia y la política

A partir de las últimas décadas del siglo XX se han venido desarrollando instrumentos para medir la calidad de la democracia, sobre la base de estudios de opinión que permiten tener una idea más integral del desarrollo democrático de las sociedades. Por una parte, para medir la calidad de la democracia se observan los aspectos normativos, institucionales y de funcionamiento del Estado, es decir, si existe un marco formal que genere las condiciones para el ejercicio democrático. Sin embargo, la ciudadanía cuando evalúa el funcionamiento de la democracia no lo hace desde el punto de vista normativo sino en función

de cómo vive la experiencia del contacto con esas instituciones formales y cómo la democracia favorece o no el mejoramiento de las condiciones de vida.

Si una persona está en una situación económica difícil o enfrenta a menudo la inseguridad sentirá que las instituciones como los partidos, el parlamento y el gobierno, en general, no le son muy útiles y en consecuencia su valoración de dichas instituciones será baja. Por lo tanto la democracia se tiende a juzgar por sus resultados.

En el período 1995-2013, en el estudio de opinión de *Latinobarómetro*, Guatemala llegó a ocupar el penúltimo lugar en el aumento de apoyo a la democracia, con un promedio de 3 %, en comparación con un 16 % en Venezuela. Igual puesto ocupaba el país respecto al apoyo total a la democracia, con un índice de 41, solo por encima de México, siendo el más alto, de nuevo Venezuela, con un 87 %.

Estos datos mostraban, por ejemplo, que los Acuerdos de Paz no tuvieron un impacto significativo en el apoyo a la democracia pues se esperaba que después de la firma de la paz, en 1996, hubiese un incremento importante. Pero hay que decir que Guatemala ha caminado en la dirección correcta, pues en siete países ha disminuido el apoyo a la democracia, entre ellos Costa Rica México y Uruguay.

En cuanto a los problemas de la democracia, el estudio reflejaba que un 51 % de personas encuestadas consideraba que ésta enfrentaba grandes problemas, un 31 % que la democracia podía funcionar sin partidos políticos y un 28 % que podía funcionar sin Congreso Nacional.

Otro estudio de opinión, *Cultura política de la democracia en Guatemala y en las Américas: Hacia la igualdad de oportunidades*, publicado en febrero de 2013, con el auspicio de USAID, Latin American Public Opinion Project (LAPOP) y realizado por ASIES y la Universidad de Vanderbilt, llegaba a las siguientes conclusiones:

En cuanto a la igualdad de oportunidades:

- Tener piel más oscura, ser mujer y residir en el área rural, son factores que inciden en menor acceso a las oportunidades económicas y sociales en Guatemala.
- En términos de oportunidades de participación política se ha incrementado la participación electoral entre las mujeres.
- En Guatemala existe poca apertura hacia la participación de ciertos grupos en política.

Respecto al Estado de Derecho:

- La Ciudad de Guatemala tiene niveles altos de percepción de inseguridad y de victimización por delincuencia en comparación con otras capitales de las Américas.
- Existen diferencias importantes en los niveles de percepción de inseguridad y victimización por delincuencia entre las áreas urbanas y rurales de Guatemala.
- En comparación con otros países, Guatemala tiene bajo apego a las normas relacionadas con el Estado de derecho.

En cuanto a la cultura política en Guatemala en el tiempo:

- En Guatemala ha habido un ligero aumento en el apoyo a la democracia, pero todavía obtiene uno de los promedios más bajos del hemisferio.
- La percepción de libertad para votar en Guatemala es bastante alta, pero es baja la percepción de libertad para postularse a cargos públicos.
- Guatemala es el segundo país con mayor participación comunitaria en las Américas.
- La confianza de los guatemaltecos en las instituciones políticas se ha mantenido relativamente estable a lo largo del tiempo.
- Las instituciones que generan más confianza son el gobierno local, el ejército, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral.
- Las instituciones que generan menos confianza son el Congreso, los partidos políticos y la Policía Nacional Civil, aunque los primeros dos han mejorado en el tiempo.

3. 2015, un año de inflexión

El PNUD realizó, durante 2014 y principios de 2015, un ejercicio de análisis prospectivo que concluyó con la elaboración del estudio *Escenarios de una Gobernabilidad para el Cambio. Guatemala 2015-2020*. La investigación incluyó la realización de entrevistas en profundidad a numerosos actores clave

de las élites de la sociedad y encuestas cuatrimestrales, para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la evolución de la gobernabilidad del país en el último decenio y acerca de las percepciones y expectativas que los actores estratégicos tenían sobre ella.

El balance de la gobernabilidad post-Acuerdos de Paz era, a inicios de 2015, claramente deficiente a ojos de una mayoría de las elites políticas, intelectuales, empresariales y sociales del país. Aunque se reconocían sus grandes resultados en términos del restablecimiento de instituciones democráticas y de una estabilidad macroeconómica con crecimiento moderado, también había inquietudes por sus grandes déficits sociales, por su incapacidad de dar seguridad a los ciudadanos, por la intensificación del conflicto social y por el debilitamiento de la confianza en las instituciones.

Lo más notable era que la mayoría de las dirigencias nacionales y locales sentían que los problemas estaban aumentando y que disminuía la capacidad para gobernar el país. Sin embargo, la mayoría además afirmaba que no había soluciones de corto plazo a estos problemas y que ni las elites ni la sociedad parecían con capacidades para transformarlos.

Por su parte, la sociedad parecía alejarse cada vez más de la política: todos los indicadores de confianza en las instituciones de la democracia representativa se venían deteriorando y se instalaba un serio malestar con la política. La desconfianza y en muchos casos ruptura con el Estado, los políticos y los partidos aparecía transversal a todos los sectores de

la sociedad. La política era considerada como el principal problema del país, una idea compartida por grandes segmentos de la ciudadanía, lo que contrastaba con las notables diferencias sobre otras cuestiones como el futuro del modelo económico o las maneras de encarar la conflictividad social.

En ese contexto se produjeron las investigaciones y revelaciones del MP y de la CICIG de mayo-junio de 2015 que cayeron como un rayo sobre la sociedad guatemalteca, produciendo un incendio político que casi nadie esperaba.

La crisis político-institucional generada tras el destape de los escándalos de corrupción por parte de ambas instituciones tuvo importantes consecuencias en el proceso electoral, que fue afectado por la fuerte demanda ciudadana por cambios y reformas sustantivas, particularmente las relativas al sistema político-electoral, la Ley de Compras y Contrataciones y reformas en la administración de justicia. Otra consecuencia dramática fue el derrumbe de las principales fuerzas políticas del país, que condujo a un resultado no previsto inicialmente en la elección a la Presidencia de la República, habiendo obtenido el triunfo electoral un candidato que no figuraba entre las preferencias de voto al principio del proceso.

Las movilizaciones sociales que durante casi 20 semanas llenaron la plaza central, en demanda del combate a la corrupción y el enjuiciamiento de los principales sindicatos de la misma (el Presidente y la Vicepresidenta de la República), fueron atribuidas a la influencia de las redes sociales y, por otra parte, generaron

la percepción de que en el país se estaba produciendo una inflexión en el curso del proceso político del país y que la cultura política de la ciudadanía guatemalteca estaba experimentando un giro hacia una mayor conciencia cívica y hacia una mayor participación e incidencia en la vida política de la sociedad. Sin embargo, otros consideraban que se trató de “un estado anímico ciudadano, que se dio por satisfecho con las renunciaciones de altos cargos públicos que se presentaron”.

Es en ese contexto el NDI realizó una encuesta nacional sobre los cambios que pudiesen haberse producido en la cultura política de la ciudadanía guatemalteca, con énfasis en las transformaciones que hubiesen ocurrido después de la crisis política de 2015.

4. Los resultados del estudio

La encuesta se realizó a una muestra representativa de la población de ciudadanos de 18 años o más e incluyó preguntas acerca de los siguientes aspectos:

- La crisis política del año 2015
- Los contenidos de las propuestas de actores sociales
- La respuesta y el desempeño de la institucionalidad democrática
- El proceso electoral 2015

En relación con la crisis la encuesta evidencia que más del 90 % de las personas entrevistadas tuvieron conocimiento sobre ésta y sobre las movilizaciones ciudadanas, pero en contra de la opinión

generalizada de que fueron las redes sociales las que impulsaron dichas movilizaciones, las respuestas revelan que fueron los medios de comunicación más tradicionales los que hicieron que la ciudadanía se enterase de las convocatorias.

El estudio confirma también que las principales demandas fueron el combate a la corrupción y la demanda de renuncia del Presidente y la Vicepresidenta de la República. A pesar que la mayoría de las personas encuestadas no participaron en las movilizaciones, su apoyo a las mismas es decididamente grande y en el caso de los que sí participaron, lo importante es que un alto porcentaje nunca lo había hecho. Un rasgo destacado es el contraste entre el apoyo a manifestaciones permitidas por la ley y el rechazo a los bloqueos de calles o carreteras como formas de protesta. En esta opinión seguramente influyó el orden y limpieza de las demostraciones, el respeto a las autoridades encargadas de la seguridad y la abstención de cualquier acto que dañase los bienes públicos o privados.

El grado de satisfacción con el resultado de las protestas es también muy significativo. La opinión mayoritaria sobre que hay mayor disposición a organizarse y participar, menos miedo a protestar, mejor desempeño de las autoridades y menos corrupción, así lo confirma. En ese sentido las respuestas sobre la disposición de la persona entrevistada a ejercer su ciudadanía de manera más activa complementan esa actitud optimista e inclinada a incrementar su participación en actividades cívicas, aunque todavía no a hacerlo en partidos políticos.

En cuanto a la confianza en las instituciones, lo más notorio es la caída del Ejército en la confianza de la ciudadanía, pues en 2012 se situó en un 59.5 % (LAPOP) y en esta encuesta está en 17.2 % y aun sumándole la respuesta sobre “algo de confianza” el total es menor a 50 %. A pesar que el Tribunal Supremo Electoral se esforzó por cumplir su responsabilidad, también bajó en sus niveles de confiabilidad, de un 49.2 a 36.3 % sumando “mucho confianza y algo de confianza”. Los partidos políticos cayeron de un 36.1 a 14.2, sumando ambas respuestas; el empresariado, de 47.1 a 39.3. Los medios de comunicación, si solamente tomamos la respuesta de mucha confianza habrían descendido de un 54.9 a 20.5, pero si se suman ambas respuestas llegan a 88.5. Otros actores sociales no variaron mucho en cuanto a los niveles de confianza que la ciudadanía les asigna.

Se mantiene la voluntad de la ciudadanía de ejercer el voto y ha aumentado levemente la preferencia por un gobierno democrático. Sin embargo, también aumentó la inclinación hacia un gobierno autoritario o de mano dura. Las encuestas de opinión no incidieron en la decisión electoral de las personas entrevistadas.

La percepción de inseguridad ha disminuido en la opinión de la ciudadanía, probablemente por el descenso en la tasa de homicidios. En cambio el tema del desempleo es una preocupación fuerte y vigente.

5. Luces, sombras y claroscuros

Los resultados de la encuesta reflejan el progresivo deterioro de la confianza en las instituciones, situación que se agravó con la crisis de 2015. Esto, al igual que el crecimiento del eventual apoyo a una opción autoritaria, arroja una sombra de duda sobre el futuro inmediato de la democracia en Guatemala.

Existen razones para un moderado optimismo sobre la posibilidad de que la ciudadanía incremente su participación cívica mediante una mayor auditoría social y una mayor politización de sus opiniones, pero en el corto plazo no se observa una mayor inclinación a la participación en los partidos políticos.

Respecto a los medios de comunicación hay situaciones ambivalentes que dibujan un panorama en claroscuro de confianza-desconfianza. Las redes sociales aún no tienen el peso que en algún momento se presumió al analizar las movilizaciones de 2015.

La buena noticia es que vamos en camino hacia el cambio. Lo que no sabemos es cuánto tiempo nos llevará.

Pero regresando a las consideraciones iniciales, sin transformaciones socioeconómicas, que permitan reducir la acentuada desigualdad en nuestra sociedad, continuará creciendo la desconfianza y el desencanto con la democracia y ésta no podrá consolidarse.

La crisis de 2015: El papel de la movilización ciudadana

Ricardo Sáenz de Tejada

Entre abril y agosto de 2015 decenas de miles de guatemaltecos, hombres y mujeres, de diversas edades y adscripciones étnicas participaron en múltiples actos de protesta realizados en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala, en parques de otras cabeceras departamentales y municipales, así como en otros puntos del país. A diferencia de otras olas y campañas de protesta en las que organizaciones sociales constituidas convocaron y lideraron las movilizaciones, en esta ocasión los ciudadanos acudieron al llamado de grupos formados en la coyuntura y que a través de medios virtuales canalizaron la indignación de los guatemaltecos.

Las protestas se generaron a partir de las denuncias realizadas por la CICIG y el MP el 16 de abril de 2015 en torno a la existencia de una estructura dedicada a la defraudación aduanera que involucraba a funcionarios públicos. En las semanas siguientes las investigaciones de la CICIG y el MP develaron la existencia de estructuras de ese tipo en todos los ámbitos de la administración pública, desde el poder ejecutivo y el poder judicial, hasta las municipalidades y entidades

autónomas. Para la CICIG, las denominadas Redes Político Económicas Ilícitas (RPEI) se habían hecho del control de buena parte del Estado, convertido el presupuesto público en un botín privado e influido en las políticas públicas para su beneficio. En los casos aparecían involucrados altos funcionarios del ejecutivo, diputados, alcaldes, empleados públicos, empresarios, propietarios de medios de comunicación, jueces y magistrados.

Las denuncias del 16 de abril dieron lugar a una crisis política, que de acuerdo con Edgar Ruano Najarro es "... aquella situación o coyuntura en la que una determinada correlación de fuerzas en el interior de una organización política o en el Estado pierde legitimidad por efecto de hechos en su interior o de contradicciones internas o por la acción de fuerzas externas, y se coloca en grave riesgo de ser modificada."⁵⁸ Las crisis políticas pueden tener distintos alcances. En 2015 la crisis de gobierno, provocada por las denuncias mencionadas, se desarro-

58 Edgar Ruano Najarro, comunicación personal, abril de 2016.

lló en el marco de una crisis de Estado, derivada del agotamiento del pacto elitista que dio lugar a la democratización⁵⁹.

La crisis concluyó parcialmente con la renuncia y encarcelamiento del Presidente y la Vicepresidenta, así como de altos funcionarios del ejecutivo; con lo que se inició la depuración judicial del sistema político (que a la fecha ha incluido la desaparición de dos de los principales partidos); la realización de reformas que abarcan la institucionalidad democrática, el funcionamiento del ejecutivo y el legislativo y transformaciones en el organismo judicial; y la interpelación del papel de las elites empresariales en la política. La elección de Jimmy Morales como presidente de la República en las elecciones de septiembre de 2015 puede considerarse también como un resultado directo de estos hechos.

En torno al significado y las consecuencias de la crisis política de 2015, existe una suerte de contienda interpretativa, en la que distintos actores políticos y sociales han elaborado análisis de la crisis que muchas veces corresponden más a sus intereses discursivos que a la propia realidad. En un extremo de las interpretaciones están aquellos que postulan

que la crisis en realidad fue el resultado de la conspiración del gobierno estadounidense que instrumentalizó a la CICIG y manipuló a la ciudadanía mediante una sofisticada estrategia mediática en la que las redes sociales jugaron un papel determinante. Esta lectura ha sido promovida por el ex presidente Pérez Molina, y algunos de sus ex funcionarios, quienes buscan presentarse como víctimas del imperialismo estadounidense. Un argumento similar han expresado algunos intelectuales públicos que agregan variables geopolíticas a la argumentación. Desde esta perspectiva, se niega a la ciudadanía capacidad de agencia y se les ve como objeto del engaño y la manipulación.

En el otro extremo, el desenlace de la crisis se presenta como una revolución ciudadana que dio lugar a una suerte de nueva primavera democrática. En este caso la interpretación pasa por alto el peso relativo de los diversos actores cuyos intereses fueron influyentes y los resultados electorales en los que, a pesar de que en las elecciones presidenciales fueron derrotados quienes se presentaron como la forma tradicional de hacer política, en el nivel distrital y municipal fueron reelectos muchos líderes e integrantes de las RPEI.

La idea que se postula en este artículo es que, a pesar de que efectivamente interactuaron múltiples actores e intereses en la crisis, el desenlace parcial de la misma no hubiese sido el mismo sin la movilización ciudadana. Esta fortaleció el accionar de la CICIG y el MP, irrumpió en el proceso electoral contribuyendo a modificar las preferencias electorales

59 Entre 1984 y 1986 el alto mando militar, las elites empresariales, y los partidos políticos permitidos – con el aval del gobierno de los Estados Unidos, acordaron la realización de elecciones y la entrega del gobierno a los civiles sobre la base de una serie de condiciones tácitamente acordadas que incluían la preeminencia del ejército en materia de seguridad, la impunidad por los crímenes cometidos durante la guerra, la preservación del statu quo económico y social y la exclusión de la izquierda revolucionaria. Algunas de estas condiciones quedaron establecidas en la Constitución de la República, y posibilitaron la captura del Estado.

(por ejemplo la campaña del “no le toca”); obligó a las elites políticas y empresariales a reposicionarse y realinearse; y forzó al Congreso de la República a impulsar una agenda de reformas.

La encuesta sobre cultura política del NDI, ofrece algunos datos cuantitativos para entender la movilización ciudadana. Una primera consideración tiene que ver con la cantidad y la ubicación geográfica de las movilizaciones. De acuerdo con la encuesta mencionada, el 12 % de las personas encuestadas (mayores de edad empadronadas) participó por lo menos una vez en las protestas. Las regiones en las que más participación hubo fueron la Metropolitana (23.5 %); Sur Occidente (13.2 %) y Petén (11.8 %).

Evidentemente la región metropolitana fue el epicentro de la movilización social. El hecho de que al menos 2 de cada 10 ciudadanos (sin contar a menores de edad) de la capital y sus alrededores participó por lo menos una vez en la protesta rebasa en mucho el promedio nacional de participación en manifestaciones medido por la encuesta de LAPOP de 2012, que indicaba que en 2010 el 8 % de los encuestados dijeron haber participado en una manifestación en los últimos 12 meses y en 2012 el 7 %. En política, como se sabe, cuenta tanto lo que es como lo que parece. En este caso, las movilizaciones fueron cuantitativamente importantes, y las imágenes transmitidas por los medios de comunicación (con sus propias agendas e intereses) mostraron al resto del país la existencia de un movimiento fuerte y relativamente plural que exigía la renuncia de los más altos funcionarios del ejecutivo.

En cuanto a la caracterización de quienes participaron en las movilizaciones, generalmente se ha indicado que eran jóvenes, educados y pertenecientes a las clases medias urbanas. En cuanto a la edad, la encuesta NDI 2016, indica que a nivel nacional, casi la mitad de los que participaron (47.4 %) estaban comprendidos entre los 18 a los 35 años (como se dijo, no se incluyó a menores de edad); un tercio (31.9 %) de 36 a 55 años; y una quinta parte (20.7 %) mayores de 56 años. Sin embargo, al analizar los datos por región, se puede observar que en la región metropolitana el grupo de edad que tuvo más participación correspondió al ubicado entre 36 a 55 años, y el de más de 56 alcanzó casi un tercio. Contrario a lo que inicialmente puede pensarse, en la zona metropolitana la participación de personas de más de 35 años fue mayoritaria, mientras que sólo un tercio (33.3 %) de la participación fue de personas de menos de 35 años.

Respecto a la educación, los datos coinciden con la percepción: el 67 % de los participantes tenían educación secundaria o superior. El asunto de si pertenecían a la clase media es problemático ya que existe dificultad para definir sus parámetros. La encuesta capta los ingresos por hogar, mientras que otras encuestas recientes miden los ingresos del trabajador. Considerando esto, lo que muestran los datos es que más del 70 % de los participantes en la protesta provienen de hogares no pobres, y en el caso de la región metropolitana, el porcentaje se eleva al 80 %. Aunando estos datos a los de educación se confirma la impresión respecto a la participación de clases medias; sin embargo, el grueso de estas

(40 % a nivel nacional y 33 % a nivel metropolitano) proceden de hogares en riesgo de pobreza, cuyos ingresos no cubren la canasta básica alimentaria. Así, la caracterización de clases medias resulta relativa. Sin embargo, la coincidencia en las plazas de personas con distinto nivel de ingreso contribuyó a establecer la imagen de un rechazo general a las elites políticas y al gobierno liderado por Pérez.

La adscripción étnica de los participantes fue mayoritariamente ladina (45.7 %), seguida de indígena (35 %). El hecho de que más de un tercio de los participantes se defina como indígena muestra que, pese a lo señalado por algunos analistas, la población indígena sí participó en las protestas y en algunas regiones constituyó el grupo mayoritario.

La mayoría de los participantes (80 %) son trabajadores independientes/por cuenta propia o empleados de empresas privadas. La presencia de empleados públicos en la encuesta es muy baja (4.5 %).

La encuesta confirma que las protestas de 2015 fueron un fenómeno político masivo, sobre todo en la ciudad de Guatemala, en donde dos de cada diez personas participaron en las movilizaciones. Se trató de protestas plurales en las que, aunque predominaron las clases medias ladinas y mestizas hubo participación de sectores populares y pueblos indígenas.

La participación política de las clases medias fue determinante por el peso político que tienen en la economía, la generación de opinión y el papel que juegan

en la vinculación con diferentes grupos. Es importante mencionar que, para una gran mayoría de los participantes (62.7 %), se trató de la primera participación en manifestaciones, lo que más allá de la asistencia electoral puede significar la irrupción en el espacio público y la política de sectores hasta entonces fuera de la misma.

Como se dijo al principio, la movilización ciudadana desempeñó un papel determinante en la crisis en su conjunto. Como lo ha reconocido el Comisionado de la CICIG, sin el respaldo de “la Plaza” las investigaciones que realizaban no hubieran tenido la fuerza y la legitimidad que adquirieron, las elites políticas se hubieran resistido a las reformas, y tanto el gobierno de los Estados Unidos como las elites empresariales hubieran persistido en la estrategia definida tras la renuncia de la ex vice presidenta Roxana Baldetti de garantizar la terminación del mandato de Pérez Molina para garantizar la estabilidad.

La movilización ciudadana también ha marcado la irrupción de una nueva generación política que, con la experiencia adquirida en la construcción de los “colectivos” ciudadanos y en la protesta, tiene ahora la posibilidad de participar e influir de manera decisiva en un escenario en el que la depuración judicial ha generado un vacío político que puede ser ocupado por nuevos actores y partidos que impulsen las transformaciones que permitan superar la crisis de Estado.

Claves históricas para comprender las movilizaciones del 2015

Úrsula Roldán Andrade

1. Circunstancias históricas que llevaron a las movilizaciones del 2015

La lectura de los resultados de la encuesta NDI 2016 da lugar al planteamiento de las siguientes interrogantes: ¿Las movilizaciones de las plazas fueron fruto de la espontaneidad de un momento preciso? ¿Fueron producto del hartazgo ciudadano contra unos actores en particular? ¿Fueron incentivadas por los medios de comunicación masiva y/o de las redes sociales?

Upéry (2011) y Oñate (2013) coinciden en que las movilizaciones se explican por las circunstancias y legados existentes. Para el caso de Guatemala, se identifican varias circunstancias que contribuyeron a preparar los resortes movilizadores contra la corrupción y la reforma del Estado guatemalteco.

Las casi cuatro décadas de guerra interna generaron silencio y miedo en la población civil que no fue afectada brutal o directamente, en particular los sectores urbanos de clase media y las generaciones nacidas en la década de los ochenta y noventa que desconocen o conocen

muy poco sus orígenes y efectos. Durante ese período, los sectores que siguieron movilizándose y reivindicando causas sociales fueron aquellos que recibieron el legado de las organizaciones revolucionarias, tales como las organizaciones campesinas e indígenas, algunos sindicatos, sectores estudiantiles, organizaciones de mujeres y organizaciones denominadas populares, integradas en su mayoría por sobrevivientes o hijos e hijas de esta guerra.

Los veinte años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz, fueron marcados por la participación de la sociedad civil, focalizada en la “institucionalización” de dichos Acuerdos y la búsqueda incansable por su implementación. Esta participación continuó estando limitada a los sectores mencionados, pero se sumaron otras expresiones, como las organizaciones no gubernamentales, que también imprimieron su dinámica de incidencia frente al incipiente Estado y la nueva legislación. Algunas organizaciones como las de mujeres y de derechos humanos, se fortalecieron. En este período la mayoría de estas expresiones se desarticularon del movimiento revolucionario

pero no tuvieron la capacidad de rearticularse bajo nuevas premisas para convertirse en un sujeto y actor político.

A finales de década de los noventa se empezaron a promover medidas económicas inspiradas en el Consenso de Washington, que contradijeron toda la dinámica de construcción de un Estado fuerte y rector de los cambios sociales (como lo pretendieron los Acuerdos de Paz), al producir un Estado débil, con restricciones profundas para enfrentar la pobreza y desigualdad.

Tales circunstancias limitaron el ejercicio ciudadano y condujeron a que las organizaciones sociales, tanto las históricas como las surgidas en la etapa de la post-guerra, se ampliaran a más segmentos de la población. Muchas de las luchas de las organizaciones históricas no produjeron resultados significativos y en algunos casos su actividad derivó en fortalecer mecanismos clientelares. Cabe señalar que aún con la firma de la paz los mecanismos represivos no cesaron y la conflictividad se profundizó y extendió a territorios rurales con potencial minero, hidroeléctrico y para el desarrollo de monocultivos.

Por otro lado, la ansiada democracia, instalada con los gobiernos civiles en 1985 y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, tuvo un tortuoso amanecer, pues las fuerzas armadas mutaron hacia otras formas de control del Estado (CIACS), y las elites económicas no se modernizaron en función de los nuevos escenarios internacionales, sino que siguieron operando desde los beneficios que el Estado históricamente les brindó. En la medida que el Estado se desmantelaba, estas ampliaron

sus beneficios con otros negocios más rentables, como la banca privada, las comunicaciones, la seguridad, así como los sectores intermedios se beneficiaron de una cada vez más amplia privatización de los servicios de salud y educación.

Resultó una clase política emergente, que encontró también una forma de enriquecimiento en el Estado y que en el año 1993 muestra su ímpetu por lograrlo con un golpe de Estado. En el año 2000 se marca una primera fisura entre las demandas de la mayoría de la población y la respuesta que los Acuerdos de Paz podrían brindar y se amplía la brecha con la población organizada.

Es notable en ese momento una etapa de inclusión del discurso populista y la ampliación de la oferta electoral, en busca de este voto ansioso de encontrar respuestas inmediatas a sus disminuidas condiciones socioeconómicas.

Parecieran influirse mutuamente, por una parte, la falta de capacidad de las organizaciones sociales y partidos políticos (que no se desarrollaron como tales) para encauzar las demandas populares y, por otra, un Estado cooptado por las elites del poder económico y político, con vasos comunicantes con las facciones de los nuevos poderes ilícitos⁶⁰.

Todo ello generó una organización social de baja representación, una democracia

60 Factores a los que se suma la crisis de niñez migrante no acompañada en el 2014 en las frontera sur de Estados Unidos, y que fueron determinantes para experimentar en esta coyuntura, una tutela de este coloso, contra el combate a la corrupción y el apoyo a los procesos iniciados por el MP y la CICIG; lo que sin duda contribuyó al logro de los resultados obtenidos. (Veliz R., 2016)

anémica y, por consiguiente, una apatía política generalizada de la ciudadanía que no se reflejó siempre en las votaciones de elecciones generales, cada cuatro años, pues esta participación fue creciente. Sin embargo, es notable y así lo revelan los resultados de la encuesta NDI 2016, que el ir a votar no significa necesariamente creer en los partidos políticos y que estos respondan a las necesidades ingentes de quienes votan: se vota generalmente por un “deber cívico” y por costumbre. Por ello no es de extrañar que se fuera instalando una participación ciudadana clientelar, basada mayormente en la oferta de nivel nacional y en menor grado la local, de donde se pueden deducir algunas interpretaciones: lo poco que el Estado le importaba ya a la ciudadanía, por el bajo impacto que tenía en el cambio de sus condiciones de vida (así se marca en la encuesta); la escasa información a la que tiene acceso; y las condiciones de sobrevivencia, que no permiten mayor reflexión sobre su condición socio-económica y la lógica con la que opera el proceso electoral.

Pese a ello, a partir de 2005 se marca una dinámica que permanece en la movilización de la población, principalmente rural, no necesariamente para acceder a espacios o recursos públicos institucionales, y que no está debidamente reflejada en lo acontecido en el 2015, pero cuya existencia es vital para cambios más profundos en la cultura de participación política. Se trata de las consultas comunitarias, a través de las cuales se manifiesta la defensa del territorio y se desencadenan otras reivindicaciones como la resignificación de la demanda étnica y de sus intereses por poder y autonomía

desde sus territorios, frente al el poder público nacional, que hoy avanzan hacia discursos más elaborados por la transformación del Estado, lo pluricultural y la plurinacionalidad. También son de gran relevancia estas luchas territoriales por los recursos naturales, porque disputan, de alguna manera, los nuevos ejes de acumulación de las elites económicas y ponen en cuestión derechos arraigados, buscando una forma de concebirlos desde otras dinámicas no mercantilistas. Es importante resaltar que esto lo evidencian los resultados de la encuesta, en cuanto a que existe un porcentaje considerable de personas que se movilizarían por la defensa del territorio.

Mientras lo anterior marca una diferencia en la participación política de lo rural, toda esta época neoliberal de mayores exclusiones sociales, genera en las áreas urbanas, sobre todo, índices de violencia, aunque otras regiones se ven también afectadas por la presencia del crimen organizado y el narcotráfico, situación que provoca otras amenazas a la ciudadanía y a su posibilidad de romper con el miedo y el silencio que le acompaña.

2. Lo relevante de la coyuntura del 2015

En estas circunstancias emerge la coyuntura del 2015, durante la cual parecía obvio que los sectores de la región central y de otras regiones con ciudades intermedias (Quetzaltenango, Huehuenhuetenango, Mazatenango, Cobán) fueron los que se movilizaron; sin embargo, la encuesta revela que el número de personas movilizadas no fue mayoritario y,

en las regiones definidas por la encuesta, no se presentan mayores diferencias entre unas y otras: norte, nor-occidente, nor-oriental, metropolitana, central y sur-occidental. Pese a ello, se constata que las personas movilizadas logran romper con el miedo y el silencio, pero no lo hacen de una manera orgánica y tampoco bajo un discurso político claro de transformación social. Se movilizan entonces por su rechazo a la corrupción y su demanda de castigo, personificado en la Vicepresidenta y el Presidente del país (hasta 2015), integrantes del PP, que no solo incumplieron con su promesa de atacar la violencia, sino además fue demostrado su enriquecimiento ilícito desmedido, con los recursos provenientes de esa ciudadanía indignada y golpeada también económicamente, como lo evidencia la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2014), según la cual los niveles de pobreza aumentaron y la clase media disminuyó su tamaño.

La encuesta que se analiza, no presenta una diferenciación por área urbana y rural, sino brinda características del estrato social al que pertenecen los entrevistados, por salario mensual percibido. En términos generales se encuentran por debajo del salario mínimo (menos de US\$200: 42.9 % y entre US\$ 200 y US\$ 400: 40.1 %), de tal manera que quienes responden la encuesta no son los que mayoritariamente estuvieron en las Plazas. Al mismo tiempo, revela una importante característica de los que sí se movilizaron, de conformidad con la cual a mayor salario mayor participación. Lo que es relevante es que, aunque la mayoría de población no participó, asumió la percepción de dichas movilizaciones en cuanto a que se rompió

el miedo y que sí existieron resultados y hubo más críticas hacia los partidos políticos (aunque paradójicamente sigan votando) y a los medios de comunicación (no obstante su influencia, dicen ser, en relación a estos, más autónomos para definir su voto). Sin embargo, sus percepciones de futuro siguen siendo pesimistas. Otro dato interesante es que el 51 % de las personas entrevistadas corresponde a jóvenes de 18 a 35, de los cuales el 88.8 % no había participado anteriormente en protestas o movilizaciones.

3. Los principales cambios de la cultura política

Según lo demuestra la encuesta, uno de los mayores cambios generados en las movilizaciones 2015 se da en la percepción ganada; por ejemplo, mejoró casi en un 50 % la percepción sobre la disminución de la corrupción y el desempeño de los funcionarios públicos. Esto incentiva a la población a futuras acciones: más del 80 % presenta disposición a organizarse y a movilizarse, especialmente contra la corrupción, los sectores políticos deslegitimados (Congreso), los servicios esenciales y, como se dijo, por la defensa del territorio. Es interesante que estén dispuestos a movilizarse por cambios a legislaciones específicas, pero no mayoritariamente por cambios a la Constitución.

Otro aspecto relevante es que la mayor parte de la población sigue informándose a través de los medios de comunicación, principalmente de televisión abierta, (84.2 % televisión, 6.8 % radio, 3.2 % prensa escrita), lo que no necesariamente promovió la participación, por

los menos de la mayoría de la población. Pero a pesar del sesgo que puedan tener los medios masivos tradicionales, dado su monopolio, esto no impidió que se tuviera una percepción favorable sobre participar en las movilizaciones. Al mismo tiempo, en relación a medios alternativos digitales, radiales, televisión por cable y redes sociales, la encuesta revela un porcentaje bajo de utilización por parte de la población entrevistada para informarse sobre la situación del país y la crisis del 2015. Esto, en contraposición, pudo haber sido distinto en la población movilizadora, posibilitando compartir e interpretar información y generar opinión pues, tal como lo señalan los artículos citados de Uperly (2011) y Onñate (2013) sobre la “Revolución Democrática Árabe” y las movilizaciones ciudadanas en España, las nuevas tecnologías y redes sociales sí tienen capacidad de crear sinergias (es lo que se experimentó con la convocatoria de #RenunciaYa) y conexiones (la coordinadora Estudiantil Universitaria, CEUG), lo que pudo crear una percepción favorable a la coyuntura del 2015, rompiendo el cerco de la televisión abierta.

Por ello se puede afirmar que continúa dándose una diferenciación entre “percepción” y “efecto inmediato” para la movilización. Lo que genera más movilización es la **experiencia** de haberlo realizado anteriormente y el hecho de que ahora se perciba que se obtienen **resultados**. Estos son aspectos que se consideran relevantes, porque como lo menciona Edelberto Torres en su libro *Revoluciones sin cambios revolucionarios*, finalmente lo que demuestran los hechos históricos es que “los actores rebeldes aparecen ahí donde la opresión es más

consciente y no porque es más aguda, en la universidad antes que en la fábrica. La protesta tiene una base subjetiva preliminar, entre las clases medias y algunos grupos de artesanos y obreros primero, que se transmiten en su dimensión de fuerza a otros sectores, gente con otros oficios o sin ellos” (Torres- Rivas, 2011).

Quienes se movilizaron no fue la ciudadanía popular masiva, fue una ciudadanía estratégica, que logró generar nuevas sinergias especialmente en lo urbano y en sectores organizados rurales y también logró, como lo dijeron muchos ciudadanos comunes que estuvieron en la Plaza, romper con el miedo y la indiferencia frente a la política.

Pero sucedió otro cambio radicalmente importante, que también lo marca la encuesta: la percepción y credibilidad frente a las instituciones. Se recupera la confianza en el buen funcionario y la adecuada institucionalidad pública (el MP y la CICIG, ésta última como una entidad emanada de los Acuerdos de Paz); y por otra parte disminuye la confianza en el Ejército y en el sector empresarial.

Se generó un efecto de recuperar la autoestima de una ciudadanía movilizadora, una opinión pública más amplia y confianza en las nuevas generaciones. Se rompió la preferencia por figuras caudillistas, de mano dura y por las organizaciones verticales. Se abrieron nuevas culturas políticas que en principio no se anidan en los actuales partidos políticos, pues estos perdieron su credibilidad casi totalmente.

Esto queda como legado para renovados ejercicios políticos, pero tal y como ha sido referido en el presente análisis,

en semejanza con lo ocurrido en la revolución democrática árabe y las movilizaciones ciudadanas en España, estos cambios no son ajenos a las circunstancias presentes; tampoco es que sean totalmente espontaneas, sino provienen de un legado histórico. Las estructuras paralelas (CIACS) siguen queriendo entorpecer los cambios, las elites económicas siguen queriendo marear con supuestos diálogos para que todo siga igual y la nueva cultura política se enfrenta aún, a las arraigadas prácticas políticas de elite, centralistas, corruptas y clientelares. El reto es cómo llenar de contenido a la democracia, a la que se sigue aspirando como modelo político, según lo muestra la encuesta. ¿Cuáles son los renovados instrumentos políticos que pueden superar a los partidos políticos tradicionales? ¿Cómo lograrán estos cerrar las brechas entre los movilizados y los no movilizados? Las respuestas seguramente tendrán que ver con el cumplimiento de las aspiraciones más universales: eliminar la corrupción, atender la demanda por mejoras en las condiciones y formas de vida de las mayorías y saber organizar y comunicar todo ello.

Bibliografía

- Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, República de Guatemala: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014, principales resultados.
- Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA (2004). Poderes Ocultos Grupos ilegales post conflicto y las fuerzas detrás de ellos. Washington, D.C
- Oñate P. (2013), La movilización ciudadana en España en los albores del S.XXI: Una contextualización para el debate, *Revista de Ciencia Política* N.33, 31 a 55 páginas, Universidad Carlos III de Madrid. Recuperado el 10 de septiembre del 2016. https://www.google.com/search?q=La+movilizaci%C3%B3n+ciudadana+en+Espa%C3%B1a&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=6rjV-V5i6AunT8ge_3b6YCw
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Dirección General para América Latina y el Caribe (n.d.). Perfil de Estratos Sociales en América Latina: pobres vulnerables y clases medias.
- Saint Upéry, M. (2011), Las dimensiones de la revolución democrática árabe, *Revista Nueva Sociedad* N.232, trece páginas. recuperado el 10 de septiembre del 2016 <http://www.pensamientocritico.org/marsai0512.pdf>
- Torres-Rivas, E. (2011), *Revoluciones sin cambios revolucionarios*, F&G Editores, Guatemala.
- Veliz R. (2016) ¿Esto apenas empieza? Las raíces de la crisis política guatemalteca”; en *La fuerza de las plazas*. Bitácora de la indignación ciudadana en 2015. Regina Solíz Miranda (compiladora). Magna Terra editores. Guatemala.

Movilización ciudadana, crisis institucional y cultura política en Guatemala

Luis Mack

Desde que, en abril del 2015, la movilización ciudadana desbordó la plaza de la Constitución para pedir la renuncia de Roxana Baldetti y protestar en contra de la situación política imperante en Guatemala, la sociedad ha tenido un intenso debate sobre el significado de las movilizaciones y sobre las posibilidades de cambio que pudieran haber encarnado tales manifestaciones ciudadanas pero, hasta la fecha, todas las posturas han adolecido de un problema de fondo: se han basado en la percepción de quien discute tal o cual hipótesis por lo que evaluar con serenidad y a la luz de evidencia científica sigue siendo una tarea pendiente.

Por ello me entusiasmé al saber que se preparaba una investigación preliminar que empezaría a recopilar evidencias y discutir los resultados, uno de cuyos objetivos más ambiciosos era empezar a valorar el posible cambio ocurrido en el imaginario colectivo de los guatemaltecos a partir de la irrupción de las movilizaciones ciudadanas, ahora conocidas como “las plazas”, como símbolo de activismo y acción política válidos para la transformación de la realidad. Las

siguientes reflexiones son producto de un primer acercamiento a los aspectos que considero medulares para entender el antes y el después de las movilizaciones ciudadanas.

1. La movilización ciudadana y la posibilidad de impulsar cambios políticos

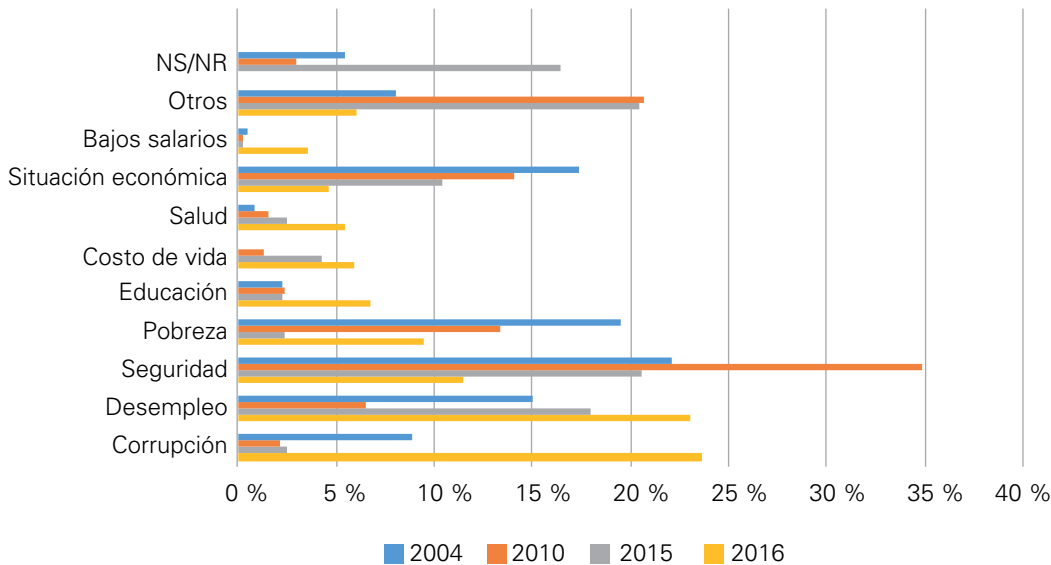
Para evaluar los posibles cambios que provocó la movilización ciudadana en el imaginario colectivo de los guatemaltecos existe un problema de fondo: ¿cómo diseñar una encuesta que pudiera medir tales cambios, si no existía una línea de base previa para realizar las comparaciones? En base a este detalle, se decidió incluir algunas preguntas que hubieran sido anteriormente abordadas por otros ejercicios de medición; en el caso particular de éste análisis, la base que se tomó fueron las encuestas del Latinobarómetro, la última de las cuales había sido levantada en enero del 2015 para el caso de Guatemala: una perfecta forma de situarnos unos meses antes de la primera manifestación.

2. Expectativas de futuro

El primer cambio dramático que pudimos encontrar fue que en enero de 2015 la corrupción no era tema mayoritario de preocupación, mientras que en 2016 éste era un problema central. Incluso lo

rastreamos en las encuestas disponibles de *Latinobarómetro* de años anteriores y en ninguna ocasión la corrupción había tenido tal nivel de importancia para los ciudadanos guatemaltecos, como se sintetiza en la siguiente gráfica:

Gráfica 1
¿Cuál cree usted que es el mayor problema?

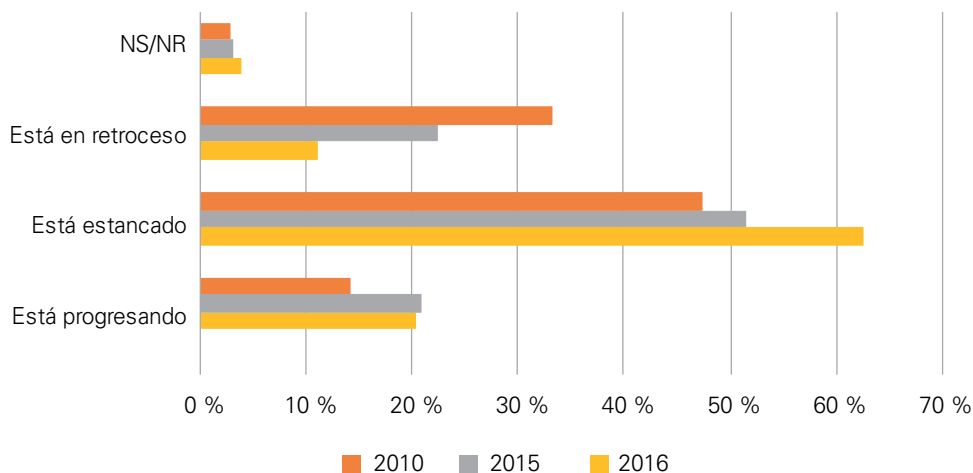


Fuente: Elaboración propia con datos de NDI 2016 y Latinobarómetro 2015.

Un segundo detalle evidente era que, pese a que la mayor parte de la población sigue siendo pesimista sobre el futuro del país, un porcentaje significativo

de personas pasó de pensar que el país estaba en retroceso a considerar que el país está estancado.

Gráfica 2
Expectativa de futuro

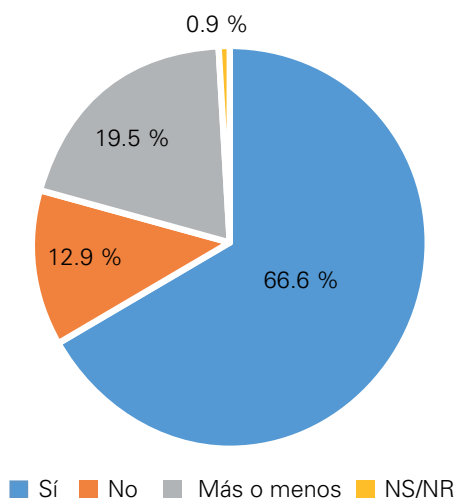


Fuente: Elaboración propia con datos de NDI 2016 y Latinobarómetro 2015

La razón probable de que la ciudadanía ahora piense en términos de estancamiento y no de retroceso probablemente tenga que ver con el combate a la corrupción y la posibilidad real de evitar que éste sea un mal en el futuro: muchos encuestados pensaban que las

movilizaciones habían alcanzado su objetivo, pero que eso no significaba que hubieran mejoras en cuanto al desempeño de las instituciones o el combate a la corrupción, aunque el número de escépticos era bajo: solo el 13 % de los encuestados.

Gráfica 3
¿Cree que el año pasado la población logró sus objetivos con las protestas?

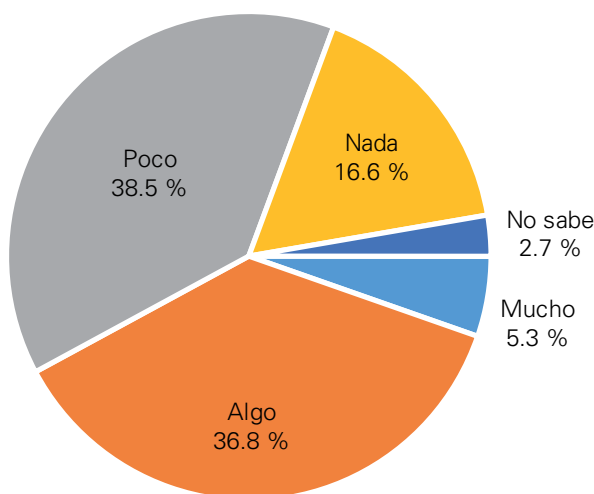


Fuente: Elaboración propia con datos de NDI 2016

Pese a que dos terceras partes de los entrevistados pensaba que las manifestaciones habían alcanzado sus objetivos, la mayoría opinaba que el país había avanzado poco en combatir la corrupción:

solamente 5.3 % pensaba que se había avanzado mucho en el combate a este flagelo social y político, mientras que el resto veía todo el proceso con cautela y cierto pesimismo.

Gráfica 4
¿Cuánto cree usted que se ha progresado en reducir la corrupción en las instituciones del Estado en los últimos 2 años?



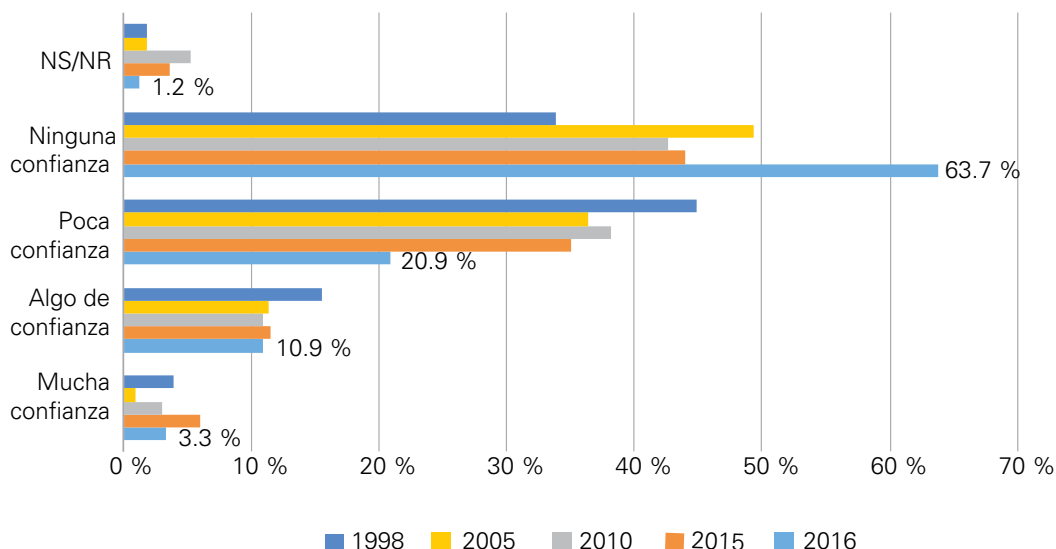
Fuente: Elaboración propia con datos de NDI 2016

3. Confianza en las instituciones del Sistema Político

Un aspecto interesante, que seguro está ligado a la expectativa de futuro, es que la confianza en los partidos políticos y en el Congreso de la República, se fue a pique, llegando a los niveles más bajos de los últimos 20 años, lo cual trae

consecuencias directas para las posibilidades de la democracia. ¿Con que actores políticos sacaremos adelante a este país? ¿Cómo provocaremos cambios al sistema, si el Congreso es un obstáculo importante? Quizá por eso mismo, la mayor parte de los encuestados piensan que el país está estancado.

Gráfica 5
Confianza en los partidos políticos

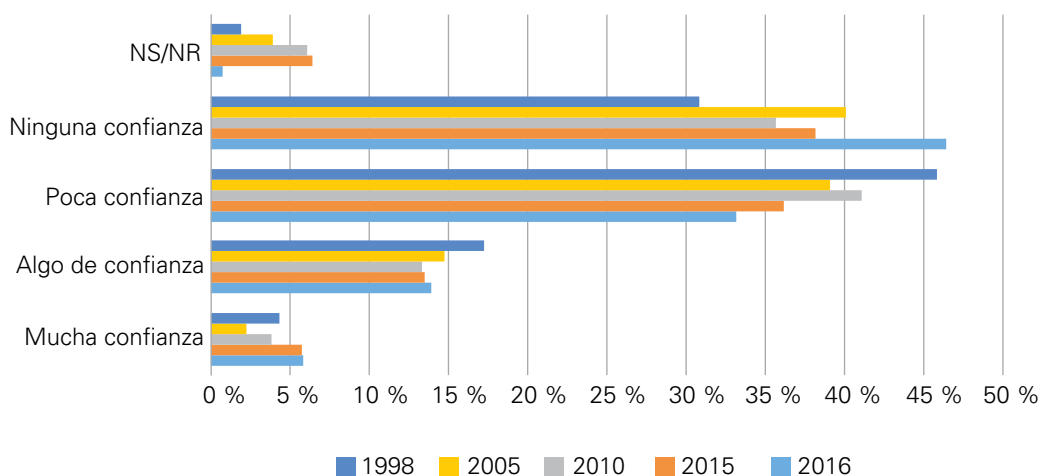


Fuente: Elaboración propia con datos de NDI 2016 y Latinobarómetro 2015

Algo similar ocurre con la confianza que se le tiene a otro actor relevante del sistema político, en este caso el Congreso,

la cual también cae a su punto más bajo en los últimos 20 años.

Gráfica 6
Confianza en el Congreso de la República

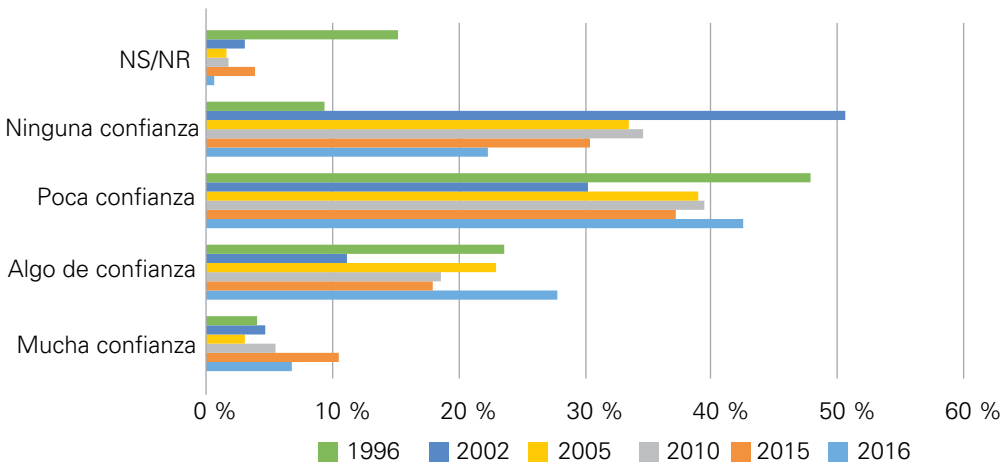


Fuente: Elaboración propia con datos de NDI 2016 y Latinobarómetro 2015

Por otra parte, llama la atención que el Gobierno, el Poder Judicial y el TSE ganan algo de credibilidad en el transcurso de esta coyuntura, aunque el número de desconfiados y escépticos sigue siendo mayoritario. Esto está indudablemente

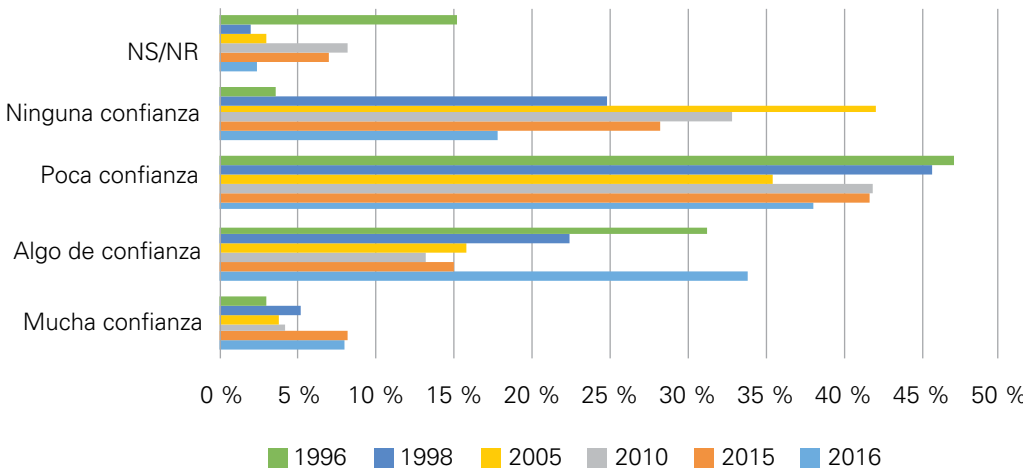
relacionado con la esperanza que despertó el gobierno de Jimmy Morales, el inicio de los juicios del caso cooptación del Estado y el control de los excesos de los partidos políticos en la pasada contienda electoral.

Gráfica 7
Confianza en el Gobierno



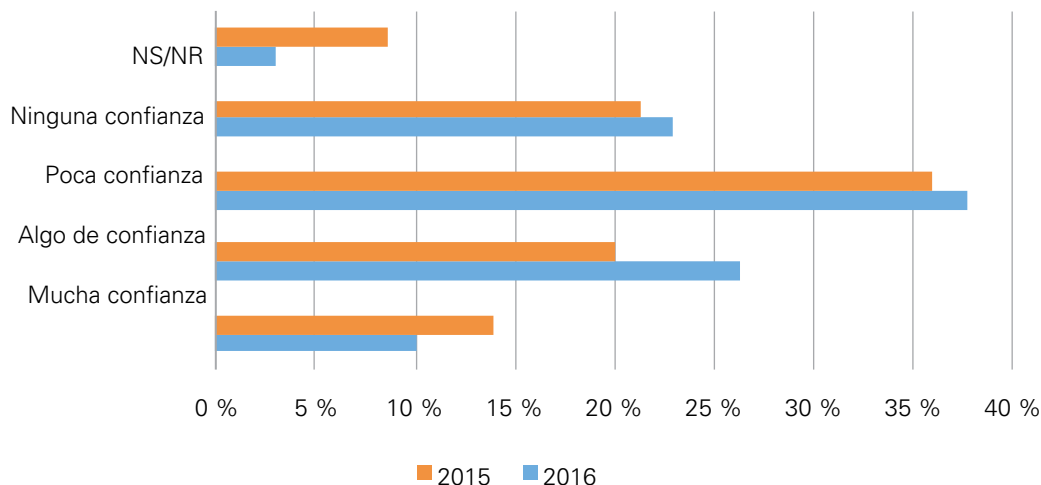
Fuente: Elaboración propia con datos de NDI 2016 y Latinobarómetro 2015

Gráfica 8
Confianza en el Poder Judicial



Fuente: Elaboración propia con datos de NDI 2016 y Latinobarómetro 2015

Gráfica 9
Confianza en el Tribunal Supremo Electoral



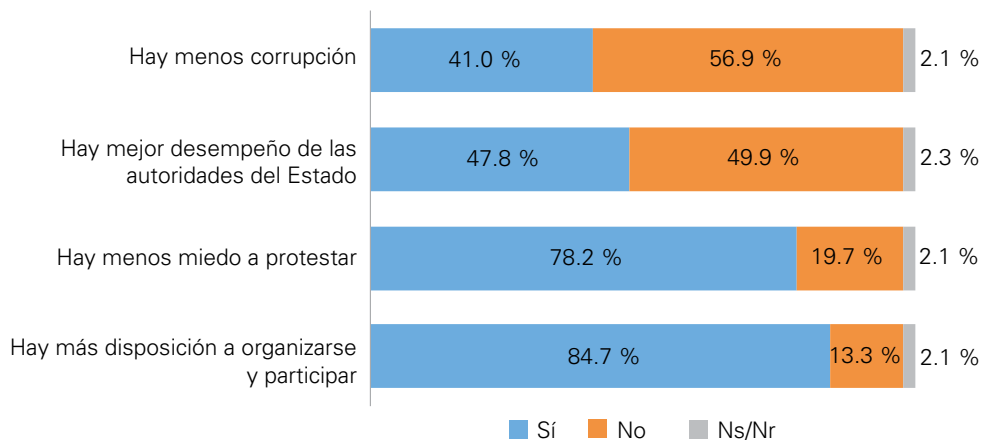
Fuente: Elaboración propia con datos de NDI 2016 y Latinobarómetro 2015

4. Mobilización ciudadana y cambios políticos

Guatemala siempre fue una sociedad políticamente desmovilizada, en la que llamaba la atención la apatía y el pesimismo con el que la mayor parte de los ciudadanos enfrentaban los problemas cotidianos; quizá por ello, las movilizaciones del 2015 fueron vistas con mucha esperanza

por muchos actores, en contraste con el hecho de que por mucho tiempo los analistas pronosticaron movilizaciones de protesta que jamás llegaron. Así, la ciudadanía encuestada piensa que luego de las movilizaciones del 2015 existe mayor disposición a organizarse y protestar, aunque esto todavía no haya impactado en el desempeño de las instituciones del Estado ni en los casos de corrupción.

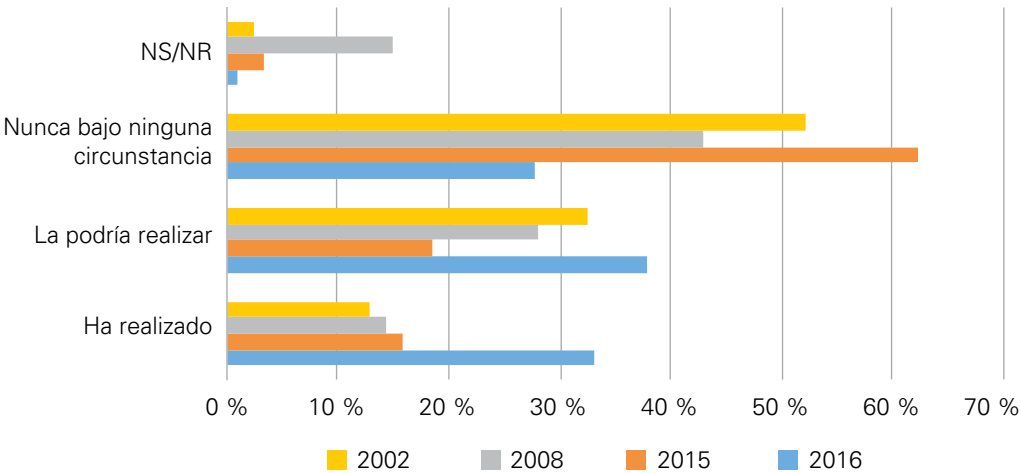
Gráfica 10



Fuente: Elaboración propia con datos de NDI 2016

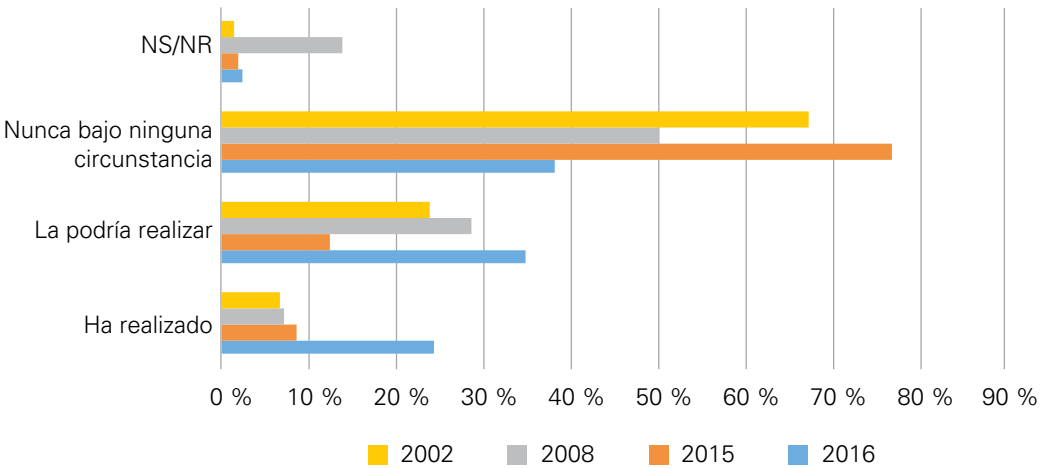
Esta nueva actitud ante las protestas y movilizaciones como forma de acción política se manifiesta igualmente ante la disposición a firmar una petición y asistir a manifestaciones autorizadas, lo cual demuestra que empezó a generarse una nueva actitud de la ciudadanía que ahora está menos dispuesta a no hacer nada.

Gráfica 11
Tratar un tema o firmar una petición



Fuente: Elaboración propia con datos de NDI 2016 y Latinobarómetro 2015

Gráfica 12
Asistir a manifestaciones autorizadas

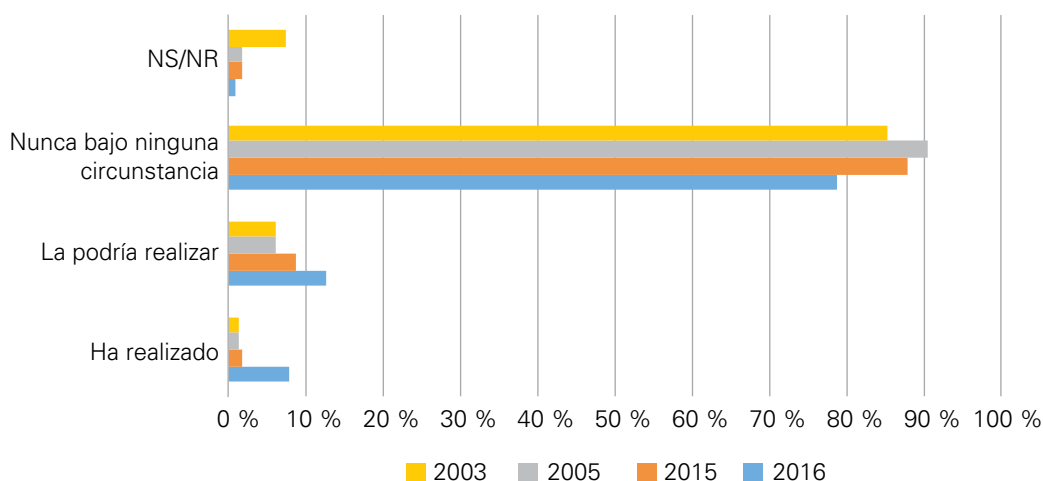


Fuente: Elaboración propia con datos de NDI 2016 y Latinobarómetro 2015

Esta actitud, sin embargo, no alcanza para modificar la actitud en contra de las manifestaciones no autorizadas, que tienen que ver con bloqueos de carreteras, boicots o huelgas y con respecto a las cuales

hay una percepción mayormente negativa, aunque el rechazo tampoco es tan tajante como en el pasado (disminuyó el número de personas que piensan que nunca las haría bajo ninguna circunstancia).

Gráfica 13
Asistir a manifestaciones NO autorizadas



Fuente: Elaboración propia con datos de NDI 2016 y Latinobarómetro 2015

5. A manera de conclusión

Valorar lo ocurrido en 2015, indudablemente, seguirá siendo tema de investigación y análisis en los próximos meses o años, debido a las muchas secuelas que dejó para Guatemala; ahora tenemos datos privilegiados para empezar a valorar los cambios que empezaron a generarse en la cultura política guatemalteca, aunque claro está, todavía haría falta

profundizar en muchos otros aspectos para poder concluir con propiedad en algún aspecto. Sin embargo, con los datos aportados por la encuesta de NDI de 2016, tenemos la oportunidad de seguir midiendo las tendencias en las opiniones y percepciones de la ciudadanía guatemalteca, para evaluar si los cambios serán coherentes en el tiempo o solo fueron reflejo del ánimo de un momento determinado.

d. Partidos y actores políticos

¿Quiénes somos después de 2015? De una democracia no cuestionada a la posibilidad de organizarnos

Regina Solís y Gabriela Carrera
SOMOS

1. Introducción e introduciéndonos

Nosotras fuimos parte de las movilizaciones. Participamos como ciudadanas y como parte de un colectivo que encontró en las demandas que se escuchaban en esa plaza central, una razón para ser parte de ella. Formamos parte de una plataforma política que busca respuestas a las problemáticas del país. Creemos en la auto-organización y su importancia en una Guatemala diversa. Confiamos en que la articulación de quienes buscan cotidianamente construir una mejor sociedad puede generar transformaciones profundas y soñamos con el bienestar colectivo.

Escribimos desde nuestras inquietudes organizativas, desde el lente de nuestra práctica política diaria, en *Somos*. Al leer los resultados de la encuesta NDI 2016 nos encontramos con la sociedad de la que somos parte, la que queremos transformar, desde sus condiciones concretas y cotidianas. Pero también, estamos de cara a la conciencia colectiva, a los valores y concepciones que se imponen para comprender el país en que

vivimos. Nos preguntamos en qué debemos trabajar para cambiarnos, y cambiar los valores y las concepciones que como sociedad no nos permiten soñar y vivir. Nos preguntamos por otra forma de hacer política, de entender nuestra participación, por un Estado diferente. ¡En fin! Preguntamos por un horizonte de vida radicalmente digno.

De ahí hacemos tres reflexiones: cuestionar cómo entendemos la democracia; cómo trascender una participación “permitida” por la ley, pero que no logra incomodar al sistema y al poder y que nos motive a organizarnos, y por último, cuáles son los retos que tenemos como organización.

2. La herencia de la democracia restringida

Cada cuatro años vamos a las urnas a votar, depositamos nuestras esperanzas en unas bolsas de plástico y esperamos por lo mejor. En eso se ha convertido la democracia guatemalteca, herencia de regímenes coloniales, autoritarios, guerras y despojos. La débil transición democrática, liderada por facciones militares que

han ocupado cargos de gobierno en alianza con grupos empresariales influyentes, ha generado un vacío en la participación de la sociedad civil en el régimen político.

Con la crisis política del 2015, diversas organizaciones sociales (mujeres, pueblos indígenas, campesinos, colectivos emergentes) sumaron sus voces para exigir la suspensión de las elecciones, criticando el proceso electoral de ese y muchos años anteriores.

Sin embargo, el domingo 6 de septiembre del 2015, 71.1 % de los ciudadanos acudieron a emitir su voto. El 64.6 % piensa que votar es un deber ciudadano, y por supuesto que nos gusta sentirnos parte del Estado. ¿Por qué? ¿Qué recibimos por nuestro voto? Quizá la sensación de toma de decisiones, de ser escuchadas. Si el 70 % piensa que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, se comprende la importancia que le otorga al voto como elemento fundamental de las democracias. ¿Por qué dejarlo de lado y desperdiciar la “única” oportunidad de cambiar nuestra dolorosa situación de país? El actual régimen político no sólo restringe las posibilidades para optar a cargos de elección pública, sino también nuestra capacidad de entender las bondades que otorga la democracia.

Tenemos claro que las soluciones a nuestros problemas de país no se resuelven con mano dura, sino con la participación de todos y todas. A pesar que el 94.5 % de las personas entrevistadas se enteró de las jornadas de protestas del año pasado, y un 87.2 % estuvo de acuerdo con que se realizaran, solamente un 12 % participó en ellas alguna vez. Si la

democracia refiere a la participación política en el marco del sufragio, la representación y los límites del poder, en Guatemala nos hemos quedado a medias. No hemos tenido una negociación, una recuperación de las cuotas de poder por parte de los diferentes pueblos y sectores del país. Nos hemos quedado cortas en la creación de estrategias políticas alternativas. Eso no va a suceder así nomás, sin tensiones ni conflictos.

No hay democracia sin bienestar: acceso a educación de calidad e incluyente, a una vivienda digna, al agua y demás servicios básicos, a un empleo y a la recreación. Y estas causas merecen el reconocimiento de una vulnerabilidad compartida, no igual, ante la poca urgencia por abordarlas como país y desde el Estado. Crecer en Guatemala implica tener pocos lugares para converger con personas con un perfil distinto al propio, generando una tradición de lejanías. Así, votamos por partidos políticos en los que no confiamos (el 91.1 % de las personas entrevistadas aseguró no simpatizar con ningún partido) y nos distanciamos de los ejercicios colectivos que generan propuestas de cambio a través de plataformas políticas diferentes.

Esta democracia heredada complica las cosas para las organizaciones que intentamos encontrar un sendero para la incidencia política que no se quede únicamente en lo electoral. Una plataforma política que le apueste a la formación, al arte, a la propuesta técnica y a la inclusión como medios para transformar realidades es poco comprensible e incómoda; en un modelo democrático en el que estamos acostumbradas a tomar un lápiz

y marcar una boleta con las reglas de alguien más. Es jugar a algo sin posibilidades de ganar, porque resulta que quien puso las reglas tiene las piezas y sostiene el tablero. Por tanto, hay que organizar a las jugadoras e incomodar al oponente.

3. Romper con lo permitido e incomodar al sistema: la posibilidad de organizarnos y construir una realidad diferente

Hay que incomodar al poder, debemos hacerlo para que cambie el país. Parece que confiamos todavía en que la forma correcta y válida de participar en las elecciones cambiará la situación del país, pero realmente somos un país pobre y extremadamente desigual. El 63.8 % de los entrevistados dicen que estamos estancados, que no se vislumbra un mejor futuro. El Estado excluyente, violento, patriarcal y racista no se siente aún obligado a cambiar en su lógica más profunda. Los datos de participación en el proceso electoral nos arrojan la fe (¿ciega?) en las elecciones, en los candidatos convenencieros, en las promesas mentirosas. Mientras seguimos confiando, cada vez más se escucha decir que en Guatemala “cambia todo para que no cambie nada”.

Debemos atrevernos a cuestionar y a romper con lo establecido por aquello que no nos deja participar, que nos limita, que nos hace pensar que *haciendo lo que estamos autorizados a hacer* podemos ser parte del cambio. Si seguimos haciendo lo mismo, pensando lo mismo, después de la crisis de 2015 y lo que ha sucedido estos meses durante los cuales

se ha demostrado que para que los cambios lleguen no basta con votar, habremos perdido la oportunidad de dejar los cimientos de una sociedad digna y un Estado al servicio de ella.

Reconozcamos que hay quienes están demandando, desde siempre, esa vida digna. Los incómodos al poder son los que las élites y los medios de comunicación han llamado bochincheros, terroristas, vividores del conflicto, “indios” que no quieren el desarrollo, guerrilleros, *feminazis*. Son a ellos y a ellas, a los que el 67.6 % de la población desaprueba cuando cierra calles o carreteras. El 84.1 % de los entrevistados, al contrario, apoya las manifestaciones permitidas por la ley, como los sábados en la tarde en la Capital (y la autocrítica también es imprescindible).

Sin embargo, el primer día (el lunes 20 de abril en la esquina de la 6ta avenida y 5ta calle, dónde nos conocimos nosotras dos) habían convocado las feministas, los activistas de derechos humanos, poetas, un cineasta, profesores rebeldes, y junto a ellos, campesinos estaban acampando, aún divididos. De ellos aprendimos mucho, su valentía por cuestionar el modelo de Estado y por lo tanto la democracia y lo que la ley permite o lo que hace, como la criminalización de las voces de disenso. La ley la construyen los políticos y las presiones de las élites, por eso siempre debemos preguntarnos, en un país como Guatemala, si es legítima y si realmente tiene posibilidad de transformación.

De ahí que nuestra participación deba ser en colectivo. ¿Los problemas pueden resolverse con la participación de todos? Sí

y más: el 84 % creen que después de las manifestaciones del año pasado en todo el país, hay una disposición mayor para organizarse. Ese es el argumento esperanzador que indica que existe la posibilidad de construir una ciudadanía que no se limite a votar y no limite sus posibilidades transformadoras a ese necesario e imprescindible (aunque restringido) derecho. La organización social y política no ha tenido referentes dignos, como lo demuestra la mínima confianza en los partidos políticos y los sindicatos. El 67.3 % y el 47 % de los entrevistados no tienen ninguna confianza en ellos, respectivamente. Ambos son los espacios y los vehículos de representación de la ciudadanía: debemos recuperar la confianza en las organizaciones políticas de los ciudadanos. Por lo tanto, es necesario recuperar la dignidad en la práctica política, la ética que surge de las convicciones y los ideales, de la coherencia entre el discurso y la acción y que valida la postura ideológica.

No hay posibilidad de transformación profunda sin el imperativo de organizarnos. Después de 2015, no somos las únicas que creemos que debemos hacerlo.

4. Retos de las organizaciones

Sí, la organización es esperanzadora, pero no es sencilla. En medio de una realidad política constantemente cambiante, la comprensión de la complejidad de las problemáticas es el primer paso para generar propuestas viables. El 41.2 % piensa que el objetivo de las protestas del 2015 era combatir la corrupción, y un 66 % piensa que sí se logró. Sin embargo, cuando se les pregunta acerca de si creen

que se ha reducido la corrupción dentro del Estado, el 38.5 % reconoce que ha habido pocos avances concretos que generen un impacto en el mejoramiento de su calidad de vida (lo concreto y cotidiano). Existe poca información acerca del funcionamiento de cada una de las instituciones del Estado y las diferentes estructuras paralelas que las han cooptado. A pesar del incremento en la rigurosidad y constancia de la auditoría social, todavía existen procesos opacos y dinámicas clientelares y de nepotismo que nos hacen cuestionar la ética y las motivaciones de los funcionarios públicos.

La corrupción es un problema y el 23.6 % de las personas entrevistadas sugieren que es el mayor problema del país. Pero únicamente el 6.7 % percibe que la educación es la deficiencia más urgente. ¿Vemos el dilema? Si las organizaciones emergentes no comprendemos la transformación política como la formación desde un enfoque pedagógico de una conciencia histórica y compleja, estamos condenadas a convivir y trabajar siempre con el mismo grupúsculo, incapaces de catalizar un cambio de pensamiento que nos permita ver la corrupción como consecuencia y no como causa. Poco se habla del sistema económico y sus perversidades, el modelo de finca de generación y distribución de la riqueza del país que privilegia a pocos a costa de la opresión de muchos. La segunda preocupación más grande de las personas con un 23.0 % es el desempleo, pero únicamente un 4.6 % habla de la importancia de abordar la economía del país. Pero, como un pequeño gesto de esperanza, una de las dos razones para volver a la Plaza son las crisis de los servicios públicos y la defensa del territorio y los recursos naturales.

Es evidente la contradicción, producto de la falta de capacidad de análisis y articulación de ideas colectivas. Por tanto, es fundamental que como organizaciones propiciemos el análisis público del panorama político, generando diálogos participativos que apelen a las necesidades concretas y sentidas de los grupos de población con quienes deseamos trabajar para construir propuestas.

El poder de moldear la opinión pública es un pulso que los medios de comunicación tradicionales nos han ganado (¿hemos intentado acaso pelearlo?). Con una agenda impuesta por sus mayores inversionistas (recordemos a Albavisión y su rol dentro del caso Cooptación del Estado), la televisión, la radio y los medios escritos y digitales desinforman para generar tendencias públicas a conveniencia. Un 73.6 % explica que es a través de la televisión abierta que siguen las noticias del país, y el 70 % de las personas califica como “bueno” el rol de los medios. ¿Cómo podemos hacerles frente a los medios tradicionales de comunicación como generadores de opinión? ¿Cómo evitar que el trabajo se encauce únicamente hacia lo coyuntural y lo mediático?

La construcción de una agenda propia y la comprensión de las necesidades de los diferentes sectores y pueblos del país contribuyen a tener un rumbo claro, es la plataforma sobre la cual se construyen las estrategias y las áreas de incidencia en las que se quiere trabajar. Todas esas áreas deben analizarse a la luz de la historia para recuperar la memoria y construir en el presente, conscientes de sus transformaciones y de los grupos que las han manejado.

La interpretación de la realidad deriva de una lógica común naturalizada y pocas veces cuestionada. Esa lógica es nuestra cotidianidad, nuestra toma de decisiones y nuestra forma de relacionarnos. Como organizaciones incipientes podemos posibilitar nuevas formas de comprender la vida y sus significados o reforzar esa lógica existente.

5. Palabras para no terminar...

Nosotras, y muchos otros, nos encontramos en esas plazas, como les llamamos. En las discusiones entre colectivos y organizaciones sociales, no sólo hablamos de corrupción, hablamos de una historia con la que debemos encontrarnos de manera urgente, de reformas de fondo en el sistema político y de privilegios del país. Fuimos por el hastío que genera la corrupción y una clase política y de partidos que se acercan más a empresas electorales que a organizaciones políticas representativas. Pero intentamos y seguimos intentando articular un trabajo político y una agenda de demandas y reivindicaciones de largo aliento. Sabemos que hay muchas razones para estar ahí más allá de la coyuntura, tenemos también las propias: una apuesta por crear condiciones de fuerza social para el futuro.

Somos está construyéndose, definiendo sus caminos y sus vehículos políticos. Es un colectivo que le apuesta a lo plural. No nace durante la crisis de 2015, pero encuentra en ella un referente político necesario a interpretar: conocer la sociedad en la que vivimos es imprescindible para saber qué debemos transformar.

2015: Punto de inflexión

Juan Alberto Fuentes Knight

Movimiento Semilla

En 2015 acciones pacíficas de diversos actores lograron que el gobierno del Partido Patriota, extremadamente corrupto y con una orientación populista de derecha, renunciara y cediera su lugar a un gobierno de transición. ¿Qué explica este hecho insólito? ¿Puede ser el punto de partida para una nueva manera de organizar la política en Guatemala? La respuesta es que sí lo es.

Varios hechos explican el derrocamiento del gobierno del PP: primero, una frustración creciente que inicialmente se manifestó entre capas urbanas medias y altas como consecuencia de una corrupción no solo evidente sino también caracterizada por el desplante y el consumo conspicuo. Todo apunta a un enriquecimiento ilícito de una clase emergente (los políticos del PP) que buscaban alcanzar niveles de consumo y riqueza superiores a los de las clases altas guatemaltecas y que pretendían heredárselo a su descendencia. Quisieron convertirse en una nueva clase social. No se trataba del nuevo empresario que por suerte o esfuerzo logra superarse; se trataba del nuevo político que aprovechaba su relación con el Estado para

enriquecerse, sin vergüenzas: motocicletas y caballos de lujo, yates, viajes estrambóticos, mansiones. Todo ello ocurría con cierto toque de vulgaridad que no dejaba de molestar especialmente a esa clase media que consideraba que ya pagaba demasiados impuestos y que era testigo, con rabia, del mal uso de los recursos que aportaba. Lo magnificaba el hecho que la mayoría de ellos, especialmente en las áreas urbanas como Guatemala o Quetzaltenango, eligieron a estos nuevos políticos. En un sentido amplio, se rompió el pacto político que sustentaba al gobierno del PP: derivaba cierta legitimidad de su elección mayoritaria y democrática, especialmente en las áreas urbanas del país. Ya en 2015 la mayoría de ciudadanos que votaron por el PP se sentían defraudados y a ellos se unieron otros grupos sociales que por razones éticas o políticas también se oponían al gobierno del PP.

Lo que sorprende, en retrospectiva, es la magnitud del estallido y a su vez lo mucho que tardó en manifestarse. Antes de abril del 2015 ya había transcurrido más de un año de gran y creciente frustración ante la corrupción, pero sin expresiones

amplias de protesta. Este rezago se explica por la poca capacidad organizada o institucional para canalizar la frustración. La clase media urbana que primero salió a manifestarse no estaba organizada en movimientos sociales o políticos. Y, como se ha señalado repetidamente, las redes sociales sustituyeron esa capacidad organizativa, dando lugar a una reacción fluida y explosiva pero fluctuante. El llano estaba listo para arder, pero ante la ausencia de organizaciones sociales y políticas faltaba el detonante: en eso consistió lo actuado por la CICIG y el MP, magnificado por el hecho que el primer caso de corrupción que develaron, el de “la Línea”, se daba precisamente en la entidad pública responsable de recaudar los impuestos que esa clase media pagaba, la Superintendencia de Administración Tributaria. El simbolismo no podía ser más claro: se rompió el ya delicado e impreciso pacto fiscal mediante el cual una buena parte de guatemaltecos aceptaba a regañadientes pagar impuestos a cambio de ciertos servicios gubernamentales básicos y malos. Ahora había que derrocar, o al menos avergonzar, a un gobierno que descaradamente se apropiaba de los impuestos para erigirse en una nueva clase emergente.

Ante el estallido que significaron las primeras manifestaciones, corresponde también tratar de explicar su persistencia entre abril y agosto del 2015, que puede servir como punto de partida para evaluar su posible efecto sobre la política guatemalteca del futuro. Hay que reconocer que lo que en ocasiones parecía un movimiento social endeble fue en muchas ocasiones levantado o estimulado por la denuncia de casos por parte de la CICIG y

el MP. Todos los sábados había manifestaciones, pero durante no pocos sábados la plaza estaba medio vacía. Claramente había una relación funcional, entre las manifestaciones en el parque central de la ciudad de Guatemala, que se fueron extendiendo a otras ciudades importantes, y las acciones del MP y la CICIG. Pero era una relación de fortalecimiento mutuo. Las acciones del MP y de la CICIG cobraban legitimidad ante el apoyo de las manifestaciones y las manifestaciones eran alimentadas por los casos denunciados, que exacerbaban los ánimos y confirmaban lo que inicialmente solo eran sospechas. Los ingredientes que aseguraban que la ola de oposición se mantuviera durante estos meses fueron conformándose poco a poco: frustración ante la corrupción, evidencia de corrupción documentada por la CICIG y el MP y figuras paradigmáticas, como la vicepresidenta Roxana Baldetti, que llegaron a ser una personalización de la corrupción. Ella se convirtió en un objetivo específico y tangible, sujeta a críticas y consignas de todo tipo. El éxito en lograr la renuncia de Roxana Baldetti, exigencia que no dejaba de poner de relieve el machismo de numerosos manifestantes, también le dio un ímpetu adicional al movimiento social.

Pero también hubo fuerzas importantes que se opusieron o intentaron reorientar las reivindicaciones que se hacían desde la plaza. Las dos más importantes fueron el CACIF y la embajada de los Estados Unidos. El CACIF, presente en el gobierno por la vía de al menos dos ministros y un comisionado y con el acceso y la influencia característica de su historia de incidencia y co-gobierno, fluctuaba entre la necesidad de apoyar acciones

contra la corrupción y el temor a provocar una debacle si el gobierno caía.

El gobierno de los Estados Unidos, plenamente informado de los grados de corrupción existentes en el gobierno del PP, enfrentaba los fantasmas de las experiencias recientes en Honduras y Egipto. En ambos países movilizaciones sociales habían conducido a golpes de estado que habían resultado en un resurgimiento y fortalecimiento de los militares y de fuerzas políticas conservadoras. En un primer momento la embajada norteamericana presionó al propio presidente Pérez para que él le exigiera a la Vicepresidente su renuncia, probablemente con el objeto de que se pudiera interpretar como una depuración que le permitiría al gobierno re-equilibrarse. Luego apoyó al Presidente, aun cuando corresponderá a los historiadores determinar hasta qué punto existió una intención tan explícita del embajador de hacerlo, al participar conjuntamente con el Otto Pérez en una conferencia de prensa que se interpretó ampliamente como un respaldo del gobierno de los Estados Unidos al entonces presidente.

En este contexto de apoyo al gobierno por parte de los dos actores con mayor poder en Guatemala, y ante un ejército que de manera notable mantuvo un papel neutro durante todo el proceso (lo cual probablemente es uno de los resultados no tangibles pero fundamentales de los Acuerdos de Paz, además de que el Ejército no fue sujeto de agresiones o de críticas significativas durante las movilizaciones sociales), la continuación de las manifestaciones sociales a favor de la renuncia del presidente Pérez y de su

gobierno no era un hecho automático. ¿Por qué continuaron?

En la medida en que todos los factores que explican las movilizaciones tuvieron su origen en condiciones que no se volverán a repetir, se puede argumentar que su impacto futuro será insignificante. Y hay que reconocer que estos factores “irrepetibles” explican mucho de lo ocurrido: primero, la lucha contra la corrupción atrajo a amplios sectores independientemente de su orientación ideológica, lo que difícilmente podría darse en esa magnitud en el futuro; segundo, los objetivos que se querían alcanzar eran concretos y medibles: renuncia de la Vicepresidente y luego del Presidente, lo que se logró; tercero, y, quizás lo más importante para asegurar la resiliencia de la movilización social entre abril y agosto, que la CICIG y el MP dieron golpes espectaculares que vinculaban primero a la Vicepresidente y luego al Presidente con actos concretos de corrupción. Estos son factores que difícilmente se repetirán; fueron coyunturales.

¿Qué factores explicativos de las movilizaciones podrían, al ser “repetibles”, tener un impacto futuro?

Primero, fue evidente la participación de estudiantes de varias universidades, que ejercían una acción política por primera vez en sus vidas, como verdadera columna vertebral de las manifestaciones. Una nueva generación entró a la política y con la ética como ingrediente fundamental de su conducta.

Segundo, hubo una gradual ampliación de la representatividad social de las movilizaciones sociales: se incorporaron

organizaciones rurales y campesinas, como el CUC, con reivindicaciones históricas que se articularon a las reivindicaciones contra la corrupción. Sin dejar de lado sus reivindicaciones territoriales y de orientación rural, las organizaciones campesinas incorporaron a las suyas las reivindicaciones nacionales compartidas por amplias capas medias. Quedó demostrada la posibilidad de amplias alianzas, aun cuando fuera en torno a objetivos acotados. También hubo alguna participación de sectores de orientación sexual diversa.

Tercero, hubo una dimensión festiva, diversa e imaginativa de la acción política y social, con diferentes manifestaciones culturales e incluso religiosas. Específicamente, se manifestó una nueva forma de hacer política, lejana a las prácticas clientelares o patrimonialistas de los partidos políticos tradicionales en el pasado.

Cuarto, los medios de comunicación asumieron una posición de acompañamiento de las manifestaciones que no se había visto en el pasado, lo cual podría o no darse en el futuro.

Finalmente, los dos actores con poder de veto, y especialmente el CACIF, se vieron parcialmente rebasados por los acontecimientos. Esto puede ser “repetible”, aunque lo ocurrido en el 2015 sugiere estrechos límites. Por una parte el CACIF no apoyó la mega-manifestación final (antes de la renuncia del presidente Pérez) del 23 de agosto, aun cuando numerosas empresas de todo tamaño sí lo hicieron. La posición de la embajada estadounidense, de nuevo, fue más sutil y efectiva: evolucionó desde una posición inicial de

rechazo a la renuncia de Pérez a una posterior de aceptación de la renuncia que, ante el aumento de la presión social, llegó a impulsar de manera discreta pero decidida y siempre incidiendo para que, con el apoyo de algunos grupos conservadores nacionales, no se rompiera el orden constitucional, es decir, poniéndole límites al proceso de cambio.

¿Qué nos dice la comparación de los factores irrepetibles, inmersos en la coyuntura, con los factores repetibles, que también surgieron de la coyuntura pero que podrían tener un impacto futuro? Nos dice que se necesitaban ambos para que tuvieran éxito las movilizaciones para lograr la renuncia del gobierno del PP. También nos dice que nadie ejerció un poder de veto en el proceso y que se produjeron cambios significativos en la correlación de fuerzas, de flujo y de reflujo. Hubo una creciente fuerza de la movilización social, pero también hubo capacidad de actores conservadores y de la embajada estadounidense de imponerle límites. Posteriormente el auge se revirtió y el gobierno de transición que se estableció a continuación fue una especie de restauración del orden establecido, aunque en otras condiciones.

Aunque fuerzas nuevas y antiguas lograron articularse para impulsar un proceso de movilización social, su capacidad de hacerlo en el futuro se ve limitada por la ausencia de nuevos o previsibles “detonantes” externos (como la CICIG y el MP en el pasado) para estimular un esfuerzo sostenido. No obstante el debilitamiento del CACIF, persisten actores internos conservadores que, junto con la embajada de los Estados Unidos, tendrían la

capacidad de imponerle límites al proceso de cambio que se podría impulsar. En el fondo, surgieron nuevos actores pero su incidencia todavía es precaria, mientras que los actores tradicionales mantuvieron una cuota importante de poder, pero menor que en el pasado.

La participación de jóvenes en nuevas formas de hacer política y la articulación de fuerzas rurales y urbanas son hechos fundamentales, pero también debe reconocerse que en su momento no pudieron ir más allá de lograr la renuncia del gobierno, asistidos por la CICIG, el MP y eventualmente la propia embajada estadounidense. No tuvieron éxito en lograr una fuerte reforma de la ley electoral y de partidos políticos, aunque los diputados en el Congreso tuvieron que hacer algunos cambios significativos en la ley, como lo fue aceptar que el financiamiento de buena parte de la publicidad durante las campañas electorales sea de origen público. Tampoco se logró integrar una alianza para continuar con una lucha más amplia para renovar la clase política y eventualmente reformar al Estado, como se planteó en algún momento en la Plataforma por la reforma del Estado, articulada por la Universidad de San Carlos y con una presencia amplia de organizaciones sociales. Algo más de éxito tuvieron las fuerzas organizadas en torno al CUC para avanzar con un acuerdo sobre cómo realizar una nueva gestión del agua: la manifestación que impulsaron a principios del 2016 fue una muestra de una mayor capacidad organizativa que la de los jóvenes urbanos que retomaron las manifestaciones en la plaza ese mismo año.

Después de las manifestaciones del 2015 no se observó claramente un fortalecimiento o mayor protagonismo de las tradicionales fuerzas corporativas guatemaltecas. En este sentido, se trata de una restauración incompleta. Por su parte, menguó el poder del CACIF, golpeado no solo por su posición ambivalente durante 2015 sino también por la evidencia de importantes evasores sujetos al rigor de la justicia en el 2016. El Ejército, no obstante la participación de algunos asesores militares en el nuevo gobierno de Jimmy Morales, mantuvo su posición neutral, y la fragmentación del panorama religioso en el país favoreció cierto pluralismo más que una posición hegemónica de alguna de las iglesias, a diferencia de lo ocurrido con la iglesia católica en el pasado. Los partidos políticos tradicionales fueron diezmados, especialmente con la virtual desaparición de dos de los partidos considerados como los más fuertes, el PP y el partido LIDER. Solamente los medios de comunicación parecerían haber emergido como actores más importantes, aunque la explosión del uso de redes sociales también atemperó el papel hegemónico de los medios más grandes. En este escenario de fuerzas emergentes todavía precarias y ante un relativo debilitamiento de las fuerzas más tradicionales surgió como una fuerza más importante el gobierno de los Estados Unidos, reforzado por una estrategia explícita orientada a detener el flujo de migrantes y enfrentar problemas de seguridad y narcotráfico, todo ello reflejado en la Alianza para la Prosperidad.

¿Qué corresponde hacer en el futuro? Corresponde rescatar los ingredientes

“repetibles” que se manifestaron en 2015. Incluye fortalecer la participación de jóvenes en la política, con un fuerte componente ético y marcado por nuevas formas de hacer política. Corresponde favorecer la articulación de estos esfuerzos con lo que ya vienen haciendo fuerzas representativas de diversos pueblos y sectores vinculadas al área rural, con reivindicaciones históricas de largo aliento.

Implica darle forma a una “mayoría alternativa”, integrada por amplios sectores de la población y con una extensa representatividad social, que cubra desde las familias en condiciones de pobreza hasta aquellas que se consideran parte de la clase media. Implica luchar para lograr que este conjunto muy plural cuente con una expresión política que refleje sus intereses y su diversidad. Se trata de la mayoría de guatemaltecos, y ya es hora de que la democracia refleje sus intereses. Para ello se requiere renovar a la clase política actual y reformar al Estado

para convertirlo en un instrumento democrático, republicano y plural a favor de esa mayoría. Es una mayoría “alternativa” porque no corresponde a las mayorías pasivas engañadas o a las mayorías espurias que se logran en instancias como el Congreso sin ninguna legitimidad ni representatividad.

También es alternativa porque debe basarse en nuevas formas de hacer política. Reclama una efectiva democracia interna y plural, sin caciques locales o caudillos nacionales, con una plena utilización de redes sociales y del arte como medios de expresión individual y colectiva. Requiere una actitud de apertura ante los medios de comunicación y de absoluta transparencia en relación al uso de recursos y a las intenciones políticas de sus representantes. Requiere ampliar los límites impuestos en el 2015 para asegurar una efectiva renovación de la clase política y una reforma profunda del Estado para ponerlo al servicio de la mayoría.

El cambio es insuficiente para superar el fracaso

Ronaldo Robles

Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)

Lo ocurrido en Guatemala desde abril de 2015 ha marcado un antes y un después en la historia. Ha sido tan grande y de consecuencias tan impactantes en distintos ámbitos nacionales, que es comparable con otros hitos históricos como la firma de los acuerdos de paz, en 1996, o la recuperación de la democracia, en 1985.

Sin embargo, al igual que como sucedió con la paz o la reinstauración democrática, puede que también se convierta en una *nueva oportunidad* desperdiciada. Es muy recurrente esta actitud chapina de empezar algo bueno y después dejarlo tirado o a medias, ya sea por falta de recursos o por falta de voluntad de quienes tienen en sus manos darle sostenibilidad a los procesos.

Y es que, seamos realistas, si bien el “despertar ciudadano” es positivo y plausible, como plausible es la lucha por la justicia y contra la impunidad, que son el fondo de ese “despertar”, hace falta mucho más para que las cosas realmente cambien en Guatemala.

1. La encarnación del mal

Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti actuaron de la misma manera en que habían actuado muchos gobernantes, ministros o funcionarios. Unos más que otros, permitieron o participaron de la corrupción gubernamental a través de tráfico de influencias, cobros de comisiones o saqueos descarados a lo largo de décadas.

Es un hecho que la mayoría de las grandes fortunas en Guatemala, si no es que todas, se construyeron a la luz de aprovecharse del Estado, ya sea mediante favores sutiles o prácticas corruptas de todo tipo. Hay quienes se beneficiaron con usufructos de frecuencias de radio y televisión, de telefonía celular o de onerosos contratos para la construcción de obra pública o venta de medicamentos.

O está la otra modalidad, por medio de la cual a través de sofisticados mecanismos se evade el pago de impuestos y se incrementan las fortunas familiares o individuales en detrimento de las enormes

necesidades públicas. Dejar de pagar esos impuestos no los iba a hacer más pobres, pero sí los haría más ricos y les permitiría mantener un ritmo de vida totalmente diferente al de la mayoría de la población.

Empresarios como esos, que prefieren apropiarse del dinero que podría servir para cubrir otras necesidades, sobran y, paradójicamente, muchos de ellos son quienes en otros momentos han reclamado transparencia y honestidad de las autoridades públicas.

En tal sentido, hemos visto los casos de grandes empresas evasoras que han preferido poner al día sus cuentas con la renovada SAT. De la noche a la mañana pagaron millonarias sumas, como si de repente se hubieran percatado de que en sus cuentas “sobraba” un montón de dinero.

Así, están los casos de Aceros de Guatemala, que pagó más de Q 800 millones; Agropecuaria Bellamar, Q 370 millones; Multiperfiles, Q 62 millones; Hotel Camino Real, Q 45 millones o Farmacias Galeño, Q 34 millones.

¿Qué diferencia hay entre evadir impuestos por sumas millonarias y adueñarse de dinero a través de la corrupción? Ninguna. Tan malos son unos como otros.

La gran diferencia es que Pérez Molina, Baldetti y demás integrantes del gobierno del Partido Patriota (PP) –dicho sea de paso, apadrinado por los sectores económicos más tradicionales del país– se saltaron la barda. El descaro y cinismo con que actuaron fue digno de un elefante en una cristalería fina y era más que *vox populi* el enriquecimiento acelerado que estaban teniendo.

La compra de numerosas propiedades, los yates, los viajes, la ropa fina y demás extravagancias dignas de “nuevos ricos” pasaron la factura. Las huellas de la corrupción fueron cada vez más evidentes y permitieron que dos elementos novedosos se encontraran: la capacidad de investigación y acción de la CICIG y el MP y la decisión ciudadana de lanzarse a las calles, como no había sucedido en años, producto del hartazgo acumulado.

La movilización ciudadana, a su vez, fue facilitada por un factor subestimado por la mayoría de actores sociales, no digamos políticos: la tecnología. Las redes sociales, como Facebook, Twitter o Whatsapp, la proliferación de teléfonos inteligentes y otros dispositivos, así como el decidido involucramiento de los noticieros televisivos por cable (no la televisión abierta, por supuesto) y sus periodistas, analistas y opinadores, provocaron que las manifestaciones se multiplicaran sábado tras sábado en la capital y en distintos puntos del país.

2. Un país fracasado

Si bien la lucha contra la corrupción y la impunidad es necesaria, quedarse en ello es insuficiente. Es necesario que exista un cambio radical en la forma en que hemos venido haciendo las cosas pues, evidentemente, no ha sido exitosa y nos encaminamos a un fracaso.

Quizá por nostalgia o excesivo romanticismo la palabra “fracaso” suena demasiado fuerte. Pero así es. El país está como una persona con una enfermedad grave que se niega a comprender la magnitud de su padecimiento y

evita medicarse o recibir tratamiento para atender el mal que le aqueja.

En el país pocas cosas funcionan adecuadamente. La salud y la educación, que son lo más importante, son un fracaso enorme. El Estado es cada vez menos capaz de brindar estos servicios básicos de manera gratuita y eficiente, como lo manda la Constitución.

Y estamos a la cola en la inversión pública. Guatemala ocupa el lugar 191 de 191 países evaluados en términos del tamaño de su presupuesto como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), lo que determina las capacidades del Estado para cumplir con sus obligaciones.

El Estado apenas busca recuperar su capacidad de vacunar a su población y los hospitales están colapsados. Dejamos de abrir nuevas escuelas o institutos y nos hemos dado el lujo de que la cobertura de educación primaria, que en 2010 llegó al 97 % ahora esté por debajo del 80 %. Esos son muchos niños sin una educación mínima que les garantice un mejor futuro.

Somos el único país de la región donde el número de pobres aumentó, en lugar de disminuir, como sí sucedió en toda América entre 2000 y 2014.

Nuestra actividad económica y los motores de desarrollo que tradicionalmente han mantenido al país a flote están en riesgo o se encuentran a la baja, sin que parezcamos conscientes de la necesidad de sustituirlos por otros o prepararnos de mejor manera para el futuro.

Las remesas, en riesgo por políticas antiinmigrantes. Maquilas de vestuario y

textiles, a la baja y con empresas dejando de operar, pues encuentran salarios más bajos en otros países (lo cual no quiere decir que tener un salario mínimo más alto sea malo, pero eso es harina de otro costal) e incentivos para trasladar su operación.

El azúcar, si bien ha mejorado su situación en los mercados internacionales, realmente representa beneficios muy concentrados, pues paga salarios muy bajos, ya que requiere de mano de obra con conocimientos básicos en agricultura.

El café y el cardamomo con precios a la baja debido al desarrollo de otros países productores y víctimas de enfermedades que han limitado las cosechas.

Si no es de estos productos, ¿de qué más puede vivir Guatemala? ¿Del turismo? Cada vez depredamos más nuestros recursos naturales, a tal punto de que hay menos selva en Petén y dejamos que nuestros lagos se contaminen, como el de Atitlán, que ha llegado a ser considerado como “el más bello del mundo”, pero que hemos convertido en una enorme y verdadera cloaca.

Y si a todo lo anterior sumamos el hecho de que estamos a la cabeza del continente en tasa de fecundidad, es fácil concluir que cada año serán más las personas que demanden servicios de todo tipo (salud, educación, agua, seguridad, justicia, energía eléctrica, etc.)

Y tal es nuestra circunstancia, que no hay liderazgos capaces de articular el rescate del país. No los hay en las elites políticas, que son las oficialmente llamadas a liderar un proceso de transformación,

pero tampoco los hay en las elites económicas, periodísticas y hasta religiosas que, mal que bien, tienen qué ver con la conducción del país.

Los escasos liderazgos en los partidos políticos y en la sociedad están llamados a comprender que una Guatemala diferente está emergiendo. Una Guatemala que tiene apenas 22 años (la edad promedio en el país), que apenas acababa de nacer cuando se firmó la paz, que desconoce todo sobre la guerra que vivimos, que tiene poca educación, pero que anhela tener un futuro mejor.

Por eso, es necesario ir más allá de la lucha contra la corrupción. Es urgente construir un Estado diferente y fortalecido, un

modelo de desarrollo económico justo y encaminado a disminuir las desigualdades sociales, producto de un inteligente y pragmático acuerdo nacional que permita poner orden y evitar que el fracaso sea absoluto e irreversible.

Para ello, es necesario exorcizar también al sistema de partidos políticos. Debe dejar de depender de financiamientos privados y debe encontrar la manera de adaptarse a las nuevas realidades, respondiendo a las nuevas demandas.

Si algo es evidente es que la población los rechaza y los más jóvenes los rechazan aún más, por lo que es imprescindible que se adapten y aprendan a sobrevivir en una ciudadanía diferente y tecnológicamente empoderada.

La nueva primavera

Juan José Porras

Visión con Valores (VIVA)

Los acontecimientos suscitados en Guatemala transformaron a una ciudadanía conformista, antipática y ajena a la política nacional, en una ciudadanía activa, incidente, fiscalizadora, analista y exigente. La creciente corrupción instalada era imparable e insaciable, solo quedaba la esperanza de un bienestar próximo, esperanza que se transformó en repudio, rechazo, indignación y muchos sentimientos de frustración al padecer una Guatemala enferma.

El clamor del pueblo se hizo presente convirtiendo ese conformismo en coraje, en un nuevo despertar. Los logros obtenidos en aquellas manifestaciones fueron invaluable e incalculables; ese movimiento de miles de ciudadanos que se generó en el 2015 marcó a todos los guatemaltecos. El estupor que se sintió al escuchar la lucha contra aquel monstruo que nos dominó por muchos años, el quejido de una sociedad hambrienta de justicia fue la recreación de una nueva Guatemala. Fue la unión de un mismo sentimiento en millones de guatemaltecos a lo largo y ancho del país; no había lugar en que no se pregona sobre el derrocamiento de los máximos líderes políticos.

Hubo una gran satisfacción de ver esa unidad del pueblo, esa lucha imparable con miras en lograr su único objetivo, hacer justicia, generando un cambio evidente en el país. Ese estruendo que causó el pueblo guatemalteco sobrepasó las fronteras, fue noticia en el mundo. Guatemala fue elogiada por el coraje de su pueblo, por el levantamiento de una ciudadanía con una visión unificada, fue un ejemplo para muchos, generando más de un suspiro de esperanza para aquellos que están presos en el mismo mal, la corrupción.

Fue un movimiento legítimo que provocó un cambio. Cinco meses bastaron para demostrar que el poder sigue radicando en el pueblo. El efecto de este movimiento ciudadano traspasó fronteras, todos sintieron el rechazo y repudio hacia la corrupción, la unión de movimientos ciudadanos, todo al unísono, haciendo historia, marcando al 2015 como año del despertar del pueblo guatemalteco.

Todo aquello, esa liberación de energía dejó espacio abierto a un nuevo renacer. Las posturas y las peticiones del pueblo eran claras: no más de lo mismo. A las

puertas de las elecciones se vivieron momentos eufóricos, las exigencias se hicieron notar con más fuerza. La población quería y exigía nuevas caras, nuevos horizontes, transformaciones sin intereses espurios. La caída de líderes políticos que corrían por alcanzar las más altas esferas políticas dio el último impulso al votante para hacer historia.

La concurrencia en las elecciones fue de 70.38 % de participación, la más alta de la historia. Ese grupo de manifestantes que se hizo presente en la Plaza hizo reflexionar a todo un pueblo. El patriotismo se vivió en las calles, dando lugar a unas elecciones marcadas por el positivismo, la esperanza, el cambio, llenas de fuerza que denotaban la libertad del ciudadano, el ejercicio de un derecho inviolable. Cada votante asumió su obligación de defender la patria, haciéndose presente en las urnas y promoviendo la participación por todos los medios.

Las redes sociales jugaron un papel fundamental en esta revolución. El tema a discutir era la política en todo su esplendor, las críticas, la auditoria social, los consejos, la información, la desinformación, en fin, todo aquello que contribuyó para generar y exaltar esa conciencia social. El crecimiento y consolidación del movimiento ciudadano en tan poco tiempo jamás hubiera sido posible sin esta herramienta, la convocatoria de las manifestaciones llegaba de inmediato, la interacción de los ciudadanos desconocidos entre sí fue impresionante, el intercambio de sentimientos, de ideas y de emociones permitió que las marchas fueran un éxito, el respaldo mutuo de cada ciudadano provocó la consolidación de la verdadera democracia.

Lo más importante fue que la noticia la generó la ciudadanía, una ciudadanía libre. Los partidos políticos fueron más cautelosos en su actuar, sabían que la población era un espectador listo para señalar los errores que los perjudicaría en las elecciones, podrían convertirse en el mejor aliado o en el enemigo más poderoso.

La clase política comprendió la transformación que se estaba dando, el pueblo, exigía políticos correctos, con propuestas viables sin intereses personales, con una trayectoria intachable.

Las elecciones se desarrollaron entre la vieja política y un recién nacido, la victoria fue del pueblo. Los políticos que llegarían al poder no serían más de lo mismo, el bien común prevalecería y el trabajar por el pueblo y junto al pueblo serían los lineamiento de la labor política.

El temor ante las consecuencias por actos corruptos pautaría ese cambio, el saber que el gran espectador sigue despierto y que la exigencia no es temporal. A sabiendas de que tienen una gran aliada, las redes sociales. La fiscalización y la auditoria social seguían haciendo su labor. La ciudadanía perdió el temor de exigir y hacer valer sus derechos.

La confianza en la clase política sigue quebrantada, el respeto a la institucionalidad aún no se rescata, el trabajo debe continuar. Sin embargo la pasividad y el antagonismo ciudadano ya no figuran, con eso ya se lleva mucho camino recorrido. La percepción ciudadana respecto de los políticos no ha cambiado, el rechazo continúa. Está en nosotros los políticos recuperar esa confianza, paso a paso con un buen actuar.

Sin embargo es erróneo tirar a todos los políticos en un mismo saco. Es razonable y entendible la dureza con la que hacen referencia a la clase política; no obstante, se debe ser mesurado para lograr ver lo positivo de los cambios y el deseo de mejorar, no solo apuntalar al escenario del pasado. El cambio lo haremos todos, la tolerancia, el análisis, el deseo de informarse, de conocer, el no dejarse manipular por medios de comunicación amarillistas.

El ciudadano también debe cambiar paralelo a la clase política, la transformación es de dos vías. Se debe aprender a confiar, volver a creer en las autoridades de la mano con una fiscalización activa ciudadana, una participación sin cesar, no momentánea. Las exigencias e inconformidades deben ser manifestadas y denunciadas. Un pueblo democrático cree en sus autoridades, deposita la confianza en ellas y de retorno las autoridades demuestran que valoran esa confianza trabajando por el pueblo, con acciones que buscan el bien común.

La educación, la salud, la seguridad, el transporte, la generación de empleo, por mencionar algunos, son los parámetros de medición de un gobierno que trabaja por su pueblo. Los cambios en cuanto a la disminución de la corrupción son visibles, sin embargo los cambios por el progreso y desarrollo del país aún no son palpables por la población. El descontento continúa, el estancamiento persiste.

El desarrollo en un país no se genera solo en atacar un frente, por supuesto es un inicio, pero los cambios se deben complementar con políticas públicas que demuestren los avances. La política

es integral, todo mal combatido debe llevar consigo un resultado positivo y, por ende, un cambio perceptible por el ciudadano. De ello se deriva la desconfianza que continúa, la exigencia y crítica negativa. Los servicios públicos no mejoran a pesar de los cambios.

Basados en el sentido común todo acto de corrupción e impunidad debe ser punible. La corrupción es un mal mundial enraizado entre lo más profundo de las altas esferas políticas, alimentado por la codicia, hambre de poder, egoísmo, ambición y todos aquellas enfermedades sociales que pervierten al ser humano.

La corrupción creció de la mano con la hostilidad de la ciudadanía, el encierro en su burbuja permitió que la corrupción se arraigara y creciera a pasos agigantados. El descuido de la ciudadanía también fomentó la impunidad en el país, la falta de interés y en casos hasta el aprovechamiento de ese desquebramiento político por parte de ciudadanos que avalaban actos corruptos sacando provecho de los mismos.

La participación ciudadana es muy importante, la confianza en las autoridades también lo es. Sin embargo esto será un trabajo de todos los días, no se debe desmayar, la batalla aún no se ha ganado, quedo mucho más por qué pelear.

Lo narrado por mi persona, no es más que la percepción de los hechos que se vivieron y se viven desde el 2015. El entorno político, la gestión del actual gobierno, lo publicado en los medios de comunicación y redes sociales. Es fascinante para mí ver a la ciudadanía despierta, sobre todo la más joven, exigiendo y sin miedo a salir a protestar por sus derechos.

Le apuesto a una mejor Guatemala, no debemos desmayar, la transformación aún no ha culminado, falta mucho camino por recorrer. Guatemala llevaba una larga trayectoria sumida en la impunidad y corrupción, las autoridades están haciendo un buen trabajo corrigiendo paso a paso esa desviación.

Los medios de comunicación deben seguir informado al pueblo, realmente constituirse en ese cuarto poder, ganarse la confianza del ciudadano, sabiendo que al leer una noticia o ver el noticiero lo que se ve es real y objetivo. El amarillismo no debe siquiera perfilarse como medio de comunicación. El desvirtuar una noticia retrocede al país. Los medios de comunicación y redes sociales deben de continuar siendo las herramientas de la auditoria social.

Manifestemos y levantemos la voz, pero no olvidemos que mi derecho termina donde comienza el tuyo, no perjudiquemos al país bloqueando carreteras,

poniendo en riesgo la vida de las personas, perjudicando la productividad y economía. Hagamos un cambio integral. Exijamos pero a la vez respetemos. Una manifestación no pasiva limita los derechos de otros ciudadanos, y la naturaleza del porqué de la manifestación se pierde, incluso la población condena esos actos pues sus derechos se ven violentados. El pueblo apoya la manifestación de carencias e inconformidades siempre y cuando respeten el derecho ajeno.

Guatemala lleva un nuevo rumbo, no descansen hasta llegar a la meta, la política debe renovarse. Los cambios se darán solo si toda la ciudadanía se une en un mismo deseo; las manifestaciones fueron ejemplo de que juntos sí podemos; a pesar de que el porcentaje de participantes no fue mayoritario, los resultados alcanzados fueron incalculables. Un mal momento siempre trae consigo una nueva oportunidad de cambio.

Crisis abril 2015: ¿Coyuntural o permanentemente oculta?

Nineth Montenegro
Encuentro por Guatemala

Estimo que las encuestas reflejan un momento o una coyuntura, no una condición permanente. Por el contrario, sus resultados pueden variar con las condiciones políticas, económicas y sociales. Pero son la fotografía de un espacio determinado y deben ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, es doloroso pero real en este momento que el liderazgo nacional lo abanderara la CICIG. ¿Implica ello ausencia de liderazgo nacional, animadversión a los partidos políticos? ¡Si es claro! Pero, ¿realmente la población no cree tener líderes que pueden coadyuvar a las profundas transformaciones que se requieren o las generalizaciones sistemáticas que se hacen en medios masivos, respecto a la corrupción, falta de compromiso, nos están llevando a un punto de no creer en nada, ni en nadie? Peligroso, porque de esa cuenta la justicia por propia mano sigue a la orden del día. Parte de la juventud tiene como referente al pandillero, al narco y al matón. Ciertamente es que la política partidaria se ha contaminado: es innegable. Los hechos recientes lo evidencian tan fielmente que no admite oposición. Sin embargo, me resisto a creer que todo esté mal y que nada sea posible. Soy ferviente

creyente en que aún existen “islas”, entre tanta podredumbre, que salen de las “generalizaciones” y pueden contribuir a seguir construyendo un futuro digno. Lo contrario sería pensar que Guatemala está acabada y eso no es posible.

Lo que las encuestas reflejan

El NDI realizó una encuesta para conocer de primera mano si hubo transformaciones en la cultura política de Guatemala luego de la crisis del año 2015. Dicha encuesta se hizo en todo el territorio nacional con 200 entrevistas por región para un total de 1600 encuestados; iba dirigida a hombres y mujeres mayores de 18 años cuya escolaridad es en un 44.3 % el nivel primario, en un 43.7 % el nivel secundaria y apenas corresponde en un 12 % al nivel universitario; en términos de ocupación, en la mayoría de los casos se trata de trabajadores por cuenta propia (44.7 %), un 22.3 % corresponde a empleados de empresas privadas, un 21.9 % no trabaja y solo un 4.2 % depende de una institución del Estado. Las entrevistas se realizaron entre el 22 de junio y el 3 de julio del presente año y se

trató de ponderarlas según la cantidad de lectores en cada región.

Desde mi perspectiva la encuesta trata de entender si realmente el 15 de abril de 2015 significó un “parteaguas” para Guatemala. El saber de la existencia de estructuras criminales adentro del Estado efectivamente sacudió al país de un largo letargo porque literalmente fue una bomba que estalló en plena cara a la población; sin embargo, esta efervescencia no pareciera que sea lineal y continua y habrá que abundar más en este tópico en el futuro o ver la reacción de la población durante los años venideros.

Respecto a la lectura que da la encuesta, en primer lugar refleja que el 94.5 % de la población entrevistada supo de los hechos acaecidos y conoció de las manifestaciones que se hicieron y que solo el 3.4 % nunca se enteró de estas. Otro tema, para mi revelador, es que las redes sociales no jugaron el papel que muchos hubiéramos esperado o creído, porque la sociedad se enteró de la existencia de esta estructura criminal que corrompió al Estado, en un 82.5 %, a través de los medios de comunicación social, mientras que las redes sociales tuvieron una leve incidencia (7 %); el resto se enteró a través de amigos, familiares o compañeros de trabajo y estudio. Al respecto puede haber varias interpretaciones. Si vemos que solo 52.7 % usa internet y un 47.1 % no la usa, podríamos pensar que Guatemala está poco inmersa en el avance tecnológico y en esto tienen que ver factores como la pobreza para acceder a las redes o a un computador; pese a estas carencias la red más usada es *Facebook*, con un 49.7 % frente a apenas 0.8 % que usa *Twitter* y otras redes

sociales; sin embargo un 28 % cree que las redes sí le permiten participar en política.

Es evidente que la televisión sigue jugando un papel de primer orden, porque un 85.2 % de la población entrevistada dice que se informa por este medio, seguido muy abajo en 6 % por la radio y 3.4 % por la prensa escrita.

También es importante apuntar que la población que se aglutinó en la plaza, y posteriormente en algunas cabeceras departamentales, demandó en primer lugar la lucha para combatir la corrupción y, en segundo y tercer lugar, la renuncia de Otto Pérez y Roxana Baldetti respectivamente.

Es importante también comprobar que la mayoría de las personas (87.3 %) que asistió a las protestas nunca en su vida habían participado en actos de este tipo y que por primera vez se animaron a salir a las calles y manifestar su opinión, su descontento, lo que revela un despertar espontáneo y posiblemente no dirigido.

Lamentablemente esa mayoría no siempre fue sistemática en sus asistencias a las marchas y solo un 0.8 % asistió reiteradamente hasta el final. La mayoría también dice que los motivó su profunda indignación a los actos de corrupción que, aunque siempre existieron, los vieron hasta ese momento, luego de las denuncias de la CICIG y el MP.

Es importante también reiterar que en un porcentaje mayoritario de la gente cree que sí se logró su objetivo primordial, descrito arriba. No obstante, en la actualidad la percepción sobre si hay

menos corrupción es de apenas un 41 % frente a un 56.9 % que no cree que haya menos corrupción. Esto implica que hay una mayoría que todavía cree que la corrupción se mantiene.

Hoy la población (84.7 %) manifiesta más disposición a participar y en el futuro a organizarse; es importante también decir que mayoritariamente manifiestan menos temor, con lo que podría pensarse que la cultura del miedo podría iniciar a desaparecer, cuestión que aún permanece por las secuelas de la guerra o conflicto armado, que no solo dividió al país, sino que dejó muertes, desapariciones y violencia.

Por otro lado lo que sí es muy claro es que la población mayoritariamente está en total desacuerdo con bloqueos y cierre de calles como forma de protesta. Asimismo no están de acuerdo con marchas no autorizadas.

Llama la atención que cuando a la gente se le pregunta sobre cuáles serían las causas que los motivarían o los invitarían a ir a la plaza nuevamente a protestar, responde en un 83 % que irían a manifestarse a favor de la CICIG y del MP, lo que demuestra el grado de aceptación que ambas instituciones han generado en la población, luego de las acertadas intervenciones que han tenido frente a la lucha frontal contra la corrupción; es más, hoy la población tiene más confianza en la CICIG (54.1 %) que en la propia iglesia católica (52.2 %), lo que ya es decir mucho en un país cuya espiritualidad religiosa es muy alta. Lamentablemente, hay que reconocer que en quien menos creen es en los partidos políticos (apenas un 3.3 %). Lo reitero irónicamente;

sin embargo, la población sí asiste firmemente a votar. En segundo lugar, saldrían a manifestar contra la deficiencia del servicio público; en tercer lugar, por la defensa de territorio; y en cuarto, contra los corruptos.

En torno a cómo ve el guatemalteco hoy día al país, 63.8 % lo ve estancado y si a ellos le sumamos que 11.4 % lo ve en retroceso, esto implicaría que más de un 75.2 % es poco optimista sobre el futuro y mantiene mucha incertidumbre, mientras que solamente un 20.9 % lo ve progresando; esto es delicado a mi parecer porque a pesar de que el guatemalteco mantiene el optimismo frente a las elecciones y hace un esfuerzo por participar en ellas, no está en su mejor momento ni tiene ánimo y confianza en las actuales autoridades a pesar de haber votado por ellos; lo que es peor: no ve en el horizonte mejoras para sí mismo y los demás.

Pareciera irónico por la cantidad de gente que se vuelca a votar, pero una vez más sale a luz en estas encuestas que el 91 % no cree en ningún partido, apenas 3.4 % en el proyecto UNE, 2.3 % en LIDER (por desaparecer) y 2.9 % en otros partidos; esto se corrobora con lo dicho arriba, que las instituciones con menos credibilidad son los partidos políticos. Pero, insisto, contrasta mucho con el fervor democrático del pueblo para ir a las urnas, lo cual podría parecer una contradicción, pero es lo que los datos reflejan.

La población encuestada dice que ve las encuestas en un 67.7 %, pero 62 % aclara que no confía en ellas para depositar su voto y 67 % ni siquiera las toma en cuenta.

Un elemento que me llama poderosamente la atención es que a pesar de la crisis vivida en el momento electoral, la población estaba motivada en 86.8 % a favor de ir a votar y que apenas un 13 % manifestara no querer hacerlo, esto pese a los esfuerzos de grupos y sectores que llamaban a no votar o a votar nulo, lo que implica que existe entonces conciencia ciudadana de que solo por la vía electoral se pueden hacer cambios e ir a las urnas lo consideran un deber ciudadano. Lo que podría indicar que la democracia

sigue siendo una opción a otras formas de gobierno (77.7 %); así lo expresó en esta encuesta; es más, ha cambiado la percepción a favor de un gobierno de mano dura que solo fue de 15 %.

Sin embargo, esto no implica que los problemas de pobreza, desigualdad y falta de visión del nuevo gobierno no generarán en la población, en el futuro inmediato, la sensación de que la democracia no resuelve sus problemas cotidianos. Ese es un tema en el que tenemos que estar muy alertas.



Esta publicación fue impresa en los talleres gráficos de Editorial Serviprensa, S.A. en el mes de octubre de 2016. La edición consta de 1,000 ejemplares en papel bond blanco 90 gramos.



Con el apoyo de:

